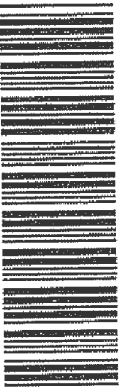


# Sociología Argentina

MARIO GERLERO  
NANCY CARDINAUX

FOTOCOPIADORA  
C.E.D.  
CARPETA.503  
S/F -  
FOLIO: 5 D/F 11



50300005



# Sociología Argen

MARIO  
NANCY CA

## NANCY CARDINAJUX

Es abogada, Especialista en Sociología Jurídica y Doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora adjunta y profesora titular de la carrera de Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires y Nacional de La Plata. Miembro de la Comisión de Investigación del CONICET y candidata al Doctorado en la Universidad Nacional de La Plata y del INTA. Miembro del Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Miembro del Consejo de Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad de Buenos Aires y decana de la carrera de Sociología del Colegio de Profesores de la Universidad de Buenos Aires y decana de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad de Buenos Aires y decana de la carrera de Sociología del Colegio de Profesores de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad de Buenos Aires y decana de la carrera de Sociología del Colegio de Profesores de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad de Buenos Aires y decana de la carrera de Sociología del Colegio de Profesores de la Universidad de Buenos Aires.

## MARIO S. GERBERO

Es abogado y profesor en la Universidad Nacional de Córdoba (1988), especializado en Sociología Jurídica (1992) en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es Doctor por la Universidad de Buenos Aires en el área de Sociología del Decano de la Universidad de Buenos Aires y de Integración a la Sociología del Decano de la Universidad de Buenos Aires y de Integración a la Sociología y de Sociología Jurídica, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Salta y Tucumán, además como Profesor Adjunto de Sociología Jurídica en la Universidad de Belgrano y como Coordinador de Sociología General en la Fundación y de Perfeccionamiento de Sociología del Decano de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de Perfeccionamiento de Sociología del Decano de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de Perfeccionamiento de Sociología del Decano de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de Perfeccionamiento de Sociología del Decano de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad de Buenos Aires y decano de la carrera de Sociología del Colegio de Profesores de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad de Buenos Aires y decano de la carrera de Sociología del Colegio de Profesores de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad de Buenos Aires y decano de la carrera de Sociología del Colegio de Profesores de la Universidad de Buenos Aires.

FOTOCOPIADORA  
C.E.D.  
CARPETA: 503  
S/F 31  
FOLIO: 5 D/F 31

Primera Parte

PRECEDENTES DE LA SOCIOLOGÍA ARGENTINA

Obra de Echeverría, Alberdi y Sarmiento: la generación de ideas  
 15  
 15  
 19  
 25  
 26  
 28  
 32  
 37  
 37  
 38  
 40  
 63

Capítulo 2. La generación del 80  
 1. Precedentes de la generación del 80  
 2. Características generales de la generación del 80  
 3. El programa de la generación del 80  
 4. Sociedad, 47: 3.3. Estratificación social, 55: 3.4. Autoridad y autoridad, 58:  
 5. Causas de la generación del 80

Segunda Parte

ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA ARGENTINA

Capítulo 3. Sociedad y Economía  
 1. Desarrollo y dependencia  
 2. El origen de las asimetrías regionales  
 3. La economía en el tiempo  
 3.1. Período 1960-1980, 77: 3.2. Período 1910-1945, 81: 3.3. Período 1945-1960, 86: 3.4. Período 1960-1975, 92: 3.5. Período 1975-1990, 95:  
 3.6. Desde 1990 hasta la actualidad, 97

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Reservados todos los derechos

Copyright © 2009 By Editorial DOCCENCIA

Ayústo 2260 ☎ 4805-5455/5329/8434 (1-25) Buenos Aires

(ISBN 987-506-036-4

Esta obra ha sido impresa el día 22 de mayo de 2000

en los talleres de Editorial Doccencia

Av. Ayústo 2260 ☎ 4805-5455/5329 Fax 4805-8133

8 Sociología Argentina

Capítulo 4. Cultura	101
1. Cultura y globalización	101
2. Recepción innovadora o creativa de modelos culturales	103
2.1. Cultura democrática, 104; 2.2. La parcialización cultural, 106	
3. La dudosa heterogeneidad cultural	108
4. Tensiones y conflictos sociales	114
4.1. Nociones de Justicia y Derecho, 115; 4.2. El derecho y los medios de comunicación, 120	
5. Discriminación laboral	122
Capítulo 5. Integración y formación de la persona social	127
1. La familia como agente de socialización	127
1.1. La familia tradicional y la familia moderna, 128; 1.2. La familia extensa moderna, 133; 1.3. Conflictos familiares, 135; 2. La socialización y el habitus, 137	
3. El género, el rol y la identidad masculina	142
4. La escuela primaria: la socialización y la educación	143
5. Universidad y educación	146
Capítulo 6. Estratificación social	153
1. Etapas de análisis en la estructura social argentina	153
1.1. Primera etapa, 155; 1.2. Segunda etapa, 157; 1.3. Tercera etapa, 159	
2. Tamaño, crecimiento y composición de la población	160
4. La actividad regional	163
5. La estructura social a fines del siglo XX	166
6. La pobreza en la Argentina	166
7. El desempleo	171
8. "Niveles ocupacionales" y la tecnología	173
Tercera Parte	
<b>PODER Y POLÍTICA EN LA ARGENTINA</b>	
Capítulo 7. De la república de los notables a la república moderna	179
1. La formación del Estado argentino	179
2. La república de los notables	183
3. La reforma electoral	191

9 Sociología Argentina

4. La república moderna	198
4.1. Los partidos modernos, 198; 4.2. El liderazgo y la estrategia opositora del radicalismo, 201; 4.3. El radicalismo en el poder, 203	
Capítulo 8. De la república conservadora a la república de masas	213
1. La república conservadora	213
1.1. El golpe de 1930, 213; 1.2. Ascenso y caída de la Concordancia, 218; 1.3. El proyecto industrializador de los conservadores, 221	
2. La república de masas	227
2.1. La revolución del 1943, 227; 2.2. El liderazgo de Perón, 232; 2.3. La polémica sobre el voto peronista, 235; 2.4. El sindicalismo en los orígenes del peronismo, 238	
Capítulo 9. De la república inestable a la república democrática	243
1. La república inestable	243
1.1. La caída del peronismo y el proceso de "desperonización", 243; 1.2. Ensayos electorales y golpes militares, 249	
2. La república violenta	257
2.1. El regreso del peronismo, 257; 2.2. El Proceso militar, 261	
3. La república democrática	269
3.1. El triunfo radical, 269; 3.2. Los diez años de Menem, 274	
Bibliografía	283

503,5

### Presentación

Un libro para serlo reconoce, por lo menos tres condiciones: sistema, unidad y estilo. Cuando comenzamos esta tarea sólo teníamos un objetivo. Pretendíamos unir nuestra experiencia docente en el ámbito de la Sociología para brindarle al estudiante de derecho una guía de trabajo e investigación distinta a la impuesta por los tradicionales manuales; muchas veces útiles aunque en ocasiones tediosos y dificultosos en su abordaje sistémico de los conceptos. Ambos nos aplicamos a una tarea compleja, reflexiva, memoriosa, en cuyo curso rescatamos los comentarios que nos hicieron nuestros alumnos por más de diez años. Sus dudas y las nuestras, laminadas por nuestros respectivos sistemas de análisis, dieron unidad a ciertos contenidos básicos que habían preocupado durante décadas a los sociólogos argentinos.

A la hora de la escritura, decidimos respetar mutuamente nuestros estilos, tan diferentes y sin embargo, acaso por eso mismo, complementarios. Con mayor énfasis en el nivel teórico o en el empírico, cada uno construyó sus textos en un diálogo que esperamos sea enriquecido por las interpretaciones de aquellos a los que este libro está dirigido. Entendiendo que no puede considerarse a las ciencias sociales como conceptos de conceptos que constituyen un instrumental con el que analizar la realidad, sino más bien como una forma de conocimiento que se construye a medida que se va desarrollando. Por eso hemos procurado en nuestro trabajo presentar a la Sociología argentina como un campo de constante debate. La textura de ese debate está atravesada por múltiples perspectivas cuyo relevamiento es el primer paso que permite al alumno someter la realidad a una reflexión crítica.

Después de haber sometido nuestros textos a algunas lecturas críticas, decidimos publicarlos por nuestra cuenta y riesgo, en la confianza de que será el primer paso a partir del cual se abrirá un nuevo canal de comunicación con nuestros lectores.

El libro está dividido en tres partes. La primera está dedicada al relevamiento del pensamiento social de los miembros de las generaciones del 37 y del 80 en torno a algunas categorías que serán claves para la Sociología argentina posterior. Trabajando sobre la base de ejes temáticos, hemos procurado aquí evitar caer en un relato secuencial para dedicarnos a radiografiar las posturas y debates de estos autores sobre algunos temas que aún hoy pueden resultar de suma actualidad. El capítulo I, referido a la genera-

ción del 37, fue escrito por Nancy Cardiniaux, mientras que el capítulo 2, sobre la generación del 80, pertenece a Mario Gerlero.

La segunda parte es acaso la más práctica, relacionada con fenómenos sociales actuales, rescata líneas de investigación social muy diversas sobre la estructura socio-económica argentina: la economía, la cultura, la socialización y la estratificación social. Son sometidas a un análisis que tiene como objetivo elucidar los principales problemas y respuestas planteados por la Sociología argentina sobre estas temáticas. El capítulo 3 fue preparado por Nancy Cardiniaux, y los capítulos 4, 5 y 6 por Mario Gerlero.

La última parte está por entero dedicada a efectuar un análisis secuencial de aportes fundamentales de las ciencias sociales al estudio de la política argentina. El seguimiento de una secuencia no obedece aquí al objetivo de historiar el pensamiento social, sino más bien a proporcionar un marco dentro del cual se van incorporando diversos debates e interpretaciones encontradas sobre el fenómeno político. Los capítulos 7, 8 y 9 que integran esta tercera parte son de la autoría de Nancy Cardiniaux.

No queremos dejar de agradecer a nuestros colegas profesores de las cátedras de Sociología, Introducción a la Sociología y Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, por el apoyo brindado en la labor docente compartida y el fundamentado optimismo con el que defienden y justifican la necesidad de seguir proyectando una visión sociológica sobre el derecho. Vaya en especial nuestro agradecimiento al Dr. Felipe Fucito por los desafíos que nos planteó su lectura crítica de la primera versión de este trabajo. Por último, agradecemos al Rector del Instituto Abierto y a Distancia Hermandarias, Profesor Eugenio Gómez la celeridad y el entusiasmo con los que recibió nuestra propuesta, y a Annalia Dellamena, quien con iguales dosis de pericia y gentileza supo disimular nuestros errores.

Mario Gerlero  
Nancy Cardiniaux

Primera Parte

Antecedentes de la sociología argentina

503, 519

Capítulo I

Echeverría, Alberdi y Sarmiento:  
la generación del ideal posible

A fines de mayo del año 1837 se propuso el que suscribe promover el establecimiento de una Asociación de Jóvenes, que quisieran consagrarse a trabajar por la Patria". Así comienza a evocar Echeverría aquella Asociación de Mayo — originariamente llamada Asociación de la Joven Generación Argentina— que merced a su iniciativa comenzó a reunirse en Buenos Aires; pronto nuevos núcleos de la Asociación se desarrollaban en Córdoba, Tucumán, San Juan, Montevideo. Los tres autores que aquí tratamos mantuvieron lazos diferentes con la Asociación. Echeverría no sólo fue su fundador sino también su presidente. Alberdi la integró y fundó otra a su semejanza en Montevideo. Sarmiento, si bien es cierto que se incorporó a la asociación instalada en San Juan, no puede ser considerado más que un miembro periférico de la Asociación.

1. Pasado y futuro de una generación

El año de fundación de la Asociación bautizó a esta generación. Y tal vez la frialdad del número para nombrarla sea indicativo ya de lo difícil que resulta su caracterización. Aquí abordaremos sólo algunos textos de los tres autores mencionados, teniendo en cuenta los ejes temáticos que nos interesan. Cuando decimos textos, lo decimos en el sentido de irreductible pluralidad. Estos textos han sido objeto de múltiples interpretaciones por las que nos llegan atravesados y enriquecidos. Así trataremos de considerarlos, siguiendo los en la travesía que han recorrido hasta nuestros días.<sup>1</sup> Cuando

1. Barthes, al marcar el paso de la obra al texto, dice: "la obra es un fragmento de sustancia, ocupa una porción del espacio de los libros (en una biblioteca, por ejemplo). El Texto, por su parte, es un campo metodológico... el Texto no se experimenta más que en un trabajo, en una producción. De lo que se sigue que el texto no puede inmovilizarse (por ejemplo, en un estante de una biblioteca); su movimiento constitutivo es la travesía (puede en particular atravesar la obra, atravesar varias obras)". Barthes, Roland. *El susurro del Lenguaje*. Buenos Aires. Paidós, 1994: 75 (1ª edición en francés: 1984).



hablamos de autores, lo decimos en el sentido más fuerte de la palabra. Si bien con el paso de la obra al texto, los autores ceden su posición privilegiada a los intérpretes, aquí nos encontramos con autores que cumplen su función de autorizar, son verdaderos fundadores de discursividad. Puede parecer extraño este cruce que realizamos entre texto y autor, pero lo justificamos por la necesidad de interpretar estos textos, fundadores muchos de ellos de una discursividad cuyas huellas no podemos más que sospechar.

Echeverría había nacido en 1805, Alberdi en 1810 y Sarmiento en 1811. Los tiempos revolucionarios abrieron pues sus biografías y constituyeron el punto de partida desde el cual elaborarían su proyecto de institucionalización. La Revolución de Mayo sería asumida como el hecho fundamental y fundacional sobre el cual nuestros autores volverán la vista para refundar la república. Ellos y sus coetáneos ven en el pasado cercano un largo período de luchas internas que había desembocado en un régimen cuya caída juzgan inminente. Para tomar la posta del moribundo régimen se prepararán los miembros de esta generación.

Echeverría articuló el proyecto de la generación en su momento adánico. Los jóvenes del 37 tenían la certeza de que el futuro, en ciernes les demandaba un proyecto. Y ese proyecto encontró su punto de partida en la recuperación del ideal de Mayo, en la superación de las facciones que llevaron a la guerra civil y en el antagonismo con el régimen rosista. Para una generación que estaba segura del importante papel que le tocaría desempeñar en el futuro que comenzaba a avizorarse, el proyecto, el ideal, la aventura posible era la principal tarea que debía emprenderse.

A partir de allí, todo podía discutirse. Y si de desacuerdos hablamos, la intermitente disputa de Alberdi y Sarmiento en torno a las más diversas cuestiones de la vida política del tiempo que compartieron es harto conocida y ha constituido material de trabajo de un dilatado análisis historiográfico. Quien quisiese explorar el tiempo que va desde los estertores del régimen de Rosas hasta finales del siglo, se encontrará con dos autores que parecen ir escribiendo el diálogo de los protagonistas en escena. Sarmiento y Alberdi acuerdan en algunas cuestiones fundamentales y difieren en casi todo lo demás. Son pensamientos, ideales, gramáticas, temperamentos y biografías diferentes que sólo parecen enlazados por la temprana y profunda convicción acerca de la necesidad de fundar un orden nuevo. Los dos nacieron o murieron en las puntas de este proceso histórico al que se ha llamado formación de la nación argentina, que va desde la revolución de mayo de 1810 hasta la consolidación de la república con la federalización de Buenos Aires en 1880. Ambos vieron el proceso en todo su desarrollo, desde una revolu-

ción que recrearon, hasta el cierre de ese largo período de formación de la república. En ese decurso, sus pensamientos se cruzaron en mil debates y sufrieron interminables metamorfosis. Criticaron, atacaron, explicaron, proyectaron, defendieron, contraatacaron y juzgaron. Sarmiento con mayor participación directa en la vida política, Alberdi con un exilio más prolongado, dan base a un contrapunto que en algunas de sus variantes todavía nos ocupa en nuestros días. Aquí no quedarán reflejados más que destellos de ese debate, en la medida en que impliquen a nuestras categorías de análisis.

Rosas es la figura contra la cual esta generación apuntó sus baterías argumentales. Quienes se preparaban para ser el recambio de un régimen que a su entender agonizaba, construyeron un contrincante a su alhura. Así lo expresa Ingenieros con respecto a Sarmiento: "Para medirse busca al más grande enemigo, Rosas, que era también genial en su medio y en su tiempo: por eso hay ritmos apocalípticos en los apóstrofes de Facundo, asombroso enquirridón que parece un reto de águila a águila, lanzado por sobre las cumbres más conspicuas del planeta" (Ingenieros, 1915: 7).<sup>1</sup>

El personaje Rosas es afanosamente construido con gruesos y hasta grotescos trazos. Sarmiento y sus coetáneos encontraron en Rosas un símbolo de todo aquello que había que superar. Les parece claro a los jóvenes del 37 que otra historia empezará a ser construida por la nueva generación de la que forman parte una vez que Rosas y todo lo que él representa sean parte del pasado. Sin embargo, sus constructores no se engañan: saben que él no es causa sino efecto. Su derrota requiere la superación de un estado de cosas.

Rosas no había mostrado preocupación alguna por la legitimación legal de su régimen a través de una Constitución. Después de décadas en las que el debate constitucional fue intenso, la llegada de Rosas al poder marcó un giro importante. La Constitución, si bien sigue estando en el horizonte, se ve postergada en espera de un tiempo mejor que nunca llega. Rosas, si bien invierte buen tiempo en la preparación de las fraudulentas elecciones que lo mantendrían en el poder—evidenciando así una necesidad de legitimación por esa vía—, no se muestra preocupado por darse una Constitución que lo legitime legalmente. Es sintomático que instituciones legitimadoras como la del encargo de las relaciones exteriores o las facultades extraordinarias y la

1. Ingenieros, José, "Las ideas sociológicas de Sarmiento", incorporada a la edición de Sarmiento, Domingo F. *Conflicto y armonías de las razas en América*. Ediciones La Cultura Argentina, Buenos Aires, 1915.

suma del poder público hayan quedado en pura creación jurídica empírica, sin mayor sostén doctrinario.<sup>1</sup>

Los pensadores que nos ocupan reabrirían el debate constitucional. La institucionalización es una preocupación constante de esta generación, desvelada por diferenciarse de aquellos a quienes se sienten llamados a reemplazar. Ante el poder de Rosas, a muchos miembros de esta generación que habían hecho sentir su voz de protesta, les tocó transitar el camino del exilio. Cruzat el Río de la Plata, la Cordillera de los Andes, el Atlántico o refugiar-se en algún exilio interior de campaña fue el único recurso para protegerse, seguir escribiendo y publicando, y fundamentalmente, esperar. La experiencia del exilio ha sido sin duda constitutiva de esta generación. Echeverría se va a la campaña entendiendo que "exiliarse es inutilizarse para el país". Alberdi y Sarmiento salen del país solo para continuar su prédica desde otro escenario. Los tres sienten que tienen una misión que cumplir y la extrajería no haría sino avivar ese sentimiento.

Esta generación se siente heredera de aquellos revolucionarios que dieron luz a la gesta de Mayo. Ellos recrean una revolución que sienten no haber llegado a su fin. El ciclo que comenzó en 1810 recién se cerrará cuando la república se haya consolidado. Dirá Alberdi en 1851: "La cuestión argentina de que tanto se ha hablado, que por tantos años ha distraído la atención de la América, es de tal modo sencilla y obvia, considerada en sus términos substanciales, que no se concibe cómo puede ser una cuestión. Se reduce a concluir y cerrar la revolución de los pueblos del Plata, abierta en mayo de 1810, por medio de la reunión de un congreso general y la sanción de una ley fundamental para todo el país" (Alberdi, 1851, en Barros, 1997).

Mayo de 1810 es pues el punto de partida en el que se solucionan ciertos problemas pero se desencadenan fuerzas dormidas que deben ser canalizadas. Así lo percibe Sarmiento en su obra más famosa: "La guerra de la revolución argentina ha sido doble: primero, guerra de las ciudades iniciadas

1. Tau Anzoátegui remarca la actitud postergadora que el rosismo siempre mostró con respecto a la Constitución y a la creación legislativa en general: "Esta actitud, de paz empírica, no fue, sin embargo, objeto de ninguna elaboración jurídica de importancia, ni en el orden constitucional ni en el legislativo. La más importante expresión, alingente a lo primero, fue indudablemente la carta que el propio gobernador Rosas remitió a Juan Facundo Quiroga el 20 de diciembre de 1834. Este documento fue, en los años siguientes, reiteradamente reproducido en la prensa rosista como verdadera carta política del régimen. Como es sabido, se trata de una pieza crítica sobre las concepciones del constitucionalismo ilustrado". Tau Anzoátegui, Víctor. *Las ideas jurídicas en la Argentina. Siglos XIX y XX*. Perrot. Buenos Aires, 2.ª edición, 1987. 51.

en la cultura europea, contra los españoles, a fin de dar mayor ensanche a esa cultura; segundo, guerra de los caudillos contra las ciudades, a fin de liberarse de toda sujeción civil y desenvolver su carácter y su odio contra la civilización. Las ciudades triunfan de los españoles, y las campañas de las ciudades. He aquí explicado el enigma de la revolución argentina, cuyo primer tiro se disparó en 1810 y el último aún no ha sonado todavía" (Sarmiento, 1978: 61). Con esta esquemática dialéctica sarmientina, se nos muestra cómo Rosas y los caudillos a los que representa —a la vez que compete con ellos— "nutrían" la política. Se puede percibir también aquí, como en otros tantos textos, el antihispanismo de Sarmiento, que como ya veremos es común a estos trocadores de desiertos en repúblicas.

Dedicaremos mayor atención en este trabajo a las primeras producciones de estos autores. Son los años del proyecto en los que se mira al futuro enjuiciando severamente el presente y seleccionando los hechos relevantes —para bien o para mal— del pasado. Pasaremos por alto muchos de los cambios de parecer que sus ideas sufren con el tiempo. Surgiendo el pensamiento a la vera y en ocasiones por delante de una realidad en continua transformación, es difícil encontrar en estos autores opiniones que más tarde no hayan sido matizadas o hasta contradichas por ellos mismos. De los pensamientos de nuestros tres autores, el de Sarmiento es el que más cambios experimenta en el curso de su vida; ello se debe probablemente a la estrecha conexión entre teoría y práctica política. Alberdi tuvo un exilio más prolongado que el sarmientino y, por lo tanto, una menor inmersión en esa arena política que suele exigir la adaptación del pensamiento a la acción. El caso de Echeverría es diferente por cuanto no tuvo oportunidad de acceder a la función pública en el momento en que su generación debía tomar la posta; su muerte en 1851 dejó trunca la posibilidad que si tuvieron Alberdi y Sarmiento de evaluar la implementación del programa elaborado por ellos.

No abarcaremos necesariamente a los tres autores para analizar cada categoría. Simplemente nos detendremos en el o los que mayor atención dedicaron al tema. Hemos seleccionado cinco grandes ejes temáticos de acuerdo con los contenidos del libro. Ellos son: tipologías sociales, política de población, socialización y educación, modelos culturales y política. A continuación nos dedicaremos a desarrollarlos.

## 2. Tipologías sociales

Las dicotomías agónicas fueron la manera favorita de explicar de estos autores. La historia es —a hecha por fuerzas en lucha y los actores son repre-

sentantes de esas fuerzas. El pasado y el futuro, la realidad y el proyecto, la antigua generación y la nueva generación, y la historia toda, aparecen como un multifacético escenario sobre el que se construyen tipos ideales. Estos tipos, siempre expuestos en forma de oposición, constituyen para esta generación una estrategia argumentativa de primer orden. Sus proyectos aparecerán como síntesis superadoras de los nocivos conflictos entre tipos opuestos.

De acuerdo con Echeverría, la sociedad es un "hecho estampado en las páginas de la historia". Y en la historia argentina existen dos eras bien diferenciadas: la de la espada y la pacífica. La primera fue heroica, revolucionaria. La segunda, en cambio, debe ser laboriosa y reflexiva; su objetivo es conseguir la libertad, curando las heridas que causó la primera etapa y sentando las bases de un nuevo orden social. Cuando Echeverría dirige su mirada a la Argentina postevolucionaria, ve una sociedad dividida en dos facciones: la federal y la unitaria. Entre ambas surge una "generación nueva" que aspira a "ocuparse de la cosa pública"; esa generación es heredera de la Revolución de Mayo pero no se identifica con ninguno de los dos bandos en pugna. Su distancia tanto de unos como de otros hace que sea "unitarizada" por los federales y "federalizada" por los unitarios, pero su verdadera misión es superar esa lucha de facciones.

Sarmiento también hace de los opuestos su principal fuerza argumentativa. La historia argentina se puede leer en clave de dos conceptos en continua lucha: civilización y barbarie. Así los presenta Sarmiento: "En la República Argentina se ven a un tiempo dos civilizaciones distintas en un mismo suelo; una naciente que, sin conocimiento de lo que tiene sobre su cabeza está remediando los esfuerzos ingenuos y populares de la Edad Media; otra que, sin cuidarse de lo que tiene a sus pies, intenta rehazar los últimos resultados de la civilización europea. El siglo XIX y el siglo XX viven juntos: el uno dentro de las ciudades, el otro en las campañas" (Sarmiento, 1978: 46).

La ciudad emblemática de la civilización es Buenos Aires, mientras que la barbarie anida en la campaña. Las armas que ambas contendientes usan en el curso de esa lucha son muy variadas. Mientras que Buenos Aires intenta civilizar a la campaña, la campaña procura barbarizar a Buenos Aires: "Los pueblos no reclamaron de Buenos Aires el puerto con las armas, sino con la barbarie que le mandaron en Facundo y Rosas: Pero Buenos Aires se quedó con la barbarie y el puerto, que sólo a Rosas ha servido. De manera que Buenos Aires y las provincias se han hecho el mal mutuamente, sin reportar ninguna ventaja" (Sarmiento, 1978: 108).

Pero no sólo en la campaña se refugia todo aquello que Sarmiento quería cambiar. La ciudad civilizada por antonomasia, Buenos Aires, es confronta-

da por Sarmiento con otra ciudad que guarda el germen hispánico: Córdoba. Mientras que Buenos Aires es una ciudad "desespañolizada", europeizada, Córdoba es un resabio del régimen español en territorio argentino: "Córdoba, española por educación literaria y religiosa, estacionaria y hostil a las innovaciones revolucionarias, y Buenos Aires, todo novedad, todo revolución y movimiento, son las dos fases prominentes de los partidos que dividían las ciudades todas, en cada una de las cuales estaban luchando estos dos elementos que hay en todos los pueblos cultos" (Sarmiento, 1978: 107).

Esta profunda antagonía entre Buenos Aires y la campaña va a ser criticada tempranamente por Alberdi. La única división que este autor admite es la que existe entre europeos e indígenas. "No hay otra división del hombre americano. La división en hombre de la ciudad y hombre de las campañas es falsa, no existe..." (Alberdi, 1981: 83). Alberdi discute con Sarmiento en torno a la utilización de las categorías civilización y barbarie. Desde su perspectiva, la civilización está en el campo y la barbarie en las ciudades. En el campo es donde se produce la riqueza del país; es allí donde anida la concepción republicana que a Alberdi le interesa defender: una república de hombres laboriosos dedicados por completo a la búsqueda de su bienestar.

En todo caso, si existe alguna diferenciación territorial, ésta se da por la cercanía o lejanía con el puerto que trae a Europa hasta nuestras playas: "La única subdivisión que admite el hombre americano español es en hombre del litoral y hombre de tierra adentro o mediterráneo. Esta división es real y profunda. El primero es fruto de la acción civilizadora de la Europa de este siglo que se ejerce por el comercio y por la inmigración en los pueblos de la costa. El otro es obra de la Europa del siglo XVI, de la Europa del tiempo de la conquista, que se conserva intacto como en un recipiente, en los pueblos interiores de nuestro continente, donde lo colocó España, con el objeto de que se conservase así" (Alberdi, 1981: 83).

Aquí chocan nuevamente dos posiciones que parecen distanciarse sin posibilidad de reconciliación. Es evidente que Sarmiento y Alberdi ven realidades diferentes cuando miran el mapa argentino. Rosas es para Sarmiento un representante de la campaña —o al menos de la ruralización de la política generada por la campaña—, mientras que para Alberdi lo es de la ciudad. No parece extraño que Alberdi mostrara cierta extrañeza al encontrarse ante un Rosas ya viejo en el exilio: "Al ver su figura toda, le hallé menos culpable a él que a Buenos Aires por su dominación, porque es la de uno de esos locos y medianos hombres en que abunda Buenos Aires, deliberados, audaces para la acción y poco juiciosos. Buenos Aires es el que pierde de concepto a los ojos del que ve a Rosas de cerca" (Alberdi, 1962: 92).

Los miembros de esta generación están dispuestos a disolver en una superadora síntesis todos los antagonismos del pasado, empezando por el que separa unitarios y federales. Por ello mismo, utilizarán las dualidades como un instrumento explicativo por antonomasia. La nueva historia que pretenden inaugurar tendrá que dejar de lado antiguas y a veces hasta aparentes rivalidades, sobre un cimiento contruido por ellos se apoyará el cemento de la nueva sociedad. Elementos comunitarios y societarios aparecen tanto a la hora de describir y explicar cuanto a la de proyectar. Claro que para estos hombres la labor descriptiva y explicativa está siempre subordnada a la labor proyectiva. Por eso, los tipos ideales muchas veces no cumplen una función metodológica de aprehensión de la realidad, sino, más bien, son utilizados como artificios argumentales que, mediante un plástico contraste, buscan persuadir al lector sobre los beneficios que generará la síntesis superadora esbozada por ellos.

En cuanto a las características que asignan en su proyecto a la sociedad que quieren dar origen, hay tanto en el caso de Echeverría, como en el de Sarmiento, una acendrada defensa del espíritu de asociación. El asociacionismo que defienden de ninguna manera puede vulnerar la libertad de los individuos sino que, bien al contrario, debe robustecer esa esfera de la mayoría. Los derechos individuales son la base del orden social. Echeverría, igual que Sarmiento y en oposición a Alberdi, critica el egoísmo que percibe en su sociedad. En lugar de ese egoísmo reinante, Echeverría hace un elogio del sacrificio. En el mismo sentido, Sarmiento entiende que el egoísmo privado no puede conducir nunca a la virtud pública. Hay aquí una profunda división entre dos concepciones republicanas: una de ciudadanos que, buscando su bien particular, contribuyen al bien general y otra de ciudadanos que sólo logran el bien general renunciando a una porción de su interés personal.

Hay una "ley del progreso" de la que estos autores no dudan a la hora de formular su proyecto. Y será la razón el medio a través del cual el progreso devendrá posible. Así lo expresará Echeverría: "La razón colectiva sólo es soberana, no la voluntad. La voluntad es ciega, caprichosa, irracional; la voluntad quiere, la razón examina, pesa y decide" (Echeverría, 1948: 157).

Un buen conducto de esa razón es la ley. Sin embargo, hay que anotar que esta generación no muestra un ápice de ingenuidad al estudiar la relación existente entre costumbre y norma formal. Quien con mayor claridad manifiesta la huella de la costumbre en la sociedad es Alberdi: "De las verdades rudimentales de la sociología resulta que ni las constituciones ni los códigos sociales o civiles pueden ser copiados a un país por otro que carece

de sus condiciones de existencia...." (Alberdi, 1988: 100). El gran legislador se enfrenta con los límites de su obra, y allí su actitud se torna paradójica. Así lo acota Botana: "Alberdi adora la tradición abstracta y abomina de las costumbres concretas; sabe que nadie puede escapar del pasado y, al mismo tiempo, condena esa historia como rémora insportable" (Botana, 1997: 297). Alberdi se da la función, según Botana, de inventar costumbres. Y se propuso hacerlo a través de los inmigrantes, que traerían las costumbres con ellos. Pero a esto nos referiremos más adelante.

Lo que sí debe ser enfatizado aquí es que, para esta generación, el camino podía producirse sólo desde un profundo conocimiento de la realidad que se desaba transformar. Por eso dedicaron gran parte de su trabajo a tratar de explicar esa realidad. Como dice Echeverría: "...cada pueblo, cada sociedad, tiene sus leyes o condiciones peculiares de existencia, que resultan de sus costumbres, de su historia, de su estado social, de sus necesidades físicas, intelectuales y morales, de la naturaleza misma del suelo donde la providencia quiso que habitase y viviese perpetuamente" (Echeverría, 1948: 18-19). Sin embargo, es posible llevar a un pueblo en contra de esas leyes, pero se lo hará retroceder en lugar de progresar. Además de las tipologías que hemos visto, esta generación también se ejercita en el estudio de personajes típicos. Quizás el ejemplo más interesante lo hallaremos en el Facundo. Allí podemos encontrar un ensayo de psicología social no sólo por las referencias biográficas continuas sino fundamentalmente en la galería de personajes representativos de la campaña. Vemos aparecer en escena al rastreador, al baqueano, al gaucho malo y al cantor. Esta línea de ensayismo en el que se mezcla una perspectiva sociológica con una de psicología social sería fundamentalmente continuada por pensadores posteriores.

### 3. Política de población

El desierto tiene una presencia fuerte en el escenario de la primera y acaso mejor explicación de la Argentina esbozada por Sarmiento. Ese desierto también ácecha en la obra de Alberdi. De su conquista depende la suerte de la germinal república. Alberdi fue el gran teórico de la inmigración como instrumento privilegiado para tocar el estéril desierto en próspera república.

Los inmigrantes traerán consigo sus costumbres, vendrán con su civilización a cuestras, razonaba Alberdi. Ellos son el más rápido transporte hacia aquella sociedad que se quiere construir a semejanza de las europeas más adelantadas. Pregunta y respuesta son formuladas claramente: "¿Queremos plantar y aclimatar en América la libertad inglesa, la cultura francesa, la labo-

hiosidad del hombre de Europa y de Estados Unidos? Traigamos pedazos vivos de ellas en las costumbres de sus habitantes y radiquemoslas aquí" (Alberdi, 1981: 89). Con una metáfora botánica nos dirá que la planta de la civilización "no se propaga de semilla. Es como la viña: prende de gajo (...) Este es el único medio de que América, hoy desierta, llegue a ser un mundo opulento en poco tiempo" (Alberdi, 1981: 90). La civilización europea no vendrá con los libros, sino que serán los inmigrantes europeos mismos que traerán sus hábitos civilizados y los transmitirán a los argentinos que nada saben de ellos.<sup>1</sup>

Alberdi añoraba una gran población para la Argentina, único medio de alcanzar el progreso. El no dudará que en América, gobernar es poblar, creyendo siempre en la espontaneidad de un proceso a cuyo término tendríamos una república repleta de ciudadanos. "La población —necesidad suramericana que representa todas las demás— es la medida exacta de la capacidad de nuestros gobiernos. El ministro de Estado que no duplica el censo de estos pueblos cada diez años, ha perdido su tiempo en bagatelas y nimiedades" (Alberdi 1981: 89).

Pero la población que había que cooptar estaba bien determinada. Quien más claramente lo subraya es Alberdi: "El dilema es de hierro para la América del Sud: o latina exclusivamente, y entonces esclava; o libre, y entonces sajona, por la educación y por el temperamento cuando menos. ¿Quiere Sud América tener la Constitución y las libertades de la América del Norte? Pues no la tendrá jamás sin la cooperación de las razas que han educado y formado a la América del Norte en el gobierno de sí misma. La libertad es una conducta, una educación, una dirección, una costumbre de vivir y conducirse. Vive arratagada en el otro, no en el papel escrito, y la costumbre engendra la costumbre, como el hombre al hombre. La libertad vive, viaja y se propaga con el hombre libre, que al presente es el hombre del Norte, fijo como su temperamento, que es el de la libertad misma" (Alberdi, 1983: 189).

Queda claro aquí que no era cualquiera el origen de los inmigrantes que quería Alberdi. En el rechazo al mundo hispano, sobre el que luego nos concentraremos, se abre la perspectiva de la atracción de inmigrantes provenientes de otros rincones europeos. El mandato será traer agricultores, comerciantes e industriales, que es justamente lo que no trajo la colonización española. En las colonias españolas, la aristocracia de sangre fue re-

emplazada por una aristocracia de toga: "A la aristocracia de sangre y de espada seguía la aristocracia de toga: abogados, licenciados, bachilleres, doctores, escribanos... De ahí el amor a los títulos y a los rangos, ese desdén por los trabajos groseros de la agricultura, del pastoreo, del comercio... Cada cual quería ser un señor y vivir como un noble sin trabajar..." (Alberdi, 1988: 134).

En 1870, comentando las cifras arrojadas por el censo nacional del mismo año, Alberdi lamenta que en la composición poblacional sean minoritarios precisamente aquellos europeos que él hubiera querido atraer. En cambio, ve ya una mayoría de italianos y españoles: "Con la población de la Europa meridional y latina, inmigran en el Plata las siete plagas, de que están pereciendo Italia, España, la Francia misma, en gran parte" (Alberdi, 1988: 149). Allí diferencia a los inmigrantes en dos grandes grupos: provenientes de "países europeos austríacos y latinos" (aquí se incluyen italianos, españoles y franceses) y provenientes de "la Europa libre y más civilizada en materia de gobierno" (ingleses, suizos, alemanes, belgas).

Tanto en la obra de Alberdi como en la de Sarmiento parece haber una idealización del inmigrante, que en algunos momentos choca con la experiencia directa. Quizás se podría decir aquí lo mismo que decía Botana con respecto al paralelo y contradictorio amor abstracto y aborrecimiento concreto de Alberdi hacia la costumbre. Podemos percibirlo cuando Sarmiento nos transmite su negativa impresión de aquellos emigrantes irlandeses con quienes viajaba desde Europa hacia los Estados Unidos, de los que solo burla recte.

A la hora de evaluar el proceso de conformación poblacional que todavía se hallaba en ciernes a la hora crepuscular de Alberdi y Sarmiento, sea duda el más pesimista fue Sarmiento. La tan compleja cuanto rica explicación histórica del Facundo se convierte en *Conflicto y Armonía* en una mucho más simple determinación racial. Determinación que no llega a ser tal por que el pedagogo que hay en Sarmiento se resiste a condenar a su civilización. Acordámos con lo dicho por Orgaz: "El doble naturalismo de Sarmiento en sus libros de 1845 y 1883: geográfico sin fatalidad física, pues el desierto puede ser combatido, desemboca, desde el punto de vista pragmático, en una sola y misma acción civilizadora, objetivo de la vida entera del prohombre" (Orgaz, 1950: 329). Y ya estamos transitando el tema de la educación que, como veremos, es inescindible de la polémica entre Alberdi y Sarmiento acerca de la ciudadanía, relacionada a su vez con la inmigración.

1. Hay que acotar que Alberdi quería una doble inmigración: de personas y de capitales. Estos últimos debían ser importados por cuanto en Sudamérica no existía una educación que fomentara el ahorro.

#### 4. Socialización y educación

Si Alberdi es el gran teórico de la inmigración, sin duda Sarmiento es su par en materia educativa. La educación tiene para Sarmiento objetivos políticos muy concretos. Así lo expresa Martínez Estrada: "Enseñar fue para Sarmiento, siempre, una de las formas de dirigir..." "La enseñanza significa para él un instrumento político más que un perfeccionamiento espiritual, en función de la ciudadanía. Educar era para él civilizar" (Martínez Estrada, 1969: 13 y 27). Sarmiento clama por ciudadanos; sin ciudadanos que estuvieran dispuestos a luchar por la patria, no había república posible. El inscribirá sus dichos y sus posteriores hechos de gobierno dentro de esta línea. Es suficientemente conocida su obra de fundación de escuelas, apoyo al magisterio y combate a aquellas escuelas de las nacionalidades que le parecían el germen de la destrucción de esa conciencia nacional que la educación común tan fatigosamente construía.

Crear ciudadanos virtuosos es necesario para dar vida a una república en términos del republicanismo clásico. Y esa virtud podía ser transmitida en un proceso de educación formal. Educación elemental para todos es la consigna básica cuyo objetivo era la formación de los ciudadanos que la nación república estaba reclamando. En sentido similar se va a manifestar Echeverría. Para él la educación popular también tendrá un claro objetivo político, a la vez que le parece perentorio que los inmigrantes adopten la ciudadanía argentina: "Ilustrar las masas sobre sus verdaderos derechos y obligaciones; educarlas con el fin de hacerlas capaces de ejercer la ciudadanía y de infundirle la dignidad de hombres libres, protegerlas y estimularlas para que trabajen y sean industriosas, suministrarles los medios de adquirir bienestar e independencia: he aquí el modo de elevarlas a la igualdad" (Echeverría, 1948: 121).

"El que no obra cuando la patria está en peligro, no merece ser hombre ni ciudadano" (Echeverría, 1948: 131). Sin embargo, él mismo juzga que no pueden ejercer la soberanía ni los ignorantes, ni los que no tengan oficio, ni los que dependan económicamente de otros. Como lo señala claramente Echeverría: "...la soberanía del pueblo sólo puede residir en la razón del pueblo, y que sólo es llamada a ejercerla la parte sensata y racional de la comunidad política" (Echeverría, 1948: 157-158). Como contrapartida, entiende que el gobierno tiene el deber de educar a la masa y fomentar la industria. Es pues necesario para Echeverría llevar a cabo un plan de instrucción popular. Si bien no pueden ejercer sus derechos —temporariamente— muchos habitantes, si están en goce de su libertad individual. No contribuyen a hacer las leyes, pero están protegidos por esas leyes.

Tanto Sarmiento como Echeverría sostienen entonces que los extranjeros deben adoptar la nacionalidad argentina. Deben volar y tomar las armas por su nueva patria. Es ese el único camino viable que conduce a la fundación de una república. En ella, los habitantes se transforman en ciudadanos. Distinta posición adopta Alberdi, para quien no era perentoria la transformación de los extranjeros en ciudadanos.

Alberdi, atento siempre a la fuerza de las costumbres, se quejará del trasplante de formas de educación propias de países más "civilizados" sin atender al particular estado en el que se encuentra el país. Para la Argentina, él propondrá una rousseauiana "educación por las cosas", más fructífera desde su perspectiva que una educación formal. En términos más técnicos, diremos que pone el acento sobre el proceso de socialización. "La instrucción primaria dada al pueblo más bien fue permisiva. ¿De qué sirvió al hombre del pueblo el saber leer? De motivo para verse ingerido como instrumento en la gestión de la vida política, que no conocía, para instruirse en el veneno de la prensa electoral, que contaminaba y destruía en vez de ilustrar; para leer insultos, injurias, sofismas y proclamaciones de incendio, lo único que pica y estimula su curiosidad inculca y grosera.... No pretendo que deba negarse al pueblo la instrucción primaria, sino que es un medio impotente de mejoramiento comparado con otros, que se han desatendido" (Alberdi, 1981: 76).

Para Alberdi la socialización más efectiva es la que se da por contacto, por participación. Y por supuesto dentro de los planes de educación formal, debía tenderse a la formación práctica. "Estos países necesitan más de ingenieros, de geólogos y naturalistas, que de abogados y teólogos" (Alberdi, 1981: 77). Hay en Alberdi una gran desconfianza hacia la formación teórica. En su lugar, prevé que los inmigrantes traeran sus hábitos civilizados que pronto arraigarán en el nuevo territorio. No es la educación popular pues el primer paso que debe darse en la formación de la ciudadanía y hasta puede ser pernicioso darlo sin tomar ciertos recaudos.

El buen industrial es el ciudadano que Alberdi quiere. La industria fomenta la paz en los individuos. "La industria es el calmante por excelencia. Ella conduce por el bienestar y por la riqueza al orden, por el orden a la libertad: ejemplos de ello Inglaterra y los Estados Unidos... La industria es el gran medio de moralización" (Alberdi, 1981: 78). En otro texto expresará: "El comercio es el pacificador del mundo" (Alberdi, 1961: 61). Lo importante es pues fomentar la industria y el comercio, y así se formarán los pacíficos ciudadanos que la nación república necesita. Alberdi defiende con ahínco una paz que garantizará la existencia de una república de ciudadanos dedicados a satisfacer sus fines individuales en armonía. Aquí se percibe

una diferencia con el modelo sarmientino, que presupone ciudadanos más interesados en la cosa pública. Allí donde Sarmiento veía egoísmo, Alberdi veía virtud.

Mientras que Alberdi confiaba en la acción espontánea<sup>1</sup> de la sociedad, Sarmiento prefería una acción que desde arriba produjera instituciones. La educación pública era la llave con la que Sarmiento quería abrir las puertas del progreso; ella es el elemento seminal que dará vida a una ciudadanía republicana. Sarmiento deposita su confianza en la acción de gobierno, mientras que Alberdi lo hace en un espontáneo devenir de las relaciones sociales. Bastaría abrir las fronteras para que entrarán sus agentes: los inmigrantes.

Como señala Di Tella, la discusión entre Sarmiento y Alberdi en torno a la educación es un debate acerca de las prioridades. Quienes acordaban sobre la necesidad de superar un estado de cosas, desacuerdan a la hora de trazar sus proyectos políticos. Porque son sin duda las prioridades la columna vertebral sobre la que se articula cualquier proyecto político. A la tesis sarmientina, Di Tella da el nombre de "tesis educacionista", y a la alberdiana "tesis de élite". La primera se centra en la transformación de la población a través de la educación fundamental, incorporándola así a la vida pública. La tesis de élite, en cambio, supone la formación de una élite con una educación superior, que sea capaz de conducir el proceso de formación y consolidación de la república. Como se ve, son dos tesis que no tienen por qué excluirse, pero sí se discute la prioridad de una política pública o la otra, y la elección supone aquí distintas concepciones sobre el proceso de formación de la ciudadanía<sup>1</sup>.

### 5. Modelos culturales

Como ya dijimos, a la hora de trazar su proyecto esta generación tiene sus ojos puestos en los países europeos que juzgan más adelantados y en los Estados Unidos. Sin embargo, no se engañan: ellos saben que la adopción de modelos requiere un arduo trabajo de adaptación. Así lo expresa

1. Es complejo el entramado de causas que, según Di Tella, forjan las posiciones de Alberdi y de Sarmiento. Entre esas causas, hay que mencionar la extracción social de estos dos autores: "Alberdi, de clase acomodada, conservador, abogado con una sólida posición económica en el foro, y exitoso en las reuniones sociales, comprensivo, moderado... Sarmiento, de clase media empobrecida, que nunca pasó de la escuela primaria, dependiendo para vivir de los empleos en diarios y ministerios, amargado y solitario, extremista, intransigente" (Di Tella, 1987: 81). Amen de las razones de orden psicológico, cada uno de ellos representa a sectores sociales diferentes, y esta presentación los lleva a asumir diferentes posiciones. Di Tella, Torcuato "Alberdi y Sarmiento ante la organización nacional".

Echeverría: "El punto de partida para el deslinde de cualquiera cuestión política debe ser nuestras leyes y estatutos vigentes, nuestras costumbres, nuestro estado social. Determinar primero lo que somos; y, aplicando después los principios, buscar lo que debemos ser, hacia qué punto debemos encaminarnos. Mostrar en seguida la práctica de las naciones cultas, cuyo estado social tenga más analogía con el nuestro, y confrontar siempre los hechos con la teoría o las doctrinas de los publicistas más adelantados" (Echeverría, 1948: 17).

Rescatando siempre la importancia del estudio de la situación social propia, los autores de la generación del 37 nunca dejarán de dirigir la mirada hacia lo que está sucediendo en otros lugares, y las teorías extranjeras. Había que "tener siempre clavado el ojo de la inteligencia en las entrañas de nuestra sociedad" (Echeverría, 1948: 17), sin perder de vista que en los países europeos más desarrollados anidaba esa civilización que pretendían implantar en nuestro país. El mandato es claro: mirar hacia donde el progreso tiene su mejor sede, pero no acatar ciegamente las pautas de aquellos países sin atender a la especificidad del caso argentino.

Con esa salvedad, evidentemente el primer modelo que esta generación asume es el europeo. Como dice Alberdi: "Todo en la civilización de nuestro suelo es europeo; la América misma es un descubrimiento europeo... Nosotros, los que nos llamamos americanos, no somos otra cosa que europeos nacidos en América... En América todo lo que no es europeo es bárbaro: no hay más división que ésta: 1º, el indígena, es decir, el salvaje; 2º, el europeo, es decir, nosotros los que hemos nacido en América y hablamos español, los que creemos en Jesucristo y no en Pillán (dios de los indígenas)" (Alberdi, 1981: 81 y 83).

Europa es el modelo sobre el que se traza el proyecto, aunque no podemos dejar de tomar en cuenta la influencia del modelo norteamericano en una etapa posterior. En el caso de Sarmiento, la hora del desentramamiento con respecto a Francia —descencatamiento que se manifiesta tempranamente en el Facundo y se materializa en su primer viaje a Europa— es también la hora de un renacentamiento cuyo objeto es ahora la joven república del norte de nuestro continente. Alberdi sufrirá similar metamorfosis hacia la década de 1850. Cuando Sarmiento llega a Norteamérica, descubre algo muy cercano a aquello que él soñaba para su país: una república que no es un reflejo de algún modelo extinguido sino una república que simplemente "es", con toda la presencialidad que guarda el verbo así conjugado. Su entusiasmo encuentra una vía de expresión en la pedagógica prosa que usará durante aquellos años: "la república existe, fuerte, invencible; la luz se hace;

un día llegará para la justicia, la igualdad, el derecho; la luz se irradiará hasta nosotros cuando el Sol refleje al Norte. ¡Certo, la República es!" (Sarmiento, 1993: 291).

La soñada Francia sorprende a Sarmiento con una frialdad ignorante de su demanda de solidaridad en la lucha contra Rosas. Y la desigualdad social que percibe en el continente hiere su sensibilidad igualitaria: "Vengo de recorrer Europa, de admirar sus monumentos, de posternarme ante su ciencia, asombrado todavía de los prodigios de sus artes; pero he visto sus millones de campesinos; proletarios y artesanos viles, degradados, indignos de ser contados entre los hombres; la costra de mugre que cubre sus cuerpos, los harapos y andrajos de que visten, no revelan bastante las tinieblas de su espíritu; y en materia de política, de organización social, aquellas tinieblas alcanzan a oscurecer la mente de los sabios, de los banqueros y de los nobles" (Sarmiento, 1993: 334).

Con esta imagen contrasta la novedad de la república americana: "Los Estados Unidos son una cosa sin modelo anterior, una especie de disparate que choca a la primera vista, y frustra la expectación pugnando contra las ideas recibidas, y no obstante este disparate inconcebible es grande y noble, sublime a veces, regular siempre; y con tales muestras de permanencia y fuerza orgánica se presenta, que el ridículo se deslizaría sobre su superficie como la impotente bala sobre las duras escamas del caiman. No es aquel cuerpo social un ser deforme, monstruo de las especies conocidas, sino como un animal nuevo producido por la creación política, extraño como aquellos megaterios cuyos huesos se presentan aun sobre la superficie de la tierra" (Sarmiento, 1993: 290). Más adelante, un Sarmiento ya desencantado con los frutos de su propio proyecto, radicalizaría su admiración ante los Estados Unidos: "La América del Sur se queda atrás y perderá su misión providencial de sucursal de la civilización moderna. No detengamos a los Estados Unidos en su marcha; es lo que en definitiva proponen algunos. Alencemos a los Estados Unidos. Seamos la América, como el mar es el Océano. Seamos Estados Unidos" (Sarmiento, 1915: 445/446).

La atención hacia las peculiaridades locales y la necesidad de encontrar modelos en el extranjero se complementan con un rechazo hacia el legado de la conquista. Nuestros tres autores endignan a España la responsabilidad de prácticamente todos los males que encuentran en el país. Así lo razona Echeverría: "La obra de la legislación es lenta, porque las costumbres no se modifican de un golpe... Las leyes influyen sobremanera en mejora de las costumbres: Cuando las leyes son malas, las costumbres se deprimen; cuando buenas, se mejoran... Los vicios de un pueblo están casi siempre entrañados

en el fondo de su legislación. La América lo atestigüa. Las costumbres americanas son hijas de las leyes españolas" (Echeverría, 1948: 148).

Salvo la lengua, Echeverría no acepta que haya algo bueno en el legado de la conquista española. En ese sentido nos dice: "Dos legados funestos de la España traban principalmente el movimiento progresivo de la revolución americana: sus costumbres y su legislación" (Echeverría, 1948: 145). Echeverría quiere terminar con el legado español a través de "una reforma radical en nuestras costumbres; tal será la obra de la educación y de las leyes" (Echeverría, 1948: 147). "El gran pensamiento de la revolución no se ha realizado. Somos independientes, pero no libres. Los brazos de España no nos oprimen, pero sus tradiciones nos abruman" (Echeverría, 1948: 148). Pero este pesado lastre no hará mella en el indomable optimismo de Echeverría con respecto al futuro.

En Sarmiento, es también muy claro el rechazo al legado hispánico, fuente de todas las tradiciones a desarraigarse y de la sinrazón a combatir. Los elementos de barbarie que traban el progreso tan ansioso son un reflejo de aquellas funestas costumbres que achaca al legado colonial. Y así como el modelo que desean imitar está muy claro para estos autores, también lo está el modelo contra el cual se debe construir la base institucional del país. Referencia positiva y negativa tienen asiento geográfico preciso.

Además de la referencia positiva hacia cierta parte de Europa primero y los Estados Unidos, y más tarde la referencia negativa hacia España, es evidente que a la hora de trazar su proyecto político tanto Alberdi como Sarmiento se vieron influidos por el modelo chileno. Ambos pasaron años de exilio allí y vieron una república estable que parecía utópica en su país de origen. La república portaliana es rígida, jerárquica, estable, conservadora, restringida. Sobre ese modelo se montará un proyecto político que, reservando la actividad política para el estrato dominante, inyectará la semilla del progreso en la sociedad civil a través de la inmigración y la educación pública. "Esta es la contradicción que de manera implícita propone la fórmula alberdiana: la tradición y el orden quedaban reservados a la política; el progreso y la democratización social, a los cambios que debían sobrevenir en la sociedad civil. Los hombres del régimen del ochenta marcharon por ese camino" (Botana, 1986: 222). Ya veremos que la generación del ochenta pone en marcha ese proceso de modernización con la reserva de la actividad política para una élite establecida. Más adelante, ese proceso se volverá contra ellos y sus continuadores.



## 6. Política

Echeverría destacara la primacía que debe darseles a los hombres por encima de las instituciones: "... para nosotros, los hombres no tienen valor real en política sino como artífices para producir o realizar ideas sociales..." (Echeverría, 1948: 82). La confianza está aquí depositada en las instituciones y no en quienes ocupan posiciones de poder dentro de ellas. Aunque no duda Echeverría que en su generación están los mejores hombres para implementar el programa por ellos mismos creado. Esa condición de mejores está dada por el proyecto, que les da como diría algún personaje de Sartre, no ya el derecho sino el deber de conducir el proceso de construcción de la república. Dice Echeverría refiriéndose a los hombres de su generación: "... no somos secunaces de hombres sino de doctrinas..." (Echeverría, 1948: 100).

Así como esperan que las instituciones diseñadas por ellos se impondrán a las voluntades individuales, suponen que ni el hombre más poderoso será capaz de detener el proceso histórico que ellos escriban en el futuro cercano. Así lo expresa Sarmiento: "Buenos Aires es tan poderosa en elementos de civilización europea, que concluirá al fin con educar a Rosas y contentar sus instintos sanguinarios y barbaros" (Sarmiento, 1978: 61). Rosas, igual que Facundo, fue sólo un representante de un estado de cosas, de no haber estado él, otro hubiera tomado su lugar. Pero cambiadas aquellas condiciones que lo llevaron al poder, no habría fuerza capaz de mantenerlo allí. Alberdi, que lo veía como coetáneo, le da mayor importancia a las situaciones que a las personas. "El mal está en las instituciones, no en los hombres. En nuestras repúblicas de Sud América, las instituciones son las malas, no las gentes, a las instituciones pertenecen los vicios que atribuímos a los que mandan y a los que obedecen... Con otras instituciones no habría caudillos, ni tiranos, ni demagogos, ni esclavos. Todas estas entidades son frutos de la república tal cual hoy se halla organizada en Sud América" (Alberdi, 1988: 192).

Esta preeminencia de la situación sobre los hombres nace de la necesidad de superar el caudillismo, forma nefasta de ejercicio del poder que acribuyen al legado hispano. Los caudillos son líderes carismáticos según Sarmiento, siendo la injusticia y el uso del terror sus sellos distintivos. "El caudillo argentino es un Mahoma, que pudiera a su arroyo cambiar la religión dominante y forjar una nueva" (Sarmiento, 1978: 53). Facundo es "un caudillo que no es causa, sino persona, y que, por tanto, aleja el libre albedrío y ahoga toda individualidad" (Sarmiento, 1978: 166). El líder carismático se impone en ese vacío que le dejan las leyes y las instituciones: "El nombre de

Facundo llenaba el vacío que las leyes, la libertad y el espíritu de ciudad habían dejado, y los caudillos de provincia resumíndose en general para una porción de la República" (Sarmiento, 1978: 177).

El paso de Facundo a Rosas implica la racionalización de aquel ejercicio del poder que ahora se toma aún más cruel y despótico. "Hay un momento fatal en la historia de todos los pueblos, y es aquel en que, cansados los partidos de luchar, piden antes de todo el reposo, de que por largos años han carecido, aun a expensas de la libertad o de los fines a que ambicionaban, éste es el momento en que se alzan los tiranos que fundan dinastías e imperios" (Sarmiento, 1978: 199). Es altísimo el precio que estos pueblos pagarán por un reposo que sea garantizado a la vez que asistidamente amenazado por el caudillo. "Rosas tuvo la habilidad de acelerar aquel cansancio, de crearlo a fuerza de hacer imposible el reposo. Dueno una vez del Poder absoluto, ¿quién se lo pedirá más tarde, quien se atreverá a disputarle sus títulos a la dominación?" (Sarmiento, 1978: 199).

La superación del caudillismo sólo será posible merced a una nueva forma de legitimación. Ellos abogan por una legitimidad racional, legal. Alberdi lo expresa de esta manera: "¿Qué es el poder en su sentido filosófico? La extensión del yo, el ensanche y alcance de nuestra acción individual o colectiva en el mundo, que sirve de teatro a nuestra existencia. Y como cada hombre y cada grupo de hombres, busca el poder por una necesidad de su naturaleza, los conflictos son la consecuencia de esa identidad de miras, pero tras esa consecuencia, viene otra, que es la paz o solución de los conflictos por el respeto del derecho o ley natural por el cual el poder de cada uno es el límite del poder de su semejante" (Alberdi, 1961: 14). Alberdi apuesta por una legitimación legal, por la institucionalización, por el respeto de todos al derecho. Los conflictos, si bien omnipresentes, siempre encontrarán su solución pacífica en el marco de un derecho que está por encima de todos y a todos protege. La legitimidad es un problema por resolver, y así nos lo hace ver Sarmiento: "Cuando la autoridad es sacada de un centro para fundarla en otra parte, pasa mucho tiempo antes de echar raíces... La autoridad se funda en el asentimiento indeliberado que una nación da a un hecho permanente. Donde hay deliberación y voluntad, no hay autoridad" (Sarmiento, 1978: 107). Cuando se viene de una revolución la legitimidad deviene problemática. Los caudillos se legitiman no por su origen sino por el ejercicio y como ya hemos visto en la Introducción, a Rosas nunca le iriesó legitimarse legalmente, lo cual hubiera implicado darse una normativa que prestara apoyo pero también límites a su poder.

El pensamiento político de Sarmiento encierra las contradicciones con las cuales la unión de teoría y praxis muchas veces sorprende a los hombres públicos. Hay, según Botana, dos Sarmientos: "En Sarmiento que, en 1853, es el espejo de la virtud contenida en el municipio—y otro Sarmiento, guerrero de las luchas civiles dispuesto a imponer orden y estado de sitio, organizador del ejército de oficiales profesionales, que veinte años más tarde justifica una república fuerte con el auxilio de Thiers y Taine". Es distinto el caso de Alberdi: "Alberdi no sufrió esa contradicción. La continuidad de su pensamiento—no por ello menos atomizado—lo condujo a postular, con rasgos cada vez más acentuados, una república centralista de inspiración monárquica, estrictamente limitada para que la libertad moderna reconciliase a la Argentina, por imprevisibles caminos, con la paz universal" (Botana, 1997: 339).

Rosas, según Sarmiento, unió el país, unitizó la República. Aún sin quererlo dio unidad al país. El ideal unitario estaba realizado. La tarea que restaba era pues deshacerse del tirano. Es optimista, en este sentido, Sarmiento: "Nuestra educación política está consumada... El sentimiento de la autoridad está en todos los corazones..." (Sarmiento, 1978: 237). Le atribuye a Rosas la unión del país que quizás está más ligada al legado hispánico: "transitoriamente cuestionado y prontamente retomado. Aquella unidad territorial sobre la que se alzaba la nación marca una diferencia sustancial con respecto a los procesos de conformación de las naciones europeas, que debieron unir regiones dispersas y colectivos humanos bien diferenciados. La forma que debía adquirir el nuevo proyecto es lógicamente fuente de gran debate en esta generación. Desde la perspectiva de Sarmiento, mientras que Estados Unidos estaba llamado a ser una federación, la Argentina era "una e indivisible". Era y estaba destinada a seguir siendo unitaria aun cuando formalmente adoptara otra matriz. Y la forma republicana no admitía discusión desde la perspectiva sarmientina. Alberdi, en cambio, veía con buenos ojos una monarquía constitucional para Sudamérica. Sin embargo, igual que a Sarmiento, la república se le aparece como un hecho que no cabe más que aceptar, como una condena que no admite apelación alguna.

¿La república es conveniente o no? No está en el caso de discutirse en Sudamérica: buena o mala, es un hecho" (Alberdi, 1938: 196). Ese hecho no puede cambiarse, sólo puede mejorarse la condición republicana.

Ni Alberdi ni Sarmiento quedan entrapados en una idea de patria. Ambos generan utopías superadoras para el futuro. Alberdi fue sin duda un gran defensor de la paz como cemento sobre el cual se construye una idea de república. Ciudadanos no armados sino industriosos eran los protagonistas

de su sueño republicano. Sarmiento, a su vez, tuvo tiempo para imaginar un futuro de integración superador de un patriotismo que sólo podía considerarse un escalón que se debía transitar en la formación de la conciencia nacional.

Alberdi defendió la extensión a todos los habitantes de la libertad civil, pero no así de la libertad política. En ese sentido dirá: "...deseo iluminadas y aoundantísimas para nuestros pueblos las libertades civiles, a cuyo número pertenecen las libertades económicas de adquirir, enajenar, trabajar, navegar, comerciar, transitar y ejercer toda industria. Estas libertades, comunes a ciudadanos y extranjeros (por los arts. 14 y 20 de la Constitución), son las llamadas a poblar, enriquecer y civilizar estos países, no las libertades políticas, instrumento de inquietud y de ambición en nuestras manos, nunca aprehensibles ni útiles al extranjero, que viene entre nosotros buscando bienestar, familia, dignidad y paz..." (Alberdi, 1885: 188). Para Sarmiento la república fuerte no debía de la unidad de las partes que delegan poder en el gobierno nacional, sino de la reducción de las unidades provinciales por el poder nacional a través de la fuerza. Y Alberdi, a su turno, diseñó un poder ejecutivo muy fuerte.

Echeverría hizo una dura crítica al sufragio universal: su implementación temprana es calificada como absurda. Sólo progresivamente se podría llegar a la universalización del sufragio, que en principio debía ser censitario. La libertad civil no se transfiere inmediatamente en libertad política: "la soberanía reside en la razón del pueblo" y no "el pueblo es soberano" (Echeverría, 1948: 142). Sobre las consecuencias de una extensión limitada del sufragio no tiene dudas Echeverría: "El principio de la omnipotencia de las masas debió producir todos los desastres que ha producido y acabar por la sanción y establecimiento del despotismo" (Echeverría, 1948: 142). Eso pasó, desde su perspectiva, porque al pueblo que había logrado su independencia no se le pudo poner correa. Ya hemos visto que la receta para evitar estos males parecía ser la educación del pueblo, una educación que lograría que los revolucionarios de avert se convirtieran en los ciudadanos que la república estaba reclamando.

Alberdi, a su turno, propugnó una extensión de la ciudadanía, pero limitadamente menor, y perpetuamente su soberanía será ejercida por la minoría capaz, constituida por la fuerza de las cosas, en regente y gestora de sus atributos soberanos: Es un defecto, incurrible tal vez, de la naturaleza humana, por el cual la libertad será siempre incompleta y relativa, sin que por eso su libertad esencialmente relativa deje de ser el mayor bien de la humanidad, la primera condición de su mejoramiento, y la más poderosa garantía

de su bienestar".<sup>1</sup> Aboga en este mismo sentido por un sufragio censitario. "No puede rigurosamente haber sufragio universal donde la universalidad de los sufragantes carece de toda educación, de toda inteligencia en las prácticas del sufragio verdadero" (Alberdi, 1988: 177).

"La parte ignorante queda bajo la tutela y salvaguardia de la ley dictada por el consentimiento uniforme del pueblo racional", decía Echeverría (1948: 158). La democracia no era para este autor el despotismo de las masas sino el régimen de la razón. Por eso no pueden ejercer la soberanía ni los ignorantes, ni los que no tengan oficio, ni los que dependan económicamente de otros. Pero eso sí: el gobierno tiene el deber de educar a la masa y fomentar la industria. Sarmiento, por su parte, propondrá también una extensión del sufragio recién cuando los ciudadanos tengan la capacidad de saber qué les conviene. Una vez producido un movimiento de igualación social, sería posible pensar en una ampliación de los derechos políticos. Lo expresará en forma de mandato en sus últimos años: "Nivelarse por la nivelación del nivel intelectual y mientras tanto no admitir en el cuerpo electoral sino a los que se suponen capaces de desempeñar sus funciones" (Sarmiento, 1915: 449). Evidentemente, el igualitarismo sarmientino se traduce en republicanismos y no en espíritu democrático.

Con un proyecto por realizar, estos autores dejan al futuro la misión de juzgar los frutos que sus ideas dieron. Quedará como tarea pendiente para la siguiente generación implementar las ideas, recoger los frutos y enfrentarse a los reclamos de esos derechos que temporariamente se niegan.

1. Alberdi, Juan Bautista. "Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853" (1ª ed. 1885). *Obras completas*. Tomo IV, p. 188.

503.5

9

## Capítulo 2

### La generación del 80

Con la caída de Juan Manuel de Rosas finaliza una forma de gobierno caracterizada por la descentralización y la autonomía en las provincias de la Confederación. Este hecho acaba, también, con el ocultamiento o la simplificación de problemas referidos a la integración territorial, al desarrollo de una política socioeconómica y a la organización del Estado Nacional. Las razones por las que no se solucionaron estas cuestiones suelen referirse al caudillismo predominante y a una práctica económica fundada en el aislamiento y el proteccionismo.

#### 1. Antecedentes de la generación del 80

Con el Acuerdo de San Nicolás se buscó organizar políticamente al país a partir de un consenso donde los gobernadores provinciales cedieron parte de su poder de decisión a favor de la Nación. De todos modos, la provincia de Buenos Aires no aceptó perder su predominio comercial y su hegemonía política, generando una coexistencia armada de aproximadamente diez años, que terminó en 1861 con la batalla de Pavón. Debido a esta situación la sanción de la Constitución Nacional y la elección del Presidente de la República, en 1853, simbolizaron una precaria unión nacional consolidable recién en 1862, luego de la paz acordada entre Urquiza y Mitre, cuando la hegemonía volvió a manos de una Buenos Aires liberal que se disponía a dictar su política para todo el país, inaugurando así un período histórico caracterizado, en lo fundamental, por la permanencia del sistema político que comenzaba a funcionar en toda la Nación.

Los hombres que gobernaron el país, después de Rosas, abandonaron el iluminismo para afrontar problemas políticos con criterio historicista. Su pensamiento y su acción se presentan, a través de una superación y síntesis de las doctrinas unitarias y federales. En aquel momento (1853-1880) se pretendió superar el historicismo romántico y el tradicionalismo católico. Las ideas enunciadas por la generación del 37 se instauraron en la Argentina, de modo definitivo, con la presidencia de Urquiza. Esta generación es considerada de *creación o gestación* de la Organización Nacional y, por lo tanto, de

una sociedad moderna y se diferencia del período que se inició con el primer gobierno de Roca (1880-1886) conformado por un grupo de hombres identificados con *la gestión*, con responsabilidad en la vida pública, y que tomaron como modelos los países civilizados de Europa y los EE. UU. De manera que la generación del 37 coincidió con la formación de la sociedad nacional y la generación del 80 con el establecimiento de la misma<sup>1</sup>. Por esta razón, la década de 1880 cobra pleno sentido, tanto colofón del período que se inició con Caseros (1852), por su capacidad para ofrecer soluciones concretas a problemas debatidos durante treinta años (Martínez de Codes, 1986: 205). Se comienza a vislumbrar la culminación de un proceso que había sido ideado por los hombres de la generación romántica, en especial Echeverría, Sarmiento y Alberdi; y realizado parcialmente en el período de los tres grandes presidentes constitucionales: Bartolomé Mitre (1862-1868), Domingo F. Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880). La etapa que comenzó en 1880 constituye un momento crucial en la formación de la Argentina moderna, donde el progreso y la tecnificación son las ideas principales.

## 2. Características generales de la generación del 80

Lo que se llama por lo común "generación del 80" abarca un período de predominio social, cultural, político y económico de treinta años que incluye la gestación de otra generación. En ese lapso (1880-1910) coexisten y se acumulan distintos grupos que originaron, en la coyuntura histórica, una alianza intergeneracional que permitió la puesta en práctica de una serie de medidas que condujeron al país a un período de prosperidad y riqueza. La situación favorable en el mercado internacional y la decisión política de la élite ochentista, de consolidar la paz y la unión nacional, proporcionaron al país dos elementos esenciales para generar la expansión: capital y mano de obra.

Como señala Martínez de Codes (1986: 176 y ss.) la generación del 80 se encuentra caracterizada por:

1) La existencia de una *estructura* que organiza las relaciones entre componentes, donde domina una minoría o élite conformada por personas calificadas que se esfuerzan por organizar y dirigir a la masa. La élite actúa de esta manera porque se encuentra dotada para iluminar y clasificar valores y creencias que orientan, debido a su poder de disposición, al resto de la comunidad. Transmite ideas y símbolos culturales extraídos de la experien-

cia. Por estas razones se presenta como un grupo de referencia que ejerce funciones rectoras.

2) La aparición de un *acontecimiento decisivo (o problema común)* con poder de atracción respecto a la unión de sentimientos y voluntades. Este acontecimiento se presenta como eje de referencia común y pueden ser uno o varios relacionados entre sí, que traen aparejados el agrupamiento de actores sociales unificando fuerzas de origen diverso. En este caso, los hombres del 80 compartían la idea de progreso indefinido basado en el consenso nacional, la paz y la administración, aprovechando la ventajosa situación internacional.

3) La presencia de *grupos coexistentes y simultáneos*. Se diferencian los grupos que viven en el mismo tiempo (contemporáneos) de los que tienen la misma edad (coetáneos). Estos últimos reflejan el mismo estilo de vida y recorren juntos las diversas etapas de sus vidas: infancia, juventud, madurez y ancianidad. Esto se hace presente en la generación del 80 ya que, si bien se comparan las ideas principales, suelen sucederse numerosos conflictos en la forma de implementación. Tensiones y conflictos que tienen su origen en la coexistencia de distintos grupos contemporáneos, conformados por personas de distintas edades y con diferentes experiencias de vida, cuyo eje central es la forma de implementar el programa o el modo de lograr el progreso.

4) La manifestación de la generación por medio de la *vigencia social* que se hace extensiva y abarca numerosos aspectos de la vida social: usos, ideas, creencias, opiniones. Estos ejercen presión sobre las personas y determinan una forma de conducta. Es aquí donde se constituye un sistema de relaciones, logrando que la generación adquiriera su auténtica realidad.

Los integrantes de la generación del 80 no fueron originales en cuanto al programa que planeaban realizar, que ya se encontraba esbozado por los hombres de la generación anterior y había sido puesto en marcha por las presidencias históricas (1862-1880). Con la consolidación del orden interno y la permanencia del sistema político se facilita la unidad nacional. Esta última es concebida no en relación con los intereses de las provincias, sino con los de todo el país. La transformación que se inició en este período se funda en la ideología liberal de la generación del 37 que creó las condiciones previas para que ese pensamiento pueda encarnarse en la realidad. Los hombres del 80 parten de ideas generales que traducen a obras de gobierno, con predominio de la urgencia práctica. Con la Constitución Nacional reformada y aceptada unánimemente se marca el rumbo porque se presen-

1. En cambio, Juan Carlos Agulla utiliza las categorías "integración" y "consolidación" de las sociedades nacionales. Agulla, J. C. *Dependencia y conciencia desgraciada*, Belgrano, 1984: 24.

ta como un marco de consenso fundamental, un sentimiento integrador que posibilita, a los hombres de esta generación, llevar a cabo la obra proyectada por la generación precedente. Se busca, entonces, poner en práctica los principios y aspiraciones comunes consolidando los logros ya obtenidos.

### 3. El programa de la generación del 80

Para lograr la transformación de la sociedad argentina y, de esta manera, consolidar el proyecto político plasmado en la Constitución Nacional, esta generación aborda distintas situaciones o aspectos de la realidad.

Los hombres del 80 tienen un programa o conjunto de ideas claras que les permiten alcanzar diferentes objetivos. No se trata de un programa enunciado explícitamente o de modo integral. Mas bien surge de discursos políticos y parlamentarios, mensajes presidenciales, correspondencias, notas periodísticas, libros, u otras fuentes.<sup>1</sup> Este proyecto no abarca muchos aspectos, es limitado pero no anda sin rumbo, contiene creencias políticas básicas: la libertad y el progreso. Recuerdese que Roca lo sintetiza con su lema: Paz y Administración. Es decir, estas ideas centrales justifican las medidas que se fueron adoptando para la transformación de la sociedad: legalizar el poder, pacificar el país, consolidar el liberalismo y asegurar el progreso. Estas ideas permiten poner en marcha diferentes medidas en relación a las situaciones social, económica, cultural, educativa y política.

Es necesario destacar que la sagacidad política de los hombres del 80 los ayuda a tomar conciencia de los obstáculos, que condicionan el desarrollo del país, con el objeto de suprimirlos. Estos hombres convierten en acción, accionan y consolidan el pensamiento y los principios elaborados en la generación anterior. *Ellos aceleran e intensifican el proceso de crecimiento.*

Para el análisis del proceso de transformación de la sociedad argentina y para comprender el paso de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, se necesitan tratar distintos aspectos de la aplicación del programa de esta generación que, además, se encuentran interrelacionados. Por lo tanto

1. Entre los libros utilizados para el análisis cabe mencionar: Bialek Massé, Juan. *Informe sobre el estado de la clase obrera*. Hispanoamericana, Buenos Aires 1986; Bunge, M. *Nuestra América. La cultura argentina*. Buenos Aires, 1918; Dellepiane, Antonio. *Estudios de Filosofía jurídica y social*, Valerio Abledo, Buenos Aires, 1907; Gálvez, Manuel. *Pida de Sarmiento*, Dicho, Buenos Aires, 1979; García, Juan Agustín. *Sobre nuestra incultura*, Docencia, Buenos Aires, 1981; Ingenieros, José. *Sociología Argentina*, Tor, Buenos Aires, 1956; Ingenieros, José. *La evolución de las ideas argentinas*, Tomo 5, Elmer, Buenos Aires, 1957; Ramos Mejía, José. *Las multitudes argentinas*, Belgrano, Buenos Aires, 1977.

se recurrir al rescate de distintos conceptos o variables que permitan remarcar cómo se convirtió y se traduce en acción (en obras) el mencionado plan y de qué manera se establece la Sociedad Nacional. Estas variables son: "sociedad", "cultura", "estratificación social" y "poder y autoridad".

### 3.1. Sociedad

El proyecto de la generación del 80, con referencia a la organización social (convivencia humana que permite satisfacer intereses y necesidades), puede ser analizado mediante el abordaje de tres dimensiones destacadas en las acciones de gobierno. Estas son: economía, medios de transporte e inmigración. Las tres categorías de estudio están estrechamente relacionadas y permiten discernir el alcance de las ideas de esos hombres, dejando de lado cifras y datos estadísticos para poder tener una visión del significado de las distintas medidas en la modernización de la sociedad argentina.

#### 3.1.1. Economía

Europa planteaba la necesidad de crear un mercado mundial para colmar sus excedentes de producción industrial y, al mismo tiempo, resolver las exigencias de materias primas alimenticias e industriales. Se produjo así la necesidad de conformar una división del trabajo. Por eso la élite dirigente triunfante, después de Caseros, se vio en la obligación histórica de crear nuevas posibilidades económicas ingresando en ese mercado mundial y produciendo, en la segunda mitad del siglo XIX, que la economía argentina diera un salto como país rural.

Entre los factores de transformación más significativos que operaron en la sociedad argentina, cabe destacar el desarrollo de la ganadería (Martínez Codes, 1986: 321). En la década de 1850 la cría de vacunos estaba dirigida a la incipiente exportación y, básicamente, para el consumo interno. La industria principal era el saladero, posibilidad que comenzaba a agotarse con la aparición de adelantos tecnológicos (la máquina a vapor, la producción en masa de hierro y el incremento de las industrias fabriles). La incorporación de nuevas tierras a la explotación económica de la nación posibilitó la expansión de la actividad rural ya que el fenómeno más importante de la década de 1880 era la expansión territorial que logró anexar 30 millones de hectáreas para la actividad ganadera y, con posterioridad, agrícola. Es aquí donde el ganado vacuno se transformó en el protagonista y los ovinos fueron desplazados a los nuevos territorios en la época de la expansión ferroviaria, lo cual permitió, a su vez, dar rentabilidad a tierras improductivas. Aparece la estan-

cía moderna como unidad de producción en la que al alambrado se le incorporó el tanque australiano, y la tecnificación al proceso de cría y a la diversificación de la ganadería. Más adelante la cantidad de ovinos aumentó en detrimento de los vacunos debido a que, al ser la Argentina un país destacado en la exportación de materias primas, la lana era un producto fácil de colocar en el mercado europeo. La región del Litoral protagonizó esta explotación ganadera acompañada por la provincia de Buenos Aires. Al aumento de la cría de ovinos, a principios del siglo XX, le siguió el aumento de la exportación de la carne vacuna congelada. Se promovió la mejora de las razas criollas por medio de la importación de reproductores británicos, acrecentando la calidad y el valor de la carne vacuna argentina. Las causas de este aumento se debieron no sólo a la cantidad de animales sino a las mejoras cualitativas introducidas en la producción, consolidadas con la aparición del transporte frigorífico a fines de la década de 1870 y a la instalación de plantas congeladoras de carne. La exportación de la carne subió de 25.000 toneladas en 1900 a 145.000 en 1910. De todos modos, el país siguió siendo predominantemente ganadero hasta 1890.

El segundo factor de transformación de la sociedad tradicional en una sociedad moderna, y referido al aspecto económico, fue el desarrollo de la agricultura extensiva.

Desde la década de 1850 hasta la de 1880 cultivos como el trigo, el maíz, el linó, la cebada, el azúcar, abastecían al mercado interno y comenzaban a arrojar saldos exportables. El despegue de la actividad agraria se produjo en la década de 1890 y bajo dos formas: la colonización de tierras y el latifundio agrícola. En la primera se destaca el colono, propietario de la tierra que trabaja. Tiene su marca geográfica en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. En cambio, el latifundio, basado en la explotación del campesino arrendatario, se practica ampliamente en la provincia de Buenos Aires aunque, también, en forma aislada en algunas colonias con campesinos propietarios. El régimen de tenencia de tierras incidió en el proceso de transformación de la agricultura debido a la tendencia a la formación y consolidación de la gran propiedad terrateniente. La propiedad latifundista, que fue en aumento en las primeras décadas del siglo XIX y se consolidó en la época de Rosas, se afianzó con las presidencias históricas y con la generación del '80, al enajenar tierras públicas y pasarlas a manos privadas. Esta concentración de gran cantidad de hectáreas en pocas manos se debió, en principio, a dos razones: no había abundante población que demandara las tierras y las necesidades de los estancieros al querer aumentar la cantidad de tierras para el pastoreo de sus animales. Recuérdese que en este mo-

mento predominaba la actividad ganadera y el latifundio se presentaba como un obstáculo en el desarrollo de la agricultura e impedía, además, el acceso de nuevos agricultores a ocupar, explotar y obtener la propiedad de las tierras. Se generalizan, también, distintos tipos de tenencia de la propiedad como los casos del arrendamiento y la medianería. De todos modos, frente a los latifundios apareció, de manera emergente, un grupo de pequeños propietarios ganaderos y agricultores como alternativa a la actividad terrateniente.

En 1890 la tierra cultivada representaba alrededor de un uno por ciento de la superficie total del país, pero creció notablemente en la década de 1890, originando un aumento del beneficio agrícola y de los saldos exportables. Ejemplo de lo expuesto es la exportación de trigo que subió a 320.000 toneladas en 1890 y a 1.900.000 en 1900.

En 1890, la clasificación de las provincias argentinas, de acuerdo con el área cultivada y en relación a la superficie total del país, es la siguiente: 1º Santa Fe, 2º Entre Ríos y 3º Buenos Aires. Esta situación cambió en las primeras décadas del siglo XX al encabezar Buenos Aires el número de hectáreas cultivadas. No obstante, el aumento en dichas áreas se debe a una reacción por la abundancia, el abaratamiento de las tierras alejadas y la utilización de dos vías de comunicación: el río Paraná y la aparición y el desarrollo del ferrocarril. Este último se presenta como un hecho tecnológico que impacta en el abaratamiento de los costos de producción (junto con la disminución del flete marítimo). Otro elemento que influyó en el aumento de tierras cultivadas es la caída del precio de los cereales que hizo que el agricultor aumentara su producción para mantener su margen de ganancias.

A finales de 1910, la alta rentabilidad del negocio ganadero y la explotación agropecuaria condujeron a la Argentina a una situación predominante en los mercados mundiales de mercancías y capitales extranjeros. Los capitales británicos fueron, desde el principio, el mejor sector inversionista extranjero debido a las ventajas que ofrecía el nuevo mercado en la colocación de sus manufacturas. Las inversiones británicas, dueñas del capital, no intervinían, en general, en la decisión respecto de los fines de su utilización. Esta decisión dependía de las autoridades argentinas. Las inversiones realizadas eran garantizadas por el Estado a través del otorgamiento de tierras por un mínimo de ganancias. El capital criollo privado no se destacó por participar en la actividad financiera, el accionista más importante en la Argentina era el Gobierno Nacional.

La actividad industrial surgió como una prolongación de la actividad agropecuaria (saladeros, frigoríficos, molinos harineros, fábricas de vino)

sint mayor importancia. El resto de la actividad es la base de pequeños talleres, prevaleciendo la exportación de materias primas y la importación de artículos manufacturados (Cortés Conde, 1965: 65).

El crecimiento generado exige, además de capitales, medios de transporte y mano de obra para lograr el progreso y el desarrollo.

### 3.1.2. Los medios de transporte

Las características del país respecto a la dispersión de la población, las grandes distancias, la inexistencia de caminos, la imposibilidad de desarrollar una vasta red de canales de navegación, llevaron a los políticos a concluir que el único medio de transporte viable era el ferrocarril. Este es el factor de transformación más eficaz a corto plazo, en la lucha entablada con la naturaleza debido a que el ferrocarril desempeña un papel importante en la economía, en el control y en la centralización de las decisiones políticas. El ferrocarril, en lo que se refiere a lo económico, promovió el progreso y el desarrollo del capitalismo modelando la estructura económica del país al controlar, por su posición estratégica, toda la producción agropecuaria. Constituyó, aparte de su importancia, una manifestación técnica, industrial y financiera de las naciones grandes y adelantadas. Su construcción exigía, junto a la inversión de capitales, un conjunto nuevo de conocimientos técnicos que no se encontraban en la Argentina. Era necesario recurrir al extranjero y se decidió por Inglaterra ya que, para la década de 1850, contaba con las condiciones necesarias para constituirse en exportadora de capitales y tecnología ferroviaria. Es necesario agregar la existencia de obreros especializados, contratistas, equipos de ingenieros avanzados que con el ejemplo en su país de origen, pasaron a realizar obras en el resto de Europa y posteriormente en América. Queda claro que, además de la voluntad de los gobernantes argentinos y de la demanda interna, existen capitales, tecnología y mano de obra europea disponible.

A partir de 1880 se inició uno de los períodos más activos de la historia ferroviaria argentina. Ese año puede ser considerado como el límite entre el período de promoción y de desarrollo inicial de los ferrocarriles y la etapa de gran inversión en la cual queda configurada la red de transporte. La longitud total de este medio de transporte pasó de 2.516 kilómetros en 1880 a 9.453 kilómetros en 1890. De todos modos, la configuración de la red ferroviaria es uno de los temas más polémicos ya que se suele sostener que fue construida con el fin de concentrar todo el tráfico en el puerto de Buenos Aires, desconociendo la existencia de los mercados del interior y contri-

buyendo a su destrucción (Martínez de Codes, 1986: 252). Hay que destacar, en realidad, el hecho de que los ferrocarriles desempeñaron un papel preponderante en la unidad política nacional. El aislamiento de diferentes regiones se quebró después de la construcción de las distintas líneas, dando paso a una unidad nacional real a partir del ideal plasmado en la Constitución Nacional.

Es necesario agregar otra referencia a los medios de transporte: la construcción de los puertos porque constituyó un complemento del sistema ferroviario. Cabe mencionar los puertos de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca junto con el de Rosario. Estas obras fueron acompañadas por una notoria disminución de los fletes marítimos debido al acortamiento de las distancias entre las regiones periféricas y los mercados europeos originados, especialmente, en adelantos tecnológicos.

### 3.1.3. Inmigración

La labor social y económica más importante de la época de la Organización Nacional consistió en poblar la Argentina. La consigna de Alberdi "Gobernar es poblar. Poblar es facilitar la inmigración" sintetiza de forma inmejorable la tarea de los hombres del '80.

En la segunda mitad del siglo XIX el país contaba con una población estimada de 800.000 habitantes, lo que equivale a decir que se trataba de un desierto. Ese era todo el potencial humano con que se contaba para tomar posesión efectiva de las tierras. Existía conciencia de que la riqueza residía en su suelo, pero que necesitaba de brazos para dejar de ser improductiva. La inmigración, numerosa y organizada, se tomaba imperiosa.

Se pueden destacar dos momentos diferentes en el proceso de inmigración. En el primero, hasta 1880, donde se trató de poblar el desierto promoviendo la ganadería, la agricultura y la red de transporte. A partir de 1880, la tendencia dominante fue la búsqueda de mano de obra abundante para continuar una producción masiva en el área agrícola-ganadera. Estas etapas fueron acompañadas de la acción gubernativa que promovía el crecimiento acelerado a través de la legislación destinada a favorecer la llegada de inmigrantes. Un ejemplo de esto es la sanción de la Ley de Inmigración en 1876. Con este ordenamiento normativo se intentó sintetizar la política inmigratoria al contemplar el traslado de los recién llegados hacia tierras de labor donde se dio prioridad a los grupos de familia que son los que poseen mayor arraigo transformándolos, lo más pronto posible, en sus propietarios. La ley, también contemplaba el control de la adquisición de tierras públicas

a través de colonias agrícolas en diversas zonas del país (Cornblit, Gallo y Connell, 1965: 25 y ss.).

Es de destacar los resultados de los censos. En 1868 la población en la Argentina era de 1.737.076, en 1895 aumento a 3.954.911 habitantes y en la década de 1930 alcanzaba casi los 12 millones. En el decenio 1880-1890, por ejemplo, se logró un promedio de inmigrantes superior a 60.000 por año, mientras que el máximo anual se alcanzó en la primera década del siglo XX ya que llegaron 112.000 personas, aproximadamente.

Este espectacular crecimiento se debió, por un lado, al aumento demográfico en los países europeos junto a dificultades sociales, políticas y económicas y, por otro lado, a la expansión económica y a la estabilidad política argentina.

Respecto al origen de los inmigrantes, procedían en su gran mayoría de los países europeos pertenecientes al área del Mediterráneo y, en pequeña proporción, de los países anglosajones. También arribaron grupos de eslavos (rusos y polacos) y sirio-libaneses considerados tucos por provenir de pueblos sujetos al antiguo imperio otomano. De todos modos, el grupo italo-español predominaba, sus aportes demográficos oscilaron entre el 75 y el 80% del total de inmigrantes. En el caso de los franceses, inicialmente con un ingreso numeroso, disminuyeron a partir de 1880; estos generalmente tenían una posición desahogada que les permitía destacarse en el comercio y la industria. Por su parte, las inmigraciones británica y alemana tardaron mucho en asimilarse al país dado que conservaban sus costumbres, su lenguaje y su fe.

Tal fue el impacto de las corrientes migratorias que la Argentina tuvo que hacer frente a un problema sin parangón en otros países de inmigrantes. La proporción de extranjeros en su población total aumento en forma considerable dando lugar a una falta de absorción de la masa extranjera que no llegaba a asimilarse culturalmente, sino que modificaba sustancialmente la composición de la población nativa y su estructura social.

De todos modos, la inmigración es el resultado de un esfuerzo consciente por parte de los hombres que dirigían la organización del país para modernizar la sociedad inspirados en modelos europeos. Junto con el propósito explícito de poblar el desierto había otro implícito que perseguía la modificación de la composición demográfica con el fin de alcanzar lo antes posible una estructura progresista y moderna (Germani, 1968: 180).

### 3.2. Cultura

En esta categoría se analizan cuatro dimensiones: modelo de conocimiento, formulación jurídico-institucional, asimilación del inmigrante y educación. Esas variables permiten, unidas a las ya estudiadas en la categoría sociedad, destacar el paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna.

#### 3.2.1. Modelo de conocimiento

Respecto a las formas de conocimiento, "el positivismo" predominaba en la Argentina de la generación del 80, durante tres decenios. Es entendido como una corriente de pensamiento o movimiento de ideas que admiten como forma de "saber" los hechos recogidos por la experiencia, y como única seguridad del espíritu humano, lo que ofrecen las ciencias experimentales. Se trata, entonces, de la aplicación del método científico en todos los dominios de la vida intelectual y moral. El conocimiento se busca en la observación de la realidad y su posterior razonamiento. Esta forma de abordar la realidad estaba influida por imperativos sociales y políticos de la época que permitían, luego de la Organización Nacional, sistematizar el saber, elaborando teorías y desarrollando investigaciones (Martínez de Codes, 1968: 270). El nacimiento del positivismo en la Argentina se debe buscar aproximadamente en los años 1870, especialmente a partir de 1880, como reacción crítica contra la cultura teocrática hispano-colonial en su formulación filosófica. Se trata de un positivismo sistemático en una situación intermedia entre el conocimiento filosófico y la temática de las ciencias experimentales, que se inspiraba en las teorías de Darwin como, asimismo, en Spencer y Comte (Solter, 1968: 43 y ss.), y que estaba condicionado, por lo tanto, por el desarrollo de las ciencias naturales y el posterior empuje de las ciencias del hombre.

Esta corriente se encuentra influida, básicamente, por la ilustración y por las ideas socio-políticas de ese mismo movimiento que tendía a la formación de un Estado liberal cuyo máximo propulsor fue Bernardino Rivadavia. A esto hay que agregar la importante contribución del reglismo social de la generación del 37 donde se exalta a los espíritus positivos por oposición a los especulativos (Solter, 1968: 43 y ss.).

Tanto durante la época de la Independencia, como durante el gobierno de Rosas, las propuestas sociológicas tendían a considerar los principios revolucionarios de Mayo, desarraigando las formas angulosadas del colonialismo. El realismo social de la generación romántica del 37 es acrecentado. Por esto los hombres del 80 pudieron formular su pensamiento positivis-



ta. Un ejemplo de lo expuesto se presenta en el campo de la "ciencia jurídica" donde se rescataron los logros de la psicología, la antropología italiana y el derecho penal positivo. Recuérdese que casi todas las figuras de la época eran abogados seguros, en importancia, por los médicos. Estos profesionales se acercan a la sociología para comprender y explicar la sociedad argentina con criterios científicos y sistematizar los resultados debido a que no se buscaba de manera excluyente, en este momento, transformar la realidad social y política, asunto más propio de la generación del 37.

Es decir que se está en presencia de una corriente de pensamiento que prevaleció en la generación del 80 y que se enfrentó, especialmente, a los principios católicos y a toda posición teórica contraria al progreso, cuestionando los dogmas a partir de la investigación de campo. En el contexto de este modelo de conocimiento se produjo la creación de asociaciones, academias, museos y la contratación de profesores extranjeros, siendo el objetivo prioritario de los hombres de esta generación homogeneizar las estructuras social, política y económica, para permitir la gobernabilidad del país de acuerdo con el programa formulado. Se buscaba establecer y consolidar el orden y el progreso a través de las instituciones.

El contenido social y político del positivismo argentino desarrolla un papel fundamental en la historia de la cultura argentina. El método de las ciencias naturales influyó en la fundamentación filosófica de las ciencias del hombre lo cual significó el surgimiento de un nuevo espíritu metodológico que valoraba la ciencia por la ciencia misma. Tiene un significado sociopolítico en la medida en que representa el resultado filosófico de un largo desarrollo ideológico, indisolublemente ligado al pensamiento que sirve de base al liberalismo laicista democrático en su institucionalización. El positivismo es liberalismo pragmático donde predomina el progreso ilimitado auxiliado por la razón y acompañado por una verificación experimental de la realidad.

En esta corriente se destacaron con diferentes matices: Agustín Álvarez, Antonio Dellapiane, Ernesto Quesada, Francisco José Ramos Mejía, José Matizco, Carlos Bunge, Juan Agustín García, Florentino Arégnino, entre otros.

### 3.2.2. Formulación jurídico-institucional

La conducción política global permite a los hombres del 80 cumplir con dos aspiraciones sintetizadas en el mensaje del Presidente Roca: Paz y Administración. La forma de lograrlo es por medio de una formulación jurídica coherente que permite al país sobreponerse a los intentos de disolución inte-

rior y a los deseos extranjeros para poder llevar a cabo una política progresista. Esta formulación permite cumplir con un programa de institucionalización que se presenta como armazón de la convivencia colectiva.

El crecimiento liberal, fundado en la creencia del progreso indefinido, tomó como incidencia el sector social donde la ideología toma formas legislativas autónomas. Son los campos de la educación, de la organización familiar, de los problemas religiosos, de las relaciones sociales, y todos aquellos sectores que sufren más alteraciones basadas en una peculiar manera de entender el progreso. Por ello la importancia de la abogacía, como se expuso, encuentra su justificación en la necesidad de ordenar el gran espacio social habitado. Se pretende organizar el país y, para que esto se logre, se requieren instituciones como las relacionadas con el Poder Legislativo (Congreso Nacional, legislaturas provinciales, consyos vecinales), el Poder Ejecutivo (presidente, gobernadores, intendentes) y el Poder Judicial (juzgados en general). Es así que se puede considerar a los hombres del 80 como codificadores y legisladores. Ellos entienden la realidad en la medida que puedan codificarla.

Luego de lograda la federalización de Buenos Aires y de haber conquistado el desierto, le correspondía a la generación del 80 ocuparse de los restantes factores institucionales para la realización del programa desarrollista esbozado. Surge, de esta manera, una legislación destinada a proveer al gobierno central de todos los atributos inherentes a la soberanía. Se pueden rescatar algunos ejemplos:

A) El predominio del Ejército Nacional sobre las milicias provinciales al quedar, estas últimas, disueltas cuando Roca asumió el gobierno de acuerdo con la ley 1.067 proyectada por el propio Congreso de 1880. A partir de ese momento la estructura institucional del ejército fue revisada y el 22 de octubre de 1882 se promulgó la ley 1.254 que fija el procedimiento para acordar ascensos, sistematizando jerárquicamente el cuerpo, la antigüedad de clases, y dejando de lado las Ordenanzas de Carlos III a este respecto. Esta ley fue acompañada por la Ley 1.809 con iguales disposiciones para la armada y por la posterior 4.031 (Ley Riecher) que instituye el servicio militar obligatorio.

B) Al federalizar Buenos Aires se agrega un nuevo distrito al cuerpo jurídico nacional. Se deben tomar una serie de medidas: organizar la municipalidad como persona jurídica (ley 1.260), los tribunales de justicia local, justicia de paz, jueces letrados, tribunales de apelación, registro de la propiedad (ley 1.144) y el régimen de escuelas comunes (ley 1.420). Se debe agregar la

503,5

10

puesta en práctica de muchas iniciativas transformadoras: plazas, desagües, anexión de pueblos o distritos en la capital (caso de Belgrano y Flores).

Con respecto a la sanción de la ley 1.144 se empieza a divisar con claridad la existencia de dos grupos antagonicos: los laicos y los católicos. La causa del enfrentamiento fue el recurso de fuerza en virtud de la cual los tribunales eclesiásticos se vieron obligados a admitir la apelación ante la Cámara ordinaria. El debate terminó con el triunfo de los liberales laicos.

C) Se procedió, en el plano jurídico, y debido a la insistencia de Roca, a una rápida sanción de algunas reformas al Código de Comercio y al Código Penal.

D) Se declaró gobernación, en octubre 1878, al extenso territorio de la Patagonia. Se organizaron los territorios nacionales, provinciales, las instituciones municipales; además se ordenó la justicia y se crearon escuelas. Esto ocurrió en 1884 por ley 1.532. De esta manera se dio vida definitiva a las tierras del país que quedaban fuera del ámbito de las provincias. Esto permitió la integración territorial y política de la República facilitando, también, la fijación de la mayor parte de los límites con países limítrofes como Chile, Brasil y Paraguay.

E) Junto a la ley de educación, en 1884, fue sancionada la ley 1.565 sobre el Registro Civil que abrió la vía al matrimonio civil (ley 2.393 de 1888) y fueron secularizados los cementerios. Estas leyes generaron un debate importante en la sociedad argentina sobre la forma de plasmar el programa de la generación del 80.

No cabe duda de que el conjunto de leyes mencionadas, entre otras, modificó la fisonomía de la sociedad argentina. Por esta razón no se puede afirmar que su sanción se debe sólo al hecho de que había que acompañar la política inmigratoria y los progresos económicos. Los hombres de la generación del 80 actúan conforme a los principios positivistas poniendo la razón, la libertad y el progreso por encima de sentimientos y creencias religiosas arraigadas en el pueblo (Martínez de Codes, 1986: 282), a veces sin tener en cuenta el costo y las consecuencias.

### 3.2.3. Asimilación del inmigrante

En la Argentina, la inmigración tuvo un carácter masivo porque implicó la radicación de un contingente muy elevado de extranjeros, frente al volumen de la población nativa reducida y diseminada en un vasto territorio.

Los extranjeros se concentraron "geográficamente" en ciertas regiones y centros urbanos y "demográficamente" teniendo en cuenta las edades y el sexo. Esta concentración en términos relativos llegó al orden del 70 u 80

% de extranjeros en muchas áreas geográficas determinando, entonces, las características del proceso de asimilación cultural o límite de tolerancia.

Si el volumen absoluto de la población nativa que recibe la inmigración (población "base") es muy alta, su capacidad de asimilación o límite de tolerancia para la preservación de su identidad será elevado y, a la inversa, si la población "base" es reducida (Germani, 1968: 265). Especialmente en los centros urbanos, no se produjo la absorción de la masa extranjera que llega a "asimilarse", a parecerse e identificarse con la población nativa. Aunque en todo proceso de este tipo hay una doble influencia, de manera que la estructura del país de inmigración y su carácter nacional quedan afectados por los recién llegados de afuera, a la vez que estos adquieren las modalidades del país y se integran en su estructura. En la Argentina implicó la virtual desaparición del tipo social nativo preexistente, con lo que se modificaron, por lo tanto, todos los rasgos culturales (actitud hacia el trabajo, vestimenta, transporte, alimentos, aspiraciones, expectativas sociales, entre otras) (Germani, 1968: 267-268).

En las zonas rurales estos inmigrantes crearon centros relativamente aislados y homogéneos procurando reafirmar la cultura europea. Estos centros son conocidos como "colonias". Este término es aplicable a la reunión de los miembros residentes de los centros urbanos ya que tienden a construir unidades separadas por la lealtad común hacia la nación de origen, afirmándose en una estructura organizada y muy desarrollada: prensa, asociaciones de voluntarios, de asistencia, de protección, de recreación y de educación. Poseían hospitales y escuelas, y a menudo contaban con el apoyo material y moral de los gobiernos extranjeros correspondientes. Estos servicios suplían a los que el país no se hallaba en condiciones de proporcionar. Luego del impulso en el área educativa, por parte del Estado, estas asociaciones se mantuvieron con la función de preservar las tradiciones y el idioma de origen. De todos modos, se destacan las sociedades de socorros mutuos que reúnen miembros de un mismo origen y a veces a personas que practican una misma profesión con la finalidad de ayuda mutua en la resolución de sus necesidades de salud u otras urgencias. Estas sociedades dependen, por lo general, del aporte mensual de los asociados.

En cuanto a su adaptación personal, respecto de la asimilación cultural del inmigrante, implicó, en muchos casos, regresar al país de origen debido al sufrimiento y a las restricciones. Otros, en un gran porcentaje, permanecieron en el país participando en distintas estructuras de la sociedad "receptora", que fue muy elevada en las zonas rurales debido a la actividad económica y al matrimonio (producto de la alta tasa de inmigración mascu-

lita). En cambio, era muy baja o nula su participación política. Respecto al grado de "aculturación" o internalización de valores y pautas de comportamiento (propias de sociedades de inmigrantes) como, también, el grado de identificación (lealtad, identidad personal, grupo de referencia) con la sociedad a la que se ha inmigrado y su respectiva pérdida de identificación con la anterior, no se produce su asimilación a la cultura preexistente. Se originó así una cultura nueva cuyo portador es el descendiente de los inmigrantes (Gemani, 1968: 274 y ss.).

### 3.2.3. Educación

Para el gobierno de la época la educación se transformó en una cuestión de necesidad (Biagini, 1980: 28). La importancia de la educación expresada, especialmente, en la expansión de las escuelas primarias públicas radica en que permite elaborar el tipo nacional del porvenir. La escuela sirve para concretar y consolidar los principios establecidos en la Constitución Nacional de 1853. A través de las escuelas se puede preparar al pueblo en la conciencia y en el ejercicio de sus derechos.

Ya Urquiza, al preocuparse por este tema, llevó a cabo la reorganización educativa en el país. Se crearon numerosas escuelas primarias y secundarias, se nacionalizaron los colegios de Concepción del Uruguay, Monserrat en Córdoba y la Universidad de esta ciudad. Fue la designación de Sarmiento como jefe del Departamento de Escuelas, en 1856, lo que permitió crear escuelas en los pueblos limítrofes, y proveerlas de maestros, de publicaciones pedagógicas y material didáctico. Con Mitre se organizó la enseñanza secundaria, se crearon los Colegios Nacionales de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta y Catamarca.

El plan de la Escuela Normal de Paraná (1870) fue una obra conjunta de la Presidencia de Sarmiento y de su Ministro de Educación Nicolás Avellaneda junto con los pedagogos Jorge Stearns y José María Torres, sus primeros directores. A estos nombres cabe agregar los de dos pedagogos destacados: Alberto Larroque y Amadeo Jaques. El objetivo era formar maestros competentes para las escuelas primarias.

La característica de los planes de estudio, a nivel secundario, era el carácter formativo general preparatorio para todas las actividades de la vida, en franca oposición a la enseñanza especializada. Se trataba de formar a un hombre público liberal, progresista, anticonservador y anticlericalista. En todos los planes de estudio, más allá del enfrentamiento con las corrientes católicas y de la superación de la dialéctica cínulo-española a partir de

una coordinación positivista, se buscaba afirmar el origen histórico del país favoreciendo la unidad y los sentimientos de patria.

Esta idea era cuestionada por el grupo católico que creía que el concepto patria está relacionado con la cultura hispanoamericana: "en cambio, en la gestión de la generación del '80 ya existen sentimientos de inferioridad al buscar contactos con Inglaterra y limitando la actividad económica a la ganadería y a la agricultura. Para el grupo católico esto no implica patria, sino una fuerte dependencia" (De Paoli, 1964: 296).

En 1877 sancionó la ley 934 dirigida a reglamentar el principio de libertad de enseñanza donde el Estado tiene el monopolio de la educación secundaria y universitaria reconociendo el derecho de los colegios nacionales a otorgar certificados de estudio. Este hecho originó, tal vez, uno de los hitos en el debate entre laicos y católicos al pretender, los laicos, extender las libertades ya no sólo a la enseñanza sino al culto, al pensamiento y a la expresión.

Se inició un debate que culminó con la sanción de las denominadas leyes laicas, entre las cuales se destaca por su significación, la ley 1.420 de Educación Común, sancionada en 1884.

A fines de 1883, el país atravesaba por una verdadera contienda religiosa provocada por una serie de iniciativas, ya mencionadas, que el gobierno elevó a las cámaras y que conllevaron modificaciones importantes en la legislación social del país. El enfrentamiento abierto entre católicos y liberales estalló definitivamente en el Congreso Pedagógico, convocado por el presidente Roca y por el Ministro de Instrucción Pública Pizarro, entre abril y mayo de 1882 en Buenos Aires. El tema era la inclusión o exclusión de la enseñanza religiosa en los programas escolares. El 10 de abril de 1882 se realizó la apertura de ese Congreso con la asistencia de unos 200 participantes, entre los que se encontraban directores de establecimientos educativos, ex ministros de Instrucción Pública, profesores y educadores de todo el país. El debate entre las dos tendencias opuestas culminó con el retiro de los católicos. La votación a favor de la exclusión dejó vía libre para la iniciativa del gobierno, en el Congreso de la Nación, que condujo a la sanción de la ya mencionada ley 1.420. Más de 111.000 firmas fueron presentadas ante ese organismo con el fin de pedir el rechazo del proyecto, pero no se logró revertir la decisión de sancionar la ley (Gálvez, 1979: 269 y ss.).

En el dispositivo de la ley se destaca el desplazamiento de la enseñanza religiosa fuera de los horarios de clases y programas oficiales, lo que equivale prácticamente a su eliminación. El principal problema es lo que luego

será el artículo 8 de la mencionada ley. En él se determina que la enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por ministros autorizados de los diversos cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de la labor de clases. Las dificultades que se presentaban eran la falta de sacerdotes o ministros autorizados y una carga horaria extra para los menores. Estos elementos fueron considerados un obstáculo para la educación religiosa. Además, el sector opositor insistió que la escuela laica implicaba la renuncia definitiva a la obtención de la unidad moral de la República, cuando apenas se había logrado su unificación política ya que sólo se buscaba el comercio, el utilitarismo y el liberalismo sin pensar en las consecuencias. En realidad, el problema se centralizaba en una reacción católica frente a la política de Roca que era la de impedir la multiplicación de las escuelas religiosas, ya que eran identificadas con el tradicionalismo, y de buscar la contratación de maestros protestantes más comprometidos con la idea de progreso. Sobresale el hecho de comenzar a dejar cesantes a profesores católicos, entre ellos a José Manuel Estrada.

El conflicto saltó del Congreso Pedagógico a los ciudadanos en general por medio de periódicos enfrentados y pertenecientes a los distintos grupos antagónicos. En un artículo publicado en *El Nacional*, durante el Congreso Pedagógico, sectores laicos comparaban a las religiosas con insectos que destruyen la raíz y las hojas de la vid (filoxeras) y con las plagas de los campos (cardos negros). Los católicos del 80 sostenían que la escuela laica no significa escuela neutra, sino escuela sin Dios o negadora de Dios. La defensa estuvo a cargo de Pedro Goyena, Achával Rodríguez y Pizarro, frente a los que se ocupaban de los intereses laicos y del gobierno como es el caso de Eduardo Wilde, Lagos García, Emilio Civit y Delfín Gallo. El reducido grupo de católicos también formaba parte de la generación del 80 (contemporáneos y coetáneos) al no estar en contra del progreso pero negándose a aceptar el punto de partida filosófico adoptado. Se oponían al liberalismo porque creían que desestabiliza los valores tradicionales y cristianos de la persona humana, la familia y la educación. De todos modos, cualquiera de los hombres que formaban parte de las corrientes antagónicas (laicos y católicos) tenían similitudes: eran hombres que pertenecían a una minoría culta, formada en las mismas universidades y colegios, y comprometida en la misma empresa de desarrollo.

La tendencia laicista triunfante permitió que el proceso de educación, con las características arriba mencionadas, lograra integrar al inmigrante en la sociedad argentina promoviendo, especialmente, desde la escuela primaria, su adaptación a partir de los actos patrios y símbolos de unificación, que

aseguraban la rápida nacionalización de los hijos de inmigrantes. Luego de esto recién se pueden adquirir los derechos y libertades políticas, es decir la participación en la estructura de poder. La educación permitía mejorar en la conducción de vida. La educación primaria pública, entonces, fue identificada con el hecho de crear una conciencia nacional, afirmar algunas normas liberales de convivencia y, además, imprimir contenidos culturales de una vieja tradición humanística en los nuevos conocimientos científicos y técnicos. Por eso, para los hombres del 80, el sistema educativo tenía como función principal la homogeneización de la cultura y la creación de una conciencia nacional y aumentaba, en consecuencia, los índices de la alfabetización mejorando la posibilidad de integración cultural y económica de la población del país.

En el campo universitario la reestructuración fue más lenta. A la nacionalización de las universidades se sumó la modernización y la incorporación de profesores europeos y norteamericanos. No se descartó, en ningún momento, la fuerza transformadora de las universidades ya que estas permitían la asimilación, la cohesión nacional y se las reconoce como laboratorios de observación y experiencia de la vida.

### 3.3. Estratificación social

La inmigración, al dar origen a un proceso de asimilación cultural y social produce una situación de influencia debido a que su presencia en la estructura del país que recibe al inmigrante, y su carácter nacional quedan afectados por su llegada. En la Argentina este proceso implicó la virtual desaparición del tipo social nativo preexistente y la destrucción de parte de la estructura social correspondiente (Germani, 1968: 200). Por este motivo, el impacto migratorio origina que, entre 1870 y 1910, se cumpla con gran parte de la transición. De una estructura tradicional se pasa a una estructura moderna, sobre todo en la zona metropolitana de Buenos Aires y la región del Litoral. Esto significa, en la estratificación social, la aparición de estratos medios (o intermedios) casi inexistentes en una sociedad tradicional donde la población se polariza, básicamente, en dos estratos.

El surgimiento de los estratos medios urbanos, la creciente importancia de los empresarios del comercio y la industria junto con la transformación de las capas populares son procesos que se derivan, entonces, de la inmigración masiva. En términos generales, puede decirse que el resultado de la política agraria, que condicionó la inmigración extranjera, no es tanto la depoblar las extensas áreas rurales desiertas —aunque lo logró en cierta me-

dida— cuando la de proporcionar una abundante mano de obra urbana y, en menor escala, rural pues una minoría de inmigrantes permanecía en el campo trabajando como peones asalariados. El crecimiento de las ciudades, el surgimiento de una industria y la consiguiente transformación de la estructura social fueron parte de este proceso. A partir de 1880 la Argentina se transformó, básicamente, en un país socialmente moderno, pero con una estructura de sociedad dual en la que coexistían áreas de desarrollo en contraposición a áreas internas arcaicas.

Esta sociedad dual estaba conformada por distintos estratos sociales. El estrato alto estaba integrado por los terratenientes y sus asociados que constituían una elite moderna, energética y dotada de una notable capacidad empresarial. Esta no era tradicional sino claramente capitalista e innovadora, comprometida con el cambio social, que acelera el proceso de modernización social y de expansión económica. Este estrato controlaba la fuente principal de riqueza, la ganadería y la agricultura, aunque no vivían en el campo ya que lo hacían en grandes centros poblados. Se trataba de un patriciado al que se le agregó la aparición de la burguesía o la existencia de grupos enriquecidos por la actividad comercial que dependía, especialmente, de la explotación rural. No era un estrato cerrado, sino permeable por que los descendientes de inmigrantes podían penetrar en él (Germani, 1972: 103 y ss.).

Respecto a los estratos medios hay que distinguir los altos de los bajos. La riqueza del patriciado y la burguesía se filtraba hacia estratos medios altos identificados con la incipiente industria, propietarios y cuentapropistas dedicados, también, a la actividad agropecuaria (estrato medio rural). Eran propietarios y arrendatarios medianos que vivían y trabajaban en el campo, más que nada, en la región pampeana, y que se relacionaban con los profesionales (abogados, médicos, etcétera) de centros poblados (Aguilla, 1984: 66 y ss.). El estrato medio alto urbano, más allá de los grandes comerciantes, estaba especialmente vinculado con la actividad "terciaria", es decir los transportes y varios tipos de servicios modernos desde la organización centralizada y burocrática del Estado hasta los servicios bancarios, financieros, de comunicación, de educación, de recreación o de sanidad, claro está, cubriendo siempre altos cargos.

El estrato medio bajo rural estaba conformado por pequeños arrendatarios que vivían y trabajaban en el campo, colonos y chacareros. Realizaban su trabajo con auxilio de toda la familia y no tenían, por lo general, personas

asalariadas en forma permanente. En los centros urbanos este estrato estaba representado por los pequeños comerciantes, empleados y obreros calificados o especializados. Se dedicaban a trabajos manuales y de servicio.

El crecimiento de los estratos medios alcanzó un ritmo acelerado en la última década del siglo XIX. Estos estratos casi correspondían al sector dependiente como los empleados en general, profesionales y técnicos asalariados.

En los estratos inferiores o bajos se destacaban los trabajadores manuales por cuenta propia, el asalariado no especializado, el operario y el servicio doméstico. En las zonas rurales se destacaban los peones, que vivían en condiciones muy precarias, con un nivel de educación mínimo y escasas aspiraciones.

Durante la prevalencia de la generación del '80 la movilidad social era muy alta y se caracterizaba por un intercambio o reemplazo donde grupos de personas de estratos medios bajos ascendían y otros integrantes de los estratos medios altos descendían. Las causas son múltiples y están referidas a las consecuencias inmediatas de las corrientes migratorias, con el ingreso de grandes contingentes humanos que van a ocupar todo tipo de trabajos relacionados con los estratos bajos, provocando un ascenso del antiguo ocupante de ese estrato. En cambio, la división de tierras, por ejemplo entre herederos de un terrateniente, puede llegar a producir un descenso en el estrato debido a la pérdida de rentabilidad de la misma por las distintas subdivisiones.

Se agregaron como elementos de movilidad ascendente, factores demográficos relacionados con la menor tasa de reproducción (crecimiento vegetativo) en los estratos medios. Cabe agregar la educación, en especial universitaria, como una de las más importantes instituciones que permitieron la movilidad vertical. En lo que se refiere a la movilidad social regional ésta era desproporcionada debido a la concentración de asentamientos en la región pampeana, producto de la inmigración extranjera y de las migraciones internas provenientes de la región andina y serrana que actuaban como expulsoras de la población. Son personas que conforman un estrato bajo que buscan mejorar su situación social y que se encuentran afectadas por el establecimiento de la producción en áreas rurales como, también, por la falta de ocupación y de incentivos materiales.

### 3.4. Poder y autoridad

Para el análisis de esta categoría se trabajaron dos dimensiones: las medidas políticas que consolidan el programa de la generación del '80 y la elite dirigente. En ambos casos se pueden estudiar las causas y la manera que

tienen los hombres del 80, de controlar la estructura socio-política, sus ideas de permanencia en la misma y las consecuencias de ello. Las dimensiones permiten, además, determinar la transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna en el tipo de dominación.

### 3.4.1. Las medidas políticas

Al convertir en acción el proyecto generacional, y al acelerar e intensificar el proceso de crecimiento del país, los hombres del 80 debieron actuar en un contexto de estabilidad y permanencia social con distintas situaciones solucionadas. El programa de la generación consistía en un sistema de ideas y creencias que defendían una acción política y a las instituciones vigentes. El programa, como proyecto, era un instrumento útil ya que guiaba en la aplicación de medidas políticas fundamentales, para lograr cambios sociales y para conseguir la estabilidad en un sistema social. Se debe destacar que lo expuesto resultó posible dentro de la fórmula del positivismo y del progreso indefinido que ayudó a canalizar las contradicciones de distintos grupos que conforman la generación del 80. Estas medidas políticas fundamentales que consolidaron el programa analizado de la presente generación, está referido a la capitalización de Buenos Aires, la Campaña al Desierto y la consolidación del sistema político. Estas tres medidas permitieron la posterior aplicación del programa y la efectividad del mismo.

#### 3.4.1.1. La federalización de Buenos Aires

En el período 1862-1880 se destacó un poder provincial fuerte, desde donde se tomaban las decisiones nacionales, y una serie de poderes regionales débiles, con escasa participación en el gobierno central. Frente a esto existía un gobierno nacional que carecía de los elementos necesarios para imponer su soberanía. A partir de 1880 y con la federalización de la ciudad de Buenos Aires se crearon las bases, en el plano político institucional, de un nuevo orden nacional. Se implantaron las bases firmes de un Poder Ejecutivo Nacional que monopoliza la fuerza pública y reduce considerablemente el federalismo. A este extremo se llegó por una serie de factores que gravitaban en la realidad social, política y económica del país. Recuérdese que una de las reformas a la Constitución Nacional, propuesta por la provincia de Buenos Aires en 1860, estuvo referida a la superación de la designación de la Capital dejando que el problema sea resuelto por el Poder Legislativo Nacional. Mitre, en 1862, envió al Congreso un proyecto de federalización de Buenos Aires que, sancionado y convertido en ley, fue rechazado por la legislatura porteña.

Con posterioridad se llegó a un acuerdo (Ley de Compromiso) mediante el cual se permitió a las autoridades nacionales residir en Buenos Aires y ejercer su jurisdicción sobre las aduanas, los correos y otras reparticiones. Este compromiso debía ser revisado cada cinco años. Entre ese hecho y el año 1879 se presentaron distintas propuestas para solucionar esa situación generadora de tensiones, como la federalización de Rosario o la idea de fundar una nueva ciudad como capital en la provincia de Córdoba. El problema se resolvió en 1879 con motivo de la sucesión presidencial de Avellaneda.

Frente a la elección del Presidente para el período 1880-1886 las fuerzas políticas se polarizaron en torno a dos figuras: Julio A. Roca, Ministro de Guerra del saliente presidente, y Carlos Tejedor, Gobernador de Buenos Aires. Las elites provinciales apoyaban al primero, y grupos porteños y correntinos al segundo. Lo que sucede es que no sólo se trataba de la sucesión presidencial sino de dos formas distintas de entender el federalismo (Botana, 1985: 29 y ss.). Tejedor se oponía a una Buenos Aires federal, en cambio Roca apoyaba y promovía esta medida. El primero interpretaba al federalismo como un conjunto de actos defensivos, consagrados en la Constitución ante el poder que concentra el Gobierno Nacional. No buscaba la subordinación a la autoridad común sino un equilibrio de las partes (provincia y Nación) fortaleciendo, en lo posible, los poderes provinciales con milicias propias.

En el caso del grupo que se aglutinaba en torno a la figura de Roca, consideraba que con la federalización de Buenos Aires esta se colocaba al servicio de la Nación. Dado que lo principal es asegurar el interés general del Estado y el de las provincias, se necesitaba terminar con provincias o regiones que obstaculizaran el proyecto político nacional y los medios necesarios para llevarlos a la práctica. Con este propósito se trató de centralizar el país para evitar la disolución interior y, además, para poder consolidar una política progresista. En el enfrentamiento por la federalización de Buenos Aires triunfó Roca y se afirmó la autoridad del gobierno nacional. Esto se confirma, a modo de ejemplo, con la posibilidad que tiene la nación de intervención en las provincias. La "Intervención Federal" se presenta como un instrumento de control, ya aplicado por las presidencias históricas, de obediencia al poder político nacional y a los dictados del gobierno.

#### 3.4.1.2. La conquista del desierto

Con el control de una gran cantidad de tierras se buscaba no sólo la expulsión del indio, sino avanzar la paz interior, ganar tierras para el programa económico y consolidar la frontera argentina. Todo esto se logra con la Campaña al

Desierto. Entre 1860 y 1870 existía una precaria situación en las fronteras, con incremento de los malones y su agresividad, pero además con la presión del gobierno chileno en el sur del territorio nacional. Estos dos factores comenzaron a producir un impacto negativo en el ritmo del desarrollo económico argentino. Es así que los estratos terratenientes agudizaron sus críticas a la política de fronteras del gobierno. No hay que olvidar que hasta 1879 predominaba una actividad básicamente defensiva fundada en una línea de fronteras conformada por fortines y por zanjias que aseguraban la vida de los colonos y sus propiedades.

Con el proceso de afianzamiento del proyecto de la generación del 80 se necesitaban tierras fértiles para lograr la expansión económica del país. Con Roca se cambió de táctica frente a la situación india, se pasó de una política defensiva a una ofensiva. A la expedición o campaña que busca conquistar al desierto se la puede sintetizar como una maniobra de búsqueda y destrucción (Biagini, 1980: 59 y 60). Se incorporaron 15.000 leguas cuadradas de tierras disponibles. Para ello se valieron de la comunicación, posibilitada por el ferrocarril y el telégrafo —entre diversas líneas del ejército— que ingresaron en la Patagonia para consolidar con éxito la estrategia de erradicación de la amenaza india. Esto resultó posible en el contexto de la necesidad de diversificación del sector agropecuario, la importancia de la masa inmigratoria y el gran incremento del capital extranjero que ingresaba al país.

### 3.4.1.3. *La consolidación del sistema político*

Con los hombres del 80 se logró un orden político que estaba germinando desde el principio de la Organización Nacional. La integridad territorial, la resolución de la cuestión de la Capital Federal y la organización de un régimen político desde la sanción de la Constitución Nacional, sumado a los logros de las presidencias históricas, permitieron afianzar un régimen político capaz de asegurar la Organización Nacional.

Luego de los triunfos mencionados se trató de constituir un régimen político que permitiera la gobernabilidad del país y asegurara la aplicación del programa de esta generación. Es decir, un sistema de elección de gobernantes en el cual uno, y no otro, lleve la dirección del país. La solución está en que una minoría reducida se encuentre calificada para ejercer la libertad política debido a su especial formación. El resto del pueblo sólo tiene derechos o libertades civiles y económicas.

De manera que para consolidar el centralismo y los demás aspectos del progreso, se otorgó el ejercicio de gobierno a una minoría privilegiada, limi-

tando la participación política del resto de la población (Botana, 1985: 50 y ss.). La sucesión de las autoridades se aseguraba con un régimen electoral donde el voto era voluntario y "cantado" (no secreto). Para votar era necesario empadronarse e integrar un registro electoral. Es así como el control del registro resultó el primer paso para el control del comicio ya que este se hacía unos días antes de las elecciones y es allí donde se producían los arreglos. Sólo votaban ciudadanos argentinos, hombres mayores de veinte años y aquellos que respondieran al proyecto político. En los comicios se votaba por electores que a su vez elegían a los gobernantes (presidentes o gobernadores). En el caso del cargo de Presidente de la Nación los gobernadores provinciales tenían un papel importante debido a que controlaban la situación respecto de los electores provinciales. Sin el apoyo de los gobernadores el poder presidencial carecía de sustento. Pero, a la vez, aquellos perdían su autonomía al transformarse en agentes del Presidente. De todos modos, los gobernadores se aseguraban un posible ascenso a cargos nacionales. Es así como el gobernante y sus agentes eligen a su sucesor a través del sistema. Se trataba, entonces, de una democracia restringida, con participación limitada dirigida a suprimir las luchas electorales para así consolidar la Organización Nacional.

El Presidente de la Nación pasó a representar el dominio, la soberanía y el control racional de la ley. La persona que ocupa esa posición adquiere legitimidad en razón del cargo que ocupa y no por sus cualidades de gobernante. Tiene como finalidad impedir la tiranía a partir de la no-reelección y de la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) integrados, estos, por personas del mismo grupo o elite.

### 3.4.2. *La elite dirigente*

Queda claro que la generación del 80 se proponía unificar decisiones, nacionalizando a los distintos grupos de dirigentes provinciales y controlando el espacio nacional. La centralización y el control de la sucesión se transformaron, por lo tanto, en prioridades para la persistencia de un sistema hegemónico. Solo accedían al poder aquellos ciudadanos cuya educación y riqueza los hacía aptos para gobernar. En realidad se trataba de una minoría ilustrada compuesta por un número relativamente pequeño de hombres que se alteraban en el ejercicio de distintos roles (Martínez de Cades, 1986: 286). Actuaban como elite en la medida en que llegaban a acuerdos expresos o tácitos, en torno de objetivos más o menos similares. Se agrupaban y se enfrentaban dentro de un mismo sistema político, coincidían o discrepaban res-

503,5

15

pecto de los medios que se utilizaban para implementar el programa, pero lo compartían.

Es importante establecer que pertenecían al mismo estrato social y existían, entre ellos, vínculos de parentesco, tejidos por determinadas familias donde el matrimonio es una forma de concretar alianzas (Germani, 1970: 66 y 67). La capacidad intelectual era acompañada por la riqueza que parte, en principio, de la propiedad y el control de la tierra. Se trataba de un grupo limitado que ejercía el liderazgo en la sociedad y se presentaba como conductor de la mayoría de los habitantes del país. Este grupo dirigía y orientaba a la mayoría, a "la masa". Se trataba de un estrato gobernante que desempeñaba cargos institucionales decisivos (Botana, 1985: 152 y ss.). Estos actores participaban del proceso de control, de distribución del poder, de su cohesión en la conducción de la sociedad y de la solidez respecto de las convicciones sobre los que actuaban.

Esta élite dirigente estaba conformada por hombres que se enfrentan al momento de concretar el programa de la generación. Un ejemplo es la presencia de dos grupos antagónicos como los laicos y los católicos. Los católicos reaccionaron a las medidas adoptadas en lo concerniente a la educación y a la familia, hechos que los llevaron a organizarse como fuerza política, formando la Unión Católica Argentina que dio lugar a la aparición de un partido católico. Los resultados de su actividad política fueron más bien pobres, sólo Estrada y Goyena triunfaron en las elecciones de 1886 como diputados por la ciudad de Buenos Aires. Luego de la acción política se consolidaron en un accionar social, cultivando primordialmente el apostolado y la educación.

A este grupo cabe agregar otros grupos opositores a la forma de implementar el programa generacional, estos eran fieles a la tradición del autonomismo bonaerense, destacándose Leandro N. Alem y sectores juveniles integrados en la Unión Cívica de la Juventud. El partido de la Unión Cívica liderado por Alem se enfrentaba especialmente al sistema electoral prevaleciente y se oponía al fraude político. Cabe agregar, también, la aparición del socialismo como partido en 1896 que bregaba por alcanzar los objetivos obreros a través de la lucha política dentro de la democracia.

Frente a estos sectores opositores, integrantes de la misma élite, se consolidaba el poder económico y político de un grupo denominado "oligarquía" identificado, a partir de los años 80, como un grupo cerrado, conservador y corrupto. Este concepto era usado en la prensa y los grupos opositores para hacer referencia al sector compuesto por el Presidente de la

Nación y la gente que lo rodeaba, los gobernantes provinciales y quienes los apoyaban, los legisladores nacionales y provinciales que obedecían el requerimiento del Ejecutivo y los terratenientes, en general, que se alineaban con aquellos. De esta manera, el poder económico se confundía con el poder político que se consolidó con el roquismo triunfante en el 80 y que, en un primer momento, se presentó como progresista e innovador para luego transformarse en conservador. La "oligarquía" se identificaba, entonces, con los actos dirigidos a mantener el poder y las ventajas económicas, es decir con la corrupción del grupo dirigente (patriciado).

Esta situación generaba tensiones en el sistema social debido a que la oligarquía roquista no reaccionaba frente a los cambios que se producían en la estructura social, política y económica del país. Se mantenía un régimen institucional cada vez más distante de la realidad y que olvidaba o desoía los movimientos revolucionarios, huelgas, conflictos interoligárquicos, nuevas exigencias procedentes de sectores con interés en participar en los procesos de decisión política que clamaban por una apertura hacia la reforma. Es la época en que se produjeron sucesos revolucionarios como los de 1890 y la posterior marginación política de la Unión Cívica Radical con cuestionamientos explícitos a los fundamentos concretos de dominación, a la relación de mando y obediencia y a las reglas de sucesión. No se discutía la Organización Nacional.

La reacción de los dirigentes que conformaban la oligarquía era limitada. Se daba a través del Estado de Sitio y de la Ley de Residencia que perseguía, entre otros, a los anarquistas.

#### 4. Crisis de la generación del 80

Con el centenario de la Revolución de Mayo (1910) se puede señalar el comienzo de la crisis de la generación del 80, aunque ya habían aparecido síntomas con anterioridad. Se produjeron enfrentamientos entre quienes consideraban legítima la situación política imperante, con los que estaban convencidos de la ilegitimidad de la misma. El ambiente político y social denunciaba el surgimiento de nuevos estratos sociales y de un nuevo modelo de conocimiento que presionaba a la élite gobernante a realizar reformas en su programa social, político y económico. Lo que sucedía era que existía un optimismo avasallante y, al mismo tiempo, presagios de amenazas, signos inquietantes que anunciaban un daño a las posiciones del poder adquirido. El optimismo propio de las últimas décadas del siglo pasado va desapareciendo por distintas razones.



Los hechos y situaciones referidas se identificaban con el movimiento obrero, los partidos políticos de oposición, la concentración urbana y las tensiones en los sectores académicos.

El movimiento obrero argentino es producto de las corrientes migratorias. El mismo es impulsado por españoles proscriptos de la Primera República, por franceses de la Comuna de París, italianos de la Internacional y alemanes perseguidos por las leyes antisocialistas de Bismarck.

Los integrantes del movimiento obrero eran, por lo tanto, militantes de ambientes muy distintos que utilizaban "la huelga" como herramienta para alcanzar distintos fines. Este es uno de los primeros instrumentos de lucha que utilizaron los sindicatos en defensa de sus reivindicaciones, siendo las primeras esporádicas y algo exóticas, pero a medida que fue transcurriendo la primera década del siglo XX, aumentaron notoriamente en cantidad. Los sindicatos adoptaron la forma de una sociedad de resistencia convocando a la protesta de los trabajadores por lo que la hostilidad patronal y las persecuciones periódicas los impulsan a desarrollar un carácter de alta inestabilidad. Las corrientes de pensamiento que nutren a los primeros activistas obreros son:

- a) anarquistas que proponen la necesidad de organizarse utilizando la huelga general como método de lucha, rechazando la participación parlamentaria y la presencia de partidos políticos;
- b) el socialismo que se presenta como partido y que brega por alcanzar objetivos obreros a través del sistema democrático;
- c) el sindicalismo revolucionario que se propone como figura destacada en la lucha, desplazando a los partidos políticos y rescatando la negociación con los sectores públicos y empresariales para cambiar la situación del trabajador; y
- d) el comunismo que aparece con la Revolución de 1917 en Rusia y que busca la relación del movimiento obrero, como una organización de vanguardia, con el comunismo.

Frente a esta situación el gobierno respondió con una política represiva utilizando la fuerza como forma de contrarrestar la emergente tensión social. A este mecanismo de control se le agregaron distintos proyectos de legislación laboral (por ejemplo, el proyecto de Joaquín V. González) que tampoco eran efectivos para regular la creciente tensión ya que, por lo general, no eran tratados por el Congreso. Recién en 1905 aparecieron distintas legislaciones que proponían cambios paulatinos respecto de la situación laboral pero con discutible éxito.

En lo que se refiere a los partidos políticos de la oposición, el Radicalismo combinaba una estrategia abstencionista en las elecciones con un estilo conspirativo que tendía a incrementar las expectativas de reformas. Esta se llevó a cabo en la Presidencia de Roque Sáenz Peña y se encuentra cristalizada en una ley electoral sancionada el 10 de febrero de 1912, que abrió las puertas del ascenso político del mencionado partido, concretado con la Presidencia de Yrigoyen. Con esa ley se asegura la universalidad, la obligatoriedad y el secreto del voto. Esta ley fue completada con un registro de empadronamiento cualitativamente diferente al anterior. Con la ley Sáenz Peña se consagra el procedimiento de lista incompleta que garantiza la representación de la minoría.

Es para destacar que la política de colonización agrícola no tuvo el éxito esperado. Las cifras de inmigración reflejaban un gran desequilibrio. El 48 % de los extranjeros residía en la ciudad de Buenos Aires; el 42 % se distribuía entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y La Pampa. Sólo el 10 % en las restantes provincias. La causa del desequilibrio radicaba en el régimen de la tierra vigente. Recuérdese que el latifundio impedía la radicación de extranjeros en el campo y se multiplican las colonias. Además se produjo un aumento en el precio de la tierra que llevó a que el arrendatario rural se viera expuesto a la inestabilidad y a la miseria. Esta situación generó la expulsión de colonos a los centros urbanos ya que sólo un reducido número de inmigrantes alcanzaba rápidamente la posesión de la tierra que trabajaba. El centro de la escena se encontraba ocupado por multitudes urbanas y aluvionales cuya principal característica era la de estar constituida por individuos humildes y, según Ramos Mejía, de escasa inteligencia. Ese autor identificaba a las multitudes y a la concentración urbana con "estratos sociales pobres", "masa popular", "inmigrantes infradotados", "cerebros lentos", "masa de los anónimos" o "carne de cañón", los que eran vistos como una amenaza en el sistema social, ya que modificaban el tipo de vida anterior.

De manera que el fenómeno social referido a las corrientes migratorias generaba problemas estructurales referidos a la asimilación cultural, al fortalecimiento de los estratos medios y al incipiente proceso de industrialización, con los consabidos reclamos de las clases que se vieron favorecidas con la movilidad social y el interés de ser protagonistas en la mencionada estructura.

Respecto de lo expuesto, y en relación con los problemas políticos, se deben resaltar las consecuencias de los movimientos sindicales y, especialmente, el anarquismo revolucionario. Pensando en el origen de los mismos

se comienza a formular propuestas referidas a la desaparición y selección de las corrientes migratorias, principales responsables de los mencionados inconvenientes, para impedir "aglomeraciones de personas inactivas y malas que perturban la paz" (Levene, 1947: 189).

El progreso y la tecnificación utilizada para modernizar la sociedad se logró parcialmente. Es así como se consolidó la sociedad dual. En el interior, sobre todo en la región andina y serrana, seguía manteniéndose una cultura vernácula (tradicional), de origen hispanoamericano, enfrentada a una cultura modernista que poco hacía para comprender la situación del interior. Por lo tanto, se acrecentaban las desigualdades en el país y, con ellas, serios problemas de integración real que originaban inconvenientes a medida que avanzaba el siglo XX. Por ejemplo, en los centros urbanos, el expulsado del ambiente rural, se integraba al sector marginado con problemas sanitarios, de vivienda, de educación.

El proceso de urbanización y transformación, en la población social y cultural, y los cambios políticos influyeron en la tensión surgida en el seno de las universidades. Se produjo, así, una oposición a la enseñanza tradicional identificada con los males de la estructura política imperante hasta el 1916. En este contexto se originaron, en noviembre de 1917, movimientos en Córdoba a favor de la reforma universitaria, buscando su autonomía, un gobierno tripartita, libertad de cátedra, extensión universitaria y otros tantos requerimientos. Estos reclamos fueron conseguidos.

Asimismo, a comienzos del siglo XX, en medios académicos se comenzó a vislumbrar ciertas reacciones al positivismo dominante. Se iniciaron críticas y se proponía la superación de esa corriente a través del renacimiento del tomismo, de ideas neokantianas, neohegelianas y bergsonianas. Se trata de corrientes idealistas y espiritualistas en general donde predominan preocupaciones por la universalidad, la ética y el ideal social. Se trata, entonces, de elaboraciones que permiten construir una sociedad humana y libre, donde se desarrolle una investigación en torno a la problemática de los valores, ubicando al hombre en el mundo y entendiéndolo como una totalidad.

Segunda parte

**Estructura socio-económica argentina**

Los grados de relación y hasta dependencia que se establezcan entre las variables económicas y el resto de las variables sociales están supeditados a la posición teórica asumida. Sin adentrarnos en una polémica que excede los objetivos de este libro, comenzaremos este capítulo presentando dos grandes modelos teóricos, desde cuya perspectiva se ha analizado la historia económica: la teoría del desarrollo y la teoría de la dependencia.

Luego nos dedicaremos a estudiar el impacto que las políticas económicas han ejercido sobre la configuración del mapa regional de la Argentina. Por último, recurriremos a una periodización de nuestra historia que nos permitirá hacer un análisis comparativo y relevar el comportamiento de las variables económicas en cada período.

### 1. Desarrollo y dependencia

A partir de una reconstrucción de la tipología "comunidad-sociedad", se generalizó una perspectiva de análisis de la economía latinoamericana asentada sobre un modelo de desarrollo. Se suponía que las sociedades latinoamericanas estaban viviendo un proceso de transición que las ubicaba en algún incierto lugar entre las comunidades y las sociedades. A su vez, se veían distintos grados de aproximación a los tipos "comunidad" y "sociedad" en diferentes regiones o sectores del país. El desarrollo no se medía meramente en clave de crecimiento económico, sino también sobre la base de otros indicadores como educación, salud, urbanización y distribución del ingreso.

Germani tipificó a la Argentina en transición, con un modelo teórico que excedía ampliamente el plano económico. Decía Germani en la década de 1960: "Nuestra época es esencialmente una época de transición". La típica de la transición, la coexistencia de formas sociales que pertenecen a diferentes épocas, imprime un carácter particularmente conflictivo al proceso que es inevitablemente vivido como crisis, pues implica una continua ruptura con el pasado, un desgarramiento que no sólo tiende a dividir a personas

y grupos, sino que penetra en la conciencia individual, en la que también llegan a coexistir actitudes, ideas, valores, pertenecientes a diferentes etapas de la transición" (Germani, 1965: 69-70).

Conviven pues comunidad y sociedad en una lucha cuyo objetivo es el desplazamiento de una de ellas. Si finalmente logran imponerse los novedosos elementos modernos por sobre los residuos tradicionales, tendremos una sociedad moderna. De acuerdo con el modelo desarrollista, hay pasos que deben seguirse para que las comunidades se modernicen o, en otras palabras, el desarrollo industrial que se espera debe cumplir con ciertas etapas. Aplicando el modelo de Rostow, aunque variando el número de etapas, Guido Di Tella y Manuel Zymelman (1985) establecieron seis etapas de desarrollo económico en la Argentina:

- 1) *Tradicional*: hasta 1853.
- 2) *Transición*: 1853-1880.
- 3) *Preacondicionamiento*: 1880-1914.
- 4) *Gran demora*: 1914-1933.
- 5) *"Take-off"*: 1933-1952.
- 6) *Reajuste*: 1952-...

La etapa tradicional está caracterizada por el ensimismamiento de la economía, que trae aparejada la ausencia de crecimiento. Los saladeros fueron la más importante innovación desde la independencia nacional; su instalación dio origen a un proceso de apropiación de la tierra y el ganado, que habían cobrado mayor valor gracias a aquellos. Pero no hubo un sistema de distribución de la tierra que impidiera la formación de latifundios ni un proyecto que integrara a la Argentina en el mercado mundial.

La transición, iniciada con la Constitución de 1853 y finalizada en 1880, está caracterizada por una apertura del país hacia el mercado internacional. Ya hemos visto que las ideas liberales prendieron con fuerza en el territorio argentino, y el proyecto nacional consensuado por la élite tradicional implicaba la pacificación del país para atraer a aquellos inmigrantes y capitales que darían pie al desarrollo económico que se juzgaba necesario. "Durante ese período hubo un conflicto permanente entre el sector de la clase media —opuesta al comercio libre, que significaría la ruina de la pequeña industria local, y al propósito de traer al país campesinos europeos dándoles tierras en términos convenientes— y el grupo latifundista, que estaba a favor del comercio libre y de la inmigración de campesinos asalariados. Este último grupo fue el que influyó en el pasaje de la

lev de colonización en 1876, que puso fin a las esperanzas de una colonización de clase media en el campo" (Di Tella y Zymelman, 1985: 24-25).

A partir de 1880 comenzó la etapa del preacondicionamiento, que no implica una ruptura con la etapa anterior, sino su continuación. Los resultados del proyecto nacional pergeñado por la generación del 37, e intensificado por la del 80, no tardaron en hacerse sentir. La población se incrementó rápidamente por medio de los flujos migratorios provenientes de Europa, la exportación de carne y cereales crecía año a año, la red ferroviaria se extendía permitiendo incorporar nuevos territorios a la producción agropecuoganadera.

En el período 1880-1914 se registró un gran crecimiento económico dentro de un modelo agroexportador, que insertó a la Argentina en el mercado mundial a partir de la exportación de carne y granos y la importación de bienes manufacturados. Para el momento en que estalló la Primera Guerra Mundial la expansión agrícola-ganadera había tocado su techo, y la contienda mundial era un buen marco para dar comienzo a un proceso industrializador tendiente a sustituir los productos manufacturados importados por productos nacionales.

Sin embargo, no es ese el rumbo que la economía argentina emprendió en 1914. Al período que se inició ese año y se extendió hasta 1933 se lo denomina la "gran demora" porque no se produjo el despegue que el modelo desarrollista supone que sigue a la etapa de preacondicionamiento. Si bien los términos del intercambio habían variado en desmedro de países como la Argentina, los productores agropecuarios no desviaron sus ganancias hacia la inversión industrial, sino que permanecieron expectantes con la esperanza de que la situación de bonanza volviera. El gobierno radical no emprendió una política industrializadora y, en consecuencia, quedó ligado a los intereses de los pequeños y medianos productores rurales. Las inversiones que el proceso de industrialización requería no fueron auspiciadas por el Estado. "La gran demora se caracteriza por una contracción de la tasa de crecimiento de la inversión, particularmente de la inversión extranjera y una disminución en la evolución de la posición relativa entre la agricultura y la industria" (Di Tella y Zymelman, 1985: 27). Tomando un lapso de quince años en cada caso, veremos que la inversión bruta, que se había incrementado un 200 % en los años del preacondicionamiento, aumentó sólo un 31 % en igual lapso durante la gran demora, y llegó al 85 % durante el *take-off*, siempre tomando como base períodos de quince años.

La etapa del *take-off* está caracterizada por un proceso de industrialización que convirtió a la industria en el sector más importante de la economía. En la Argentina esta etapa comenzó en 1933. Debido a la crisis mundial con la que se inició la década, el deterioro de los términos del intercambio y la falta de divisas extranjeras, la situación del país se tornó crítica. Esta crisis permitió que la industria despegara porque al deteriorarse los términos de intercambio, se reasignaron recursos provenientes del sector agropecuario al industrial, a la vez que la escasez de divisas generó un proceso de protección a la industria con vistas a abastecer de bienes manufacturados al mercado interno. El modelo industrializador implementado por el gobierno conservador es el de industrialización por sustitución de importaciones. Ya vemos en otro capítulo que esta industrialización se llevó a cabo merced a una alianza entre los terratenientes y los industriales, y que en el mediano plazo, ocasionaría cambios importantes en la estructura política del país.

La Segunda Guerra Mundial significó un nuevo espaldarazo para la industrialización, ya que se hizo preciso sustituir los bienes que no podían importarse de los países en conflicto. La balanza de pagos, con la necesidad de disminuir de las importaciones, dejó un importante país como el nuestro y la guerra. El gobierno peronista vio en la industrialización una estrategia que permitía no sólo el crecimiento económico sino también el reposicionamiento de la Argentina en el mundo, dentro de una línea de pensamiento nacionalista en boga en aquella época. El aumento del ingreso de los sectores obreros generó un aumento del consumo, beneficioso para la industria local. Pero el desarrollo del sector industrial de bienes de consumo no generó un desarrollo del sector de bienes de capital, lo cual en definitiva dejó al país en una situación de suma vulnerabilidad en el plano internacional. A su vez, no se hicieron inversiones en comunicaciones y servicios, sectores que fueron envejeciendo y dificultando un desarrollo económico sincrónico.

Di Tella y Zymelman, en un trabajo que ya es material historiográfico, ubican en 1952 el fin del período de *take-off* y el comienzo de una etapa de reajuste, cuyo desarrollo tiene lugar mientras escriben. Lo cierto es que alrededor de la década de 1950 se produjeron desajustes importantes dentro de los distintos sectores de la economía. El sector industrial creció en forma despareja y el sector primario fue descuidado. Respecto de los años que siguieron, nos referiremos en breve. Pero valga lo dicho para dejar testimonio de la aplicación de la teoría del desarrollo al caso argentino.

Esta teoría del desarrollo fue severamente criticada desde diversos ángulos. Así lo señala Fernando Cardoso: "Es sabido que, en su versión más

aspectiva, la teoría del desarrollo tomó como paradigma de explicación el canon estructural funcionalista. Percibidas e identificadas tipológicamente las diferencias entre la situación de subdesarrollo y los polos de referencia por los países desarrollados, se ha constituido un 'continuo', que pasa a servir de patrón de medida" (Cardoso, 1970: 19).

Cardoso y Faletto formularían una crítica profunda a esta teoría del desarrollo, a partir de la teoría de la dependencia. Esta última resalta los aspectos políticos e internacionales por encima de los económicos internos que daban base a la teoría del desarrollo. Así lo señala Cardoso: "el análisis de la dependencia no sustituye a la teoría del desarrollo, aunque indudablemente pueda encontrar nuevas significaciones en algunos de sus resultados. Sería mejor decir que la limita y le da sentido preciso, cuando muestra que el núcleo de la problemática de los países dependientes sólo se determina cuando se comprende la oposición y la dialéctica entre formas de dominación y formas de producción, entre política y economía" (Cardoso y Faletto, 1970: 28).

La teoría de la dependencia parte del supuesto de que no pueden entenderse las políticas ni la economía de un país sin tener en cuenta las políticas y la economía internacionales. En la clásica formulación de Cardoso y Faletto, la teoría establece que un sistema es dependiente cuando la acumulación y la expansión del capital no encuentran su dinámica esencial dentro del mismo sistema. Sin dejar de tener en cuenta las bases económicas de la decisión política, la teoría de la dependencia nos advertirá que los factores externos son de vital importancia en los países dependientes de los países centrales. La relación entre las elites locales y las extranjeras (gubernamentales y económicas) es así tan importante como el estudio de la estructura de clases sociales a la hora de analizar las políticas públicas.

## 2. El origen de las asimetrías regionales

Si hablamos del desarrollo económico argentino, parece evidente que tal desarrollo no ha tenido el mismo impacto sobre todas las regiones del país. Así lo expresaba Alejandro Bunge en 1940: "En la Argentina el progreso material y el desarrollo han sido tan vertiginosos en los últimos ochenta años que han originado situaciones de luz y de sombra y grandes contrastes entre unas cosas y otras. Así, con el consorcio de una política económica que favorecía al litoral en detrimento de otras regiones del país, se empobrecieron algunas provincias, mientras otras alcanzaron gran población y prosperidad, pudiendo hablar realmente de provincias pobres con las cuales el litoral está en deuda. Así, simultánea con una de las mejores y más abundantes

alimentaciones del mundo, salvo penosas situaciones a combatir, está una vivienda obrera calamitosa. Así, junto a palacios públicos están otros edificios inadecuados y pobrísimos; cerca de una carretera de cemento, otra intrasitable la mitad del año por abandono de los malos pasos. Así, junto a una efectiva libertad y a posibilidades amplias para muchos, está el paludismo del norte o la insuficiencia de hospitales y nosocomios o la escasez de oportunidades para la educación vocacional" (Bunge, 1984: 20-21).

Para entender el origen de las asimetrías actuales hay que hacer una breve genealogía de ellas. Ya en el siglo XVIII el Interior tenía una economía más diversificada que la región pampeana, y necesitaba una política económica proteccionista que le permitiera defenderse de la competencia que presentaban las importaciones de productos manufacturados. La región pampeana, en cambio, se mostraba favorable a una política librecambista que le permitiera obtener a más bajo precio los productos manufacturados, y no le pusiera trabas a la exportación de sus propios productos.

La ciudad de Buenos Aires discrepaba con el resto del país sobre la libre navegación de los ríos, el puerto único y las rentas provenientes de la aduana. El puerto único convenía especialmente a quienes prestaban dinero al Estado con la garantía de los ingresos aduaneros y a los comerciantes ingleses. La clausura de los puertos del Interior y la prohibición de que los ríos interiores fueran libremente navegados por buques extranjeros dio una preeminencia a la ciudad de Buenos Aires que se consolidaría con la riqueza proveniente de su aduana y la expansión ganadera.

Digamos entonces que cuando se da la consolidación de la organización nacional, existen dos regiones bien diferenciadas: el Litoral y el Interior. El primero se estructura alrededor del puerto porteño. El cuero, el sebo y la carne salada se exportan básicamente a Inglaterra y el comercio porteño es manejado por comerciantes ingleses. La economía argentina tiene una inserción débil en el mundo y depende básicamente de variables internas. Las importaciones recibían el mayor peso de los gravámenes, con lo cual los terratenientes resultaban ileso del poder del Estado mientras que el consumo quedaba muy afectado. Demás está decir que el Interior sufrirá un severo menoscabo con la incorporación a este nuevo esquema económico.

Los terratenientes que ganan cada vez mayor peso provenían de familias comerciantes que vieron en la propiedad de la tierra una alternativa para conservar su posición social en el momento en que el comercio empezaba a quedar en manos extranjeras y despegaba la expansión de la ganadería. Son las familias comerciantes con mejor inserción las que aprovecharán el re-

parto de tierra que se genera en la etapa de control territorial. Son pues una burguesía comerciante que paulatinamente va a ir adquiriendo los privilegios y las actitudes de un estamento.

Esta diferenciación entre Interior y Litoral se complejizará a medida que la organización nacional vaya incorporando territorios a los que dedicará un dispar interés. Al analizar la organización de la sociedad nacional argentina, Agulla crea una teoría que diferencia cuatro regiones: pampeana, andina, chaqueña y patagónica. El proceso de integración nacional marcha paralelo a un proceso de diferenciación regional en el cual la región pampeana es la región prevalente, la andina es residual y las chaqueña y patagónica son incipientes o emergentes.

La región pampeana comienza su expansión que la convertirá en la región prevaletente a partir de la sanción de la Constitución Nacional aunque, como ya hemos visto, el nuevo modelo liberal se monta sobre la base de una diferenciación preexistente entre Interior y Buenos Aires. El desarrollo de la región pampeana seguirá el derrotero de la expansión desde el puerto hasta ese desierto que será conquistado y convertido en tierra para la ganadería y la agricultura. La inmigración que llega de ultramar se asienta fundamentalmente en esa región que, a lo largo de un trabajoso proceso de integración, alcanzará un grado de homogeneidad bastante alto. Se llegará al techo de este proceso expansivo en la década de 1930, cuando el país da por finalizado su modelo primario-exportador basado en la región pampeana, para pasara a la implementación de un proceso de industrialización por sustitución de importaciones.

Sin embargo, a la región pampeana le iba a tocar también desempeñar un papel importante en este proceso. Ya que gran parte de las industrias se instalarían en los alrededores de sus grandes ciudades: Buenos Aires y Rosario. Como sostiene Agulla, "el proceso de industrialización se concentra en la región pampeana porque en ella se daba la infraestructura adecuada (agua, energía, comunicaciones), porque en ella estaba asentada la industria tradicional vinculada a la producción agropecuaria (saladeros, frigoríficos, textiles, industriales, industrias oleaginosas, molinos, etcétera) y porque allí residía la mayor concentración de población, que, ante el estancamiento de la producción agropecuaria, estaba disponible para participar en este sector de la producción" (Agulla, 1991: 178/179).

La región andina fue la región preponderante del territorio que hoy conforma el país durante la época de la conquista y la colonización. Su ubicación la ligaba al resto de la América hispana y su crecimiento demográfico

no sufrió el impacto de la inmigración masiva, con excepción de la región cuyana. El carácter residual de la región está relacionado con un proyecto nacional hecho a la medida de la región pampeana, que no le asigna a las restantes una función determinada. Se trataba de una región con un alto grado de homogeneidad: "A la homogeneidad de su población y de su tradición histórica, se agrega la homogeneidad de su vida social, económica y cultural: las comunidades territoriales. La vida social de esta región gira alrededor de sus ciudades y de sus poblados. La explotación de la tierra, organizada todavía bajo la forma de 'estancias' (quizás como un resabio de las viejas encomendas), tiene un bajo porcentaje de población, tanto en números absolutos como en números relativos. Salvo unas pocas ciudades, la vida social se desarrolla en las pequeñas ciudades (normalmente capitales de provincia) y en los pueblos. Se trata de una vida social comunitaria con todas sus características" (Aguila, 1991: 181). La economía de la región era de subsistencia y gran parte de la población residía en el campo o en pequeños poblados.

Cuando el proyecto liberal se da por terminado, se implementan políticas públicas tendientes a dar una función a la región andina. Es así que varias de las provincias de la región tienen un desarrollo industrial ligado a sus productos básicos. Son casos particulares los de Tucumán, Mendoza y Córdoba. Con respecto a las dos primeras —y, en alguna medida, San Juan— la industrialización de sus producciones fueron objeto de las únicas políticas proteccionistas que el país implementó en su largo periodo de furores librecambismo. La vid y la caña de azúcar tuvieron así un trato preferencial en la economía argentina, que permitió un desarrollo de la industrialización de estos productos primarios. El caso de Córdoba también es particular, por cuanto si bien hasta el siglo XX fue la principal ciudad de la región andina —hasta recordar la caracterización que Sarmiento hace de ella—, se incorporará luego a la región pampeana, no quedando dudas sobre su pertenencia en estos tiempos.

La región chaqueña tiene un alto índice de población rural, muy ligada a la producción agrícola-forestal. Si bien algunas de sus provincias tienen una larga tradición, la integración de esta región al país se da básicamente a partir de la implementación del proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Tal incorporación no le confería, sin embargo, más que una función marginal a la región, poco acorde con sus potencialidades. Dice Aguila, con respecto al futuro de esta región: "La incentivación del proceso va a depender de la asignación de una función específica a esta región en una futura política nacional que permita que la misma contribuya con sus potencialidades subtropicales para una realización total del país y para una integración a la región latinoamericana" (Aguila, 1991: 185). Esta hipótesis

se ha visto confirmada por la puesta en marcha del Mercosur, que de hecho ha abierto muchas posibilidades para la región.

La región patagónica es la que más tardamente se incorporó a la economía argentina. Su clima y su carácter desértico hicieron que salvo algunas excepciones —como la de los galeses dedicados a la cría de ovejas—, no sufiera el impacto de las migraciones externas o internas hasta mediados de este siglo. Se había avizorado la importancia de la región por primera vez a principios de siglo, con el descubrimiento de petróleo en su suelo. El petróleo, junto con la explotación minera, dieron alguna vitalidad a la zona. La explotación de los bosques también tuvo importancia, este trabajo atrajo un número considerable de mano de obra chilena. Más allá de estas actividades, la región recién comienza a atraer la atención del resto del país hacia la década de 1940. Sin embargo, su desarrollo ha sido muy disparate y después de absorber un alto grado de migraciones internas y externas provenientes de países limítrofes, se encuentra sufriendo un proceso de deterioro. Su principal potencialidad está probablemente en el mar, que no ha recibido la apropiada atención hasta el momento.

### 3. La economía en el tiempo

Efectuaremos aquí una periodización de la historia económica argentina desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. El corte que daremos a los periodos es arbitrario. Los dos primeros (1860-1930 y 1930-1945) responden a sucesos históricos que marcaron quiebres en el desarrollo de la economía argentina. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial, ya no resulta tan fácil demarcar periodos de acuerdo con acontecimientos históricos. Por eso hemos elegido efectuar periodizaciones de quince años, desde luego es esta una decisión sumamente arbitraria, puesto que el único dato en común que presta alguna homogeneidad a las unidades es su duración en el tiempo.

#### 3.1. Periodo 1860-1930

El proyecto liberal, gestado e implementado por las generaciones del 37 y el 80, incorporó a Argentina al comercio mundial dándole el papel de una economía exportadora de productos agropecuarios e importadora de productos industrializados. Los indicadores económicos marcan claramente el éxito de este modelo, que habrá llegado a un techo y comenzará su declive con la crisis mundial del 30. A partir de ese momento, la economía mundial

se reestructura y la Argentina ya no volverá a encontrar un lugar entre los países más exitosos del mundo en materia económica.

Hacia 1890 el perfeccionamiento de las cámaras frigoríficas había permitido que la carne argentina llegara al mercado europeo. El ganado vacuno desplazaba al lanar en esta época. La exportación requería una mejora de la calidad de la carne y es así que este cambio encadenó una serie de modificaciones en la producción ganadera. La actividad cerealera también va a tener una expansión importantísima durante este período. El aumento de las exportaciones que constituyó la base del éxito económico del período fue, sin embargo, letal para las manufacturas del Interior del país. Las dos únicas excepciones fueron, como ya hemos visto, la caña de azúcar tucumana y las vides mendocinas, que siguieron abasteciendo el mercado interno de azúcar y vino. En ambos casos, pero especialmente en el tucumano, esa supervivencia se dio merced a una acción proteccionista específica de parte del Estado.

El crecimiento que experimentó el país en el período 1860-1930 se basó en un proyecto político coherente y bien integrado que asignaba un rol fundamental a la región pampeana. Se conquistaron las tierras que permitieron expandir la ganadería y la agricultura, se fomentó la inmigración de la mano de obra necesaria, se montó la infraestructura en comunicaciones con vistas al transporte de los productos. Pese a los cambios que se produjeron en momentos claves, como la crisis del 90 o el recambio de la élite dirigente posibilitado por la ley Sáenz Peña, la economía no dejó de crecer. Por otra parte, si bien hubo gran cantidad de conflictos en torno al poder, los diversos sectores compartían la adhesión al modelo primario-exportador. Se podía discutir la redistribución del ingreso o cuestiones sociales variadas, pero había un implícito consenso sobre el papel que la Argentina estaba llamada a desempeñar en el mundo.

El proceso de industrialización llevado a cabo en los países centrales había generado un gran movimiento migratorio interno, con un desplazamiento de grandes masas desde el campo hacia la ciudad. Esto generó un aumento de la demanda de alimentos, y también las industrias requerían cada vez más materia prima. Así se organizó una red de comercio por la cual estos países centrales compraban a países como la Argentina productos primarios, y les vendían sus excedentes de productos manufacturados. Los países centrales también enviaban hacia esos lugares sus excedentes demográficos —provenientes básicamente de las zonas rurales— e investían allí sus excedentes de capital.

Las exportaciones argentinas fueron de productos primarios agropecuarios y algunos industrializados, pero siempre de origen agropecuario. La agricultura siguió un patrón extensivo, en el cual la productividad estaba ligada a la extensión de tierra cultivada y no a la tecnificación. Se importaban bienes de capital y manufacturas. La construcción de ferrocarriles, como las industrias transformadoras de bienes primarios —fundamentalmente frigoríficos y molinos— se abastecían con bienes de capital, tecnología e insumos importados. Con este patrón, era lógico que la mayor cantidad de ganancias fuera al exterior en concepto de pago de deuda, o bien de utilidades por las inversiones de capital. El sector exportador, controlado por intereses extranjeros, era el que mayor ganancias arrojaba.

Los inmigrantes se encontraron con una política restrictiva en la entrega de aquellas tierras escases de las que habían sido desalojados los indios, lo que dificultó su radicación en las zonas rurales. Se asentaron entonces preferentemente en los centros urbanos o cerca de ellos. En lugar de aquellos *farmers* con los que soñaba Sarmiento, los latifundios aumentaron, manteniéndose así la estructura social previa a la conquista de los nuevos territorios. Consecuentemente, los terratenientes se consolidaron como una élite, controlando la política durante todo este período. La explotación quedaba en manos de arrendatarios o medieros. Ya veremos luego que aún la incorporación posterior de las clases medias a la política se hará bajo el control de esta élite en el poder.

Este diseño económico dejó a la Argentina en una posición de clara dependencia frente a la potencia económica de la época, Gran Bretaña. Ese era el destino de la mayor parte de las exportaciones argentinas y, a su vez, fue la principal fuente de financiamiento externo y de inversiones directas. Las inversiones británicas tuvieron como destino básicamente la construcción de la infraestructura de transporte que beneficiara el comercio preexistente, y también la financiación del Estado. Para probarlo basta ver la importancia de los capitales ingleses en áreas claves como los frigoríficos y los ferrocarriles. Así como el socio principal de la Argentina en el exterior era Gran Bretaña, el mismo país invirtió aquí parte de sus excedentes de capital generados por un proceso de industrialización temprano. Una buena muestra de la dependencia con respecto a Gran Bretaña se puede encontrar en la extrema sensibilidad que muestra la economía argentina ante las crisis de 1857, 1874 y 1890.

La política libre-cambista evidentemente no permitía la generación de un proceso industrializador. Mientras que muchos países adoptaban medidas proteccionistas tendientes a fomentar un desarrollo industrial, la Argentina se



aferro a un modelo que le venía dando buenos resultados. Salvo casos aislados, como los de Vicente Fidel López y Carlos Pellegrini, no se encuentran en este período voces que defendan la necesidad de fomentar un proceso de industrialización. Esta es una situación que difiere de la existente en otros países que en esta etapa comparten los exitosos indicadores de la Argentina pero que después del 30 lograrán mantenerse allí y seguir creciendo.

En definitiva, el librecambismo y la falta de una política crediticia atentaron contra el desarrollo manufacturero. La Guerra Mundial fue una oportunidad para que se diera un proceso de industrialización tendiente a sustituir las importaciones, pero el conflicto encontró a las manufacturas en una situación de suma debilidad y dependencia de las industrias extranjeras para su producción. Por eso la Guerra solo trajo recesión.<sup>2</sup> La Guerra Mundial, aunque creó las condiciones favorables para un cierto desarrollo industrial que sustituyera las importaciones, no pudo ser aprovechada, pues la industria local tenía una organización muy débil y no pudo superar los primeros problemas de abastecimiento. El período de la Guerra fue de recesión y la industria solo comenzó a recuperarse hacia 1919" (Rofman y Romero, 1973: 133).

El ingreso estaba concentrado en pocas manos, pero por otro lado no existían problemas de desempleo y, con una economía en crecimiento, los inmigrantes dispuestos a trabajar duro encontraban intersticios por donde ascender económicamente. Dice Aldo Ferrer sobre este período: "La fuerza de trabajo incorporaba prácticamente a toda la población en edad activa y el desempleo reflejaba esencialmente oscilaciones de la coyuntura. No existió en el período desempleo estructural de largo plazo ni fracturas fundamentales entre un enclave dinámico asociado con el comercio internacional y el resto de la economía y la sociedad. De hecho, el liderazgo de las exportaciones se derramó sobre la mayor parte del sistema económico y social. El ingreso estaba fuertemente concentrado en los grandes propietarios territoriales y en los sectores vinculados con la red de infraestructura, comercial y financiera, asociada con la producción primaria exportadora, el comercio internacional y los segmentos de la demanda interna abastecida por la producción doméstica" (Ferrer, 1997: 61).

Durante estos años, la tasa de crecimiento promedio fue del cinco por ciento anual. La población argentina pasó de 1.800.000 a 12.000.000 de habitantes. En casi toda la etapa los precios se mantuvieron estables y el tipo de cambio también. El balance de pagos fue sostenido. La inmigración causó un revuelo en la estructura demográfica a la vez que varió sensiblemente la distribución de la población entre el campo y la ciudad. El censo de 1869 indica que el 29 % de la población era urbana y el 71 % rural. El censo

de 1895 encuentra un 37 % de población urbana y un 63 % rural. El censo de 1914 indica un 53 % de población urbana y un 47 % de población rural. El porcentaje de población rural decreció así en estos años del 71 % al 47 %. Estos números serían lógicos dentro de un proceso de industrialización, pero como ya hemos visto no era esto lo que estaba sucediendo en la Argentina de esa etapa.

Como ya dijimos, este modelo fue implementado y continuado por la élite tradicional que ejerció el poder hasta 1916. Pero el modelo no sufrió cambios importantes con la llegada al poder de un partido moderno representativo al primario exportador. Así lo señalan Rofman y Romero: "... pese a su carácter marcadamente popular y a su prédica antiliberal, el radicalismo no se propuso nunca, ni en la práctica política, ni siquiera en su programa, modificar los parámetros fundamentales de la Argentina exportadora. Su acción de gobierno respetó los intereses agropecuarios; no se modificó el latifundio ni se debilitó el poder de los frigoríficos; tampoco hubo tipo alguno de política de promoción industrial, pese a que la Guerra Mundial creó condiciones reales objetivas que fueron desaprovechadas. En algunos aspectos secundarios, como la posición internacional ante la guerra o el avance norteamericano, y también en materia universitaria, pudo el gobierno radical adoptar posiciones progresistas, mientras que los tibios intentos de nacionalismo económico, fallos de proyecciones reales, fueron fácilmente frenados por los grupos tradicionales, que conservaban buena parte del poder efectivo" (Rofman y Romero, 1973: 116).

### 3.2. Período 1930-1945

La crisis del 30 trajo aparejada una disminución de la demanda de bienes primarios de parte de los países centrales al tiempo que disminuyeron los precios de los mismos. Se inicia así el deterioro de los términos del intercambio que haría que la Argentina no volviera ya a ocupar la posición que logró hasta esos años en la economía mundial. Pasados los primeros efectos de la crisis, la Argentina se vería en desventaja porque los países centrales implementaron distintas medidas de protección hacia sus industrias, y los Estados Unidos y otros productores comenzaron a competir por el abastecimiento del mercado mundial.

Alejandro Bunge decía en 1940: "La crisis mundial de 1929 no produjo otro efecto en la Argentina que precipitar el hecho de la detención del crecimiento de las exportaciones y sus consecuencias para el desarrollo del

503,5

20

pais. La misma brusquedad de la contracción del comercio mundial nos trajo el remedio. Ha podido el pais consagrarse a conquistar su propio mercado interno hasta entonces rumbosamente abastecido con todo género de importaciones, algunas tan extravagantes como alimentos. La producción se hace cada vez más diversa y ofrece mejor ambiente a la granja. El vigoroso desarrollo de la manufactura aborgino no solamente a la población de socupada de 1931, sino también el aumento natural de la población en edad de trabajar, de los años 1931 a 1939. Así se evitó una crisis que hubo de ser catastrófica, quizás con 500 a 600.000 desocupados. Ese número encontró trabajo adicional en la agricultura y el comercio sólo por excepción, la mayoría ha ido a engrosar las filas de la manufactura en desarrollo y de los artesanos" (Bunge, 1984: 362). Prescribiendo remedios viejos para nuevos males, Bunge propone la reestructuración del sector agropecuario bajo un nuevo sistema de explotación de la tierra. Pero la crisis del 30 marcaba el fin de un modelo en un sentido más profundo del que parece avizorar Bunge.

En definitiva, la crisis del 30 dejó al desnudo la vulnerabilidad de la economía argentina. Bajaron los precios de sus productos en el mercado mundial mientras que la economía dependía de capitales, materia prima, ciencia y tecnología que importaba de los países centrales. El remedio a aplicar era la industrialización por sustitución de importaciones: "La respuesta ante la posición desventajosa de la Argentina en el mercado internacional, suscitó una reforma del Estado liberal clásico, fenómeno generalizado en muchos países con el fin de la adopción de medidas intervencionistas y reguladoras, en ámbitos de la economía, que condujeron a la implantación de un proyecto de industrialización propiciado por el Estado, en la iniciativa del ministro Federico Pinedo, en 1935. Aquí conviene develar un mito. El proceso de industrialización reciente no empezó con el peronismo, empezó con el gobierno conservador del período que va de 1930 a 1943, y el ministro Pinedo fue el primero que puso las bases de ese proyecto de industrialización por sustitución de importaciones como respuesta anticipada, y yo diría precursora, a lo que pudiera ocurrir después, como ocurrió, que era prevenir la imposibilidad de un desenlace bélico mundial, como fue el de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en respuesta a esas transformaciones que iban a venir y que iban a taponar las posibilidades del país, se suscita aquí este proyecto de industrialización por sustitución de importaciones en que se redefinen los términos de la economía argentina, pero desde 1935. En 1943, la revolución militar trae su proyecto industrial belicista engramado con los sucesos de la guerra mundial" (Rodríguez Bustamante, 1986: 138-139).

Habiendo perdido los productos primarios su anterior situación en el mercado, la inversión internacional se retrae, y los países centrales emplean a aplicar fuertes barreras proteccionistas. Esto dio origen a un lento cambio en la Argentina, tendiente a sustituir los productos importados para el consumo interno por otros producidos en el país. Este proceso de sustitución de importaciones tiene dos etapas: la primera que va desde 1930 hasta 1943 y, la segunda, desde 1943 hasta el fin del peronismo. Ya en 1931 Raúl Prebisch había propuesto un plan de protección aduanera y promoción industrial. Entre 1931 y 1940 se toman medidas de protección industrial combinadas con un estímulo a la construcción y a las obras públicas, con las que se buscaba reactivar el mercado interior.

La crisis de 1929-1930 marca pues el fin de una etapa para la Argentina y el comienzo de otra que tendrá un rumbo más errático que la anterior, y no logrará ya el consenso de la élite política sobre su conveniencia. El Estado asumirá desde este momento un perfil mucho más intervencionista, acorde con los nuevos aires que soplaban en el mundo. Así lo señala Aldo Ferrer: "Los cambios producidos en la asignación de recursos, el proceso de crecimiento y el comercio internacional, marcarían el inicio de una nueva etapa del desarrollo argentino. La multiplicación de los instrumentos de intervención pública sobre la economía fue una característica del período. Desde la creación de organismos específicos, como la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, para defender los ingresos de los productores agropecuarios, hasta la creación del Banco Central y la reforma tributaria, el régimen conservador fue asumiendo un grado de control sobre el comportamiento de la economía inexistente antes de 1930" (Ferrer, 1989: 18). Se da una cierta autonomía de la política económica originada en el gobierno, que trata de hacer de barrera de contención con respecto a la situación internacional. Al principio, esta industrialización por sustitución de importaciones es liderada por empresas medianas de capital nacional, con un bajo nivel tecnológico. Pero poco a poco se da un aumento del capital internacional en este proceso de industrialización, que hará que las antiguas proveedurías extranjeras instalen aquí sus filiales.

Se puede decir que, en general, las industrias se asociaron a capital internacional. La forma más común que adoptaron fue la de filiales de casas extranjeras. Otras veces grupos internacionales compraron el capital de antiguas fábricas y en casi todos los casos las patentes de los productos que se fabricaban eran extranjeras, por lo cual salía al exterior un flujo considerable de dinero en concepto de regalías. Desde la puesta en funcionamiento del modelo primario-exportador, la Argentina por primera vez intentó a me-

dados de la década de 1930 abastecer la demanda interna de productos con producción nacional. Salvo durante el lapsus de la Primera Guerra Mundial, no había habido otro intento de hacer tal cosa. Comienza así una nueva etapa en el diseño de la estructura productiva del país.

El proceso de sustitución de importaciones que tuvo lugar a partir de 1930, como ya lo veremos más adelante al ocuparnos de la política argentina, no fue llevado a cabo en contra de los sectores tradicionales — invernaderos y sus socios extranjeros — sino que fue conducido por ellos a través de una alianza con los industriales. La industrialización por sustitución de importaciones fue una estrategia típica de países dependientes que condujo a resultados muy diferentes de aquellos obtenidos en países que habían tenido un proceso de industrialización a partir de una revolución industrial.

El radicalismo no tuvo, ni durante el tiempo en que estuvo en el gobierno ni como oposición desde 1930, un proyecto alternativo de industrialización. Nunca pretendió cambiar la estructura productiva del país sino que, al igual que los otros partidos opositores, se propuso proteger los intereses de los sectores rurales menos favorecidos — los criadores — y las emergentes clases medias. Una buena muestra de tal actitud es el rechazo que más tarde presentará el radicalismo en el Parlamento del Plan de Reactivación Industrial propuesto por Pinedo en 1940.

A partir del gobierno de Justo, se puso en marcha un proceso de industrialización por sustitución de importaciones que, si bien parecía muy alejado de la tradición liberal de los gobiernos conservadores, tenía antecedentes en las medidas que otros países de corte liberal habían tomado para superar la crisis. El Estado comenzó a intervenir en materia económica para preservar la estructura social en su totalidad. Con una decreciente demanda externa de productos primarios, el Estado empezó a regular la producción y comercialización de sus productos agrícolas a través de la Junta Nacional de Granos, a la vez que se establecieron precios sostenidos y se limitaron las áreas destinadas a la siembra. Algo parecido se hizo con la carne y la vid, el azúcar y el algodón. "El Estado logró así asegurar la renta agraria para los sectores propietarios a costa de arruinar a innumerable cantidad de pequeños hacendados y de acentuar el proceso de concentración de la propiedad" (Rofman y Romero, 1973: 142). La creación del Banco Central, en 1935, también obedecerá al objetivo de controlar la economía, estabilizando la moneda y evitando las fluctuaciones del peso derivadas de los vaivenes a los que están sujetas las exportaciones.

El Estado aumentó de esta manera su participación en la vida económica, acorde con las políticas anticíclicas keynesianas. En general, esta nueva versión de Estado adquirió cierto grado de autonomía con respecto a los sectores dominantes, pero sin por ello dejar de favorecerlos, acaso de un modo más indirecto. "El Estado asumió la función de arbitraje y regulación de intereses no siempre armónicos, y llegó a adquirir una independencia tal respecto de ellos que pudo defender los objetivos superiores de la clase aun a riesgo de afectarla en sus intereses más inmediatos" (Rofman y Romero, 1973: 143). Como lo establecen muchos de sus más importantes teóricos, el Estado protege los intereses de la clase dominante mejor y más astutamente que ella misma.

El Tratado Roca-Runciman, firmado con Gran Bretaña, aseguró a la Argentina la asignación de una cuota en el mercado de carnes de Inglaterra, a cambio de un trato preferencial para las inversiones británicas en nuestro país. Para Gran Bretaña, el Tratado no imponía grandes cargas y sí un notable beneficio por cuanto la Argentina comprometía las divisas obtenidas de sus exportaciones al mencionado país para pagar las remesas de las empresas, las deudas financieras y las importaciones británicas. Gran Bretaña pretendía a través de sus acuerdos bilaterales con sus socios en el mundo recuperar posiciones con respecto a los cada vez más poderosos Estados Unidos. En el plano interno, el Tratado beneficiaba a los invernaderos, que estaban directamente relacionados con los frigoríficos pues de allí salía el *chilled* (carne enfriada) que tenía un cupo en el mercado inglés. En cambio quedan relegados los intereses de los criadores, absolutamente subordinados una vez más a los invernaderos.

La industrialización por sustitución de importaciones dio como resultado un gran crecimiento de la producción y una rápida acumulación de capital. Eso se hizo en parte a expensas del sector obrero, cuyas demandas fueron sistemáticamente postergadas. Los reclamos de mejoras en los salarios y en las condiciones de trabajo siguieron siendo severamente reprimidos. Esta industrialización produjo un gran movimiento de migración interna; la crisis agrícola expulsó gran cantidad de población, que se concentró en las ciudades para incorporarse al proceso de industrialización. Desde el presente, parece claro que un sector obrero creciente y con demandas postergadas no podría ser contenido por mucho tiempo por un sistema que acumulaba capital merced a esa postergación.

Con un proceso de industrialización limitado ya puesto en marcha, la Segunda Guerra Mundial incentivó aún más la producción interna, pero también le puso límites debido a la dependencia de las todavía incipientes indus-

5035

91

trías con respecto a los insumos y bienes de capital importados. Esta debilidad y la falta de iniciativa pública hicieron que no se formara el capital necesario para promover una industrialización de mayor aliento que diera una cuota más alta de autonomía al país con respecto a los vaivenes de la economía mundial, y reposicionara así a la Argentina en el mundo. Las dos guerras mundiales pueden ser vistas como oportunidades perdidas en el sentido de que no se aprovecharon para dar un salto que permitiera una industrialización más profunda que a la postre redundara en mayor autonomía del Estado y una recuperación del lugar de privilegio que había tenido la Argentina en la economía mundial.

Las variables económicas del período 1930-1945 son resumidas del modo que sigue por Ferrer: "Entre 1930 y 1945 el producto global creció en 35 % y las importaciones cayeron un 60 %. Consecuentemente, el contenido importado de la oferta de bienes y servicios declinó fuertemente. El coeficiente de importaciones cayó del 39 % en 1930, al 15 % en 1939 y al 9 % en 1945. La producción industrial creció el 70 % (3,6 % anual) en el período, y la agropecuaria del 35 % (2 % anual). La industria asumió el liderazgo del proceso de crecimiento. La producción de textiles, alimentos, y de la quiniaca y metalúrgica livianas, registraron las más altas tasas de crecimiento y, hacia 1945, habían casi sustituido totalmente los bienes importados. La industria manufacturera representaba en 1929 el 20 % del producto con un fuerte peso relativo de la transformación de productos primarios para la exportación (frigoríficos, molinos, aceites, etcétera). La participación aumentó al 25 % en 1945 con un peso dominante de las industrias sustitutivas de importaciones. En todo el período se mantuvo un manejo ordenado del sector público y de la oferta monetaria, contribuyendo a transar la puja distributiva dentro de la estabilidad de precios. Sólo hacía fines de la década de 1940 se instalan presiones inflacionarias que estarán presentes desde entonces en la economía argentina" (Ferrer, 1989: 19-20).

Con respecto a las desigualdades preexistentes en la distribución regional del país, hay que decir que la industrialización iniciada en la década de 1930 no cambió sustancialmente la concentración de producción y población en la región pampeana. La cercanía del puerto a través del cual llegaban los equipos y materiales importados para ser utilizados en las industrias marcó la radicación de las industrias en esa región. A su vez, la mano de obra se concentró cada vez más allí, en la región pampeana, y en especial en las grandes ciudades, particularmente en el Gran Buenos Aires. Esta continuidad en el predomnio de la región pampeana con respecto a las demás consolidaba un desequilibrio que se profundizaría con el paso de los años.

### 3.3. Período 1945-1960

La industrialización por sustitución de importaciones se aceleró con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y se mantuvo hasta mediados de la contienda, para continuar con un ritmo más lento hasta 1950. Las dificultades del comercio marítimo hicieron que los países dependientes desarrollaran sus industrias locales en el marco de una situación mundial que sería, por un breve lapso, favorable nuevamente a la exportación de bienes primarios. Si a esta necesidad de bienes primarios de los países en conflicto le sumamos las restricciones que países como el nuestro tenían para importar bienes industrializados de sus proveedores en guerra, nos encontraremos con una situación inédita: de pronto la Argentina pasó a ser acreedora de los países centrales.

Los militares que habían tomado el poder en 1943 eran partidarios de una industrialización de base que diera independencia al país en una posible situación de guerra. Tal hipótesis de conflicto obviamente también mandaba el autabastecimiento del país en materia de alimentos. La seguridad nacional era el objetivo de tal industrialización. Este grupo militar era apoyado, por su posición pro-industrialista, por aquellos industriales que, antes aliados a los terratenientes, habían ganado cierta autonomía con respecto a sus antiguos aliados.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, con un mundo transformado, y superada la etapa de la sustitución de importaciones en lo que hacía a la industria liviana, el modelo aplicado indicaba que había que pasar a la producción de base. Las industrias siderúrgica y petroquímica, así como la fabricación de máquinas y equipos imponían la formación de un capital y de un desarrollo tecnológico que superaban los marcos en los que se había mantenido la sustitución de importaciones implementada durante la década de 1930. La CEPAL, de la mano de su mentor Raúl Prebisch, recomendaba profundizar el proyecto industrializador y sus directivas gozaban de amplio prestigio en la región.

Durante todo el proceso de industrialización, el Estado no hizo grandes inversiones en infraestructura; si bien se nacionalizaron servicios ineficientes, no se hicieron las inversiones que requiera la red de transporte, el suministro de energía y otras áreas vitales para una plena expansión industrial. Se produjo así un notable deterioro de las infraestructuras, que fueron usadas intensivamente sin recibir el apropiado cuidado y renovación, con la sola excepción de la extensión de la red caminera, el resto de la infraestructura

era, a medida que pasaba el tiempo, cada vez menos adecuada para el desarrollo del proceso de industrialización.

El peronismo inaugura pues una nueva etapa dentro del proceso de industrialización, que no implicó una ruptura más que verbal con la llamada "oligarquía". "El movimiento peronista se presentó como una alianza entre los sectores más nuevos y pujantes de la burguesía industrial y la clase obrera, organizada y garantizada por el Estado; merced a ella, la fracción industrialista del ejército, que ocupaba el poder, logró no solo legitimar este sino obtener una base de apoyo para su programa de industrialización. Desde entonces, el Estado actuó con cierta autonomía respecto a los dos sectores. El peronismo procuró armonizar las necesidades del desarrollo del sector más dinámico de la industria con la presión del movimiento obrero, que buscaba una mayor participación en los ingresos. El Estado asumió el papel de árbitro en esa situación que, por definición, habría de ser inestable. Las contradicciones se manifestaron de entrada, y en buena medida fueron canalizadas mediante un enfrentamiento, formal y verbal, con la vieja oligarquía. El verdadero sentido de esta política se advierte al comprobar que nunca hubo intento alguno de afectar seriamente el fundamento del poder de los grandes terratenientes: expropiación de la tierra, etcétera. Por el contrario, los destinatarios de los ataques fueron los sectores subordinados a los terratenientes —ganaderos menores, medianos propietarios, la clase media en general, etcétera—, acentuando la tendencia que ya se había delineado en el período. 1930-43" (Rofman y Romero, 1973: 150).

La política económica inicial del peronismo fue redistribucionista. Aprovechando la reserva de divisas que la guerra había dejado, y a expensas de la transferencia de ingresos desde el sector agrario hacia el industrial, se puso en marcha la política redistributiva del peronismo, muy bienvenida luego de un largo proceso de acumulación de capital sin mejoras para el sector obrero. En líneas generales, se mantuvo una política laboral que protegía la industria, se desarrollaron líneas crediticias y se estableció el control de cambios. Se atendieron así las demandas de mejoras del sector obrero a la par que se logró un aumento de la demanda de productos de consumo. Esta expansión de la demanda interna era fundamental para las industrias que habían surgido o se habían expandido durante la guerra. El principal problema que presentó esta política fue que muchos de esos fondos se dirigieron a sectores improductivos, como ocurrió con la nacionalización de servicios públicos.

El Estado peronista fue árbitro, a la vez que muchas veces actuó directamente como empresario. Nacionalizó los servicios públicos —ferrocarriles, electricidad, gas, teléfonos—, incentivó las empresas estatales y nacio-

nalizó los recursos bancarios. El Estado completaba y coordinaba la acción privada. El movimiento obrero reclamaba básicamente mejoras salariales. El Estado se las dio, pero a cambio fue absorbiendo dicho movimiento, insertándolo en una estructura vertical y burocratizada.

El Estado peronista interviene directamente en materia económica, pero la crisis de 1952 mostrará los problemas de esta intervención, que había arrojado un gran déficit. "El aumento de déficit, la devaluación impulsada por una demanda excesiva respecto de la capacidad de importar y las presiones de costos alentadas por la política redistributiva, sustentaron un crecimiento de los precios que, a partir de 1945, se convierte en un fenómeno crónico de la economía argentina. La 'cultura inflacionaria' emergente de los desequilibrios reales y financieros iniciales se convertiría, a partir de entonces, en un factor siempre presente en la evolución de los precios y la distribución del ingreso" (Ferrer, 1989: 25).

La industrialización no redunda pues en desarrollo tecnológico. Y se usó intensivamente el capital instalado sin producirse las mejoras que el proceso de industrialización requería. Las industrias eran de baja productividad y altos costos, por lo que dependían para subsistir de la protección del Estado. Los grandes establecimientos, que transferían parte de sus recursos al extranjero, se vieron beneficiados por un control monopolístico u oligopólico del mercado. A su amparo y muchas veces proveyéndolas, se ubicaron las empresas más pequeñas.

Las industrias dependían de combustibles, materia prima y bienes intermedios del extranjero. Al principio la sustitución de importaciones, el país ahorraba muchas divisas mediante la sustitución de los bienes de consumo importados. Pero luego se vio que el crecimiento industrial, en lugar de generar una disminución de las importaciones, generaba un aumento de las mismas debido a la necesidad de insumos de las industrias locales. Las exportaciones de bienes primarios no crecían al mismo ritmo y por ende, se producían repetidas crisis de la balanza de pagos. El resultado de tales crisis era la recesión, que traía aparejados caída de la producción y desempleo. Para restablecer el equilibrio de la balanza de pagos se devaluaba, con lo que se lograba un aumento de los precios de los bienes primarios, pero también aumentaban los alimentos y caía el salario real. Los sindicatos presionaban demandando aumentos de precios y los empresarios se los concedían pero aumentando a su vez los precios. La espiral inflacionaria estaba en marcha.

Con esta dinámica, veremos que hasta 1930 el peronismo trató de beneficiar a los trabajadores y a los industriales, aumentando el crédito y el gasto

público. Parte de esto se hizo a través de una transferencia de recursos desde el sector agropecuario, pero no alcanzó y así se generó inflación y desequilibrio en la balanza de pagos. Resultaba imposible importar los bienes de capital necesarios y dar lugar a un proceso de acumulación de capital basándose en las transferencias de recursos desde el sector agropecuario. La demanda interna crecía y no se podía cubrir con la ineficiente industria nacional.

Hasta fines de la década de 1950, el peronismo llevó hasta el límite la sustitución de importaciones impulsada por una expansión de la demanda interna. Entre el 1945 y 1948, la producción y el empleo industrial aumentaron al ritmo del 8 % anual. Desde 1947 el crecimiento industrial tendió a estancarse. Las grandes empresas no reinvertían sus ganancias en el sector industrial. Y las pequeñas y medianas empresas eran cada vez más improductivas por lo cual no tenían mucho que reinvertir; sus costos eran muy altos y su productividad cada vez más baja.

A partir de la crisis suscitada por la sequía de 1951-1952, el gobierno peronista cambió el rumbo. Se trató de sostener los precios de los productos agropecuarios, se vincularon los salarios a la productividad, se abrió el país a los capitales extranjeros, se trató de bajar el gasto público y controlar los créditos al sector privado. La crisis de 1952 dejó a la vista los límites de la industrialización por sustitución de importaciones. La ley de ración de capitales en 1953 marcó el agotamiento de este proceso; el abandono de la posición de enfrentamiento con los Estados Unidos también se hizo sentir con los contratos petroleros.

Veamos en cifras el impacto de la industrialización por sustitución de importaciones que comenzó en 1930 y fue retomada por el peronismo. Hasta la década de 1930, la producción nacional no había superado el 50 % de los bienes consumidos internamente. Salvo durante la Primera Guerra, cuando la producción nacional subió a un 53 %, lo normal en el resto del siglo fue que la producción nacional rondara el 40 %. Durante la década de 1930, la proporción de la producción nacional con respecto a las importaciones aumentó en un 10 %. En la primera mitad de la década de 1940, con la Segunda Guerra Mundial, la producción nacional se ubicó por encima del 80 %, mientras que se importa menos del 20 %.

En síntesis, puede decirse que la industrialización por sustitución de importaciones no alteró la base de la estructura productiva argentina. Sus principales problemas fueron: la escasez de inversiones en bienes de capital (esto generó una industria de baja productividad y altos costos), y la falta de desarrollo de industrias de base que acompañaran el crecimiento en la ne-

cesidad de insumos (esto generó una gran dependencia de las importaciones, en especial por la necesidad de insumos, principalmente de petróleo).

A su vez, la estructura agraria persistía sin grandes reformas; el campo no sufrió el proceso de tecnificación que los nuevos tiempos demandaban. Y aparecieron nuevos competidores de peso para las exportaciones primarias; en especial, Estados Unidos, que por esa época comenzaría a manejar ese mercado. Las disparidades regionales no se atenúan en este período. El desarrollo industrial, como ya vimos, se articuló en torno a los centros urbanos. Las migraciones internas se concentraron en el polo industrial del Gran Buenos Aires y alrededor de otras ciudades.

En 1955, con la Revolución Libertadora, se trató de liberalizar la economía, reducir la intervención del Estado, frenar la inflación, promover las exportaciones y negociar con los acreedores externos. Pese a todo, no se modificó de fondo el proyecto industrialista. La inflación fue llevando las mejoras de sueldos que habían logrado los obreros durante la primera etapa del gobierno peronista, con lo cual se iba a producir un deterioro de las condiciones de vida del sector obrero.

En 1958, el gobierno de Frondizi implementó una política desarrollista a la que los impacientes tiempos políticos no le darán la oportunidad de esperar por sus frutos: "La estrategia desarrollista del período 1958-1962 implantó el proyecto industrialista en un contexto más amplio. Incorporó objetivos explícitos de integración de la estructura productiva y las nuevas oportunidades abiertas en el sistema internacional. El crédito y la inversión privada directa extranjeros fueron utilizados para expandir la oferta de combustibles, desarrollar la infraestructura y expandir la industria de bienes intermedios y el sector automotriz. El desarrollismo siguió enfatizando el papel decisivo del mercado interno y de la sustitución de importaciones como fuentes principales de crecimiento. El manejo de las políticas fiscal, monetaria y de ajuste de los pagos internacionales, incluyendo las relaciones con la comunidad financiera internacional y el FMI, fueron puestas al servicio de los objetivos de fondo de ampliar la formación de capital en la infraestructura y la industria de base. Las turbulencias políticas del período pusieron fin a la experiencia desarrollista al tiempo que la restricción externa volvía a revelar la indispensable necesidad de expandir las exportaciones una vez que el coeficiente de importaciones llegara a un piso mínimo" (Ferrer, 1989: 28).

El capital internacional permitiría desarrollar industrias básicas. En este período la industria automotriz, la petroquímica, la química básica y el sector metalmeccánico lideraron el crecimiento industrial. Estas industrias produ-

cian para el mercado interno y necesitaban más insumos y bienes de capital importados que la industria pesada. Por eso el desequilibrio de divisas tendió a agravarse. A su vez, muchas de estas empresas eran subsidiarias de empresas extranjeras, dependiendo de transferencia tecnológica extranjera.

En el período 1945-1960, el producto global creció el 64 % (3,3 % anual). La industria fue el sector que más creció, con un aumento del 76 % (3,9 % anual). La política de este período se alejó decididamente del librecambismo que había predominado durante largo tiempo en el país. En el mundo ya industrializado se aplicaban políticas keynesianas dando lugar a un tipo de Estado que recién se cuestionaría a partir de la crisis petrolera de 1973. Así, la política económica argentina se inscribía dentro de una tendencia mundial de mayor intervención del Estado, que procuraba una redistribución del ingreso y una política de empleo. En la Argentina el proyecto industrialista se clausurará en 1976, con una restauración ortodoxa que ya tendremos oportunidad de analizar.

### 3.4. Período 1960-1975

Este período comienza en pleno gobierno de Frondizi, al que se incorpora Alvaro Alsogaray en reemplazo de Frigerio al comenzar 1960. Después de una caída de más del 6 % del PBI durante el año anterior y un alza pronunciada de los precios, en 1960 comienza un plan de liberalización de la economía que logrará una recuperación, que duraría hasta fines de 1961. Esa recuperación se logró en gran parte a través del aumento de la importación de bienes de capital y el ingreso de capitales extranjeros, especialmente dirigidos a las áreas de energía e industria. Los sectores medios y obreros fueron los principales afectados por el plan de ajuste. Las empresas multinacionales ocupan un rol cada vez más importante en el sector productivo.

Estas empresas monopolizan u oligopolizan la industria pesada o semipesada, y producen un efecto territorialmente desconcentrador. Dado que estas industrias necesitan de espacio donde arrojar desechos, lugar para sus depósitos y fuentes de energía importantes, muchas de las plantas se ubican fuera del área metropolitana. También hubo políticas de promoción industrial, con diverso grado de éxito, que llevaron a algunas industrias a ubicarse en el interior. No obstante, las casas matrices permanecían en Buenos Aires. Muchas medianas y pequeñas empresas nacionales se convirtieron en proveedoras de multinacionales, que les fijan las pautas de producción y les proveen tecnología. Era común, además, que les vendieran

patentes a sus proveedoras, completando de esa manera la dependencia con respecto a la empresa multinacional que compraba su producción.

En 1962 Frondizi fue obligado a dejar el gobierno. Ese mismo año se devaluó el peso, y quedaron en una situación muy comprometida aquellos empresarios que tenían deudas en el exterior derivadas de la compra de bienes de capital. Muchos de ellos no pudieron afrontar sus deudas y sus empresas terminaron quebrando, profundizando la recesión yá en ciernes. El año 1965 no comenzó con mejores señales, pero con la salida electoral de ese mismo año la situación empezó a mejorar.

El gobierno de Illia decidió implementar una devaluación gradual y acordada, que frenara la fiebre especulativa que había generado el proceso inflacionario de las décadas anteriores. Los sueldos de los empleados públicos —que habían sufrido una pérdida adquisitiva importante— fueron actualizados, el gasto público se incrementó y la oferta monetaria también, pero modestamente. Tanto las exportaciones agropecuarias cuanto la producción industrial aumentaron en 1964 y 1965. "Por diversas razones —los mejores precios relativos a partir de 1956, 1959 y 1963, una mejora en los mercados internacionales y tecnologías que lograron importantes incrementos en los rendimientos— por primera vez, desde la década de 1930, la Argentina logró superar el techo de mil millones de dólares de exportaciones que se mantenía desde antes de los años treinta. Por otra parte, mientras que la expansión previa a la crisis había permitido la renovación de bienes de capital y la modernización de la industria, la crisis hizo desaparecer a las empresas marginales y había dejado un sector más competitivo" (Cortés Conde, 1998: 76).

La experiencia democrática nuevamente será abortada por un golpe militar. El gobierno de Onganía se propuso lograr un acuerdo entre las distintas corporaciones con el objetivo de estabilizar la economía sin caer en recesión. Con el Ministerio de Economía bajo la conducción de Krueger Vasena se logró controlar la inflación. Los salarios fueron congelados y se llegó a un acuerdo con los empresarios sobre los precios. Se devaluó el peso y se quitaron dos ceros. Esta devaluación se compensó con las retenciones aplicadas a las exportaciones, que aumentaron considerablemente la recaudación fiscal. El gasto y la inversión pública aumentaron, financiados en gran parte con endeudamiento contratado en el exterior.

Hacia 1970 el gobierno de Onganía entraba en un período crítico política y económicamente. La inflación volvía a hacerse sentir y pronto se produciría un cambio en la conducción política que fijaría las bases para una nueva

transición hacia la vida democrática. Esta transición, como todos los cambios que estamos analizando, tienen un origen político y no económico, pero de cualquier modo queda claro una vez más que las dificultades económicas se toman difíciles de superar para gobiernos que no cuentan con los necesarios depósitos de legitimidad.

Como resultado de la mencionada transición, el peronismo vuelve al poder. La inflación que no había vuelto a ser controlada después del agotamiento del plan de Krieger Vasena, había trepado en 1972 por encima del 60% anual. El pronóstico optimista de muchos sugería que Perón lograría lo que ninguno de sus antecesores había logrado. Desde el gobierno se puso en marcha una concentración cuyos protagonistas fueron los sindicatos y las organizaciones empresariales, con el objetivo de estabilizar la economía manteniendo el crecimiento. Después de realizar algunos ajustes, se congelaron precios y salarios, pero tal congelamiento debió revisarse antes de que pasara un año. La muy buena cosecha permitió un aumento de las exportaciones. El PBI creció un 5,4% en 1973, pero el déficit fiscal era una bomba de tiempo que no tardaría en explotar; la emisión de dinero iba en aumento.

El congelamiento de precios había causado grandes asimetrías por cuanto algunos precios se habían adelantado al congelamiento y otros habían quedado retrasados. Así, grandes ganancias en algunos sectores convivían con grandes pérdidas en otros. Como dijimos, el congelamiento de precios debió ser prontamente revisado. Un aumento de los precios de las importaciones hizo que los empresarios reclamaran un aumento de los precios de sus productos. Empezaron a escasear muchos productos y a la postre se permitieron aumentos de precios que fueron seguidos por reclamos de aumentos salariales que también fueron atendidos, volviendo así con mayor fuerza la inflación tan cososamente controlada. A la muerte de Perón, la situación económica se presentaba crítica y su esposa no parecía atraer la confianza necesaria para imponer medidas exitosas en el plano económico. El mercado negro estaba en crecimiento y el desabastecimiento convertía a los ciudadanos en acaparadores. Poco después de la muerte de Perón, Gelbard fue reemplazado por Gómez Morales en la cartera económica; los precios fueron flexibilizados, el peso sufrió una devaluación del 50% y se concedieron nuevos aumentos de salarios.

En medio de una situación crítica, López Rega logró ubicar en el Ministerio de Economía a Celestino Rodrigo, quien intentaría un remedio ortodoxo contra la inflación. El peso sufrió una nueva devaluación, esta vez del 100%, a la vez que las tarifas de los servicios públicos y los combustibles también aumentaban un 100%. La reacción de los sindicatos no tardó en

hacerse sentir. López Rega y Rodrigo abandonaron el gobierno, y el efecto de su plan fue exactamente el contrario al esperado. Desde este momento y hasta la década de 1990, la inflación anual de la Argentina estaría, salvo por breves períodos, por encima de los tres dígitos.

El fin de este período está marcado no solamente por un crecimiento de la inflación que será la preocupación principal de las próximas décadas, sino que también importa la conclusión de un largo lapso de crecimiento económico continuado que comienza con el gobierno de Illia y termina alrededor de 1974. En esos años, la economía creció a una tasa promedio anual del 5,4%.

### 3.5. Período 1975-1990

El descenso del 1,5% del PBI en 1975 y el pronóstico de un descenso del 6%, acompañado por un proceso inflacionario que parecía incontrolable, un déficit público que crecía a pasos agigantados, un descenso pronunciado del salario real y una situación política complejísima en la que la violencia se había tornado cotidiana, fueron el escenario del último y más brutal de los golpes de Estado que la Argentina conoció durante el siglo XX.

A esta altura, se puede decir que ya era una tradición que los gobiernos militares confiaran el Ministerio de Economía a "técnicos". En 1955 el elegido había sido Prebisch, en 1966 Krieger Vasena, y en 1976 le tocará el turno a Martínez de Hoz. En el esquema "profesionalista" de los militares, se entendía que la economía era una cuestión técnica que requería conocimientos específicos. Dichos conocimientos, como la experiencia lo marcaría una y otra vez, no quitaban que sus portadores tengan compromisos con distintos grupos e intereses internos y externos.

Con el gobierno militar comienza una etapa de crisis económica. En el período 1960-1975 el PBI había crecido un 45%. En los años de la dictadura disminuyó alrededor de un 15%. El deterioro de los términos del intercambio era cada vez más pronunciado y cada vez eran mayores las transferencias de recursos que debían hacerse hacia el exterior para pagar los servicios de una deuda externa que se acrecentaba a pasos agigantados.

En esta situación de crisis se produjo un deterioro de las condiciones de vida de los sectores más bajos. Una grave disminución del salario real fue acompañada por una virtual retirada del Estado de prestaciones sociales tales como educación, vivienda y salud, que agravaron la maltrecha situación de los sectores bajos.

La apertura del mercado al ingreso de bienes manufacturados llevó a la quiebra a un número muy importante de industrias cuya competitividad no



había sido incentuada por las políticas públicas anteriores. Pero también cayeron aquellas empresas que más tecnología habían incorporado — como las industrias metal mecánicas, químicas, electrónicas, etcétera —, cuyo dinamismo era innegable; su endeudamiento, sin embargo, no permitió que sobrevivieran a esta coyuntura crítica. Solo se salvaron aquellas empresas que producían bienes o prestaban servicios que no podían ser importados. La actividad industrial que había crecido cerca de un 50 % entre 1960 y 1975, cayó en este período más del 25 %.

A partir de 1976, la política industrial seguida — aún con marchas y contramarchas — durante las décadas anteriores sufrió un brusco giro. Contrariamente al discurso imperante, la productividad, la competitividad y el avance tecnológico no son los elementos que marcan el éxito o el fracaso; la selectividad pasa más bien por los subsidios y otras ventajas que sus contactos con el poder consiguen a cada empresa. La industria perdió así el liderazgo que había adquirido desde la década de 1930 en la economía argentina.

La producción de cereales aumentó notablemente en estos años; en 1970 el saldo exportable de granos era de diez millones de toneladas, mientras que en 1987 había llegado a 26 millones. Este aumento, debido a la incorporación de tecnología a la producción agropecuaria, no generó el aumento de excedentes esperable debido a la caída de los precios internacionales de los cereales y oleaginosas.

Al deterioro de los términos del intercambio se le sumó el aumento de la deuda externa que llevaría al país — y a los países deudores en general — a una situación crítica en la década de 1980. La deuda externa, que ascendía en 1975 a tres mil millones de dólares, alcanzó los 45 mil millones en 1983, cuando llegó a su fin la dictadura militar. La crisis de la deuda haría que si en 1975 se requería el 15 % de las exportaciones para afrontar el pago de los intereses de la deuda, en 1987 se requeriría un 60 % de las mismas. Demás está decir que la imposibilidad de afrontar estos compromisos hizo que se contrajera nuevo endeudamiento, a una altísima tasa de interés.

Con una disminución del PBI de una media del 2 % anual — muy por encima del promedio latinoamericano — durante la década de 1980, la Argentina nacionalizó la deuda privada contraída a altos intereses debido al riesgo que suponía para los acreedores externos y llevó a cabo una desregulación financiera. Esto generó un grado de especulación financiera nunca antes conocido en el país. Ya veremos más adelante que la especulación se presentaba mucho más rentable por aquellos años que cualquier actividad productiva.

503.51

24

Con una inflación que retornaba con más fuerza luego de haber sido controlada por un breve lapso, al gobierno de Raúl Alfonsín le tocó lidiar desde 1983 con un endeudamiento externo altísimo en el peor momento, justo cuando se desataba la crisis de la deuda y seguían deteriorándose los términos del intercambio. La década de 1980 es llamada la "década perdida" para Latinoamérica, por cuanto la crisis de la deuda generó recesión, desempleo, aumento de la pobreza e inflación en toda la región.

A partir de esta década la presencia externa en la adopción de políticas económicas se hará sentir más que nunca. El Fondo Monetario Internacional se ocupará de vigilar las finanzas de la región con vistas al pago de los intereses de la deuda. Sus recomendaciones imponen políticas de ajuste estructural fundadas en el proyecto neoliberal adoptado en el Consenso de Washington. Básicamente se recomienda la desregulación de la economía en todos sus ámbitos: liberalizar las importaciones, privatizar las empresas públicas, disminuir el gasto público, equilibrar las finanzas. Contrariamente al modelo de países que mucho han crecido de la mano de una intervención estatal pronunciada, se trata ahora de que el Estado se retire de la economía.

La primera experiencia democrática de la década de 1980 terminó con un grave proceso hiperinflacionario cuyas causas, como casi todo en materia económica, entronca con razones políticas. Es por ello que nos detendremos en este proceso más adelante. Bastará por ahora con decir que la transición política que fue concretada con éxito pero el gobierno de Alfonsín dejó una situación económica que tardará en ser superada, y lo será merced a la profundización de las medidas que desde el exterior se recomiendan, lo cual dejará al país en un escenario distinto al de esta década.

En 1989 llega a la presidencia nuevamente el peronismo. El presidente Carlos Menem se hizo cargo de la conducción del gobierno en una situación económica jaqueada por la hiperinflación. Rápidamente iba a establecer una alianza con los grandes grupos económicos, a los que pondrá al frente de la política económica. Después de algunas marchas y contramarchas iniciales, quedó claro al finalizar la década que se implementaría una profundización de la política neoliberal, ahora con el acuerdo de aquella base popular que sustentaba el gobierno de Menem.

### 3.6. Desde 1990 hasta la actualidad

Desde el Ministerio de Economía ocupado por Domingo Cavallo, el gobierno de Menem puso en marcha una política neoliberal rabiosa que cumplía al pie de la letra con las indicaciones de los organismos internacionales encar-

gados de vigilar el cumplimiento de las pautas del Consenso de Washington. El incondicional alineamiento con los Estados Unidos y la inserción de la Argentina en el Mercosur son los hechos de política exterior que más resonancia han tenido sobre la economía argentina.

La superación de la crisis de la deuda en la década de 1990 permitió la estabilización de la moneda, lograda a través de un Plan de Convertibilidad a comienzos de la década, que ata la moneda local al dólar estadounidense. El éxito estabilizador de la convertibilidad fue posible porque, hacia la misma época, volvió a reiniciarse la corriente positiva neta de recursos hacia América Latina. En el período 1991-96, en efecto, esa transferencia superó los US\$ 130 mil millones. De ese monto, 25 % correspondió a la Argentina. En otro contexto, el Plan de Convertibilidad no hubiera sido viable. El régimen de tipo de cambio fijo y libre movimiento de capitales facilitó el arbitraje de tasas de interés entre la plaza argentina y la internacional y atrajo capitales especulativos de corto plazo. Los recursos externos, los ingresos generados por las privatizaciones y el repunte inicial de la recaudación tributaria permitieron recuperar el comando de las finanzas públicas. El cumplimiento estricto de las reglas de la convertibilidad hicieron el resto. De este modo, a partir de 1994, la inflación en la Argentina pasó a ser una de las más bajas del mundo<sup>3</sup> (Ferrer, 1997: 92).

Como recién decíamos, la integración regional de la Argentina en el contexto mercosureño ha sido durante esta década de suma importancia. La integración se gesta a partir del acercamiento con el Brasil generado en la década de 1980; más tarde se incorporaron al bloque Uruguay y Paraguay. El Mercosur ha abierto un gran mercado a la Argentina, atrayendo un flujo cada vez mayor de sus exportaciones. Sin embargo, no han sido pocas las crisis que ha debido superar, sin contar con las producidas en países más alejados que impactan en la región. Evidentemente la economía argentina se ha tomado sumamente sensible a las crisis que se producen en la economía brasileña. Y sin poder operar sobre el tipo de cambio, por estar atado por ley como en la Argentina, o por la crisis de confianza que generaría una fuga de capitales hacia el exterior en ambos casos, la crisis se resuelve en recesión.

En este contexto, la economía argentina ha logrado crecer en este período a un ritmo muy alto. La venta de las empresas públicas ha generado recursos para el gobierno, y ha hecho ingresar un gran flujo de recursos desde el exterior. Hay que acotar, sin embargo, que tal flujo de recursos se deriva hacia la compra de activos preexistentes y no a una ampliación real de la capacidad productiva.

Las privatizaciones han generado severas críticas debido a los, muchas veces, poco claros procesos de adjudicación que las han precedido. En el caso de las empresas prestadoras de servicios, es cierto que han mejorado notablemente aquellos servicios cuya obsolescencia fue el producto del descuido de las décadas anteriores de la infraestructura del país. Pero también hay que recalcar que ante tanta postergación, las empresas se encontraron con usuarios ávidos de servicios dispuestos a pagar un alto precio por ellos. En condiciones generalmente monopolísticas, las empresas fueron custodias por organismos que se han mostrado morosos e ineficientes en la tarea de control.

La apertura de la economía generó una tasa de desempleo que se convertía en la principal fuente de descontento con respecto a la política económica del gobierno. Una tasa de desempleo que trepó por encima del 10 %, con una desregulación del mercado laboral, generó pobreza y marginación que, unidas a otros factores no estrictamente económicos, contribuyeron a aumentar los índices de violencia y delincuencia. Así, la seguridad ante el aumento de la violencia pasó a ser una de las demandas más importantes del fin de siglo en la Argentina.

Si dirigimos la vista a todo el proceso económico que hemos visto en esta aprehensísima síntesis, veremos que en la Argentina se produjo en la segunda mitad del siglo XX una situación de "empate social" entre diversas fuerzas que no se resolvió en tranquila competencia sobre las bases de unas reglas de juego bien establecidas, sino en lucha abierta entre sectores que cada vez más se tornaban incompatibles. Así lo señala Cortés Conde: "En la Argentina de la segunda mitad de siglo faltó una mínima base de consenso que pudiera facilitar un juego cooperativo. Los distintos sectores enfrentados entre sí y con el Estado invirtieron un enorme esfuerzo y recursos en defenderse. El Estado trató de sorprender a los contribuyentes con medidas confiscatorias y estos intentaron ocultar sus ingresos (evadiendo impuestos, entrando en la economía informal). Los empresarios aprovecharon la inflación para pagar menos a sus obreros y éstos —o más específicamente sus dirigentes— sacaron ventajas de los demás trabajadores y de los consumidores. En esas circunstancias aumentaron los costos de transacción, fue imposible una definición eficiente de los derechos de propiedad, la inversión se estancó y con ella el crecimiento. Porque, a diferencia de otras sociedades, la Argentina tuvo la ventaja (que a su vez fue un inconveniente) de tener una población educada y con altas expectativas donde no hubo ningún grupo que pudiera imponerse definitivamente. Esto llevó a disipar la renta, fue un obstá-

culo para la formación de capital y culminó con su declinación económica” (Cortés Conde, 1998: 123).

Recién en la década de 1980 esta situación comenzó a cambiar, pero en la de 1990 se aplicaron medidas que generarían la pérdida de autonomía del Estado en materia de fijación de políticas económicas. Entendase aquí que en el marco del proceso de globalización actual, es evidente que las economías del mundo están interconectadas de forma tal que lo que afecta a una de ellas tendrá consecuencias sobre el resto. Lo que aquí se quiere decir cuando se señala que ha habido una pérdida de autonomía es que el Estado se ha quedado sin los instrumentos básicos que le permitirían mitigar las crisis, evitando que impacten con toda su fuerza sobre las condiciones de vida de la población.

El tronco de la cultura está formado por la acumulación de las tradiciones y su eje fundamental es el lenguaje; de esta manera se revela una propiedad decisiva de la cultura: su transmisibilidad a partir del proceso de socialización y del proceso de educación. De todos modos, hay una capacidad para seleccionar, discriminar, admitir, readaptar o rechazar elementos de otras culturas. Es decir que siempre existe un rasgo de selectividad teniendo en cuenta el grado de calidad, orientación, rigidez o permeabilidad. Se destaca que la cultura también es acumulativa. A pesar de su aparente inercia, la cultura se expande o agranda por la incorporación de innovaciones (tangibles o no) propias o ajenas, como resultado de la mezcla con otros sistemas culturales.

Pero, así como hay crecimiento o innovación e incorporación desde otras culturas (transculturación), hay también degradación, desintegración y pérdida de elementos culturales (Zorrilla, 1998: 21). Entonces se debe destacar que cuanto más compleja es una sociedad y más secularizada se encuentra, estos procesos de acumulación y de pérdida de pautas y hábitos sociales son más intensos. Por lo tanto la cultura es dinámica, ya que se halla sometida a los cambios variables en intensidad, magnitud y profundidad.

### 1. Cultura y globalización

La expansión internacional en el plano económico y financiero se encuentra implícita en la dinámica del capitalismo y acompaña su evolución histórica influyendo en los impulsos hacia una productividad creciente y originando un aumento en la composición orgánica y técnica del capital (Margulis, 1996: 5). En la Argentina, se produce un estado de internalización del proceso económico que compromete o implica a las variables políticas y cultura. Respecto de los cambios culturales, no son sólo consecuencias del impacto de la actividad económico-financiera, en muchos casos pueden pre-sidirlas y facilitar las expectativas o representaciones sociales que favorecen la introducción de modificaciones en esa actividad. De todos modos,

estas modificaciones, en el orden de la cultura y la política, son complejas, pero no nuevas.

De acuerdo con Margulis (1996: 6) el concepto de globalización es anti-gu, en lugar del aislamiento regional, donde los actores sociales se bastan a sí mismos típico de las sociedades tradicionales, se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de naciones identificada con la sociedad moderna. Es decir que se origina una mundialización o internacionalización de la actividad preferente aunque no excluyente, en lo económico y lo político que ahora encuentra otro nombre: globalización.

Tal vez la principal diferencia del concepto de globalización con los anteriores conceptos radica en el acelerado cambio tecnológico. "El cambio en cuanto a la cantidad —por ejemplo la velocidad— genera un cambio en la calidad de los fenómenos. En el plano de las comunicaciones y los transportes, para ejemplificar con un caso concreto, no podemos comparar un sistema mundial cuya comunicación estaba —en sus inicios— en el plano del Galeón de Acapulco, con los procesos de mundialización actuales, caracterizados por tremendos avances tecnológicos, el mundo de las computadoras, de la autopista informática, de la televisión satelital" (Margulis, 1996: 7). La globalización, entonces, implica una forma avanzada y compleja de internalizar e integrar pautas de comportamiento y hábitos sociales dispersos. Por ello se puede admitir una organización a partir de una estrategia mundial dirigida hacia un mercado mundial ya que acompaña una actividad de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. De esta manera se determina la presencia de sistemas abiertos; de sociedades en donde se pueden apreciar mayores impactos por la innovación tecnológica y la internacionalización de sus conductas. En la Argentina, un ejemplo de ello son las actividades realizadas en el área financiera.

En el plano cultural el impacto de las transmisiones, en el campo de las comunicaciones, como ya se expuso, modifican las expectativas y/o representaciones sociales, verbigrae: la guerra del Golfo o en los Balcanes, los campeonatos de fútbol, los juegos olímpicos, los filmes, series y miniseries de origen extranjero y los acontecimientos sociales relacionados con actores identificados con distintos grupos de referencia (los casamientos de las infantas españolas, fiestas del jet set internacional, entre otras).

Es así como la población de una sociedad nacional se puede encontrar situada o sitada: frente a la globalización de la cultura ya que, voluntaria o involuntariamente, de manera manifiesta o encubierta, internaliza los hábitos y pautas porque su sistema de representación se ve alterado por los

cambios en su entorno. "Es de destacar que no existe una distribución uniforme de actores sociales y económicos homogéneos espaciados por el globo desde los cuales se emiten y reciben mensajes, bienes y servicios, sino que en todos los órdenes y planos de tal globalización predominan pluralidades y asimetrías vinculadas con la concentración de la capacidad de emisión y recepción de los mensajes, sean éstos de orden financiero, informático o relativo a las industrias massmediáticas" (Margulis, 1996: 8).

Claro está que para la existencia de la situación aquí tratada, la globalización, es preciso compartir no sólo la competencia informática; sino que se requiere previamente, y sobre todo, participar de redes significativas: códigos, valores, atribuciones de sentido es decir fenómenos de la esfera cultural que hagan posible la comunicación entre actores diseminados por el mundo. Se trata de compartir un sistema de percepción y de apreciaciones culturales, de signos, valores y ritmos; definitiva de la intersección y de la inserción de lo "global" en lo "local". De todos modos, no sólo se trata de compartir estas pautas y hábitos ya que suele existir una imposición de un sistema cultural prevaleciente que pueda haber sido visto, en un momento, como alternativa "valiosa" para solucionar ciertos problemas sociales. La interacción social y la inserción de estos modelos culturales no están desprovistos de: a) recepciones sociales innovadoras, b) dudosas heterogeneidad cultural y c) tensiones y conflictos culturales.

## 2. Recepción innovadora o creativa de modelos culturales

Frente a la existencia de pautas y hábitos que se identifican con un sistema cultural supra-estatal y que, aparentemente, condicionan la conducta de los actores en la actividad cotidiana suele suceder que aquellas prácticas sufran ajustes y reajustes constantes de acuerdo con los intereses y necesidades personales y grupales situadas en un contexto geográfico e histórico determinado. Existe entonces una recepción innovadora de las reglas supra-estatales cuando éstas se ajustan de manera creativa, teniendo en cuenta determinada situación social de los actores y sus expectativas.

La recepción social innovadora implica, además, una alternativa de solución entre "lo global" y "lo local" ya que permite distintos ajustes de las reglas supra-estatales y realidades locales. En la Argentina esto se puede observar en el rescate de una "cultura democrática" y en cierta simplificación o "parcialización cultural".

## 2.1. Cultura democrática

Las sociedades aplican, por lo general, una política doméstica y desarrollan un esquema institucional rutinario con el objetivo de asegurar sus derechos, pero las relaciones interestatales, en el contexto de la globalización, se caracterizan por conflictos y colaboraciones en la medida en que dichos estados buscan medir las tensiones entre lo nacional y lo global (Posegance, 1996/7: 5).

Una realidad está emergiendo en medio del supuesto clamor de cultura y civilización contentientes. El Estado-Nación se está convirtiendo en una entidad de dudosa consolidación y con una fuerza no siempre capaz de soportar las presiones de la competencia mundial, donde prevalece una cultura económica en un Estado virtual que reduce su capacidad de producción basada en el territorio y se instaura el predominio de la corporación virtual de empresas que descubren ventajas para localizar sus instalaciones de producción allí donde sean más rentables. La presencia destacada de la economía se hace subordinando, en lo posible, ambiciones militares, políticas y territoriales. (Burnham, 1996/7: 18) determinando y destacando el paso de un modelo de cultura autoritario a un modelo democrático de cultura.

De manera que cuando se hace referencia a una recepción social innovadora o creativa de modelos culturales, se destaca la importancia de las organizaciones políticas, las instituciones civiles y los grupos comunitarios como agentes sociales que, con los medios adecuados, buscan obtener un consenso u orden para alcanzar fines y satisfacer necesidades culturales a través de intervenciones deliberadas. Esta situación, en países latinoamericanos, sería difícil si no fuese por la existencia de un contexto intencional (o intencional) que lo promueve, facilita y acompaña. En definitiva, lo que se busca es organizar la cultura, en un sentido de proceso civilizatorio, para llegar a públicos determinados utilizando canales específicos de comunicación.

La visible degradación de la cultura en el contexto político actual de la sociedad argentina se manifiesta a través de la puesta en escena de un discurso "anticultural" donde predominan los medios televisivos con entretimientos, descalificando las jerarquías, y con prevalencia de una escena pública ocupada por una especie de "farandulización" de la política, el culto a las modelos y a los futbolistas, el privilegio de la cultura de lo efímero, con un consecuente abandono de la documentación de la historia y de los organismos culturales como escuelas, teatros, instituciones de formación de artistas, museos, acompañado todo esto por una reducción del presupuesto.

De todos modos, la cultura otorga una identidad de la Argentina frente al resto de Latinoamérica, pero donde los órganos de la sociedad civil intervienen poco y nada, especialmente durante los gobiernos de facto. Con el gobierno democrático se busca la participación de distintos actores y agentes sociales (Workman, 1996: 63) e implica la apertura de espacios para iniciativas, buscando la innovación y la creatividad a través de nuevos puentes entre artistas y público.

En los años de transición democrática, la política del gobierno de Raúl Alfonsín acentuó y puso énfasis en la cultura. En esa época se anunciaban con frecuencia, programas para la democratización de la cultura, que implicaban recrear o construir una cultura para todos, democrática, buscando asegurar la existencia y la reproducción de una diversidad de circuitos culturales. Se trataba, por lo tanto, de detectar elementos de una sociedad y una cultura autoritaria para modificarla dejando de lado análisis relacionados a los grandes poderes o "imperialismos". Esta búsqueda y recepción social de un modelo cultural democrático, entonces, tiene su origen en el desplazamiento de modelos identificados con las dictaduras y los totalitarismos, tales como la censura, prohibiciones, persecuciones, objetivos y promoción de valores fundados, únicamente, en el orden y llevados a cabo con el miedo (Workman, 1996: 65).

En la cultura democrática se trata de rescatar la desigualdad cultural persiguiendo facilitar el acceso a los bienes simbólicos de las mayorías y corrigiendo, en la medida de lo posible, las desigualdades referidas a distintos estratos sociales y a diferentes bienes culturales.

A modo de ejemplo se destacan acciones culturales referidas a lo expuesto (Workman, 1996: 74 y ss.). En julio de 1984, mediante el Decreto 3.697, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires dispuso la realización del Programa Cultural en Barrios con carácter de recreativo-cultural. Con él se buscaba construir y afianzar identidades y representaciones de vivencia cotidiana, rescatando características de la vida democrática como la actividad en talleres: el juntarse, discutir, compartir, expresar sus anhelos, sus disgustos, sus tradiciones. Se buscaba construir un consenso para consolidar la transición democrática. A esto se le agregaba la difusión cultural, el aprendizaje de un oficio con salida laboral y la construcción de una memoria barrial a través de talleres de Historia Oral de la Tercera Edad. Se destacaba, además, el reconocimiento de la identidad de género en el programa "Mujer" y el espacio para los jóvenes en los talleres sobre la historia del rock.

A pesar de que todo esto implicaba encuentros y participaciones, ya que se combinaban conductas y valores, aparecieron serios cuestionamientos referidos a: a) identificar la experiencia mencionada con una actividad "patorera" debido a que todo aquello que no se refiera al modelo se debe desecharse, b) ausencia de planes y políticas culturales democráticas identificadas con el largo plazo y c) el desplazamiento de las calles y plazas de las mencionadas actividades a medida que el gobierno radical perdía consenso.

En la década de 1990 la cultura deja de ser una cuestión pública para convertirse en un problema de consumo, de identidad restringida, no colectiva. Es decir que empieza a predominar una cultura a domicilio, dentro de una corriente neocconservadora, que persigue la eficiencia del capital, apelando al monopolio de la producción y restringe el gasto en servicios sociales (programa educativo y cultural).

De todos modos, a partir de una cultura democrática se busca transformar los códigos que organizan la percepción, la vivencia y la apreciación respecto del tiempo y del espacio.

## 2.2. La paralización cultural

Hace a la cultura democrática la necesidad que tienen los distintos actores sociales de quejarse por el olvido, por la falta de memoria y por el limitado rescate de las situaciones acaecidas décadas anteriores. A partir de 1984 se produjeron serios cuestionamientos a las costumbres, hábitos y pautas de comportamientos típicas de años anteriores (Romano, 1996: 42). Estos se ven en películas que dramatizan las etapas anteriores y sus circunstancias, como: *La historia oficial* (Puenzo, 1984), *Contar hasta diez* (Barney-Finn, 1984), *Enveinada* (De Sanzo, 1984), "Los días de julio" (Fisherman, 1985). A estos, se suman programas de televisión como *Compromiso*, *Nosotros y los miedos*, *Situación límite*, todos del mismo período 1983-1985. Se destacan novelas como *La noche de Francisco De Santis* de Humberto Costantini; *Para memoria*, de Pedro Orgambide, o el volumen de testimonios y entrevistas *Juicio a la impunidad*. Como se ve, existía un comprensible exceso por nombrar lo silenciado, por dar cuenta de las instancias vividas en los últimos años junto con homenajes a veces paralizados y otras veces sobredimensionados de ciertas víctimas de los hechos acaecidos.

Claro está que es criticable el reduccionismo imperante y la paralización cultural en el análisis, el más común es: democracia contra dictadura. A pesar de que no se trata de olvidar ni de ser indiferentes, el problema suele ser que se silencian otros hechos, actores y procesos y también se simplifi-

can las distintas situaciones. Esto daría lugar a una suerte de evasión que se acrecienta con los años.

Pasado un lapso de euforia, por momentos unilateral, surgen otros fenómenos culturales que se relacionan con otro tipo de simplificación y paralización de la vida. A pesar de los valiosos aportes en la nueva etapa que comienza con la década de 1990, el análisis cultural sigue siendo paralizado, silenciando necesariamente aspectos importantes de los fenómenos sociales problemáticos analizados. Ejemplos claros de lo expuesto son las películas como: *Gatica, el mono* (Favio) que de la mano de un militante peronista intenta lograr una coherente homologación entre la biografía del boxeador y una etapa histórica, la del primer peronismo (1945-1955). Dos ejemplos como muestra de lo expuesto: a) el ascenso de Gatica coincide con el de Perón y en la cima del éxito-poder lleva a Gatica decir: "Somos lo más grande general, dos potencias se saludan"; y b) la caída de Perón y el sangriento levantamiento de los generales Valle y Tanco, que coincide con el despojo de la licencia profesional de Gatica.

Esta película se transforma en un símbolo de los sufrimientos populares reivindicando todo tipo de lucha para solucionar esta situación. Otro ejemplo de la paralización de la realidad puede encontrarse en la exitosa telenovela *Más allá del horizonte* ya que se desdibuja la historia aprovechando el posible desconocimiento de la audiencia. La historia puede ser ubicada a fines del siglo XIX, y hace hincapié en un gobierno como el instaurado por Rosas en una zona llamada Santa María, una ciudad del Río de La Plata. Se simplifica la realidad a partir de situaciones como la versión edulcorada de la vida del indígena o de las conductas del estrato dirigente.

Otros ejemplos de los fenómenos sociales mencionados pueden ser programas televisivos como *Parece que fue ayer* (conducido por Pinky), *Siglo XX, carnalache* (conducido por Fernando Bravo y Teté Costarot), *Impacto a las 7* (conducido por Mauro Viale), *Sin condena* (ciclo de unitarios de Canal 9). En el caso de películas se destacan, también, *Tango feo* (Piñeyro), y en libros: *La revolución es un sueño eterno* (Andrés Rivera) o *La parria equivocada* (Dalmiro Sáenz). Por esto se puede afirmar que la trampa del instante, de lo amnésico y global se instala en el sistema cultural donde predominara la simulación y la indiferencia (Romano, 1996: 41). Se podría hablar desde la cultura de una situación de desmemoria frente a situaciones negativas, disfuncionales o identificadas con el fracaso, de todos modos referentes de la paralización cultural.

### 3. La dudosa heterogeneidad cultural

La identificación social se actualiza y se refuerza en el contexto, en la comunicación, en el intercambio con el otro, con lo diferente. Entonces la diversidad cultural se expande por el aumento de los contactos con los otros y por la abundancia de la información que se suministra. Sin embargo, puede suceder que se produzca una reducción progresiva de la pluralidad cultural que vaya operando en el sentido de uniformar códigos simbólicos, cuando se reducen los espacios de interacción a partir del auge de la comunicación sin interacción, producto de los medios masivos y la informática. Por eso, si bien la sociedad moderna se identifica con la tolerancia, la divergencia y la heterogeneidad cultural, se suelen encontrar notables ejemplos de una cierta homogeneidad en lo que respecta a pautas de comportamiento y hábitos sociales. Se podría afirmar que se cuestiona la idea del relativismo cultural ya que existe, en apariencia, un acuerdo sobre distintos temas como, por ejemplo, imponer por las armas los Derechos Humanos, en el conflicto entre la OTAN y Yugoslavia.

Hay que recordar que las normas sociales encuentran su fuente de legitimación en el consenso social. De todos modos, existe una presión diferenciadora que lleva a suponer que la homogeneidad cultural, en general, y valorativa, en especial, es menos de lo que se podía suponer ya que la pluralidad de grupos y la profundización de la división del trabajo estimula la aparición de diversas subculturas centradas en torno a distintos ejes: edad, sexo, estrato social, origen étnico, entre otras. Aunque es cierta esa afirmación, existen distintos trabajos de investigación donde se rescata una homogeneidad cultural y/o valorativa, puede citarse como ejemplo aquí un estudio de campo realizado a partir del proyecto del Poder Ejecutivo de la Nación sobre la implementación pena de muerte (Bergoglio y Carballo, 1993: s/p).

El proyecto presidencial respecto de la implantación de la pena de muerte, ofreció una oportunidad de rescatar el Derecho Penal ya que en él se encuentran normas de relativa comprensión para los distintos estratos sociales. La iniciativa presidencial y su recuperación en los medios de comunicación brindaron un marco necesario para realizar una investigación. Se utilizó un sondeo de opinión que permite determinar el grado de apoyo que el proyecto de ley suscita, indicando quiénes son los integrantes de la muestra y cómo se ubican socialmente. Los datos fueron recogidos en la ciudad de Córdoba, en dos etapas. La primera incluyó una encuesta de 341 casos, realizada en agosto de 1990, y la segunda etapa abarcó 400 casos consultados en septiembre de 1991.

Prácticamente todos los encuestados conocían el proyecto presidencial. Tanto en 1990 como en 1991, los resultados obtenidos fueron muy similares, la mayoría de los entrevistados se manifestaba poco o nada de acuerdo con la pena de muerte. Un porcentaje que supera levemente el 40 % expresaba estar bastante o muy de acuerdo con esta medida. La investigación permitió observar algunas diferencias entre las opiniones de los grupos etáreos. Los adultos jóvenes (26 a 40 años) son en general más desfavorables frente a la pena de muerte, que el resto de la población. Los adultos mayores (41 a 60 años) tienen una opinión ligeramente más favorable. La instauración de la pena capital que el conjunto de la población. Cuando se toma en cuenta la variable sexo la percepción del fenómeno no observa mayores diferencias. Como consecuencia de su distinta participación en la estructura ocupacional, así como de sus diferencias vitales, las personas de cada sexo tienden a desarrollar opiniones y puntos de vista diferentes. La socialización diferencial por sexo refuerza estos procesos. En este caso, sin embargo, las subculturas diferenciales por sexo tienden a acercarse y la participación de hombres y mujeres en la estructura ocupacional comienza a aproximarse.

Entre los factores que modelan los valores, la educación ocupa un lugar preponderante. El paso por el sistema educativo modifica los puntos de vista, los modos de contemplar la vida, así como los valores desde los cuales se la juzga. A partir de esta aclaración la opinión ante la pena de muerte es mayoritariamente desfavorable en los dos extremos de la escala educativa: escolaridad primaria y escolaridad universitaria. En ambos grupos los opostores a la pena de muerte son más numerosos que entre la población en general. Las diferencias se encuentran en que las personas más educadas de la población mantienen firmemente sus opiniones frente a la instauración de la medida, en cambio aquellas con escolaridad primaria cambian fácilmente de opinión. Entre las personas que alcanzan la enseñanza media se registra una proporción de partidarios de la pena de muerte superior a la del conjunto. Respecto de la clase social, la alta o media alta incluye a personas muy seguras de sus opiniones; el 50 % a favor y un 49,8 % en contra incluyendo esta cifra una proporción muy menor de opiniones inestables en contra de la pena de muerte. De todos modos, a medida que se desciende en la escala social, la división se mantiene pero aumentan considerablemente las opiniones inestables y la posibilidad de modificar su parecer. Una de las razones se debe a la existencia de miedo ya que consideran que la pena de muerte puede ser aplicada con ellos (Bergoglio y Carballo, 1993: s/p).

Se muestran pocas y pequeñas variaciones respecto de la opinión en distintas subculturas de una norma jurídica que establece la pena de muerte.

503,5

27

te. Si bien están divididos casi por mitad no existen pruebas para identificar a la sociedad, en este caso cordobesa, con la heterogeneidad cultural respecto a este tema, predominando la estabilidad y la homogeneidad en detrimento de distintos valores sociales.

Estas características referidas a la tendencia hacia la homogeneidad cultural son tratadas indirectamente en un trabajo de campo efectuado en la Provincia de Buenos Aires. En 1994, y a partir de entrevistas domiciliarias, se comprobaron las valoraciones que los justiciables (actores y demandados) tienen sobre la justicia (Salamueva, 1996: s/p). Para esto fueron seleccionadas 280 causas civiles y comerciales, a razón de 20 causas con sentencias dictadas a partir de 1993 por cada uno de los 14 juzgados de 1ª instancia del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Luego de la selección de la muestra y de las entrevistas aplicadas a los justiciables se confirmó que la percepción y la valoración sobre la justicia, aunque perfectamente, es positiva más allá de las críticas. La población en general, es decir aquella que no ha acudido a la Administración de Justicia, emite opiniones decididamente negativas tanto para la justicia como para los jueces. Es de destacar que el 25,6 % de los actores sociales que acuden a la justicia lo hacen, porque no encuentran otro camino para solucionar los conflictos, el 30,8 % porque no pueden arreglar su situación y solo el 35,9 % asegura que es la vía más adecuada para una reivindicación, un reconocimiento de derechos vulnerados y un valor perdido. A esto hay que agregar una percepción positiva sobre la justicia en aquellos actores que acuden al servicio de justicia en calidad de demandados. Se destaca también un alto porcentaje de la muestra (78,7 %) que volvería a utilizar los servicios de un tribunal.

Por lo tanto, si bien se reconoce que la Administración de Justicia es una vía, tal vez la única posible para solucionar conflictos, existe un porcentaje muy alto de justiciables con una opinión alta sobre la efectividad de la misma, disminuyen en el caso de actores que no acudieron a utilizar sus servicios. Esto habla nuevamente de la homogeneidad respecto de los valores y apreciaciones sobre la eficiencia del Servicio de Justicia en general.

El tema de los valores (y las valoraciones) permite, además, entrever un posible paso de la heterogeneidad a la homogeneidad cultural, detectando las características de las normas preferidas para guiar la conducta de los actores sociales. En la investigación aquí citada se retoma el tema de los valores, y se los define como estructuras cognitivas complejas que implican también dimensiones evaluativas y conductuales acentuando, asimismo, su función en cuanto a la interpretación y atribución de significados. Los valores permiten al sujeto interpretar la realidad proveyéndolo de significados

compartidos culturalmente. Se trata de opciones entre probables maneras de actuar conforme con una jerarquía condicionada por la concepción del mundo sostenida por una determinada colectividad. Por esto se destacan tres elementos: a) la elección o preferencia que implica en cuanto a unos medios de ser o de actuar frente a otros; b) la capacidad para trascender la existencia en cuanto a que son concepciones acerca de lo ideal; c) la existencia de un componente normativo en relación a medios y metas sociales.

Concretamente respecto de los valores, en la Argentina se aplica un cuestionario sobre esa variable (Kornblit, 1996: 129 y ss.) elaborada por Shalom Schwartz, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. La muestra en el país comprende 767 estudiantes de cuarto año de escuelas secundarias públicas de cuatro ciudades argentinas de diferente densidad de población y de diferentes características socio-económicas: Buenos Aires (Capital Federal), Merlo (Prova. de Buenos Aires), Neuquén y Bariloche. Las edades de los sujetos varía entre 16 a 18 años. El 60 % de los casos son mujeres y el 40 % son varones; el 57 % pertenecen a la clase media-media y el 43 % son de clase media-baja, tomando como indicador el nivel educacional y la ocupación de los padres.

En la investigación se parte de la existencia de diferentes formas de comprensión del mundo organizado por los distintos grupos sociales. De modo que los valores, a nivel cultural, son inherentes a la estructura y al funcionamiento de las instituciones de una sociedad y reflejan, además, la consistencia que existe en la organización cultural de una sociedad. La teoría de Schwartz supone que el énfasis en los valores prevalentes de una sociedad pueden ser inferidos a partir de los valores individuales. Para esto supone la posible categorización de siete tipos motivacionales para el estudio de los valores a nivel cultural. Estos últimos están integrados por distintos valores agrupados, para detectarlos se usa un cuestionario donde se pide a los entrevistados que otorguen a cada valor un puntaje como principio que guía la vida del actor: 7 máxima importancia; 6 muy importante; 5, 4, 3, 2 y 1 importante; y 0 no importante.

Estos valores son (Kornblit, 1996: 133, 134 y 135):

- A) *Conservadurismo*: comprende orden social, obediencia, respeto por las tradiciones, seguridad familiar y autodisciplina.
- B) *Jerarquía*: integrada por poder social, autoridad, humildad y riqueza.
- C) *Autonomía intelectual*: curiosidad, tolerancia y creatividad.
- D) *Autonomía afectiva*: placer, vida existente, vida variada.



E) *Armonía*: comprende la unidad con la naturaleza, protector del medio ambiente y un mundo de belleza.

F) *Dominio*: integrado por la ambición, éxito y afección.

G) *Preocupación por la igualdad*: implica igualdad, justicia social, responsabilidad y colaboración.

De esta manera se pueden determinar:

1. La visión de la persona como una entidad autónoma en relación con el grupo social contra su visión como parte inseparable del grupo social (autonomía intelectual, afectiva e igualdad contra conservadurismo).
2. Preferencia por el tratamiento igualitario o jerárquico de las personas y los recursos (igualdad contra jerárquicos y dominio).
3. Preferencia por el cambio contra la preservación y la adecuación con el ambiente social y físico (dominio y autonomía afectiva contra armonía y conservadurismo).
4. Aceptación o rechazo de intereses individuales o grupales contra trascender los intereses propios y grupales (dominio y jerarquía contra igualdad y armonía).

En la Argentina los tipos valorativos culturales que obtienen puntaje más alto son: la preocupación por la igualdad y el dominio. El puntaje medio es asignado a la armonía, el conservadurismo y la autonomía afectiva. El puntaje más bajo se le asigna a la autonomía intelectual y a la jerarquía.

En la Capital Federal predomina la preocupación por la igualdad y el conservadurismo. En cambio, en Merlo existe mayor coherencia ya que los participantes del estudio optan por el dominio y la jerarquía. En Bariloche y Neuquén se encuentran más comprometidos con la armonía. En general, cuando se tiene en cuenta el sexo de los encuestados, en los varones se rescata la jerarquía y la autonomía afectiva; en cambio, en las mujeres predomina la preocupación por la igualdad y la armonía. Con respecto a la diferencia por los estratos sociales, los jóvenes de clase media-media enfatizan los valores de armonía, y en los sectores sociales más bajos se destaca el conservadurismo. Es pertinente señalar que la baja puntuación otorgada a la autonomía intelectual, identifica al país con los africanos, alejados de los jóvenes de los EE.UU., Europa y de países latinoamericanos como México, Brasil y Venezuela.

En el análisis de datos, entonces, la Argentina sostiene una valoración que está entre la media de los puntajes de las muestras de Europa y las de los restantes países estudiados en los tipos valorativos: conservadurismo,

jerarquía, autonomía afectiva, preocupación por la igualdad y armonía. La diferencia se encuentra en que la autonomía intelectual se encuentra por debajo de la media de la muestra y el dominio se destaca porque expresa el valor más alto. Por lo expuesto, predominan valores identificados con el colectivismo, con un predominio del conservadurismo y el privilegiar los objetivos colectivos, a diferencia, por ejemplo de los jóvenes estadounidenses y japoneses que se encuentran orientados hacia la autonomía y a los objetivos individuales.

La situación en que se encuentran los abogados de la Provincia de Buenos Aires es otro ejemplo válido de la persistencia de la homogeneidad cultural. Este trabajo está referido concretamente a detectar las normas preferidas por los actores sociales para guiar su conducta, y forma parte de un amplio análisis descriptivo que tiene como objetivo conocer el perfil real del abogado de la provincia a través de relevamientos: a) cualitativos, entrevistas en profundidad a 53 abogados de la Provincia; b) cuantitativo mediante la aplicación de encuestas por correo con 507 respuestas recibidas y 473 con respuesta completa (Fucito, 1996).

Del trabajo cualitativo se destaca el hecho de que el profesional, en general, no tiene una mayor preocupación por la ética y existe un desconocimiento de algunas de las normas relacionadas con la ética. Esta situación no se relaciona con la juventud del abogado, más aun, aumenta con la edad. Estos actores se guían por normas propias, por la ética de cada uno (una ética personal) o por una simple cuestión de conveniencia. Es decir que lo común o compartido es precisamente la falta de reglas que rescaten valores colectivos ya que prevalecen la individualidad y la convivencia en detrimento de pautas y hábitos subordinados a intereses sociales. Existe en la investigación citada un alto porcentaje de abogados que ignoran el contenido de las normas éticas profesionales contenidas en la ley 5.177, sólo tienen una vaga referencia o consideración al tema de escasa referencia frente a los valores ya mencionados.

De todos modos cabe agregar, a partir del análisis cuantitativo, la existencia de un consenso entre abogados sobre el incorrecto funcionamiento del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Los motivos que aducen en las respuestas son diferentes. Las causales de esta situación destacables son: el conocimiento o la amistad entre los abogados, la solidaridad mal entendida entre abogados, la desidia o, simplemente, la falta de recursos. De todos modos, se está de acuerdo en que esta situación perjudica la imagen social del abogado (Fucito, 1996: 118) ya que el 61 % de los encuestados considera que es débil el control ético.

Este porcentaje aumenta con los años y con la antigüedad en el título. La respuesta varía según la ubicación geográfica del profesional. Los cuestionamientos aumentan considerablemente, en general, en grandes centros poblados (Gran Buenos Aires) y disminuye en los más pequeños (ciudades con menor cantidad de habitantes) (Fucio, 1996: 127 y 128).

Más allá de los ejemplos utilizados se puede agregar la posible manipulación consciente y deliberada de las masas como un elemento importante de la sociedad democrática para la cual se requiere de un persistente esfuerzo propagandístico. De esta manera se sostiene que las masas deben ser controladas por su propio bien y en las sociedades democráticas, donde la aplicación de la fuerza es más improbable. Es por esto que se recurre a una nueva técnica de control, especialmente mediante la propaganda, buscando recuperar una solidaridad internacional con el objetivo de llegar a la convicción de que los intereses son esencialmente los mismos (Borón, 1996-1997: 3 y 4).

#### 4. Tensiones y conflictos sociales

En un sistema social, como en el caso de la Argentina, existen fenómenos de culturas superpuestas entendidas como una trama de sentido que tienen diferentes alcances espacial y temporal referidas éstas a distintas situaciones sociales, desde códigos que afectan a pequeños grupos, códigos más amplios que abarcan zonas urbanas o regiones que participan de un mismo lenguaje, memoria, costumbre, valores, creencias y tradiciones y, por último, en el ámbito de lo cultural vinculado a la incorporación de la globalidad en el plano local.

Estas culturas superpuestas están en constante intercambio y transformación. Por esta razón se puede afirmar que los sistemas culturales superpuestos pueden ser complementarios, alternativos o contradictorios. El primer caso, el referido a los modelos complementarios, no habría mayor problema para la permanencia de un sistema cultural debido que se utiliza un modelo como protagonista, apareciendo otro u otros en el momento que los actores lo crean necesario. En el segundo, cabría pensar en un aumento de tensiones sociales debido a las dificultades que se pueden suceder para el análisis, la comprensión, la interpretación y la explicación de conductas. Queda claro que se está haciendo referencia a que se pueden utilizar, indistintamente, diferentes modelos según las características de la interacción y la socialización de los actores protagonistas. En el tercer caso, el de los sistemas contradictorios, a las tensiones se les agrega el conflicto en las

expectativas sociales originadas en normas opuestas o enfrentadas ya que un modelo especifica reglas diferentes a otros.

Por eso, para ahondar la problemática de las normas formales hay que tener en cuenta lo expuesto ya que su protagonismo, en la vida cotidiana, suele ser relativa presentándose éstas como complementaria, alternativa o contradictoria según cada situación social ubicada en el tiempo y en el espacio.

##### 4.1. Nociones de Justicia y Derecho

En la vida cotidiana, con la existencia de varios grupos, y con un sistema de normas superpuestas alternativas y/o contradictorias, existen tensiones y conflictos permanentes. Un caso de lo expuesto es la demanda de justicia frente a la violencia de algunos policías (Jelin, 1996).

Desde hace décadas podría afirmarse que suele existir una incongruencia entre los reclamos sociales y lo establecido en el sistema normativo formal, ejemplo de ello es el antagonismo entre el derecho y la necesidad de justicia social (reclamos salariales, costo de los servicios públicos, entre otros ejemplos). Otra situación es lo planteado respecto a los reclamos de justicia frente al último gobierno de facto (juicios, Ley de Punto Final y de Obediencia Debida, indultos, etcétera). La demanda se hace presente frente a un probable descrédito de la justicia, un hecho representativo fueron las "marchas del silencio" por la muerte de la joven catamarqueña María Soledad Morales. El descubrimiento de los beneficios de la ley en una sociedad de masas abre el camino al reclamo de una compatibilización entre expectativas informales y expectativas formales (jurídicas), donde cada actor, independientemente de su situación social, pueda invocar con éxito relativo su derecho a defenderse. La efectividad del reclamo suele ser dudoso ya que suele ser difícil de acercar el "deber ser" de la norma formal con las pautas y los hábitos de los actores en la vida cotidiana.

Un ejemplo de lo expuesto es la situación referida a la flexibilización laboral en la Argentina, donde en el fenómeno social problemático "desocupación" se puede observar las tensiones entre las expectativas, las propuestas o proyectos respecto a una modificación de la legislación laboral y los intereses y necesidades de los distintos actores sociales. Varios trabajos destacan el hecho de que la política laboral, desde 1989, se caracteriza por la violación del principio de legalidad, materializado por el uso de decretos que violan la ley y la Constitución Nacional generando situaciones de inseguridad jurídica ya que no sólo se desea bajar el costo laboral sino que,

también, se ataca la defensa colectiva de los derechos colectivos, la negociación colectiva y el derecho de huelga.

En 1991 se dictó el llamado derecho de productividad como cepto para el sector sindical mediante el que se derogaron casi sesenta convenios de la actividad marítima y portuaria, y donde se pasa a aplicar desde entonces, el pabellón de conveniencia, es decir la aplicación a marinos argentinos de la legislación extranjera. En 1993 se pretendió imponer la negociación por empresas. En 1995 se estableció la negociación de convenios relacionados con las PYMES derogando derechos legales. En ese año se derogó la ley de concursos y quiebras permitiendo al empleador en concurso o quiebra que no aplique el convenio colectivo hasta por tres años. A esto se puede agregar la discutida incorporación de las nuevas modalidades contractuales (pasantías, becas, etcétera) y el de aprendizaje, tipos de contratos estos que permiten trabajar en una situación de inseguridad, de precariedad y sin los derechos que tiene el resto de los asalariados.

A estos pueden agregarse más ejemplos donde se demuestra que se legisla con apariencias y no con realidades. Las expectativas entran en conflicto: trabajo, dignidad del asalariado, tasa de ganancia, competitividad, rebaja del costo laboral.

Una de las consecuencias de lo expuesto es el deterioro de la salud laboral y el estado de malestar generalizado en la mayoría de la población. Los cambios en la organización del trabajo, la desocupación y la nueva legislación social son factores que contribuyen al creciente deterioro de la salud de los trabajadores y a generar una preocupación de aguda desprotección en los conjuntos sociales subalternos. Se vive una suerte de anomia generalizada, característica de períodos de crisis y transición rápida con las consiguientes desindustrialización, pauperización y desarticulación de la cultura del trabajo (Cieza y Beyreuther, s/d).

Esta hipótesis se corrobora con indicadores indirectos y estudios cualitativos dada la falta de datos oficiales sobre la semiestabilidad laboral. A las patologías típicas de diferentes actividades industriales se suma una serie de afecciones psiquiátricas vinculadas al aumento de los ritmos de producción, de estrés ocupacional, el temor a la pérdida del trabajo, el alcoholismo, los accidentes y la violencia bajo distintas formas, disgregando de esta manera la cultura del trabajo con la aparición de la consabida anomia.

Las consecuencias de lo expuesto son: la falta de desarrollo de una comunidad laboral dinámica y creativa competitiva internacional, aumentos del gasto en atención médica psiquiátrica y del malestar social-laboral.

Asimismo, llamada Ley Nacional de Empleo, los decretos desregulatorios, las propuestas de reforma de la Ley de Contrato de Trabajo no garantizan una mayor nivel de empleo. Un ejemplo de esto es lo que sucede en la Provincia de Buenos Aires. Se trata de la más poblada de la Argentina con el 38,7% del total del país y posee, además, la principal superficie con el 11,1%. El Conurbano Bonaerense ocupa el 1,2% de la superficie de las provincias, representa el 63% de su población, el 24,4% del total de la Argentina y posee el mayor parque industrial del país que representa el 74,4% del total de la ocupación de la provincia y el 62,3% del valor de la producción. Por esto la desocupación en esa zona se vuelve dramática al crecer en un 300% entre 1991 y 1995. En efecto, la desocupación abierta pasó del 5,7% en 1991 al 22,6% en mayo de 1995. Es importante establecer que sólo el 4% del total de los bonaerenses desocupados recibe la prestación por desempleo. La razón es la imposibilidad para los despidos encubiertos y el trabajo en negro, de reunir los requisitos para acceder a esa presentación.

Los principales sectores afectados están relacionados con las PYMES, los pequeños y medianos productores industriales y agropecuarios. Estas empresas ocupan el 70,8% de los trabajadores de la provincia. Con ello se produce aumento de la marginación, caída de ingresos y mayor pobreza porque la población con necesidades insatisfechas se estima en más de dos millones de personas de las cuales cerca del 75% pertenece al conurbano bonaerense (Cieza y Beyreuther, s/d). La provincia concentra la mayor parte de la siniestralidad laboral registrada en el país, el 48,39% de los accidentes de trabajo y el 34,79% de las enfermedades profesionales, aumento de la mortalidad por tensiones, enfermedades cardiovasculares, digestivas, de la piel, del aparato respiratorio, trastornos mentales y suicidio. Esto responde a que, con la mayor precarización laboral, se corresponde un mayor nivel de infortunios laborales ya que los trabajadores no llegan a conocer los riesgos de cada puesto de trabajo y carecen de información suficiente y apropiada. A esto se suma el tema del miedo de los trabajadores a la pérdida del empleo o a formar parte de "listas negras", lo que produce una reducción de los reclamos por enfermedad y accidente de trabajo en los últimos años. Entre 1991 y 1994 se redujeron en un 40% las demandas presentadas en la Justicia Nacional del Trabajo por enfermedades y accidentes laborales. A lo expuesto hay que agregar un aumento considerable del padecimiento de alcoholismo.

Otro ejemplo de tensiones y conflictos entre normas y expectativas sociales es la violencia familiar, especialmente contra las mujeres (sin olvidar casos de parejas con hombres maltratados pero donde el control de la información

503,5

29

es mayor por el potencial descredito que "viviría" aquel). El conflicto se produce entre un Estado comprometido con la situación de la mujer maltratada frente a costumbres relacionadas con hábitos y pautas de comportamiento donde se privilegia la posición social del hombre en las relaciones familiares.

A la situación presentada en el párrafo anterior se le podría agregar el "acoso sexual", una práctica censurable en el campo de las relaciones laborales donde pueden enfrentar las normas formales con las normas informales y se da sólo cuando existen relaciones desiguales de poder. Es decir el conflicto y las tensiones se producen cuando existe coacción y aprovechamiento de una relación de jerarquía para inducir a otro a acceder a sus requerimientos sexuales no siendo necesario el acceso carnal (Bellotti y Fontenla, 1995: 137). El caso más común se da entre hombres con posiciones de poder en una estructura organizacional respecto de mujeres que se encuentran en cargos subordinados a aquéllos. Es aquí donde, a partir de su socialización, se actúa de acuerdo con códigos normativos informales y a un sistema de expectativas que suelen tener estereotipadas las pautas y hábitos de hombres y mujeres en detrimento de lo establecido legalmente.

Cabe mencionar, también, que existen otras numerosas y preocupantes situaciones donde se producen las tensiones y los conflictos normativos como es la referida al maltrato de menores donde prevalece la violencia física, el abuso sexual, el abandono y la negligencia en el seno de la familia y en todos los estratos sociales de diferente visibilidad (Grosman y Masterman, 1992).

Respecto de la situación de la mujer en la pareja, las políticas estatales de interés, referidas a la violencia contra la mujer, no surgieron de modo espontáneo sino que fueron el resultado de la acción colectiva y solidaria de las mujeres. Los objetivos en los primeros tiempos se habían dirigido a lograr que la violencia masculina fuera reconocida y denunciada por las mujeres en una sociedad con valores patriarcales. Esto es completado por una intervención del Estado, a la que luego se suma la incorporación de especialistas a los programas que se ponen en marcha y a las estructuras burocráticas que las planifican y conducen. Actualmente se puede decir que se está viviendo una etapa de evaluación y redefinición. El problema del maltrato de mujeres es de destacada repercusión y trabajo en la Argentina, particularmente en cuanto a prestaciones asistenciales, formación de grupos de ayuda mutua y difusión (Chejter, 1995: 43).

La violencia marital limitada a los actos de agresión entre cónyuges o concubinos se ha puesto, entonces, de manifiesto en el ámbito social. Los estudios empíricos se limitan a aquellas situaciones en donde se ha pedido

ayuda pública o privada, es decir cuando se ha revelado el problema y se ha tomado posición activa frente al mismo (Grosman, 1992: 21). Para un estudio de la presente situación se aplicaron cuestionarios (155 encuestas) a autoridades de instituciones y profesionales a los cuales acuden los denunciantes de maltrato físico por parte de su cónyuge o compañero. Se procedió, también, a realizar estudios en profundidad de cinco casos de víctimas de violencia familiar. A esto se le agregan entrevistas con informantes claves, análisis de fallos (casos de homicidio o lesiones graves) y de sentencias dictadas en juicios de divorcio por la causal de injurias graves.

Los resultados obtenidos con estas técnicas de recolección de datos permiten concluir que, en la Argentina, la violencia familiar es un problema significativo para la sociedad ya que no se está frente a reacciones aisladas, sino que el comportamiento agresivo afecta a numerosos familiares de todos los sectores sociales. Se destaca la invisibilidad del fenómeno, circunstancia que impide conocer su verdadera extensión. La "cifra negra" (desconocida) supera en mucho al dato expreso que ya de por sí es elocuente, y se presenta como causa principal de esta situación la anhímona entre las creencias sociales de estructuras familiares preteritas y las derivadas de las nuevas formaciones sociales. Esta situación origina encubrimiento que atraviesa, en mayor o menor medida, todos los sectores sociales y todas las instancias públicas. Se destacan la socialización, lo cotidiano, el bochorno y la vergüenza como elementos causales de la violencia. La invisibilidad de la situación originada en la dependencia emocional y económica de la mujer, se articula con una ideología de ocultamiento que opera en la sociedad en su conjunto. La red familiar y social en la cual se halla incluida la víctima avale, explícita o implícitamente, su resignación, más aún, la expresión "por algo será" (muchas veces dicha sin reflexión y otras pensada) apoya el poder disciplinario del hombre e intensifica la inercia del afectado pues supone que su denuncia del hecho no será escuchada ni atendida (Grosman, 1992: 361 y 362). El conflicto normativo se hace manifiesto, cuando se considera la vida familiar como un mundo privado, de cuestiones íntimas, en el cual nadie debe inmiscuirse. Esta situación puede provocar el aislamiento social del grupo.

Existe una intensa adherencia a los valores tradicionales que refuerzan los estereotipos masculinos (independientes, libres, fuertes, inteligentes, guardianes de los valores familiares, máxima autoridad, etcétera) y los estereotipos femeninos (dependientes, débiles, no inteligentes, temerosas, tiernas, reprimidas para el placer, subordinadas al hombre, etcétera). Por lo expuesto se registra una débil presencia de las modernas ideologías explícitas, basadas en la norma formal. Esta situación revela la falta de efectividad de la

ley ya que, también en el ámbito de la Administración de Justicia, predominan los valores referidos a preservar la unidad de la familia, el resguardo de la intimidad y el hecho de que la víctima no desca que se prosiga con la acción-pena. Por esta razón, en la ley aparece una contraposición de valores: por un lado, la integridad corporal y, por el otro, una mayor indulgencia en el tratamiento de las agresiones cometidas en el ámbito familiar.

Por lo expuesto queda expresada la tensión entre expectativas sociales enfrentadas y la poca efectividad de las normas jurídicas para lograr compatibilizar distintos intereses y necesidades. Si bien en una sociedad moderna, y de masas, la justicia y el derecho gozan de relativo prestigio, la situación respecto de distintos fenómenos sociales problemáticos encuentran poca posibilidad de ser resueltos desde esos sectores.

#### \* 4.2. El derecho y los medios de comunicación

Una posible forma de intentar un acercamiento de las dos expectativas, las jurídicas y las sociales, para disminuir la brecha que las separa puede ser a través de los medios de comunicación; lo que sucede es que no existe una capacidad interlocutoria, una fluida interacción entre el emisor y el receptor. El problema es que en el "imaginario popular" las denuncias y las noticias sobre hechos o situaciones pueden ser consideradas como una nueva versión de "hacer justicia" olvidándose que la noticia, luego de obtenida como mercancía por el emisor, está sujeta a múltiples factores como las necesidades técnicas profesionales, el método de emitirla para llamar la atención, las técnicas de captación de compradores, y emisión de la opinión del periodista que transmite la noticia. También existen influencias directas de los intereses políticos y comerciales de los editores, quienes definen qué noticia se emite y cuáles se excluyen. Aquí se está en presencia de una construcción social, no del fenómeno tal cual es.

Un ejemplo de lo expuesto es el aumento de audiencia respecto a programación con contenido sexual, los deportes y los crímenes. Por ejemplo, y respecto del último caso, en "informativos policiales" se puede afirmar la existencia de una "condena mediática" olvidando la intención del Sistema Judicial (Poder Judicial). Este tipo de condena tiene mucho que ver con los medios de comunicación concentrados, a modo de ejemplo: el Grupo Clarín (Diario Clarín, Canal 13, Radio Mitre, FM 100, Papel Prensa, etcétera) o el Grupo Atlántida (Revista Gente, TELEFE, Radio Continental, FM Hit, etcétera), entre otros. Esta concentración lleva a la pequeña empresa a desaparecer por su incapacidad de competir con los grandes medios unidos a la dependencia tecnológi-

ca y las campañas de publicidad (nacionales e internacionales) que determinan la óptica y la importancia que se le da a la criminalidad y cómo esta puede identificarse con los fines empresariales. De todos modos, los medios de comunicación, al identificarse con las sociedades y la cultura de masas, permiten ser un instrumento que mantiene la estabilidad del sistema social. Es decir que el factor económico empresarial se le agrega la identificación con mecanismos relacionados con el mantenimiento de pautas de comportamiento.

"En los tiempos de paz social, estabilidad económica y regular funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, es posible tener un estereotipo generalizado sobre las bondades y deficiencias de las leyes y sobre la eficacia o falta de ella de ciertas funciones del Estado, tal es el caso de la Administración de Justicia. En estos supuestos el estereotipo socialmente difundido será el de una opinión mayoritaria que sostendrá la razonabilidad del sistema legal y la actividad eficaz de los funcionarios encargados de hacerlo efectivo y una minoría que ejerce de una conducta desviada (delictiva o no) sostendrá un estereotipo negativo de aquello, como expresión de un modo diferente de vida" (Ves Losada, 1991: 29). En cambio, en los tiempos de inestabilidad social, de fuertes tensiones sectoriales, cuando la disconformidad y el descontento ponen en tela de juicio los estereotipos que afirman las bondades del sistema social imperante, la seguridad que brindan es efímera y son inevitablemente cuestionadas. Surgen, entonces, los antagonismos sociales con sus respectivos estereotipos contrapuestos sin que ninguno imponga su hegemonía sobre el otro (Ves Losada, 1991: 18). A partir de esto se puede acudir a los medios de comunicación para cubrir los déficits institucionales generalizando y simplificando la realidad social. Es así como se construyen estereotipos de la justicia y de los operadores del derecho.

Del estereotipo de buen juez sabio y comprensivo, severo pero humano, se pasa a otros muchas veces contrapuestos, y que obedecen por lo general a intereses en pugna. Por lo expuesto, y junto a las migraciones internas hacia centros industriales, mejoras del nivel de vida de distintos sectores de la población y la presencia de distintas ópticas o enfoques de los medios de comunicación, se lleva a poner en duda la eficacia del sistema judicial para resolver conflictos. El hombre de la calle se encuentra influido por lo que dicen los medios televisivos, radiales, periódicos y revistas en general sobre la Administración de Justicia, aunque hay sobrados motivos para creer que la opinión pública de estos días no la forman los medios ya que estos son, aparentemente, meros voceros de reclamos generales (Ves Losada, 1991: 18 y ss.). Es de suponer que detrás de las noticias hay hechos reales.

50315

30

Una investigación efectuada por la Dirección de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia, revela una distorsión de la realidad en los medios de comunicación. Ejemplo de esto es la discrepancia entre los datos oficiales y la establecida en la prensa:

1. Los datos oficiales indican que los delitos en el ámbito nacional se elevan del 6 % en 1991/2, al 7,65 % en 1992/3. En la prensa se establece un aumento del 12 % en el mismo período.

2. Respetto de los bienes jurídicamente tutelados, en los datos oficiales se destaca el 65 % de delitos contra la propiedad y el 18 % contra las personas. En la prensa se destaca el 18 % de delitos contra la propiedad y el 40 % contra las personas (Tavananska, 1996: 18 y ss.).

Es difícil determinar la causa de la distorsión aunque se puede mencionar: llamar la atención o atraer a los compradores de mercancías relacionadas con la seguridad (armas, seguros, alarmas, etcétera) junto con un refuerzo de quien no es delincuente, fortaleciendo el estereotipo de este, es decir que se trata de una persona joven, casada, blanca, habitante de lugares urbanos, heterosexual, católica, padre, con formación terciaria/universitaria, buen empleo, bella tez, peso y estatura normales y practicante de deportes. La función de este estereotipo es reforzar los valores dominantes, elegir un "chivo expiatorio" a exogrupos o grupos de referencia negativos y por último temer al más castigado por la crisis económica (Tavananska, 1996: 22). Por ello se puede afirmar que los medios de comunicación pueden llegar a desplazar al sistema judicial en lo referido al control de tensiones sociales y, al mismo tiempo, homogeneizar, simplificando y tergiversando la realidad social.

### 5. Discriminación laboral

La discriminación es un resultado de actos o normas formales producidas o emanadas de la Administración Pública (Organización) en las cuales la misma obstaculiza a se abstiene de participar en la integración social de distintos agrupamientos sociales o subculturas (Gerlero, 1995: 82).

Se está en presencia de discriminación laboral cuando se le niega a una persona el acceso a una ocupación, cuando una persona o un grupo de personas que, poseyendo los requisitos necesarios para desempeñar correctamente una función, no lo pueden hacer por razón de algún rasgo o atributo que no atenta contra ese correcto desempeño. De manera que no se trata de una cuestión de porcentajes de hombres y mujeres en una actividad laboral, lo que importa son las calificaciones o si se cuenta con los

requisitos para acceder a un trabajo y la ocupación real del cargo. Esto da lugar a una discriminación horizontal respecto de la distribución entre sectores de la actividad (primario, secundario y terciario) y vertical referido a posiciones jerárquicas dentro de un mismo sector.

En 1980 dos tercios de las trabajadoras mujeres estaban concentradas en un corto número de ocupación del sector terciario de la economía, básicamente en los servicios personales (domésticos remunerados 21 %) de educación primaria y de salud (7 y 3 %, respectivamente) y en el comercio (como empleadas el 21 % y como vendedoras el 15 %). Además los servicios que están mayoritariamente en manos de las mujeres, son típicamente femeninos, como el servicio doméstico con el 98 %, la enseñanza primaria con el 90 % y la enfermería, con el 83 % de mujeres en esas ocupaciones (Wainerman, 1996: 59). En 1993, en el área metropolitana de Buenos Aires la situación no es muy diferente. Por lo tanto, hay ocupaciones en las que la mayoría de los trabajadores son mujeres (enfermeras, modistas, maestras) y otras en la que la mayoría son varones (plomeros, mecánicos, chofer de colectivos) la pregunta que surge es entonces ¿por qué será?

Se estima que las mujeres son discriminadas por los empleadores en las ocupaciones, por distintas razones. Se supone que debido a las obligaciones familiares, las mujeres son menos productivas y más onerosas que los varones porque están a cargo del cuidado de la casa, de los hijos o del marido (frente a una enfermedad), todo esto acompañado por una legislación laboral protectora de la maternidad. Se suele afirmar que no tienen condiciones para cargos directivos porque están poco dispuestas a hacer horas extras, a quedarse fuera de hora cuando el trabajo lo requiere, a viajar, a rotar de horarios, a cambio de sede de trabajo. Se agrega a los motivos de discriminación que las mujeres, debido a las obligaciones familiares y a igual edad que los hombres, tienen menos experiencia de trabajo que ellos. Es decir que la mujer no está entrenada y tiene poca capacitación, lo cual dificulta posible ascensos.

En un trabajo sobre la ocupación de enfermería "en particular" se busca una aproximación a la situación aquí planteada (Wainerman, 1996: 60). En las respuestas a los cuestionarios efectuados, en el marco de la investigación citada, casi nadie atribuyó a la enfermería rasgos femeninos, casi nadie consideró que para ejercerla fueran necesarias las cualidades que la cultura adjudica a las mujeres referidas a las habilidades naturales: destreza normal, suavidad, dulzura. Para la mayoría de los entrevistados la actividad puede ser desempeñada tanto por mujeres como por varones, para la mayoría lo que realmente importa es la vocación, la capacitación y la responsabilidad

para poder desempeñarse bien en su tarea. De todos modos, a comienzos de la década de 1990, en el ámbito de los hospitales de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los varones no sobrepasaban el 18 % del personal de enfermería de todos los niveles (auxiliares, profesionales y licenciados), cifra que había venido aumentando a partir del 15 % a comienzos de la década de 1980, a pesar de que en el siglo pasado y a principios de este era una actividad con numeroso personal masculino.

Se puede afirmar que a partir de fines del siglo pasado, y con la incorporación de la Argentina al sistema de la división internacional del trabajo, el país inició un proceso de modernización y de crecimiento que transformó la estructura económica y ocupacional, pero la diversificación laboral fue patrimonio exclusivo de los varones (uso masivo de la fuerza física, empleo de maquinarias complejas) acompañada por un cercenamiento de las oportunidades de las mujeres, quienes en su mayoría quedaron ausentes del proceso de modernización ocupando, además, los niveles inferiores de cada actividad ya que se identificaban con actividades tradicionales artesanales. Con posterioridad, en la década de 1950, el crecimiento de las industrias metalúrgicas, mecánicas, químicas y petroquímicas confirman el predominio del ascenso de la actividad masculina por sobre la femina identificada esta con la industria textil y de alimentos.

Por esta razón, las mujeres terminan en la actividad terciaria, relacionadas especialmente con el comercio y los servicios (salud pública, educación, finanzas). Frente a la recesión industrial o la desindustrialización (décadas de 1980 y 1990) los varones fueron absorbidos por el sector terciario disminuyendo substancialmente, en consecuencia, el número de mujeres. Esto demuestra que las ocupaciones no son naturalmente "femeninas" ni "masculinas", sino que adquieren sus marcas genéricas en obediencia a la acción de representaciones culturales, de un orden cultural en las definiciones sociales de los roles femeninos y masculinos y de necesidades sociales y económicas históricamente cambiantes.

El trabajo de campo aquí analizado tiene como objetivo principal comparar la proporción de mujeres y de varones entre el personal que posea los requisitos necesarios para ocupar las posiciones de más alta jerarquía, con la proporción de mujeres y de varones entre el personal que efectivamente ocupaba las posiciones de la más alta jerarquía, es decir quienes eran ocupantes potenciales con quienes eran ocupantes efectivos.

Los requisitos que se exigen son tener 45 años o más de edad, educación superior completa y en medicina, y contar con 6 o más años de antigüedad

en el ejercicio del cargo. Lo que se descubre, a partir de la investigación, es que mientras entre los ocupantes potenciales de los puestos de conducción casi un cuarto eran mujeres (24 %), entre los que efectivamente detentaban esos puestos eran menos del 7 %, a diferencia del personal masculino ya que el 76 % de ellos cumplía los requisitos y el 93 % ocupaba los cargos de conducción. Por lo tanto en el sector salud, las mujeres están presentes pero ocupan cargos subalternos. Los varones están concentrados en el más alto nivel jerárquico, mientras que las mujeres se distribuyen entre niveles intermedios y bajos de la pirámide ocupacional.

Respecto de la discriminación laboral, en otra investigación sobre el perfil del abogado en la Provincia de Buenos Aires (Fucito, 1996: 191). Se destaca en el análisis cuantitativo y cualitativo la relación del abogado litigante con los jueces y la posible discriminación que viven los primeros.

En el trabajo se parte de la falta de una relación fluida entre abogados y jueces, confirmando la distancia social entre estos que genera distintas dificultades cuando se trata de solucionar conflictos y tensiones sociales. A lo expuesto se le agrega la existencia de discriminación para con las mujeres egresadas de las facultades con el título de abogadas. "Si comenzara a ejercer la profesión es difícil, para las mujeres lo es más: porque puede aparecer un abogado mayor, formado en otras épocas que no acepta coexistir con mujeres y las menosprecia o ironiza sobre ellas o porque se las asocia a roles sexuales prevaletcentes o porque parece que hay que pagar un precio mayor si es mujer e inexperta que si es hombre e experto" (Fucito, 1996: 201). Un ejemplo de las entrevistas aplicadas es muy significativo, un juez le dice a la abogada: "Usted tiene la contra de ser mujer y de ser joven".

En la investigación cuantitativa se destaca que un 10 % de la muestra son mujeres jóvenes que se sintieron altamente discriminadas, un 40 % de la muestra se identifica con una baja discriminación. El resto no se ha sentido discriminada o no ha sufrido discriminación. Es de destacar que el porcentaje de aquellas abogadas que se sintieron discriminadas son profesionales que declaran haber experimentado mejora respecto de su estado patrimonial económico cinco años atrás, podría ser que éstas trabajen más y, por lo tanto, tengan mayor oportunidad de estar en contacto con situaciones del tipo aquí tratado. Estas profesionales, además, están identificadas con aquellas que hicieron mayor esfuerzo para lograr su posición.

## Integración y formación de la persona social

El proceso de socialización, que tiene como objeto la formación de la persona, se produce a través de la ejecución de roles que se hallan fijados en los distintos status. La sociedad es la encargada de integrar a los individuos y lo hace a partir de la socialización asumiendo que el individuo biológico, mediante la interacción simbólica (lenguaje), asimila normas, valores y conocimientos propios de su cultura y se convierte en persona y miembro pleno de diferentes grupos. El proceso de socialización varía, depende de los agentes, las situaciones sociales y las peculiaridades individuales del niño.

### 1. La familia como agente de socialización

El análisis de la familia como grupo social destacado, en el proceso de socialización, es complejo y dificultoso debido a que se relacionan directamente con la propia experiencia y sentimientos del investigador ya que se trabaja en un ámbito estructurante personal. Hay una infinidad de conceptos sobre familia que van desde ideas básicas y casi primarias, al considerarlas producto de relaciones de parentesco integradas por ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje, hasta supuestos en que la familia es un grupo de gente que vive en una misma casa bajo una autoridad determinada, pudiéndose llegar a definiciones más abarcativas de situaciones sociales identificadas con la sociedad moderna, que consideran a la familia como el agrupamiento de personas unidas por distintos factores biológicos y/o sentimentales y/o morales y/o legales.

En el último caso de los presentados en el párrafo anterior se integran situaciones consideradas irregulares en un modelo "clásico" porque se contemplan, entre otros ejemplos, hogares originados en matrimonios que terminan en separación y/o divorcio, concubinatos (unidad de hecho), hogares

1. *Pedrido Odile, Hacia el concepto de familia en Argentina*. Ediciones Trilce, Buenos Aires, 1997. Pág. 1. Análisis efectuado a partir de: *La Familia*, Erich From, Max Horkheimer, Talcott Parsons, entre otros, Ediciones Península, 1972; y *Ver en Familia*, Waltraud Catalina, Elizabeth Jelin y Eva Giberti, entre otros, UNICEF/Losada, 1994.



ensamblados o reconstituidos, parejas homosexuales con hijos de parejas anteriores o sin ellos, hogares sustitutos (Pedrido, 1997: 9). En estos casos se pasa de una realidad identificada con cambios o crisis, producto de transformaciones importante que afecta el núcleo familiar, como la mayor esperanza de vida, la disminución en general del analfabetismo, la apertura de los medios de comunicación, el descreimiento en instituciones (escuelas, gobiernos, partidos políticos), debilitamiento de los paradigmas de trabajo y de la productividad. De esta manera se generan, en la familia, disminuciones en el número de miembros, postergación de la edad para casarse, aumento de uniones consensuales, de hijos extramatrimoniales, de parejas sin hijos, de madres sin padres, de flexibilización en las costumbres y reglas familiares, de necesidades económicas que hace que los dos cónyuges deban salir a trabajar (Pedrido, 1997: 7 y 8). La familia en la Argentina vive estos cambios debido a que se ha modificado no solamente su constitución sino también su conformación sexual, deslindando el sexo reproductivo del sexo placentero (González, 1998: 14 y ss.), impactando en las relaciones personales del grupo y de éste con la sociedad.

### 1.1. La familia tradicional y la familia moderna

En el trabajo de campo realizado en la ciudad de Córdoba, Eva Chamorro (Chamorro Greco de Prado, 1997: 5) parte de considerar a la familia como un sistema social representado por dos o más status-roles sociales, diferenciados e interrelacionados, donde a cada status le atañen normas, valores y, sobre todo, comportamientos. Por ello, a la familia se la puede considerar sobre la base de los comportamientos de sus miembros que denotan actores para determinar status y que, en sus interrelaciones, producen actividades que contribuyen a la funcionalidad del sistema.

Para el trabajo empírico se considera como "círculo social" a la familia nuclear, la formada por el padre, la madre y los hijos en donde la persona desempeña su actuación en relación al status de padre o al de madre o al de hijo y la actividad que cada uno de ellos lleva a cabo, en virtud de esas posiciones o status, para satisfacer los propios fines y necesidades y los de su círculo. Estas son las conocidas como funciones familiares (económicas, educativas, socializadoras, de afecto, protección, recreación y religiosas) (Chamorro Greco de Prado, 1997: 5).

Hay que aclarar que en el trabajo se remarca la importancia del entorno social y del tiempo como elementos que afectan al grupo tanto en su estructura como en sus funciones, lo que puede implicar variaciones en los com-

portamientos del rol. Por esta razón, para cada época y clase de sociedad, se ha dado un tipo de familia con el ejercicio de los roles propios de ese grupo. Así se destacan dos tipos de familia: la tradicional (patriarcal o institucional) y la moderna (democrática). La primera se encuentra caracterizada por la autoridad del padre, con residencia patriarcal, descendencia patrilineal, desigualdad de poderes y autoridad del marido sobre la mujer, solidaridad familiar comunitaria, extensa en cuanto al número de miembros, aguda división del trabajo con metas específicas y carentes de flexibilidad para todos los miembros, educación rígida para los hijos. Respecto al segundo tipo, la familia moderna, existe una presencia de igualdad en cuanto al poder y la autoridad entre marido y mujer, decisiones democráticas, residencia neolocal, libre expresión de afectos, las valoraciones son racionales e individuales y por el reducido número de miembros es nuclear, la división del trabajo es confusa, las metas están identificadas con la edad, sexo y potencialidades de los actores.

Para comprobar la situación de la familia en la ciudad de Córdoba se parte de la escolaridad y la edad de los integrantes familiares como variable independiente y los comportamientos concernientes a los roles de cada miembro de la familia y a las actividades que desarrollan como variables dependientes. La menor edad y/o la mayor escolaridad están identificadas con una mayor innovación, mayor aceptación y mayor difusión de formas racionales o modernas de sentir y obrar para los comportamientos familiares. Para corroborar la hipótesis se utiliza como instrumento de recolección de datos 200 cuestionarios para adolescentes (alumnos de colegios secundarios públicos y privados entre 13 y 19 años) y 340 cuestionarios para madres de familia.

Al comparar investigación realizada entre 1964 y 1966, con la realizada entre 1993 y 1996, aparece una notable disminución de los padres con baja escolaridad (primaria completa/incompleta) y un importante aumento de la escolaridad alta (terciaria/universitaria). El cambio en la situación educativa de las madres es significativa, ellas han logrado disminuir las diferencias de años de estudios con sus maridos, a su vez, terminan los ciclos de estudios, lo que las ayuda a mejorar su situación en este aspecto. Es evidente que los matrimonios tienden a lograr una situación de igualdad con respecto a distintas características sociales y, también, a los años de escolaridad, influyendo decisivamente en los comportamientos y situaciones de grupos familiares (Chamorro Greco de Prado, 1997: 81).

En las conclusiones del mencionado trabajo la familia tiene un alto grado de consenso acerca de su inicio en el matrimonio, objetivo vital tanto para

los hombres como para las mujeres. Las personas aspiran a concretar con el casamiento una relación afectiva especial, para toda la vida, y como una alternativa eventual se puede llegar a una separación o divorcio ya que se han marginado las actividades negativas comunes que se tenían respecto de aquel hecho.

El noviazgo, la entrega de las alianzas y el aviso o anuncio en los medios de comunicación perdieron vigencia. Se destaca la presencia de las relaciones de "parejas", identificadas con una unión consensual o con situaciones de convivencia por uniones anteriores. Si bien se produce la irrupción masiva de la mujer en la población económicamente activa sobre la que han obrado como causas la mayor escolaridad, los jóvenes, en general, emplean a trabajar cada vez más temprano y al casarse las mujeres continúan con las tareas remuneradas. Perdura la apreciación de que el status económico del nuevo matrimonio depende de la posición ocupacional del marido. De todos modos el padre/marido ya no es el único generador de los recursos en el hogar. Se comparten las decisiones hogareñas tomando, ambos padres, las decisiones. Sin embargo persisten, todavía, valoraciones en relación a lo masculino y a lo femenino, por ejemplo, en las tareas domésticas o en la crianza y en las expectativas de comportamiento de los hijos. Las hijas conocen esas tareas y ayudan más que los varones a sus madres.

La crianza y la socialización de los hijos está a cargo de la madre y es opinión generalizada que los padres jóvenes lo hacen indistintamente (Chamorro Greco de Prado, 1997: 216). Los padres participan en algunas actividades relativas a la educación inicial participando en reuniones, en la cooperadora y los llevan y traen al establecimiento escolar. Los menores son educados en sus roles de varón y de mujer, y se observó una tendencia a la adaptación de hábitos comunes (unisex) referidos a ropas, juguetes, entretenimientos, peluquerías, entre otros, aunque existan diferencias en cuanto a la libertad de acción en los juegos y en los deportes. Respecto a los adolescentes, ganan autonomía y lloran a tener un status social en una cultura juvenil con formas de proceder inherentes a esta etapa de la vida. "La frecuencia interactiva entre los padres y los hijos continuó siendo menor que la de las madres y los hijos. Aquello se intensifica en los horarios de la noche y los fines de semana (Chamorro Greco de Prado, 1997: 217). Los varones tienen más confianza para hablar con las madres que con los padres y les hacen confidencias sobre temas sexuales y afectivos. Esta situación se intensifica en los niveles bajos y medios de la sociedad. Se da un aumento de prácticas deportivas entre padres e hijos. Hay una mayor fluidez e informalidad en la interacción y una mayor tolerancia por parte de los

padres hacia los comportamientos de los hijos. La autoridad paterna y aun la materna tienden a ser imprecisas porque se han acortado las distancias entre las generaciones. La confianza entre padres e hijos aumenta considerablemente aunque no de manera óptima. Los jóvenes han alcanzado una autonomía cultural donde los consumos son jerarquizados en función de modos de autonomía comercial ha abierto las puertas a los jóvenes como consumidores autónomos, lo que crea una serie de actividades específicas y, también, una publicidad especial que apela a los mismos rasgos y valoraciones juveniles para hacerla dinámica y atractiva. Ellos se refugian en sus pares por edades para comentar y discutir acerca de aquellos temas de su interés.

Los padres ya no hacen, en gran medida, diferencia respecto a las aspiraciones para el futuro de sus hijos e hijas dejando, por lo tanto, las valoraciones tradicionales para el futuro educativo y ocupacional de las mujeres, aunque son los padres de hijos de bajo nivel económico y con menos escolaridad los que dan muestras de un mayor nivel de aspiración para el futuro educacional y ocupacional de los hijos, mientras que los de nivel medio y alto dejan en libertad de elección a sus hijos y/o hijas.

El rol de la madre se modifica notoriamente con la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Esas posibilidades se correlacionan con el aumento de la escolaridad de la mujer y porque la madre participa en el sostén del hogar. Ella sigue teniendo autonomía en la casa y por lo tanto decide de acuerdo con sus propias aptitudes, necesidades y circunstancias. Se reconoce que la esfera privada (matrimonio, parentesco, vecindario, amistad) tiene una variedad de funciones referidas a prestar servicios prácticos y emotivos para los individuos y sirve para moldear la personalidad y renovar energía física y emocional de los integrantes para su actuación en la esfera pública. La madre se sigue haciendo cargo del cuidado pero la mayor escolaridad influye en la manera de coparticipar y dirigir los juegos de sus hijos, los castigos y recompensas que utiliza para conducir y socializar a los hijos empleando, en gran medida, la conversación y la reflexión como forma de resolución de conflictos. El castigo físico se hace presente con más frecuencia a medida que se desciende en el grado de escolaridad que ellos han alcanzado.

El 74 % de la muestra rescató como castigo la penitencia, un 45% el castigo físico. Las formas más comunes de castigo son: "no dejarlo salir", "privarlo de entretenimientos", "encerrarlo en el baño", "darle un chato", "no darle el gusto", mientras que como recompensa se destaca: darle el gusto. A esto se le agregan besos, palmadas cariñosas, conversaciones de estímulo entre otros ejemplos. Los castigos físicos son más frecuentes en las familias con cinco o más hijos. En las familias de tres o menos hijos se usan

la penitencia y los retos, siendo el proceso de interacción más racional. Al número de hijos hay que sumarle, como se mencionó, la escolaridad de la madre. Cuanto mayores, más premiar a sus hijos y utilizar la reflexión sobre la acción realizada para la internalización de pautas-valores y sentimientos apropiados del grupo familiar y para facilitar la futura adecuación a los otros grupos y a la sociedad toda (Chamorro Greco de Prado, 1997: 121 a 125).

De todas maneras, el aprendizaje de los roles sociales se da en un contexto de democratización de las relaciones ya que los hijos obedecen, en primer lugar, a cualquiera de los dos ascendientes cuando no hay tanta diferencia entre el status del padre y de la madre cuando estos tienen una escolaridad alta. Cuando disminuye la escolaridad de la madre, menor es su autoridad con respecto a los hijos. La del padre no disminuye ya que es el quien generalmente ejerce el poder y la autoridad. Se destaca que las relaciones democráticas, los controles igualitarios unidos a la reflexión y la recompensa en la socialización se da en los matrimonios con status social y escolaridad similar.

"Si bien la familia ejerce actos de educación formal e intencional. Esto, en su generalidad, está a cargo de una serie de instituciones que en su conjunto forman el sistema educacional. Las valoraciones, las aspiraciones educacionales que los padres tienen respecto a sus hijos y los vinculaciones que guardan con dichas instituciones determinan, en gran forma, el destino cultural del hijo y sus adaptaciones en la sociedad" (Chamorro Greco de Prado, 1997: 127). Esto va depender de una orientación valorativa racional o no-racional. En el primer caso, la educación se ve como una forma de control y ayuda que los padres prestan a sus hijos para que ellos alcancen los fines educacionales, en cambio en el segundo caso falta la asistencia explícita y voluntaria de los padres. Un referente de esto es la vinculación de los padres con los establecimientos escolares. En el preescolar ambos padres tienen contacto con los docentes y con la escuela, aunque la presencia de la madre es más frecuente. En la escuela primaria la madre adquiere un rol protagónico mientras que el padre suele colaborar en una materia determinada, llevarlos y traerlos de la escuela y encargarse de la compra de libros, entre otras actividades. Cuando las madres son ubicadas como de baja escolaridad personalizan la valoración del proceso educativo, aceptando a la maestra si ella es "carinhosa" y considerando a la escuela como suficiente para "adelantar" a sus hijos. En este caso las madres tienen en cuenta el aprendizaje por sobre el rendimiento logrado.

Las madres con escolaridad media y alta destacan que la enseñanza es parte de un sistema y logran, o no, el establecimiento escolar. En el nivel

medio (secundario) ambos padres tienen contacto con el colegio pero siempre se destaca la madre. En esta etapa los padres refuerzan la independencia y la libertad de sus hijos para la elección respecto del futuro. Aspiran a que ellos tengan una carrera universitaria pero con un tinte maternal y realista en lo que se refiere a una salida laboral sin que haya mayor diferencia entre los deseos de los padres y de las madres en cuanto al futuro de los hijos sean estos mujeres o varones (Chamorro Greco de Prado, 1997: 129 a 132).

Hay que destacar que las madres ayudan en las tareas escolares de sus hijos y son vínculo de unión entre la familia y los establecimientos escolares y, también, con las instituciones religiosas. En esta área es ella la que continúa con el rol más activo que el padre con respecto a la iniciación y guía de sus hijos en la religión. Hay que recordar que se da un aumento en las familias de miembros con distintos creos. La mujer, además de su actividad laboral, participa de asociaciones gremiales y políticas; en estratos medios y bajos, por ejemplo lo hace en protestas callejeras por problemas que afectan a su zona de residencia relativas a los terrenos, viviendas, transporte e inseguridad. La madre maestra, de manera evidente, un criterio racional en sus opiniones respecto del número de hijos por familia.

### 1.2. La familia extensa moderna

Continuando con la investigación ya citada aparece, en la ciudad de Córdoba, un fenómeno social típico de las sociedades tradicionales en el contexto de una sociedad moderna. En la sociedad moderna la familia se caracteriza por ser nuclear de acuerdo con el número de miembros, mientras que en la sociedad tradicional la familia es extendida, o sea aquella que incluye a dos o más familias nucleares unidas por lazos de parentesco consanguíneo tales como aquellos de padres a hijos.

En Córdoba aparece la familia extensa moderna. "Si bien, sólo en el 20% de los casos, para la muestra considerada, tres generaciones conviven bajo un mismo techo, ello no nos llevó a eximir de considerar la otra realidad de los familiares que viven en distintos domicilios (por una parte los padres y, por la otra, los hijos casados) y que forman la familia extensa moderna" (Chamorro Greco de Prado, 1997: 45).

El hecho de que padres e hijos casados vivan separadamente no disminuye la interacción reciproca constante, elemento destacado de la familia, de la que resulta un círculo social estrecho. Se trata de resolver los problemas diarios de cualquier índole que va desde la ayuda material a los consejos o a la compañía, compartiendo todos los mismos intereses.

El intercambio de servicios, en muchos casos de bienes (ayuda económica esporádica o sistemática), entre padres e hijos y viceversa se da en los niveles medios y bajos. El auxilio económico unilateral o recíproco entre padres e hijos es destacado en la actualidad. Hijos jóvenes recién casados y personas jubiladas constituyen los ejemplos más representativos de esta situación.

Más allá de que no se da la misma habitación domiciliaria, la vinculación tan asidua hace que los familiares de los padres y de los hijos se muestren como una sola, extensa. La presencia de este tipo de familia termina siendo funcional a las actividades ocupacionales que desarrolla fuera del hogar la mujer casada que tiene hijos, ya que de este modo, ella cuenta con la colaboración de los abuelos, hermanos y cuñados, sobre todo solteros, para que la ayuden con los hijos. A esta funcionalidad se agrega el hecho de posibilitar la actividad social fuera del hogar de la pareja joven.

Esta situación facilita una mayor vinculación entre abuelos y nietos aunque el resultado de la interacción sería disfuncional en lo que se refiere a la nueva forma de crianza y medios modernos de enseñanza para las distintas facetas de la personalidad de los nietos, quedando los padres subordinados a los consejos, atenciones e influencia de los abuelos. Estos ejercen la autoridad sobre los nietos, en forma más o menos manifiesta. Existe además una situación de solidaridad cuando los nietos se refugian y se amparan en los abuelos, además de la función instrumental al suplir a los padres. Por esto los abuelos, además de la función instrumental al suplir a los padres en el cuidado de los hijos, cumplen con una función afectiva. En los castigos, recompensas, cuidados, formas de crianza, tratamiento de enfermedades y conocimiento de principios y oraciones religiosas, los abuelos cumplen una destacada función y tienen un rol definido en el grupo familiar. Esto lleva a remarcar la importancia de los abuelos en la socialización del niño.

El tipo de familia aquí analizada se da también agregando la habitación en la residencia domiciliaria, cuando la neolocalidad es solo una aspiración generalizada de los nuevos matrimonios. Los jóvenes al casarse recorren a sus mayores, en especial a los padres de la novia para vivir juntos aunque sea temporalmente. Así los padres viven corrientemente con sus hijos y/o hijas casadas conviviendo dos generaciones. Factores demográficos y científicos que producen el envejecimiento de la población y la prolongación de la vida respectivamente, facilitan este tipo de familia cuando los ancianos acuden a vivir con sus hijos. Asimismo, es de destacar que en el trabajo de investigación se detecta la presencia de ancianos que viven solos o en albergues grupales llamados geriátricos, forma de vida para los padres de avanzada edad y por

una valoración de la familia nuclear por sobre la familia extendida (Chamorro Geco de Prado, 1997: 215).

### 1.3. Conflictos familiares

La existencia de conflictos familiares puede ser considerada como un referente o indicador de la desorganización familiar, cuando existe una perturbación o falta de consenso en el grupo familiar que afecta a los hábitos sociales dominantes y que imposibilita el desarrollo armonioso del grupo como tal y el cumplimiento de sus objetivos. En la práctica existe desorganización familiar cuando háy una pérdida de objetivos comunes, una reducción de la cooperación de los miembros entre sí, una falta de coordinación de los roles, una desordenada participación de los miembros de la familia y una falta de consenso con respecto a las actitudes emotivas como el amor, la lealtad, la confianza y el respeto (Chamorro Geco de Prado, 1993: 181-182).

De todos modos las causas de esta desorganización pueden ser endógenas o exógenas. Son endógenas cuando se refieren a dificultades internas en las relaciones matrimoniales, entre hermanos, entre padres e hijos o en el grupo familiar como un todo, por tensiones, conflicto de roles o de incumplimiento de sus funciones. Son exógenas aquellas que provienen del mundo externo, como accidentes y enfermedades que tratan de ser aliviadas con medidas previsionales o de seguros sociales, lo que se puede agregar, por ejemplo, depresión económica, amenazas generales al grupo familiar (Chamorro Geco de Prado, 1993: 184-185). Esta situación da origen a los conflictos familiares entendidos como aquellos supuestos en los cuales dos o más personas relacionadas por vínculos parentales: biológicos, de hecho y/o legales, tienen intereses contrapuestos o diferenciados creados a partir o con motivo de esos vínculos. Se trata de situaciones que se producen en la familia y que pueden ser susceptibles de trasladarse a otros ámbitos, como el jurídico. Si esto ocurre se está en presencia de conflictos jurídico-familiares (Pedrido inédito: 53 y ss.). Este tipo de conflicto se presenta, entonces, como un referente de la desorganización familiar y puede ser analizado en los Tribunales de Familia en jurisdicción de la Capital Federal. Para esto se toman 170 dimensiones provistas por el Centro de Informática Judicial, Cámara Nacional de Apelación en lo Civil desde 1989 a 1995 inclusive. Estas son reagrupadas en las siguientes categorías: "Alimentos", "Régimen de Visitas y Tenencia", "Patria Potestad", "Adopción", "Guarda", "Protección de persona", "Filiación y Reclamación de Estado de Familia", "Divorcio Vincular", "Separación Personal", "Medidas Precautorias y Previas", "Nulidad de Matrimonio y Disolución del Vínculo Matrimonial", "Desafectación y Liquidación

ción de Bienes", "Denuncia por Violencia Familiar", "Exclusión del Cónyuge" y "Otros (varios)" (Pedrido, inédito: 14 a 17). Es de destacar que la descripción de las causas de familia ingresadas durante el período mencionado coinciden con la autonomía de los primeros juzgados civiles con competencia en materia familiar.

En el período 1989-1995, las categorías que prevalecen por el número de causas, en los Tribunales de Familia, son en primer lugar, el "Divorcio Vincular" con 53.738 causas sobre 147.035, lo que representa un 36,55%; en segundo lugar, la "Protección de personas" con un total de 40.941 causas que representan un 27,83% y, en tercer lugar, los "Alimentos" con 17.102 causas, es decir un 11,63% del total ingresado en los tribunales con competencia familiar durante el período mencionado.

Respecto a la categoría "Divorcio Vincular", como emergente de la desorganización familiar, se nota una disminución lenta pero sostenida del número de causas a lo largo de los años que se consideraron para efectuar el estudio. Las cuestiones referidas a esta categoría, salvaguardando lo que marca el procedimiento formal, son tratadas de acuerdo con cada juzgado de manera diferente. Así se pueden encontrar jueces ritualistas con el propósito de seguir "al pie de la letra" lo que dice la norma legal, pero también existen jueces que aplican su propio procedimiento, amparados en una interpretación sumamente amplia de sus facultades ordenatorias e instructorias (Pedrido, inédito: 59). En 1989 el número de causas es de 7.968, que corresponde al 14,83 % del total de ese año; en 1992 el número desciende a 7.743 o sea a un 14,41 %; y en 1995 la cifra llega a 7.680 causas que representan un 14,29 %. A pesar de esta disminución, el Divorcio Vincular reúne como se expuso, el mayor número de ingresos de causas identificadas con los conflictos jurídicos familiares, registrados durante el lapso del trabajo. Los tipos de divorcio que prevalecen son los de Presentación Conjunta (48,21 %) no los divorcios por petición de cualquiera de los cónyuges (24,64 %) (Pedrido, inédito: 40-41).

En relación a la categoría "Protección de Personas", agrupa un gran número de dimensiones de especial trascendencia. Esto es así debido a que se refiere a acciones cuya finalidad consiste en preservar a alguna persona de sí misma, brindándole una protección adecuada a enfermos, menores y/o administración del patrimonio de incapaces o inhabilitados. En esta categoría se destacan las facultades del juez respecto a la privación de libertad (internación) o no de las personas dementes, alcohólicos, toxicómanos que pueden dañar su salud o la de terceros o afectar la tranquilidad pública. Esta variable, segunda en importancia, aumenta de manera notoria: en 1989 se registraron

4.109 causas que representan el 10,77 % sobre el total; en 1992 la cifra fue de 5.994 o sea un 14,65 %, y en 1995 alcanzaron el número de 7.156 que representa un 17,49 % del total de causas en los tribunales de familia (Pedrido, inédito: 40-41).

La tercera categoría en importancia, "Alimentos", presentó un aumento progresivo pero de manera estable junto con las dimensiones que la configuran (aumento de la cuota alimentaria, cesación de la misma, ejecución de alimentos, fijación de cuota, entre otras). Esta categoría constituye uno de los temas principales en el Derecho de Familia debido a que no sólo origina una obligación legal entre parientes sino, también, por su carácter asistencial. En el ámbito judicial aparece y se desarrolla como un incidente o "pequeño juicio" independiente de otras cuestiones como pueden ser el divorcio o separación personal. En 1989 el número de causas sobre este tema era de 2.059 que representa el 12,04 % del total. En 1992 el número llegó a 2.446 o sea un 14,30 % y en 1995 se alcanzó a 2.985 causas, que implican el 17,45 % del total (Pedrido, inédito: 56-57).

A lo expuesto cabría agregar una categoría que es introducida debido a la reforma legislativa de 1994. Se hace referencia a la "Denuncia por Violencia Familiar" por la que se ampara a las personas que sean objeto de lesiones o maltratos físicos o psíquicos por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar. En este caso el juez goza de amplias facultades en cuanto al requerimiento de diagnósticos de interacción familiar y adopción de diversas medidas cautelares. De todos modos, es un importante referente de la existencia de la desorganización familiar por distintas causas. Esta categoría es atípica porque responde a la creación de la ley y sólo se cuenta con datos de 1995 con 1.011 causas (Pedrido, inédito: 58).

## 2. La socialización y el hábitat

La Sociología como ciencia, y en el tema de la socialización en particular, presta atención a las representaciones que los sujetos o sectores del sistema elaboran respecto a determinados fenómenos sociales. Por este motivo en distintos casos, como en el de la pobreza, no tiene que ser limitado a un estudio con criterio censal de clasificación.

La condición de pobre, en un sujeto social, es el resultado de las formas de interacción social y de las relaciones de poder en que se encuentra inmerso el actor sujeto del análisis. Es importante destacar que la pobreza se transforma en condiciones de sociabilidad, de interacción social; y no se limita al prejuicio de considerarla como una categoría reducida a un de "efec-

5118, 5

34

to" de pobreza. En todo caso es necesario describir, para el estudio de la socialización y el hábitat, cuáles son las relaciones de status, poder económico o político de las personas y a que significados remite el acceso a determinados bienes y servicios.

Entre los pobres el acceso a la vivienda, en términos de propiedad, posee múltiples significados sociales y esto es percibido e interpretado de acuerdo con determinada concepción del mundo. Esto es así ya que el acceso a bienes es un poderoso clasificador y diferenciador social, al igual que el acceso a la educación o al empleo, pero no sólo por las implicancias económicas que ello posee (Merklen, 1997).

Para el estudio de la pobreza es necesario conocer qué relaciones mantienen los sujetos entre ellos, sus vínculos, cómo se representan su mundo de vida y cómo se identifican con él. Por esto surge la necesidad de presentar la sociabilidad alrededor de la idea de hábitat considerando que la villa, el barrio autoconstruido y el asentamiento dan otros elementos para comprender y definir mejor a los sujetos de la pobreza.

En una sociedad fragmentada, donde se ha perdido parte de su carácter universalista (por ejemplo, la educación y el trabajo) el barrio, el ámbito local, esto actúan con sus pares distanciándose de los otros sectores sociales. De manera que el rol como elemento destacado de la sociabilidad ya no alcanza para explicarlos; es necesario avanzar en la especificidad del actor (Merklen, 1997: 62-63). Esta especificidad la da el hábitat ya que se inserta al sujeto en un contexto histórico y pone de manifiesto algunas de las representaciones que componen su identidad y permite compararla con otros sujetos.

Se necesita exponer un conjunto de representaciones, en los sujetos, ligados a las formas habitacionales ya que es aquí donde se genera la sociabilidad y se reproduce dentro de ese universo. Dicha sociabilidad depende del hábitat es decir de la vivienda, de los servicios y de la infraestructura con que cuenta (luz, agua, transporte, pavimento, comercio, etcétera), del espacio que se ocupa en un centro urbano (barrio) implicando, además, un espacio de relaciones sociales, y no otras, un significado cultural (identidad urbana). El barrio produce y reproduce distintos sujetos sociales, diferentes tipos de interacción, ejemplo de lo expuesto es el análisis de la pobreza y de tres tipos de hábitat diferentes: las villas, los barrios autoconstruidos y los asentamientos.

En Buenos Aires, el proceso de ocupación inicial, del terreno que dio origen a las villas se remonta a fines de la década de 1930 y se consolida en

la década de 1940 durante los primeros gobiernos peronistas. Este proceso tuvo la marca del importante movimiento migratorio de la época, desde el interior rural hacia las grandes ciudades, con el fin de la incorporación del actor en el proceso productivo industrial. La localización de las villas en la ciudad estuvo determinada por la proximidad de los terrenos elegidos a los lugares de trabajo o a los medios de transporte que conducen a ellos. Tal vez la denominación de "villas de emergencia" haga referencia al carácter transitorio con que vecinos y autoridades pensaban aquellos asentamientos (Merklen, 1997: 28).

En lo que se refiere a la configuración interna, los rasgos centrales de las viviendas y de los materiales usados en su construcción, en su origen se componían de desechos como trozos de automóvil, chapas, carcles robados, maderas, entre otros implementos, hasta que con los años ha ido mejorando la calidad. A lo largo del tiempo, por ejemplo, el piso de tierra fue sustituido por el de cemento, baldosa o cerámica. Es decir la villa se va "consolidando".

De todos modos estos barrios están compuestos de gran cantidad de casillas en un espacio reducido y de gran cantidad de personas en cada vivienda. Es sorprendente el amontonamiento y la superposición de casas que imposibilitan distinguir entre calles mayores y laterales. Es típico de estos lugares la falta de espacios verdes o de recreación. Existe una total falta de planificación del uso del suelo por parte de los ocupantes, ya que son barrios producto de la espontaneidad y el desorden.

En la actualidad la villa está identificada con familias de trabajadores desocupados, changarines, empleados domésticos y vendedores ambulantes, que desplazaron a los trabajadores estables, obreros y empleados, sus antiguos ocupantes. Son actores que se ven excluidos del empleo, de la creencia en el ascenso social, de los niveles superiores de la educación, del manejo elemental de la tecnología, de la seguridad social, jurídica y de un sinnúmero de bienes materiales y culturales.

La categoría "villas" impacta sobre la sociabilidad de quienes viven allí; estos son etiquetados, son considerados sucios, feos, malos, delincuentes, vagos e ignorantes. La villa es la representación tal vez más indispensable del desorden, no sólo por la resistencia al control policial sino porque, también, desmiente toda imagen de progreso, bienestar o igualdad de oportunidades. El villero, producto de este estigma, oculta su domicilio cuando por ejemplo, busca integrarse a alguna institución formal (escuelas, trabajo, domicilio legal). Deja de ocultarlo si se puede beneficiar a través de un progra-

ma de asistencia social. El ser villero es vivido como vergonzante y para salir de la villa, además de las enormes dificultades económicas que se deben vencer se debe aprender a vivir nuevamente, tal es la distancia social con la que se configuran los ámbitos urbanos (Merklen, 1997: 36).

Respecto a los barrios autoconstruidos, segundo ejemplo de hábitat, estos fueron producto de la política de desarrollo urbano de los primeros gobiernos peronistas que hizo posible los lotes. En esta época se produjo una gran demanda de tierras y de viviendas por parte de la población de bajos ingresos que se instalaba en el conurbano bonaerense, y que ocasionó una transformación en el sector inmobiliario. El origen de este fenómeno fue la industrialización del país y el desarrollo de un Estado de bienestar.

El sistema de loteo permitió a los sectores populares acceder legalmente a la tierra e iniciar el proyecto de la vivienda propia donde se conjugaba, además, la acción urbanizadora del Estado que por medio de la inversión pública, iba formando una compleja trama de servicios e infraestructuras que coexisten en la ciudad. Los sectores identificados con el loteo y los barrios populares vivieron endeudados durante años y en condiciones de precariedad, pero con la experiencia de construir en un lugar propio, de ahorrar y de acumular por medio del esfuerzo.

La experiencia es opuesta a la de la villa ya que permitió la creencia en la integración y el ascenso social. Esta situación cambió con la crisis de las décadas de 1970 y 1980, con la reducción del salario real, la inflación y la indexación. Se ponía en juego una forma de sociabilidad. Estos trabajadores pobres, beneficiarios de los loteos, eran los pobres "prolijos". Se trataba de sujetos de bajos ingresos integrados a su rol ya que sus acciones y sus sistemas de preferencias, correspondían con su status. Se era optimista a pesar de los cambios de las últimas dos décadas, manteniéndose el mito del ascenso social y el valor del esfuerzo propio junto a carreras institucionalizadas (educación) que permitían el progreso, veían al villero como vago o como un fracasado (Incapaz) (Merklen, 1997: 42).

El tercer ejemplo de los hábitat son los asentamientos, que tienen su origen en Quilmes en 1981, con la ocupación masiva de tierras que, en el caso de Buenos Aires, siempre se ubica en el conurbano, de ninguna manera en la Capital. Otra de las características particulares es la existencia de cada casa en un lote, generalmente rodeado de jardín. Existen manzanas con sus calles perfectamente trabajadas y, en muchas de ellas, se han reservado espacios libres para distintos servicios esenciales como la escuela,

la, el dispensario médico o el comedor popular, la sede social de la organización y la recreación, entre otros.

Es más, en general, los asentamientos se hacen en terrenos próximos a viejos barrios resultantes de loteos. Lo que hacen los ocupantes es proyectar el trabajo de calles existentes a fin de mantener homogénea la urbanización ubicando en cada terreno una vivienda y una familia. Esta organización del territorio requiere de una organización social previa a cargo de un grupo de personas que elige el predio y realiza trabajos de "inteligencia". Se hace una mensura provisoria que le permite conocer la cantidad de lotes que resultan de la subdivisión del terreno, determinando de esta manera la cantidad de familias que integran el barrio. Un asentamiento se origina con una ocupación ilegal de tierras y siempre está presente el peligro del desalojo invocado, para legitimar la acción, la existencia de un derecho relacionado con la necesidad de un lugar en el que vivir. Presionando, de esta manera, a las autoridades, para tomar una decisión política en favor del asentamiento.

Sin embargo, en sus comienzos, la precariedad prevalece en la construcción. En los primeros días un asentamiento es un campamento gigante, no hay agua ni baños ni lugares para cocinar o dormir. El peligro sanitario y el esfuerzo personal y físico son enormes. Gran cantidad de vecinos con trabajo puede llegar a perderlo por el "cerco policial" que se produce y si abandonan su lugar difícilmente puedan volver a ingresar al predio (Merklen, 1997: 54).

El 71 % de los asentamientos se ubica en la zona sur del gran Buenos Aires y el 63 % de la tierra ocupada se encuentra en la primera corona de partidos del conglomerado.

En definitiva, el asentamiento se presenta como una estrategia defensiva respecto de la exclusión social, buscando la integración. Es una acción colectiva de un conjunto de personas que no desea perder posiciones en la ciudad y en la sociedad. Es de destacar que cuando se da un asentamiento se está produciendo una nueva sociabilidad, buscando seguir principios de la urbanización vigente en contra de las villas. Se trata de grupos parcerizados o "nuevos pobres" provenientes de barrios populares, pero no de villas. Se busca el ascenso social y la integración, pero este hábitat puede convertirse en un lugar de exclusión ya que esa integración nunca es plena debido a que se termina legitimando aquella formación urbana y social que los dejó fuera, refiriendo a una situación de ilegalidad y precariedad mayor.

### 3. El género, el rol y la identidad masculina

La cuestión de la identidad masculina está estrechamente vinculada con la problemática, ya mencionada, del género, es decir la existencia de un orden cultural en las definiciones sociales de los roles femenino y masculino. Los estudios se suelen centrar en las emociones de los hombres, su capacidad para expresarlas, sus características culturales como, también, su experiencia en un contexto estructural a partir de su status socioeconómico. Se deja de lado la idea de un orden natural (habilidades o cualidades naturales) y se insiste en la representación y construcción cultural a partir de necesidades sociales, como de situaciones económicas, políticas e históricas.

En lo que se refiere a la paternidad, como fenómeno social, se suele destacar que en el hombre, a partir de la reproducción de la maternidad, se origina una represión de la afectividad y una reafirmación de su rol tradicional de proveedor de sustento familiar. Ser hombre significa no ser mujer y se pueden destacar como reglas de la masculinidad: a) nada de "mantconadas" o nada que sugiera femineidad; b) ser una rueda de la fortuna destacando el poder, el éxito, la riqueza; c) "váyase al diablo" ya que se es agresivo, atrevido y se asume riesgos. Esto es lo que se denomina "masculinidad hegemónica" (Kornblit, 1997: 389-394) pero hay otros tipos de masculinidad, consideradas como "subsidiarias", que no rechazan la femineidad, la homosexualidad, las emociones, la cautela, etcétera. Un buen ejemplo de esto es la masculinidad "gay" ya que estos están lentamente dejando de identificarse con lo afeminado.

De manera que es necesario, para analizar lo aquí planteado, relacionar el fenómeno de la paternidad y la masculinidad con la socialización respecto de modelos de padres tradicionales o "nuevos". Se trata de reconocer cuál es la imagen de padre sustentada por los jóvenes argentinos. Se busca conocer la imagen de la paternidad y la masculinidad de los jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires. El estudio al que se hace referencia es exploratorio y se utilizaron como técnicas de recolección de datos las entrevistas en profundidad y de grupos focales. Fueron entrevistados varones entre 8 y 30 años de edad de estratos bajos y medios alcanzando la cifra a 92 jóvenes (Kornblit, 1997: 398-399).

En las conclusiones resalta que en la construcción social de la masculinidad, los jóvenes entrevistados valoran como atributos del "ser masculino": el riesgo, el tomar la iniciativa en las relaciones sexuales al comienzo de una relación y el ganar más dinero que la pareja. Se rechaza la idea de virgini-

dad y la de que "los hombres no deberían exteriorizar el dolor" tanto físico como psíquico. El hombre es sinónimo de fuerza y decisión, es capaz de imponer reglas comparando con la mujer algunos aspectos en el plano de la sexualidad y en lo económico, siempre que esto no les haga ocupar un segundo plano. Se puede afirmar que quieren ser hombres pero no "machos". El término "hombre" es representado de manera menos genérica o abstracta que el de "varón", se identifica con madurez, cortesía y con principios creativos, de padre o marido en general, se lo relaciona más estrechamente con los hijos (Kornblit, 1997: 408-410).

En la construcción social de la paternidad, con respecto a la edad ideal para acceder a ella, ésta ha aumentado en especial para los jóvenes pertenecientes a los sectores medios. En este sector se refuerza "la familia tipo" con dos hijos. Se prefieren primogénitos varones y esto se puede entender como una expresión de la jerarquización de lo viril y una afinidad al género masculino a partir del desconocimiento percibido en cuanto a "lo femenino". La mayor parte de los entrevistados plantean que tendrían el hijo, que no inducirían al aborto, basándose en argumentos morales (culpa, responsabilidad) y en las consecuencias físicas y psíquicas para la mujer. Reconocen de todos modos que, por lo general, los hombres "se botran" y que el aborto es un desencadenante de la ruptura de la pareja. Muchos jóvenes están de acuerdo con la legalización del aborto. Los jóvenes conogen los anticonceptivos, especialmente el preservativo, y están a favor de su uso, las demás técnicas están en manos de las mujeres (Kornblit, 1997: 404).

La participación de los hombres en la crianza de los niños se visualiza especialmente en relación con los aspectos lúdicos de la relación padre-hijos más que como asunción de responsabilidades cotidianas. Paternidad y padre se identifican con la responsabilidad y el afecto. "Paternidad" se refiere a la identidad legal y a la protección y "padre" implica guía moral y contexto familiar. Se nota un contacto con los propios sentimientos y con la posibilidad de expresarlos; esto es visto como una mayor madurez afectiva. Se trata de actores más protectores, foflerantes, flexibles y cariñosos con los hijos que hacen que este padre nuevo se distinga del tradicional. Igualmente, se puede afirmar una coexistencia de ambos modelos, pero la masculinidad hegemónica es, en principio, desplazada con la aparición de la masculinidad subsidiaria (Kornblit, 1997: 411).



#### 4. La escuela primaria: la socialización y la educación

Uno de los instrumentos que se utilizan en el proceso de educación, son los libros de lectura. Su análisis como herramienta en la conformación y, especialmente, en la transformación de los sujetos es destacado. Sobre esta situación existen distintos análisis que relacionan los libros de lectura utilizados en la escuela con el género, el trabajo y la familia. Es por esto que no sólo educan sino que socializan a los futuros ciudadanos. Estos libros son concebidos como usinas de transmisión de contenidos "ideacionales", además de enseñar a leer y de transmitir información sobre una variedad de temas, transmiten contenidos normativos que corresponden a una manera determinada de percibir la realidad y, al hacerlo, procuran moldear los valores, actitudes y comportamientos de los alumnos, futuros ciudadanos (Wainerman y Heredia, 1996: 89).

En trabajos publicados a mediados de la década de 1980, a partir de un análisis tanto de los textos como de las ilustraciones referidas a los personajes adultos e infantiles de ambos sexos, se rescatan a mujeres y varones como seres radicalmente diferentes en obediencia a un orden natural inmodificable. Ellas son criaturas débiles, suaves, dulces, afectivas, de buen corazón, pasivas y temerosas; y ellos se presentan fuertes, inteligentes, rudos, creativos, activos y arriesgados. Estos datos se extraen de la lectura y de la ilustración referida a la capacidad física, la concepción del trabajo, roles laborales públicos y privados. Por su naturaleza, ellas aparecen destinadas a servir y a valorizarse a través de los demás, ellos a conducir, ellas a reinar en la esfera de lo privado, ellos en la de lo público. Tales características se reiteran en los niños y en los adultos, en los seres comunes y en los excepcionales que sirven de modelos y se reiteran en los juegos, en la vida cotidiana y los hogares de quienes plasman la historia política, militar, social, artística y científica de la sociedad. En el hogar, a ellas les cabe la misión de ser madres y esposas; a ellos la de proveer el sustento. Ni ellas salen a trabajar, ni ellos participan del cuidado de los hijos y el hogar. Las pocas mujeres que, por ausencia de un hombre, deben salir a trabajar lo hacen movidas por la imperiosa necesidad económica. Ellas ganan el sustento de sus familiares como sirvientas, lavanderas, planchadoras o costureras. Pocas se escapan a este cuadro: son las agricultoras y las maestras. El trabajo extra doméstico para la mujer que no puede evitarlo es una obligación, jamás un derecho, jamás la posibilidad de realización personal. Para ellos, en cambio, el trabajo es un derecho y un deber (Wainerman y Heredia, 1996: 85-86).

Como se explicita en la investigación citada, la familia que aparece en estos libros es invariablemente del mismo modelo "nuclear" conviviendo padre, madre, dos hijos (varón y mujer) y excepcionalmente un tercero. Se pueden agregar algunas características de la familia extendida cuando se encuentra presente en ella un abuelo o una abuela. Es de destacar que los libros de lectura, hasta entrada la década de 1980, no acusan los cambios que vive la sociedad argentina en la política económica, social y cultural. Permanecen inmutables, identificados con la situación de las primeras décadas del presente siglo. En la década de 1990 se producen cambios radicados en la estructura social, producto de la permanencia de la mujer en el mercado de trabajo, la prolongación de la esperanza de vida y la expansión de la educación, que afectan la estructura familiar. En las últimas décadas disminuye la fecundidad aparente, aumentan posiblemente las separaciones y los divorcios, y se da un considerable aumento de las uniones de hecho, entre otras situaciones.

Esta última década se destaca porque en los textos no hay modelos explícitos ni personajes para imitar (domberos, carteros, etcétera), no hay ídolos como, tampoco, transmisión explícita de principios morales, ni nociones de sociedad, nación o patria como marcos de identificación colectiva. Los hechos patrios que se rescatan están relacionados con San Martín, Sarmentino y Belgrano y con algunos más puestos de compromiso. Desaparece el contexto de la hazaña, el sacrificio y todo proyecto movilizador. Son, en la actualidad, libros "de imágenes" y no "de lectura" ya que el género al que más se asemejan es al de muchas historietas y al videoclip, con predominio de lo visual, lo divertido, lo lúdico, lo simpático envuelto todo en un lenguaje coloquial. La educación se vuelve permisiva, atiende a los deseos de los niños y adolescentes, muestra por todas partes la ola hedonista, desculpabiliza el tiempo libre y anima a realizarse sin obstáculos, aumentando el ocio y creciendo la indiferencia (Wainerman y Heredia, 1996: 92). El prestigio y la autoridad del docente en la práctica han desaparecido porque con los cambios respecto a la actividad escolar (descentralización, contenido curricular, etcétera) se saca al docente del centro del proceso de enseñanza aprendizaje. Desaparece la imagen sacralizada de la maestra, deja de ser un símbolo maternal (la segunda mamá), aparece un nuevo modelo que destaca su rol profesional.

Los libros han incorporado el concepto de género (ser mujer y ser hombre desde lo cultural y no a partir de lo biológico) que alude a las oportunidades diferentes que ha construido la sociedad para los seres humanos por el sólo hecho de haber nacido de un u otro sexo, mujer o varón. No se adjetiva

a los personajes a partir de sus acciones (Suave, dulce, fuerte, atrevido), se dejan de lado distinciones a partir de características biológicas. Ahora no se transmite de manera explícita un modelo único de lo que es o debe ser una mujer o un varón. Se rescatan las críticas sobre la discriminación de diversos orígenes, especialmente sexual. Se cuestionan la división de roles sexuales y la antinomia del mundo privado-femenino y del mundo público-masculino, destacándose como son las cualidades físicas, psicológicas y espirituales de los sujetos. En los libros de lectura, se incorpora el modo de vivir en grupos familiares diversos entre los cuales el modelo de familia nuclear es una de las muchas posibilidades. En la actualidad lo que define a la familia no es la residencia en común, sino el lugar donde los miembros encuentran cariño y protección (Wahnerman y Heredia, 1996: 97).

Las mujeres adultas han hecho un cambio gigantesco ya que tienen iniciativa, comparten con los varones características de racionalidad, inteligencia y coraje, y salen masivamente a trabajar. Las tradicionales diferencias entre mujeres y varones se hacen menores. La mayor parte de las madres participan del mercado de trabajo aunque tengan hijos pequeños. Y se destaca, además, la aparición de la distribución de roles en el hogar.

### 5. Universidad y educación

Desde 1918 los principios de la Reforma Universitaria fueron anulados, algunas veces, por lapsos más o menos extensos. Periodos de intervención, nonbramientos sin concursos, supresión de la representación estudiantil, falta de libertad de cátedra entre otras vicisitudes. Varias universidades, durante el gobierno radical de 1922, fueron intervenidas como, también, profesores y directivos cambiaron de criterio adhiriendo al nuevo autoritarismo donde se relacionaba la representación estudiantil. Hay que aclarar que figuras de filiación radical como Alvear y Frondizi han contradicho postulados básicos del movimiento universitario reformador (Fucio, 1995: 19).

Con la revolución de 1943 que derrocó a Castillo fue intervenida la Universidad colocándola en manos de un grupo de extrema derecha. De todos modos, es concebido el papel de la FUBA en la oposición al proceso que lleva a Perón al poder. El antagonismo entre estudiantes universitarios y obreros fue claro en ese tiempo como, también, la derrota del reformismo universitario con el triunfo de Perón. Se produjo una etapa de cesantías a profesores opositores, la autonomía universitaria fue suprimida y el rector fue nombrado por el Poder Ejecutivo de la Nación. Se impuso la educación religiosa

en los colegios secundarios estatales y se estableció un curso universitario obligatorio de "formación política" (doctrina peronista).

De todos modos, Perón no tenía un claro proyecto universitario, sólo parecía limitarse a reprimir disidentes. Con estos antecedentes, y con el intento de regularizar la situación, se llegó a las tensiones vividas en el país producto de la libertad de la enseñanza. Corría el año 1958, las amplias movilizaciones populares (estudiantes universitarios y secundarios, organizaciones estudiantiles, padres de alumnos, maestros, profesores, directores de escuelas, miembros de la Iglesia Católica, sindicatos, entre otros) se produjeron en torno a la enseñanza "laica", que aludían a las universidades dujeron en torno a la enseñanza "laica", que aludían a las universidades estatales, o "libres" refiriéndose a las universidades privadas. Lo que se discutía era si las universidades privadas podrían otorgar título habilitante. En realidad se buscaba restarle peso a la Iglesia Católica ya que era la única, con una estructura preparada para dedicarse a la formación terciaria/universitaria. Esto se solucionó a partir de la Ley 14.557, reglamentada en 1959, y que estableció un examen de egresados de las universidades privadas, por parte del Estado, para expedir títulos habilitantes. Otros hitos destacados en la vida de las universidades, que no respetaron los principios de la Reforma de 1918, se dieron con el autoritarismo y los graves conflictos de 1973 y 1976 que culminaron en 1983 con la apertura democrática y que permitieron la renovación de los claustros, tratando de mejorar el nivel universitario, a veces no logrado pero en un cuadro de libertad. Existen grandes discusiones e intensos debates referidos a la cantidad de alumnos, el menor nivel informativo, intelectual y de inquietudes, exámenes de ingreso, cursos niveladores y/o limitaciones presupuestarias (Fucio, 1995: 28). De todos modos, para tomar decisiones en la esfera política es necesario un diagnóstico de la situación actual en las universidades argentinas, teniendo en cuenta los distintos actores: estudiantes, profesores, personal no docente y autoridades, así como la situación externa como factores. Estos son factores y condicionantes de la organización, en este caso, universitaria.

La investigación de campo en las universidades y, en este caso, en el área jurídica implica detectar las características, el perfil de los ingresantes, los que cursan la carrera de Derecho, la manera en que se los capacita y se los prepara jurídicamente. Este tipo de trabajo permite conocer cómo se estudia y se aplica un orden jurídico formal en el marco de una sociedad determinada. El área de la capacitación es un punto fundamental a la hora de estimar el desempeño de los profesionales en relación a la normal formal, sin perjuicio de reconocer la fuerza de las subculturas (por ejemplo, la judicial) y, también, de las necesidades (como las económicas).

Hay que ubicar el proceso de educación, como ya se expuso, dentro de la apertura democrática donde las universidades han ido mejorando su nivel de libertad pero con fuertes y nuevas limitaciones: la gran cantidad de alumnos que acceden cada vez con menor nivel informativo e intelectual; la disparidad en cursos de nivelación o de ingreso, el posible arancelamiento, las limitaciones presupuestarias, las expectativas de ascenso social, la falta de preparación o de vocación de los docentes, estudiantes y egresados, para interpretar los problemas sociales ratificando sucesivamente el "deber ser", entre otros temas preocupantes (Fucito, 1995: 30 y ss.).

Por esto resulta de interés un trabajo descriptivo del perfil del estudiante, uno de los principales protagonistas en el proceso de educación en las universidades. En las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires por ejemplo predominan las mujeres (57 %) por sobre los varones (43 %). Se destacan los estratos medio alto y medio bajo, disminuyendo los estratos altos y bajos. Respecto a los padres aparecen, al menos, como universitarios el 44,2 %, en menor medida ambos padres son universitarios (20,3 %) y con primario o menos (20,7 %). Los estudiantes provienen de secundarios públicos en un 49,3 %, de colegios privados religiosos en un 37 % y de colegios privados laicos en un 13,8 %. El 24 % de la muestra lee todos los días el diario y un 20 % nunca o casi nunca; una o dos veces por semana el 32 % y de tres a seis veces un 24 %. Respecto a la religión, el 25,1 % es creyente practicante y el 47,9 % es creyente no practicante; la cifra desciende a 13,6 % en los no creyentes y el 9,8 % no tiene posición asumida (Toer, 1998).

En trabajos de campo referidos al perfil de los estudiantes de Derecho, (Fucito, 1996) los objetivos están dirigidos a definir el medio socio-cultural del cual provienen los alumnos, sus inquietudes y su orientación intelectual como, también, resulta destacado detectar las motivaciones que indujeron a elegir una carrera jurídica, conocer las expectativas sobre las actividades que desarrollarán una vez recibidos, definir los ajustes a esas expectativas a medida que iban avanzando en la carrera y conocer si consideran haber sido adecuadamente formados en lo jurídico en todas sus variables: aptitud de los profesores, validez y adecuación de los materiales y de los programas como, también, formación para actividades jurídicas de sus estudiantes. Esta información permite analizar las características del procesos de educación y su relación con el funcionamiento del orden jurídico.

En lo que se refiere a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata se realizó una muestra de 109 cuestionarios estructurados con preguntas abiertas y otras cerradas con alternativas

figas y escala de opinión teniendo en cuenta a los estudiantes de primer año, y de 91 cuestionarios, con las mismas características que las ya mencionadas, con los estudiantes de quinto año. El 39 % de los estudiantes de primer año son de estrato alto, medio alto y profesional y el 37 % pertenece al estrato medio-medio sólo el 9 % se identifica con el estrato bajo. En lo que se refiere a los estudiantes de quinto año disminuye al 37 % en lo que se refiere a los primeros estratos y asciende considerablemente el estrato medio a un 45 %. Los integrantes del estrato bajo se ubican en un 8 %. El área de procedencia de los mismos es principalmente de La Plata y del Gran La Plata en un porcentaje aproximado al 81 % de la muestra. La amplia mayoría vive en departamento o casa (superando el 90 %) con menos incidencias de pensiones (5,5 %) u hoteles (2,2 %). Por lo general, comparan la vivienda con familias y viven básicamente cerca de la Facultad. Predominan los estudiantes solteros ya que el primer año llegan a alcanzar el 94 % y en el quinto año el 82 %. Es de destacar que hay una mayor presencia de mujeres que en ambos casos es superior al 54 %. El perfil del estudiante es juvenil ya que los estudiantes de primer año en su gran mayoría (80 %) tiene menos de veinte años y el de quinto año un 69 % tiene de 21 a 25 años y el 25 % tiene entre 26 y 30 años. Es decir que en este último caso cumple las expectativas del plan de estudios. No significa que no se encuentren casos de estudiantes crónicos pero, esto no se refleja en la muestra ya que ésta se efectúa con estudiantes que cursan de manera regular.

En relación a las motivaciones de los estudiantes en la elección de la carrera la eligen por motivos prácticos, como un medio de vida futuro (39 % en primer año y 24 % en quinto año) aunque existe en la muestra un alto porcentaje que busca adquirir una formación cultural (36 % en primer año y un 23 % en quinto año). Los estudiantes provienen de colegios secundarios estatales, el 41 % en primer año y el 58 % en quinto. Le siguen, en importancia los colegios privados religiosos en un 35 % y un 22 % respectivamente. Sobre el ingreso, una gran mayoría opina que este debe ser irrestricto. Además, la enseñanza debe ser proporcional a los ingresos del estudiante o familiar a cargo. Es interesante mencionar que no superan el 20 % los estudiantes que están de acuerdo con ciertas limitaciones (curso de ingreso formativo sin cupos) y constituyen un 34 % y un 37 %, según se trate de primero y quinto años, los que desean un examen de ingreso limitativo.

Un dato significativo es que, por lo general, los estudiantes de primer año desconocen la actividad de los jueces y abogados, sólo el 14 % conoce directamente la actividad jurídica. Las fuentes del conocimiento que poseen aparecen dispersas. Esta situación suele invertirse a lo largo de la carrera

pero el conocimiento que se suele lograr no es, generalmente, producto de una experiencia directa, alcanzando el 35 %, la que se obtiene de los medios de comunicación, familiares o amigos. Con respecto al 64 % de estudiantes trabaja en áreas vinculadas con la profesión jurídica (a diferencia del primer año donde la amplia mayoría no trabaja) aunque estos dicen no necesitarlo. El 21 % admite no encontrar trabajo relacionado directamente con el área jurídica. Igualmente existe un fuerte sentido de preferencia por los estudios jurídicos ya que un 75 % de los estudiantes de primer año y un 82 % en quinto volverían a elegir nuevamente la misma carrera. A estas cifras se agrega el interés, al egresar, de dedicarse a la práctica profesional mayoritariamente por cuenta propia o asociándose, y en menor medida, incorporándose a un estudio o a la magistratura.

Es de escaso o nulo interés la actividad docente, la investigación y la administración pública. Tanto en primero como quinto año, los estudiantes consideran que no es importante recibirse para profundizar en el aprendizaje, consideran altamente suficiente (80 %) la formación teórica que reciben; no existen mayores cuestionamientos al plan de estudios, a los profesores o a los contenidos de las materias, aunque son más pesimistas que en la época de su ingreso. La crítica se hace presente en cuanto a la insuficiencia en la educación práctica que reciben y en el área administrativa (incluyendo la biblioteca) (Fucito, 1996: 137 y ss.). Una diferencia destacada entre los estudiantes de primero y quinto años, es la lectura, ya que los primeros leen muy pocos diarios y/o revistas. Los temas que más les interesan en los diarios son los de política nacional, policial y judiciales, agregándose un punto interesante: el deporte. Los de menos interés son los de espectáculos y divulgación científica. Respecto de los libros un 43 % lee de dos a cinco libros al año y un 30 % lee uno; sólo un 20 % confiesa no leer libro alguno. Lo que sucede es que al pedir el nombre de los autores y títulos de los cuatro últimos libros leídos se notó un posible falsamiento en los requisitos ya que no se conocían los títulos, tampoco los autores. Los estudiantes escuchan o ven programas de poca "profundidad" o contenido como musicales, deportivos y espectáculos y pasan tres o más horas frente al televisor (51 %) aunque cabe destacar que un 68 % ve programas políticos. Los estudiantes de quinto año leen más diarios, revistas y/o libros que los estudiantes de primer año manteniéndose los géneros elegidos por estos últimos. Tampoco varía el tiempo que pasan frente a la televisión ni el contenido de los programas que escuchan y ven (Fucito, 1996: 141 y 145).

El perfil del estudiante en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires no varía notablemente. Partiendo de los

mismos objetivos y con una muestra de 180 cuestionarios estructurados con mismas abiertas y otras cerradas, alternativas fijas y escala de opinión, el estudiante de esa Facultad pertenece a un estrato medio alto, profesional y estrato medio. Sólo el 16,11 % está identificado con el estrato bajo. El lugar de procedencia en su gran mayoría (99,45 %) es la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el resto pertenece a las provincias destacándose, entre ellas, 1ª de Buenos Aires. El 68 % de la muestra vive a una hora de distancia de la Facultad. Son estudiantes egresados en una gran mayoría de secundarios estatales (55 %) seguidos en importancia por aquellos formados en escuelas privadas religiosas (35 %).

Como en la Universidad Nacional de La Plata, predominan los estudiantes solteros que viven con sus padres. Casi la totalidad de la muestra vive en casas y departamentos. La cantidad de alumnos que trabaja (en empleos públicos, judiciales, comercio, industria y servicios) y la cantidad de horas que lo hace por semana indica que el estudio no es su principal actividad. Es un estudiante poco aficionado a diarios y revistas. Los temas que prevalecen son los de política nacional, policial y judicial en menor medida los de divulgación científica. Las revistas que se destacan son "Noticias", "Gente" y "Caras". En televisión ven, predominantemente, programas periodísticos y largometrajes. La escasa lectura muestra que el estudiante descansa en la capacitación formal, como un instrumento para el trabajo futuro, pero no responde a un perfil dedicado a esa actividad, esta es sólo accesoria. Hay que aclarar que en la muestra sobresale el ingreso a la carrera por vocación (42 %) quedando el derecho como medio de vida, en segundo lugar (27,5 %) a diferencia de La Plata ya que la variable vocacional no fue tenida en cuenta de la UBA.

El perfil del estudiante muestra un atraso cronológico, si se relaciona el plan de estudio y la edad de egreso, comparándolo a la situación en la Universidad Nacional de La Plata. Los alumnos piensan que el Ciclo Básico Común es inútil como formación general, pero para los estudiantes de Derecho, el 53 % sostiene su utilidad frente a un 46 % que opta por la posición contraria. Respecto a la forma de ingreso, el 82 % de la muestra es partida de algún tipo de limitación, el 47 % acepta el examen de ingreso y el 28 % un curso formativo, sólo el 11 % está de acuerdo con un ingreso irrestricto. En cuanto al arancelamiento, el 80 % opina que no debe establecerse y el 12 %, en cambio, estaría de acuerdo. Los cursos del Ciclo Profesional Orientado son elegidos por los alumnos, por motivos académicos en un 63,51 % (horarios de trabajo, para cumplir con los puntos, por exigencia del plan de estudios, por ciertas facilidades). Sólo el 32,02 % elige los cursos por

motivos académicos (interés en los objetivos y contenidos ofrecidos) (Fucito, 1996: 49 y ss.)

Al momento del egreso de la Facultad, parecería que el profesional destaca las falencias prácticas de la formación universitaria. Esto queda explicitado en la investigación sobre el perfil del abogado de la provincia de Buenos Aires (Fucito, 1996, T. I: 131 y ss.) donde se piensa que la formación universitaria es menos importante que la capacitación futura. De todos modos, de las entrevistas surge una falta de auto crítica del profesional y, al momento de la capacitación con profesionales con mayor antigüedad del título, se considera mejor preparado ya que conoce la legislación actualizada.

En las entrevistas a abogados con varios años de experiencia, éstos hablan mal de la formación y de la vocación de los jóvenes, haciendo hincapié en que "toda educación pasada fue mejor". Es de subrayar la falta de práctica, la menor calidad de los profesores ya que faltan "los maestros", la menor calidad de los textos (apuntes), cursadas que no agotan la materia, planes incomprensibles (caso de la Universidad de Buenos Aires), la menor calidad en la formación general (ortografía, gramática). Aparecen los jóvenes abogados con disposición a capacitarse, los mayores, en cambio, se identifican con escasa voluntad de perfeccionamiento.

A lo expuesto cabe mencionar que, de los abogados encuestados, no superan el 11 % quienes poseen un posgrado o doctorado completo. Los que realizan algún curso correspondiente a postgrado o doctorado, sin completar, alcanza al 25 %, y los que no lo realizan, son mayoría. Los estudios formales suelen terminar con el título de grado.

En cuanto a cursos de actualización, jornadas o congresos, más del 40 % no asistió o no realizó ninguno. El 60 % restante se divide por tercios aproximados entre los que hicieron uno o dos, tres o cuatro y cinco o más. Hay que mencionar que las mujeres superan a los hombres en doctorados concluidos (13 % contra 9 %) y en la realización de cursos de actualización. La educación o los estudios formales son suplidos por la práctica profesional donde el 21 % de los encuestados fue asistido por un abogado mayor, el 20 % se incorporó a un estudio y el 15 % fue ayudado por profesionales. El resto se inició solo (Fucito, 1996 T. II: 153-154).

### Estratificación social

La estratificación social incluye todas las formas y problemas relacionados con la desigualdad social. Es así que toda sociedad es concebida como estructurada por estratos superpuestos que implican superioridad e inferioridad, conforme distintos indicadores. Cada sector o estrato establece ciertas posibilidades de vida diferenciales de sus integrantes. Esas diferencias se hallan vinculadas a la posesión o no, y a la magnitud de alguna parte de la inmensa cantidad de bienes escasos (salud, seguridad, comida, vivienda, educación, entre otros ejemplos), cada uno de los cuales genera una jerarquía que debe estimarse de acuerdo con las posibilidades de participación al alcance del individuo o al de la familia en el uso de esos bienes.

#### 1. Etapas de análisis en la estructura social argentina

Existen distintos estudios sobre la estratificación social que en su momento constituyeron un gran avance en el conocimiento de la realidad argentina y de distintas regiones; más allá de las continuas controversias sobre el papel histórico y político que las distintas teorías asignan a los diferentes tipos de análisis.<sup>1</sup>

Aquí se rescata el trabajo de Susana Torrado (1994) por la mayor actualidad de la información que utiliza. En él se trata de establecer los cambios que se operan en la estructura social argentina siguiendo una periodización definida por los modelos de acumulación dominante en el lapso de 1945-1983. Se compone el perfil de la estructura en tres épocas, teniendo en cuenta la naturaleza de cada una de las estrategias de desarrollo, y procurándose, además, describir la estructura de clases en un momento puntual, según las condiciones de vida.

La estructura de clases es el conjunto de individuos distribuidos de acuerdo con sus prácticas económicas, en distintas posiciones, tomando en consi-

1. Gino Germani, *Estructura Social Argentina*, Ediciones Solar, 1955; Agulla Juan Carlos, Miller J. y Chamorro Greca, E. *De la industria al poder*, Libera, Buenos Aires, 1966; entre otros destacados trabajos.

503.5.1

deración la división social del trabajo, las relaciones de producción (Torrado, 1994: 25). Estas relaciones constituyen el criterio para delimitar los segmentos de clases sociales que asume la sociedad. Queda claro que clase social se utiliza aquí a partir de una determinación económica. Por esto es que se elabora un nomenclador de la variable "condición socio-ocupacional" donde se comprende 1) a las fracciones de clases: diferencias horizontales, procesos, ramas y/o su tareas de producción; y 2) en capas sociales: diferencias verticales y jerárquicas.

Las clases sociales son:

a) *Clase Alta*: integrada por directores de empresas, empresarios, funcionarios públicos superiores, entre otros.

b) *Clase Media*:

1. *Estrato Autónomo*: comprendido por profesionales y funcionarios específicos (como médicos, abogados, ingenieros, economistas), propietarios de pequeñas empresas (gerentes, explotaciones agropecuarias, comerciantes) y pequeños productores autónomos (por ejemplo, electricistas, mecánicos, pequeños propietarios).

2. *Estrato asalariado*: es decir aquellos que reciben una remuneración en forma de salarios integrado por profesionales en funciones específicas (médicos, abogados odontólogos, arquitectos), técnicos y asimilados (profesores, jefes, supervisores, maestros) y empleados administrativos y vendedores (secretarios, empleados en general).

c) *Clase Obrera*:

1. *Estrato Autónomo*: trabajadores especializados autónomos (por ejemplo, costureros, albañiles, electricistas, conductores de vehículos).

2. *Estrato Asalariado*: obreros calificados (especializados) y obreros no calificados (peones, jornaleros)

3. *Trabajadores Marginales*: sin educación formal, sin inserción estable en la producción, que constituyen las capas inferiores de los trabajadores. Son los peones no calificados y empleados domésticos.

Es importante establecer que surgen distintos interrogantes referidos a las características de las clases sociales, teniendo en cuenta las políticas públicas que alteran significativamente la estructura socio-económica con una transformación lenta que se manifiesta durante tiempos muy prolongados. Se reconocen, en la Argentina, tres estrategias de desarrollo que inciden de manera manifiesta en la estructura de clases sociales. Estas estrategias son: las justicialistas (1945-1955), la desarrollista (1958-1972) y la

aperturista (1976-1983). Es de interés relevante determinar qué sucede con las mencionadas clases en las etapas (o modelos) de estrategia de desarrollo que marcan una secuencia o una suerte de evolución referida a la estructura social argentina.

Respecto de la Clase Alta, en la Argentina es difícil delimitarla debido a que, por definición, más allá de la diferenciación socio-ocupacional o del nivel de consumo, entra la dimensión del "poder", algo imposible de aprehender con los datos y metodologías usadas en la investigación aquí analizada (Torrado, 1994: 348 y ss). Como se expuso, este sector se encuentra comprendido por empresarios, cabezas de sus empresas junto con directores de grandes o medianas empresas, en menor medida de actividades agrícolas-ganaderas, la banca privada, destacándose el sistema financiero, el sector de la construcción y las más modernas empresas de servicios. Comprende aproximadamente unas 82.000 personas en términos absolutos, y por esta razón, se presenta como un grupo residual ya que se trata de la cúpula de las cúpulas. La determinación estadística precisa de la Clase Alta no tiene excesiva importancia ya que su poder no reside en su importancia cuantitativa sino en la naturaleza de los vínculos que establece respecto del resto de las fuerzas sociales. Son producto de un proceso de concentración y centralización de capitales que forman los "grupos de interés", y no se puede hacer distinciones entre la burguesía agraria y la burguesía industrial. Se pueden detectar núcleos de poder económicos nacionales y de empresas transnacionales diversificados o integrados. Los primeros se destacan en la década de 1930 y durante el justicialismo. La segunda se da incipientemente con el justicialismo y especialmente con el desarrollismo con predominio en la época aperturista.

### 1.1. Primera etapa

La Argentina debe abandonar el modelo agroexportador que se había destacado desde fines del siglo XIX, e iniciar así, un proceso de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva. El período próximo al modelo justicialista, que abarca los años 1930 a 1945, se identifica con el estancamiento de la actividad agropecuaria tradicional y por el estímulo de la actividad industrial.

En 1945, con la aparición pública de Perón y como manifestación de una nueva alianza de clases, la obrera y la de los pequeños y medianos empresarios industriales, se produce un apoyo a una línea nacionalista de las fuerzas armadas que es, además, portadora de un proyecto de industrialización. Se

trata de una dinámica relativamente modernizante e incluyente, incorporando al empleo y al bienestar, importantes contingentes de fuerza de trabajo. Se puede afirmar que se trata de una etapa o modelo justicialista, donde la estrategia es "distribucionista", con un Estado asistencial y protector. La industria manufacturera constituye el objetivo central del proceso de desarrollo. Se impulsa una industrialización sustitutiva basada en el incremento de la demanda de bienes de consumo masivo en el mercado interno (industria textil, alimentos) acompañado por el crecimiento del salario real.

El modelo requiere así medidas redistributivas del ingreso que impulsan la demanda interna, la ocupación industrial y la acumulación. Los nuevos puestos asalariados benefician a la Clase Obrera, como Clase Media Asalariada. Uno de los principales sectores favorecidos son los empleados de la construcción. El campo de acción económica y social se extiende al Estado con la nacionalización o creando importantes empresas de servicios públicos y acentuado su estrategia redistribucionista a través de la asignación creciente de recursos a la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social. Aumenta el sistema previsional, se consolidan las obras sociales y los beneficios de las asignaciones familiares. Es el Estado el que se encarga también de la reasignación de recursos para la producción. Se expropia parcialmente la renta agraria a través de la nacionalización del comercio exterior de productos agropecuarios. Esto, junto a otras decisiones, generan la oposición de los sectores agroexportadores y de los grandes empresarios.

En lo que se refiere a la estructura rural se produce un estancamiento de la región pampeana respecto a la actividad agrícola-ganadera por el despegue de la industrialización sustitutiva. Se produce un rápido despoblamiento rural debido a: 1) la escasez de maquinarias originadas en el cierre de la exportación por la guerra mundial; 2) la modificación drástica de la relación propietario-arrendatario como es el caso de la legislación social; 3) el acceso fácil al crédito; y 4) la disminución del precio de la tierra. Esto da origen a la aparición de pequeños propietarios en proceso de creciente capitalización.

Respecto de la estructura social urbana, ésta se encuentra formada por un 40 % de puestos de las Clase Media y el 60 % de puestos de la Clase Obrera con un neto predominio del empleo asalariado en ambos, 2/3 de la clase media y 3/4 de la Clase Obrera se encuentra ocupada. La Clase Media autónoma crece con trabajadores cuentapropistas e industrias manufactureras, seguidas por la multiplicación del comercio minorista. Se expanden y se expanden pequeños y medianos establecimientos. La Clase Media Asalariada crece más rápido que el promedio por la multiplicación de puestos administrativos. Junto con esta clase crece la Clase Obrera Autónoma por

que disminuyen los empleados domésticos y los peones. En la Clase Obrera Asalariada, el crecimiento es inferior a los otros aunque resaltan la industria manufacturera, la construcción y algunas ramas terciarias (transporte y administración). A mediados de la década de 1950 se destaca que los empleos marginales y precarios no son perceptibles, éste se debe a un importante avance de la legislación laboral y social.

En la movilidad social un canal de ascenso lo constituye, sin duda, la continua expansión de la educación formal. La búsqueda de mejoras, la modesta posición social rural produce migraciones a centros urbanos donde se dan especialmente (aunque, también, en zonas rurales) el crecimiento de los pequeños propietarios a través de sistemas protectores y de créditos.

## 1.2. Segunda etapa

En el contexto de una proserpición autoritaria del peronismo de la vida nacional, en 1958 accede al poder un nuevo bloque caracterizado por una alianza de la burguesía industrial nacional y del capital extranjero corporizado en empresas transnacionales norteamericanas. Esta etapa es denominada "Modelo Desarrollista" ya que se trata de una estrategia de corte "concentrador" donde el Estado conduce la capitalización, creando las condiciones del ingreso de empresas transnacionales que provoca la caída del salario real y generando diferentes tensiones sociales.

El Estado sigue siendo benefactor pero se registra un fuerte retroceso de la acción pública en materia de bienestar social. La industria constituye el objetivo central del proceso de desarrollo que impulsa y busca la sustitución de bienes intermedios y de consumo durable. El aumento de la demanda está asegurado por la inversión, el gasto público y el consumo sumario del reducido estrato social urbano de altos ingresos. Este modelo implica un proceso regresivo de la concentración de ingresos.

Es en esta época cuando se ostenta uno de los mejores comportamientos globales de la economía especialmente la referida a la tasa de crecimiento (Torrado, 1994: 415 y ss.). De todos modos es necesario remarcar que se trata de un modelo identificado con la modernización y complejización de la división social del trabajo que trae aparejado un proceso de exclusión social en el aumento de la marginación y precarización del trabajo a pesar del elevado crecimiento económico (Torrado, 1994: 58-59). En este momento la Clase Media representa alrededor del 45 % de la población y el 54 % se encuentra identificada con la Clase Obrera. En ambos casos con el prodo-

minio del Estrato Asalariado y con un incipiente aumento del sector autónomo, en la Clase Obrera.

En lo que se refiere a la estructura social rural se adoptan tecnologías que inducen al crecimiento y al equilibrio de la producción de granos y carne vacuna, pero que disminuye, asimismo, el empleo rural. Se destaca la aparición de un nuevo estrato identificado con los contratistas agrícolas mecanizados que venden servicios de laboreo y cosecha, originando la diversificación de la producción.

En la estructura social urbana la creación de empleo es aún más rápida que durante el período precedente. El papel de la industria manufacturera es casi nulo. La nueva estrategia destruye un número considerable de pequeños y medianos establecimientos industriales pero aumentando, no obstante, empleos de asalariados de Clase Media especialmente en puestos administrativos y técnicos industriales. Aparece con gran protagonismo la construcción (empleo obrero urbano) y la tercerización (comercio y servicios en general).

Entonces, en lo referente a la Clase Media Autónoma, esta crece muy lentamente en este lapso en el que se registra una disminución de los propietarios industriales y de transporte, y se originan los oligopolios, a la vez que se produce la extranjerización de los mismos y un altísimo nivel de concentración en este estrato. En cambio se expande en todos los sectores la Clase Media Asalariada, en la que sobresalen los técnicos y los profesionales debido a la modernización de las organizaciones empresariales. La Clase Obrera autónoma se propaga, también, con rapidez beneficiando a los trabajadores de los servicios, el transporte y la construcción, todo como consecuencia de la retracción del artesano industrial. Sucede lo mismo con la Clase Obrera Asalariada ya que crece en la construcción y en el comercio, pero disminuye significativamente en el sector industrial.

Mejora la salud, la educación y el salario real a partir del ingreso de las familiares del obrero y se amplían, además, la cobertura previsional, de las obras sociales y las asignaciones familiares. Los haberes jubilatorios disminuyen el valor real.

Durante la vigencia de este modelo se produce un aumento del empleo marginal y precarización del mismo que se relaciona con la pérdida de posiciones de poder de las organizaciones sociales y sindicales. La educación, especialmente, la secundaria, es el medio que permite el ascenso social, identificado con la Clase Media Asalariada. El gran incentivo es el sector servicios y es la construcción la que permite la integración y el ascenso de los migrantes identificados con la Clase Obrera Asalariada del sector rural.

### 1.3. Tercera etapa

En el medio de una profunda crisis política y económica recibida del gobierno constitucional justicialista instaurado en 1973, el gobierno militar de 1976 adoptó una estrategia de desarrollo sustancialmente diferente a la experiencia de los modelos anteriores. Es en esta época cuando se produjo una alianza entre el estrato militar, la burguesía nacional y las empresas transnacionales, que llevan a ser conocida esta etapa como la del "Modelo Aperturista". En estos momentos cuando se busca un "disciplinamiento social" generalizado mediante un cambio drástico de la antigua estructura de relaciones políticas, sociales y económicas.

Con la apertura externa de la economía se da por terminada la industrialización con el objeto central del proceso de desarrollo. Esto origina una mayor concentración de capital y la eliminación de los ingresos de menor productividad, acompañados de una contención drástica del salario real como medio de control de la inflación. La concentración económica se da por la disminución de la producción y de la demanda interna. La inversión es de tipo especulativo-financiero incrementado por la deuda externa, hecho que origina el registro de una tasa del 2,3 % de crecimiento anual, lo que constituye la tasa menor de los tres períodos aquí analizados. Esta situación explicita la pérdida del posible liderazgo de la actividad industrial sin poder ser reemplazado por ningún otro factor dinamizador del crecimiento (Forrado, 1994: 62 y ss.).

Se trata de un modelo concentrador sin modernización y excluyente, donde el aumento del empleo urbano es notablemente más lento a pesar del progreso en la construcción y el crecimiento de la actividad comercial. Se amplia, asimismo, la terciarización y la Clase Media Autónoma. Esta llega a un 47 % sin progreso en el sector asalariado, y la Clase Obrera disminuye a un 52 %. Aumenta el cuentapropismo es por esta razón se puede afirmar que se sobrestima el crecimiento de esa clase. Hay que aclarar que existe una precarización altísima de la misma y especialmente, en la Clase Obrera, en sectores de la industria y de la construcción.

En lo referente a la estructura social rural se destacan la modernización y el crecimiento de la producción originada en los cambios tecnológicos. Aparecen las "empresas familiares combinadas" según las cuales varias unidades de producción se agrupan para lograr una escala rentable. Se destaca, también, el arrendamiento por cosechas en detrimento del arrendamiento a largo plazo.

Respecto de la estructura social urbana se produce una fuerte retracción de la oferta de mano de obra en los mercados de trabajo urbano y con ello una



drástica migración interna a los grandes centros urbanos. Se favorece a posiciones autónomas en detrimento del asalariado tanto en la Clase Media como en la Clase Obrera. La Clase-Media Autónoma se destaca en la actividad comercial en detrimento de la industria, afectada en profundidad por el aperturismo. En la Clase Media Asalariada son muy favorecidos los profesionales y los técnicos junto con los servicios de salud, de comercio, las empresas y especialmente las financieras. Esto es acompañado por una categórica disminución del empleo público y administrativo en la industria. La Clase Obrera Autónoma es la de más crecimiento en el área de la construcción y en los servicios personales. La Clase Obrera Asalariada, sin mayor educación, se ve muy perjudicada y es por el descenso del asalariado que produce la pauperización de trabajadores, un aumento importante del empleo marginal.

Se destaca el fenómeno de la "pobreza crítica" donde aparecen amplios sectores con necesidades básicas insatisfechas o con ingresos insuficientes para garantizar satisfacciones elementales. Con la caída del salario real el gasto y la inversión social se reducen. El sector público pasa a ser sólo asistencialista, complemento para los sectores sociales bajos (por ejemplo, Salud). Esto fue acompañado con recesión y aumento del desempleo oculto. La movilidad social es básicamente descendente en cuanto a las condiciones laborales y de bienestar. Se detiene casi por completo el crecimiento del empleo urbano de la Clase Media Asalariada. El ascenso lo vive la Clase Media Autónoma (comercio). La educación sigue siendo un importante canal de ascenso pero este sector no recibe las inversiones características de épocas anteriores.

## 2. Tamaño, crecimiento y composición de la población

De cerca de 16 millones de habitantes en 1947, la población argentina pasó a 28 millones en 1980, lo que permite inferir un crecimiento total lento en comparación con décadas anteriores y con otros países latinoamericanos. Se nota una desaceleración persistente a partir de 1930. Desde 1950 la natalidad acelera su descenso como consecuencia, principalmente de la fecundidad. La tasa bruta de mortalidad se destaca por dos razones: un aumento de las esperanzas de vida y el envejecimiento de la población, que explican, de este modo, la desaceleración del crecimiento vegetativo.

En lo que se refiere al crecimiento migratorio parecería observarse una tendencia declinante a partir de 1970 hasta llegar a aparente extinción en el quinquenio 1975-80. Respecto a las inmigraciones externas se puede observar dos corrientes: la que procede de Europa y la de los países limítrofes.

En la primera, después de 1930, tuvo un único período significativo entre 1947 y 1952, luego hay una notable disminución de la inmigración total que produce asimismo cambios en la composición por origen debido al incremento del flujo proveniente de los países limítrofes, por lo menos hasta mediados de la década de 1970, estando compuestas, principalmente, por trabajadores manuales calificados y no calificados.

Por otra parte, a fines de la década 1950 comenzó un fenómeno inédito en el país: la emigración. Este fenómeno se intensificó en la década de 1960 y, sobre todo, de la década de 1970 y 1980. Se entiende que entre 1955 y 1985 emigraron hacia el exterior unos 650.000 personas compuestas, generalmente, por técnicos y profesionales (Torrado, 1994: 72 y ss.).

La distribución espacial de la población en el conjunto del territorio nacional en determinado momento depende de los siguientes factores: el crecimiento vegetativo de cada localidad, el volumen de asentamiento territorial del saldo neto de las migraciones internacionales y el volumen y dirección de las migraciones internas (Torrado, 1994: 76 y ss.).

A) En el crecimiento vegetativo (diferencia entre la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad) se observa que en las regiones del Noroeste y el Nordeste se duplica, y hasta se triplica el correspondiente a la región pampeana en los tres períodos. Este aumento se identifica con los estratos bajos. Se promueve la natalidad a través de incentivos indirectos (prohibición de los anticonceptivos y omisión de servicios de planificación familiar en hospitales públicos y obras sociales).

B) Las migraciones internacionales, como ya se expuso, no son tan importantes como lo fueron antes de 1930. La inmigración de ultramar se asienta, en mayor medida, en el Gran Buenos Aires y en zonas urbanas y rurales del litoral pampeano, los inmigrantes limítrofes se radican en un primer momento en las provincias vecinas a sus países de origen, y luego se suman luego a las corrientes internas de nativos hacia el Gran Buenos Aires. Durante los dos primeros modelos existía una política que facilitaba la inmigración de habitantes de países limítrofes ya que se facilita la documentación en general y el permiso de residencia en especial, con lo que prosperó la mano de obra de indocumentados a fines de la década de 1970.

C) En referencia a las migraciones internas, estas son determinantes de la oferta de trabajo a nivel local y varían de acuerdo con las distintas épocas: 1. Durante el período de 1947 a 1960, la población rural disminuyó notablemente ya que los principales flujos migratorios se originan en áreas rurales de la región pampeana y, en menor medida en las regiones noroeste y

nordeste. Esta transferencia de población se dirigió hacia aglomeraciones urbanas de diversos tamaños. El 68% de los migrantes se orientó hacia el Gran Buenos Aires, produciendo pérdidas de importancia demográfica en la región pampeana y el importante incremento del Gran Buenos Aires. Resultaron favorecidos los centros urbanos de tamaño intermedio como Córdoba y Rosario. En 1947 el 17% de la población total del país había emigrado de su provincia de nacimiento. En 1960 el porcentaje subió a 19%.

2. En el período comprendido entre 1960 y 1970, el número de residentes rurales siguió disminuyendo. Los principales flujos migratorios continuaron generándose en la región pampeana aunque por entonces eran más significativas las transferencias desde el Noroeste y el Nordeste, todas dirigidas al Gran Buenos Aires pero desacelerándose su crecimiento respecto al período anterior. Aumentó la población urbana. Al crecimiento mencionado del Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario se agregaron La Plata, Mendoza y otras ciudades del interior del país. El porcentaje de personas que vivía fuera de su provincia aumentó a un 24%.

3. Entre 1970 y 1980 la población rural sigue disminuyendo pero a ritmo más lento. Resultaron preponderantes los desplazamientos urbano-urbano (de ciudades medias a grandes centros urbanos). Se produjo un crecimiento demográfico de las capitales provinciales junto con un retorno de población del Gran Buenos Aires hacia sus provincias de nacimiento. Debido a estas razones se registró por primera vez un aumento de la población que residía en regiones extrapampeanas, desacelerándose el ritmo de la urbanización. El porcentaje de la población que vivía fuera de su provincia de nacimiento en 1980 es del 23%.

Respecto a la composición, por sexo y edad, la población argentina se encuentra caracterizada por una progresiva disminución de la relación de masculinidad de la población, alta en períodos de gran inmigración externa por la predominante composición y debido a las expectativas de los integrantes de la misma. Se destaca un paulatino envejecimiento de la población ya que se registra un aumento progresivo de la proporción de habitantes de 65 años y más, considerándose envejecida una población cuando esa edad supera el 7% del total de la población. La Argentina ingresó en esta categoría en la década de 1970.

Se destaca, además, una reducción significativa del porcentaje de la fuerza de trabajo sobre la población total como consecuencia de la prolongación de la escolaridad entre los adolescentes y de la generación del retiro por jubilación, junto al notorio incremento, en la participación económica, de las muje-

res entre 25 y 50 años. Es decir que la fuerza laboral se ha ido haciendo comparativamente más chica, más femenina y más adulta. Esto beneficia a la región pampeana en detrimento de las regiones Noroeste y Nordeste pero impulsa a las grandes ciudades a crear empleo para la enorme oferta demográfica de mano de obra (Torrado, 1994: 90 y ss.).

En el crecimiento vegetativo (en la tasa de natalidad y en la tasa de mortalidad) y migratorio (especialmente trabajadores manuales calificados y no calificados), cobra importancia la Clase Obrera.

#### 4. La actividad regional

De acuerdo con Juan C. Agulla (Agulla, 1987) las regiones argentinas son unidades estructuradas que han emergido de ciertos procesos políticos y de diferentes características singulares geográficas, demográficas, económicas, culturales, antropológicas, entre otras. Estas características proveen a las regiones de una relativa homogeneidad y cohesión interna creando condiciones propias y típicas para distintas formas de vida social, económica, política y cultural en un determinado momento histórico. Estas regiones han sido objeto de manejo y de organización política mediante la asignación de funciones dentro de una política nacional, respondiendo a un compromiso político, a un proyecto nacional. En él se establece una programación racional de las políticas adecuadas para el logro de objetivos prioritarios a través de medidas conducentes, con las metas puestas en "utopías posibles" (Agulla, 1987: 15 y ss.).

El Estado Nacional, con la sanción de la Constitución Nacional de 1853, comienza un proceso de integración nacional, de constitución de la Nación Argentina y con él se da un proceso de diferenciación regional que de hecho existe, pero que se formaliza en la Carta Constitutiva al priorizar la Región Pampeana sobre las demás (Andina, Chaquena, Patagónica) destacando sus potencialidades y sus posibilidades. Lo expuesto se funda en la importancia de la política liberal (como ya se señaló, fines del siglo XIX y principios del XX) que se basa en la importancia de productos manufacturados y en la exportación de productos agropecuarios. De este modo, se confirma la política de "puerto-pampa" identificada con Europa y en detrimento del "continente-cordillera", un fallido proyecto latinoamericanista que asigna funciones específicas a la región pampeana y le resta importancia y función a los demás. La región pampeana se hace cada vez más prevalente y las otras regiones cada vez más residuales.

En los hechos, dejando de lado el proyecto, el enorme desarrollo agropecuario de la Argentina en una etapa fundacional (fin del siglo XIX) se

presenta, en la Región Pampeana, como una modalidad de absorción de fuerza de trabajo (arrendatarios, colonos, trabajadores golondrinas). El personal fijo asalariado representa el 14-3% del total del personal permanente, en el conjunto de las explotaciones el 35,5% correspondía a propietarios y el 58,6% a arrendatarios; las unidades de 1.000 hectáreas y más representa el 2,6% del total de las explotaciones y concentraban el 41,6% de la tierra.

Con la depresión, en 1930, resultó afectada la actividad agrícola (baja productividad y poca especialización) pero no la ganadería. De todos modos la rentabilidad del capital para los empresarios agrícolas no requería innovación tecnológica y con ello se produjo un estancamiento de la producción en un contexto de rápido despoblamiento debido a las migraciones urbanas a corto plazo. Dada la muy baja mecanización y las migraciones, las empresas no pudieron suplir la carencia de mano de obra abundante (Aguilla, 1987: 165 y ss.). Con esto se produjo un aumento de propiedades que llegó al 52,6%, los arrendamientos disminuyeron al 21,6% y el personal fijo asalariado llegó al 24,7%; las unidades de 1.000 hectáreas o más aumentaron al 4,5% y la concentración de la tierra llegó a 51,6%. Esto daría la impresión de la consolidación de un estrato de pequeños propietarios en proceso de creciente capitalización pero, en realidad, no cambia la estructura de la propiedad de la tierra.

Alrededor de 1960 el sector público estimulaba la adopción de tecnología que indujo el crecimiento paralelo y equilibrado de la producción de granos y carnes vacunas. El personal fijo asalariado siguió disminuyendo (20,7%) el grado de concentración en la explotación de 1.000 hectáreas o más se mantuvo constante (5%) y en la concentración de la tierra se produjo un nuevo aumento (57,7%). Es en esta época cuando se destacan la aparición de los ya mencionados, contratistas agrícolas mecanizados, y con su presencia se destaca la aparente desaparición de arrendatarios.

A mediados de la década de 1970 sobresale la modernización y el crecimiento vigoroso de la producción, resultante de cambios tecnológicos en la agricultura. Esto se acelera a partir de 1980, aumentando la heterogeneidad productiva con una reducción casi total de los arrendamientos. Es en esta época cuando el establecimiento moderno de gran tamaño pasa a pertenecer a conglomerados económicos con la consiguiente reducción del número de explotaciones (propietarios).

En el resto de las regiones se va ganado una participación relativa en el volumen total del empleo permanente agropecuario, con una lenta capitalización y aumento en las ganancias. Se producen, también, un aumento de

los propietarios y una correlativa disminución de los arrendatarios en todas las áreas productivas. De todos modos, existe un gran número de minifundios, coexistiendo con una gran concentración de las tierras en pocas manos. Claro está que este no es un fenómeno en todas las regiones (restando a la Pampeana). Los minifundios se encuentran eclipsados especialmente en la Patagonia.

Existen niveles bajos de empleos agropecuarios, un considerable aumento de la terciarización urbana privada con bajos componentes de empleo público, de asalariación global y de clase media agropecuaria, aunque diferenciándose del Gran Buenos Aires, se da en Córdoba y Santa Fe y con ello una notable disminución del empleo en el agro. En las tres zonas mencionadas se produce un bajo perfil del empleo público, una Clase Media Asalariada y una Clase Obrera Asalariada importante. En la Región Patagónica se inicia una rápida urbanización ocupacional con moderada terciarización y acelerados progresos de la asalariación global y de la Clase Media pero con un componente de empleo público muy elevado, por lo tanto con un carácter ficticio en su proceso de modernización. Disminuye la Clase Media Asalariada y aumenta la Clase Obrera Asalariada siempre si se la compara con la Región Pampeana. Lo expuesto está relacionado con el peso considerable del sector productivo creado al amparo de los regimientos de promoción industrial.

La Región Chaqueña presenta una moderada urbanización ocupacional, una elevada terciarización del empleo urbano y moderada asalariación global y un alto componente de empleo público. Se nota una disminución, respecto de la Región Pampeana, de la Clase Obrera Asalariada. El volumen del sector empresarial es muy reducido. La Región Andina se mantiene, en general, con un importante volumen de empleo agropecuario, con una evidente hiperterciarización del empleo y la decisiva contribución del sector público a los niveles de asalariación. Le corresponde a esta región un bajo volumen de la Clase Media Asalariada y Clase Obrera Asalariada (Aguilla, 1987: 257 y ss.).

## 5. La estructura social a fines del siglo XX

Debido a lo expuesto, y referido a las tres etapas o estrategias de desarrollo surge como consecuencia una contracción absoluta de la población económicamente activa en el sector agrícola junto con una notable reducción del nivel del empleo (superior a la mitad), si se la compara con la situación social en 1980. En las décadas de 1980 y 1990, la actividad industrial decayó, especialmente en cuanto al Estrato Asalariado y de pequeños empresarios y artesanos industriales. Se produjo un aumento notable en el nú-

mero de profesionales y técnicos. La construcción se expandió junto con los sectores terciarios ya que están identificados con el crecimiento urbano. Existió, también una mayor extensión del cuentapropismo obrero.

Comparado con los modelos anteriores el actual, implementado en la década de 1990 se identifica con lo neoliberal y neoconservador, asemejándose al modelo "aperturista" de la tercera etapa. Algunas medidas del gobierno militar de 1976 a 1983 parecen ahora haber sido meros ensayos, ya que en la última década del siglo se produjo una concentración y/o centralización del capital y la privatización de empresas públicas. El estado adoptó las características de subsidiario. Se incrementó notablemente la productividad pero sin mejoras salariales y sin aumento del empleo, sino todo lo contrario, acompañado por la búsqueda de la flexibilidad legal en lo jurídico, ya existente el plano informal. Se destacan una Clase Alta y Clase Media Autónoma que busca ganancias sin asumir mayores riesgos.

La Clase Alta, numéricamente inferior al resto de la población, se encuentra en curso de enriquecimiento absoluto. En cambio la Clase Media numéricamente creciente se encuentra en curso de pauperización relativa. Respecto a la Clase Obrera, numéricamente decreciente, se dirige a una pauperización absoluta. Esta situación coincide con numerosos signos agudos y exacerbados de inseguridad social y regional.

El fin del siglo XX se caracterizó, por una aguda recesión, una violenta exclusión social, un aumento del déficit fiscal y la falta casi absoluta de previsión social (Torrado, 1994: 452 y ss.). Resulta, entonces, necesario efectuar un análisis más exhaustivo de la pobreza y el desempleo.

### 6. La pobreza en la Argentina

Entre 1993 y 1994 se verificó un incremento, tanto en el nivel como en el ritmo de crecimiento, de la tasa de desocupación abierta, es decir el porcentaje de personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo, sobre el total de la Población Económicamente Activa (PEA). En 1994 la tasa de PEA alcanzó el 12,2 % dato que resulta impactante si se lo compara con el 6 % de 1991. Esto es similar en lo que se refiere a la tasa de subocupación abierta, integrada por personas que trabajan menos de 35 horas por semana, debido a causas involuntarias, sobre el total del PEA. El deterioro de la situación ocupacional en el lapso analizado se observa en los cambios del volumen y de la composición de la mano de obra entre 1980 y 1990:

A) El número de ocupados plenos se mantuvo constante, lo que implica un crecimiento nulo del empleo productivo.

B) Se produjo una expansión del empleo abierto sin precedentes históricos en el país, casi cuadruplicó a lo largo de 10 años ya que se parte del período 1976-1980.

C) Como se expuso, se experimentó una importante expansión de la subocupación urbana. Con ello aumentó el subempleo abierto u horario y el subempleo público provincial y municipal. Crecieron el número de subempleos ocultos (sector informal urbano o trabajadores marginados) y el servicio doméstico.

En estos tres casos se nota un debilitamiento de la capacidad económica que genera empleo genuino aumentando sólo el subempleo horario y el desempleo abierto, los trabajos marginales, el servicio doméstico y el servicio público (Torrado, 1995: 74 y ss.). Esta situación se encuentra acompañada por una desalarización de la fuerza de trabajo donde se acentúa la informalización de los asalariados donde surgen con fuerza las microempresas. A esto se le agrega la precarización de los asalariados.

A partir de lo expuesto se puede afirmar que se produce una evolución en la incidencia de la pobreza. Por esta razón que se especifica qué se entiende por "incidencia de la pobreza" ya que permite detectar la importancia cuantitativa que revisten los hogares pobres dentro de un total dado de hogares. Cuando se hace referencia a la intensidad de la pobreza se describe la mayor o menor gravedad de las carencias dentro de un grupo de hogares ya categorizados como pobres. En la Argentina se han empleado dos enfoques distintos en la medición de la pobreza: las denominadas *Necesidades Básicas Insatisfechas* (NBI) que consideran pobres a aquellos hogares que evidencian falta de acceso a ciertos servicios esenciales, fundamentalmente los relacionados con una vivienda adecuada; y el segundo enfoque conocido como *Línea de pobreza* (LP) por el que se considera pobres aquellos hogares cuyo ingreso familiar no alcanza a cubrir el valor de una canasta básica de bienes y servicios de costo mínimo. Ambos enfoques se han utilizado en forma combinada con la intención de establecer distinciones "más finas" en la medición del fenómeno como el referido a los *pobres estrictos* a quienes se los define utilizando estos dos índices.

Los *pobres emergentes* son aquellos identificados con el NBI pero con ingresos superiores a los de la LP. Estos grupos están mejor situados para experimentar movilidad social ascendente, por muy modesta que esta fuera. El grupo de los *pauperizados* o *nuevos pobres* están formados por hogares que satisfacen sus necesidades básicas (NBI) pero que tienen ingresos

inferiores a la LP y que suelen ser visualizados como indicadores de movilidad social descendente.

En el caso de los pobres estructurales se hace una distinción porque esta variable comprende dos tipos de hogares:

A) *Hogares indigentes*: aquellos que ni siquiera pueden satisfacer las necesidades alimenticias consideradas mínimas.

B) *Hogares carenciados*: caracterizados por no poseer vivienda adecuada ni acceso al consumo de bienes y servicios básicos, pero que logran cubrir las necesidades alimenticias mínimas.

La primera medición de la pobreza fue realizada en 1970 bajo el sistema de LP y los resultados del estudio indican que su incidencia era la más baja de toda América Latina, ya que solo solo un 5 % de los hogares urbanos tienen ingresos inferiores a la LP, mientras que en el área rural esa proporción afectaba el 19 % de los hogares. Esta situación contrasta con las cifras del 26 % y 62 % respectivamente, en la región.

En los primeros años de la década de 1980, en el Conurbano bonaerense la combinación del INBI y del LP da un 28,9 % de pobres contra un 71,1 % de no pobres. De los pobres el 12,2 % es indigente; el 1,1 % carenciado, el 13,3 % emergente y el 2,6 % pauperizado especialmente. Como consecuencia de distintos factores de la década anterior (políticos, económicos y sociales entre otros). En 1989 el número de pobres ascendió a 40,1 % y el número de no pobres descendió al 59,9 %. Disminuyó el número de indigentes a 9,8 % y de emergentes a 6,1 %; aumentó el número de carenciados a 5,6 % y de pauperizados al 17,8 % (Torrado, 1995: 88 y ss.).

Por lo expuesto hay que destacar dos factores de la pobreza: por un lado el estructural, basado en condiciones objetivas de existencia donde el investigador crea categorías analíticas para describir un segmento de la realidad; y, por otro lado, la autoimagen de la gente que proviene de su percepción de las diferencias sociales; por lo tanto del conocimiento de sí mismo y de su evolución (Sautu, 1997: 289).

Para efectuar la distinción mencionada se tomaron los datos provenientes de 249 entrevistas llevadas a cabo en un barrio muy pobre de los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires, denominado "Maciel", que se halla dividido en dos zonas claramente delimitadas: una urbanizada, de antigua data, fundada a principios de siglo con construcciones de madera y chapa lo que se encuentra básicamente deteriorada, reconocida como "la isla", y la otra zona, que es un asentamiento ilegal, que en su origen fue una villa miseria y actualmente tiene zonas mejoradas y casillas precarias, esta es conocida como "la villa". Estas

dos zonas son ejemplos de un espacio identificado con la pobreza estructural. El trabajo se llevó a cabo utilizando indicadores como viviendas, ingresos y oportunidades en el mercado laboral, en lo referente al análisis objetivo arriba mencionado. Respecto al subjetivo se parte de la autopercepción del pobre y/o marginal a partir de sus experiencias cotidianas (Sautu, 1997: 294 y ss.).

Se pueden rescatar datos objetivos significativos que permiten analizar el fenómeno de la pobreza distinguiendo a "la isla" de "la villa": a) más de la mitad de la población tiene menos de 19 años lo cual indica la presencia de hogares con alta fecundidad relativa en relación con los no pobres; b) alta proporción de la población anciana asociada al retiro de la fuerza laboral y a la pérdida; a partir de la madurez, de las posibilidades de acceder a ingresos monetarios; c) alta tasa de hacinamiento (dos o más personas por cuarto). Respecto a los niveles educativos existe una marcada distinción entre "la isla" y "la villa". En la primera el abandono es del 19,1 %, mientras que en la segunda es de más del 34 %. Entre los que superan la escolaridad primaria lo alcanzaron el 77,8 % en "la isla" y el 59,5 % en "la villa". Otra diferencia importante entre ambas está referida a la propiedad de sus casas, el 70 % de las personas poseen sus casas sin ser propietarias del terreno en "la villa", en cambio en "la isla" el 70 % son inquilinos. Se agrega a la mención nada diferencia la estabilidad laboral, en "la isla" la mayoría tiene trabajo permanente (63,3 %) mientras que en "la villa" existe mayor inestabilidad (el 28,2 % se encuentra en situación estable) (Sautu, 1997: 294 y ss.).

En cuanto a la automarginación es un proceso social de comparación con los otros en términos de diferencias y similitudes con uno mismo. La idea de uno mismo proviene de la experiencia, de la biografía individual, a partir de la incorporación de la posición social por medio de la interacción social. La idea de uno mismo y la autovaloración se forman en la experiencia cotidiana de la mencionada interacción social. En "la isla" y en "la villa" se piensa las situaciones sociales como expresión de diferencias de riqueza, dinero y ocupación remunerada. En conjunto, varones y mujeres no difieren en sus percepciones. El desguero emerge cuando se tienen en cuenta simultáneamente la edad y el género. La idea de que la sociedad está dividida por la pobreza y la discriminación, es más fuerte entre los hombres y sus mujeres más viejos de "la isla", comparados con los más jóvenes y sus equivalentes de "la villa" que destacan los elementos económicos. Los más educados, en ambas zonas, con primaria completa y más, destacan las diferencias en términos de pobreza, marginación, exclusión y discriminación.

Sobresale la falta de oportunidades. En menor medida, aparece la desigualdad a partir de la nacionalidad o de características étnicas. De todos

modos, el hombre, generalmente, se identifica con la clase trabajadora, no con la Clase Baja o pobre (Sautu, 1997: 297 y 299). A partir de estos datos son varias las reflexiones que se pueden realizar. Los nuevos pobres aumentan debido a una movilidad social descendente en las Clase Media y la capa superior de la Clase Obrera. La presente situación ocasiona la disminución de las posibilidades de salir de la pobreza de quienes ya eran pobres y se produce, de esta manera, una drástica reducción de las oportunidades de movilidad social ascendente para los estratos sociales desfavorecidos. Esta posibilidad se reafirma con el aumento del número de carenciados. La disminución en el porcentaje de indigentes implica, se podría afirmar, una suerte de mejora en su situación.

En la Argentina se experimenta un deterioro de las condiciones de vida de sus habitantes, arrojando a la pobreza a grandes contingentes de hogares de condiciones modestas, al tiempo que empeoran, aun más, las carencias de los más desposeídos. Debe hacerse notar que, dado que el tamaño medio de la familia es mayor en los estratos más pobres, la incidencia de la pobreza media sobre el total de la población y no sobre el total de hogares, es todavía más acentuado (Torrado, 1994: 97).

Como lo determina Atilio Borón, no basta con el registro de la tendencia general, también es preciso analizar la transformación cualitativa de la pobreza, producida por la creciente importancia de los "nuevos pobres". El surgimiento de los empobrecidos es de gran importancia para el análisis de la estructura social. Los pauperizados se reconstituyen mediante el agregado de individuos y familias que hasta hacía poco tiempo tenían una inserción más favorable en la estructura social. Como ya se expresó pertenecían a las capas medias o al proletariado industrial o de servicio. Posían trabajos estables, muchos de ellos de "cuello blanco", un razonable nivel de educación y sus ingresos, estilo de vida y acceso a un amplio repertorio de bienes y servicios los colocaba a gran distancia (en términos psicológicos y culturales) de los pobres estructurales cuya cercanía geográfica a veces era inocultable (Borón, 1995: 4-5). En definitiva la pauperización es producto de la descomposición y posterior derrumbe de los sectores medios de la estructura social, con ello se produce un vigoroso proceso de polarización social.

Por todo esto se afirma que la situación ocupacional, la evaluación durante las últimas dos décadas, ha conducido a una grave subutilización de la fuerza de trabajo y a una extrema fragmentación de la estructura productiva, sin parámetros de comparación en nuestra historia contemporánea. Se perjudica a los sectores de ingresos bajos, medios bajos y medios-medios, con esto se aumenta la desigualdad social y el promedio de la pobreza com-

parada con los centros urbanos latinoamericanos. En la década de 1990 aparece, y con importancia, un estrato identificado con la pobreza extrema (indigentes) disminuye el volumen de la Clase Media estable y se destaca la desalarización de la Clase Obrera.

## 7. El desempleo

En las estadísticas regionales sobre el desempleo abierto, Nicaragua y la Argentina marchan a la cabeza con marcas cercanas al 20%. En este último caso se ha llegado a lo que es, por el momento, un récord histórico en materia de desempleo abierto y existe una coincidencia: aproximadamente hay unos siete millones de personas que padecen problemas referidos al empleo. Con esto se produce la cultura del desempleo y la marginalidad que degrada las formas de convivencia y se manifiesta en el aumento de la violencia urbana y suburbana, de distintas formas de drogadicción (incluyendo el alcoholismo) y en el deterioro físico y psíquico de la salud de amplias capas populares.

Si bien se produce un considerable y destacado aumento de la productividad en la Argentina, esta se logra a través de bajos salarios aumentando los sistemas de producción y de la duración de la jornada de trabajo (Cieza, 1997: 184 y ss.). Hay que destacar que la Argentina es considerada una "potencia emergente" con un crecimiento del Producto Bruto Interno cercano a un 7% anual entre 1991 y 1994, duplicando de esta manera la media latinoamericana, con una inflación muy baja y una tasa de inversión que llega al 20% en 1994. Sin embargo el desempleo sigue subiendo y se ubica por encima del 17%. El desempleo se vincula con la falta de calificación del trabajador, el sobrempleo público, actitudes adversas de algunos empleadores a generar nuevos puestos de trabajo, la incorporación de la mujer y otros miembros del grupo familiar al mercado laboral, la reconversión organizacional y productiva y la rigidez de las regulaciones laborales. Cabe agregar la apertura restringida de la economía que origina la desindustrialización, el retiro del Estado de sus funciones de control laboral y la flexibilización "de hecho" de las condiciones de trabajo. Claro está que esta situación trae aparejada un alarmante deterioro de las redes de contención social y una suerte de "refeudalización" de las relaciones laborales (Cieza, 1997: 155-156).

De todos modos, las cifras oficiales sobre el desempleo abierto y la subocupación en el país, en enero de 1995, habían generado una polémica en nuestra sociedad. En el Conurbano Bonaerense el desempleo abierto había crecido un 100% entre 1991 y 1994. En 1974 el desempleo en el área

metropolitana era del 8,9 % y en el total nacional llegaba a un 10,4 %. En 1987 la tasa alcanzó en el Área Metropolitana al 13,4 % y en toda la Nación llegaba al 14,2 %. En 1994 las cifras de desocupados en el Área Metropolitana eran de 21,3 % y en la Nación del 21 %. En marzo de 1995 la cifra trepó en el Conurbano es del 22,7 % (Cieza, 1997: 156 y ss.). De todos modos, si se suman los subocupados (invisibles) y los desalentados (los que ya no buscan trabajo) el porcentaje de argentinos con problemas de empleo oscila entre el 45 % y el 50% de la población activa según los estudios de distintas fuentes. El desempleo oculto alcanzó en 1995 a cerca de 500.000 personas. Los desocupados abiertos a 2.510.000 personas. Respecto a los subocupados visibles eran 1.460.000 personas y los subocupados invisibles alcanzaron a 3.100.000 incluyendo el sector informal urbano, servicio doméstico y trabajadores rurales pobres. El total de la población con problemas de empleo llegó a 7.680.000 personas.

La razón de estos números, en el Área Metropolitana, se debe al cierre de fabricas y a la consiguiente transformación de los obreros industriales en desocupados y marginados. La reducción de la población ocupada en la industria manufacturera bonaerense es importante. En los últimos 20 años sólo creció el producto y el empleo en el comercio y en los servicios personales y sociales. Los sectores que crecieron, son justamente, los que permiten encubrir el desempleo invisible. Por eso la precarización laboral es una de las características virulentas al patrón de crecimiento del empleo que se da en el país como es el caso del porcentaje "en negro" elevado, identificado con la construcción y el servicio doméstico. Con respecto a la evolución del "empleo no registrado", en el Gran Buenos Aires, el personal sin aportes jubilatorios fue del 18,7 % en 1980, pasando por el 27,6 % en 1990, hasta llegar al 34,1 % en 1994. Las llamadas categorías vulnerables como el servicio doméstico son las que muestran mayor disminución.

Un estudio de 1996, efectuado por una consultora privada, muestra que el 61,1 % de los ocupados en el Gran Buenos Aires tenía una buena calidad en su situación ocupacional ya que se encontraba acorde, la actividad al modelo de "empresa flexible", cuyas características son: el reducir los procesos de trabajos centrales o estratégicos con alta y estable tasa de ganancias y con trabajadores calificados y permanentes, el aumento de trabajos complementarios con menor tasa de ganancia y parcialmente precarizados y el aumento de las actividades accesorias que dependen de las variaciones del mercado y tienden a externalizarse mediante distintas variantes de subcontratación.

503.5

Existen otros datos desalentadores respecto a las características de la estructura social en el Gran Buenos Aires. Esta zona abarca el 0,1 % del territorio nacional, el 1,2 % de la superficie bonaerense y comprende el 25 % de la población del país. En los municipios que la conforman se registran índices de desempleo, necesidades básicas insatisfechas y de pauperización superiores al promedio nacional. La zona está conformada por dos cinturones que rodean a la ciudad de Buenos Aires. El primero contiguó a dicha ciudad donde subsiste el antiguo cordón industrial y niveles de vida intermedio. Mientas que en Vicente López o San Isidro existe un ingreso per cápita de 536 dólares mensuales, en Avellaneda, Ramos Mejía, Morón, San Martín y 3 de Febrero este ingreso desciende a 322 dólares mensuales. En el segundo cinturón, que abarca al primero, los indicadores son alarmantes: el ingreso per cápita desciende a 224 dólares por mes en Florencio Varela. Echeverría, General Sarriente, Merlo, Moreno y el Tigre, y el 76,9 % de los hogares se encuentra sin agua de red pública. Otro dato indicativo de la situación es que la mortalidad infantil es de 23,6 por mil en toda la provincia, y alcanza el 24,8 por mil en el segundo cinturón. Las expectativas de vida, que es 65 años para San Isidro; desciende a 59 años para Almirante Brown (Cieza, 1997: 157 y ss.). Estos datos revelan las diferencias existentes entre distintas zonas de una misma región y la conexión de las mismas con las cifras referidas al desempleo.

### 8. "Niveles ocupacional" y la tecnología

El presupuesto histórico de la expansión de la cultura tecnológica implica que una estratificación fundada en "clases" será superada por una nueva estratificación social fundada en los niveles ocupacionales, es decir que existe, aparentemente, un desplazamiento de la riqueza como indicador de poder y prestigio, por la capacitación ocupacional en una sociedad tecnocrática, en la recepción de una cultura tecnológica. Con esto, el saber pasa a ser una fuente de poder porque cumple con una función social decisiva y ciertos saberes confieren más o menos poder. De allí que los estratos sociales que surgen de esta jerarquización de las ocupaciones va a constituirse alrededor de las funciones sociales que cumplen.

De manera emergente, en la estructura social argentina, se pueden diferenciar cuatro niveles: (Aguila, 1987: 111 y ss.) el decisional (directores, administradores, ejecutivos), el de asesoramiento (elaboran y aconsejan), el de mediación (los que instrumentalizan las decisiones), y el de ejecución (los que las aplican). Si lo que determina la posición es la formación, en la Argentina se muestra claramente la débil correlación que existe entre los nive-

43

les mencionados y la escolarización en la estructura ocupacional, aunque de hecho prevalece la praxis y la experiencia y no la formación para acceder a altas posiciones organizacionales. La posibilidad de una socialización formal o la educación se relacionan con las posibilidades de los distintos sectores para conseguirlas y si falta, la práctica puede suplirla. De todos modos, no es correcto afirmar la posibilidad de una movilidad vertical ascendente abierta y con una mayor oportunidad de sectores desfavorecidos por aquellas causas (la praxis). No todos los actores tienen las mismas posibilidades de manterse, de mejorar o simplemente de insertarse en una sociedad tecnocrática con sólo la experiencia individual. Es necesario recurrir a estudios formales y no todos los actores pueden acceder a ellos.

La revolución científico-tecnológica y el ingreso de la Argentina en el mundo de las sociedades postindustrializadas lleva a formular interrogantes sobre el impacto que este ingreso ha tenido en los distintos sectores sociales, ya que estos sufren de modo diferente los efectos de la distribución tecnológica. De esta manera se abre un campo para explorar lo que se denomina "privación tecnológica" tomando en consideración, en particular, a aquellos sectores sociales más precarios y vulnerables (Bialakowsky, 1995: 17). Los cambios en la tecnología (entendida esta última como el conocimiento científico aplicado) sin dudas modifica el proceso productivo e impacta sobre el mercado del trabajo ocasionando, como ya se expuso, deterioro de las condiciones laborales, el surgimiento precario del empleo y un aumento en los niveles de desempleo.

Con la aplicación del conocimiento científico al proceso de producción aparece un modelo racional de desarrollo de carácter universal, evolutivo y lineal regido por criterios de eficiencia técnica que olvidan la dimensión social y el lugar de los sujetos. Es por esto que la tecnología, frente a lo expuesto, es pensada como una relación social que se constituye a partir de un sujeto, una máquina y un saber que media entre ellos. La concepción de la tecnología supone, por un lado, un conjunto de técnicas, saberes y habilidades y, por el otro, objetos materiales (herramientas-máquinas). A partir de esto, en una sociedad crecientemente fragmentada, los sectores pobres encuentran mayores dificultades para lograr una apropiación de saber y capacidades tecnológicas que posibiliten y mejoren su inserción laboral y social. Esto es acompañado por una calificación que se halla cada vez más concentrada en un número menor de puestos de trabajo que requieren de un número creciente de saber y tecnología. Este proceso deja a un conjunto de trabajadores fuera de la estructura que surge, ya que se encuentran priva-

dos de su calificación y de los saberes organizacionales, ni siquiera pueden hacer valer en el mercado su mera fuerza física.

Por eso se rescata la idea de la privación tecnológica, que no sólo se limita al proceso de expropiación de saberes mencionados, sino que también se da una dimensión subjetiva donde existe una dificultad de los actores para reconocer sus capacidades tecnológicas. Esto se debe a que el entramado de representaciones sociales que comparan los integrantes de este grupo, en torno a la tecnología y sus propias capacidades tecnológicas, son desconocidas (Bialakowsky, 1995: 18 y ss.).

A partir de técnicas cualitativas se explora el conjunto de percepciones y representaciones que los protagonistas tienen sobre los hechos tecnológicos, utilizando las entrevistas e historias de vida laboral de seis familias de Capital Federal y del Gran Buenos Aires, conformadas por tres generaciones (abuelos, padres e hijos) se determina que en la actualidad este sector enfrenta situaciones de precarización y carencia en las condiciones de vida y de trabajo. Desde esta percepción subjetiva, la condición de precariedad pasa a formar parte de la cultura del trabajo, especialmente en las generaciones más jóvenes. La segunda generación, a diferencia de la primera, la protagonista principal del proceso de deterioro en la inserción laboral. Esto se acrecienta en la tercera generación.

Respecto del saber laboral en las dos primeras generaciones entrevistadas, se puede observar que la capacitación se obtenía en el puesto de trabajo, sin la exigencia de mayores requisitos previos, y esta experiencia laboral determinaba la futura carrera laboral. Hoy en día se pueden advertir nuevas modalidades de contrato que tienen como requisito fundamental la capacitación previa, la acreditación de estudios formales acompañados por la carencia material o la imposibilidad de acceder a diversos bienes y servicios. El acceso a los saberes laborales exigidos se halla fuertemente limitado. La adquisición de estos saberes remite a una estrategia de capacitación como única forma de asegurar un futuro en el interior del mercado de trabajo. La promoción de saberes se asume desde un punto de vista subjetivo como una responsabilidad e incapacidad personal. De todos modos, los sujetos encuentran dificultades para percibirse como potenciales productores de tecnología y reconocer sus propias capacidades tecnológicas. Frente a éstos los sectores pobres, a pesar de su situación de carencias, sostienen conductas consumistas (compra de objetos tecnológicos) e identifican los procesos tecnológicos con aquellos componentes tangibles o visibles (máquinas, artefactos) produciéndose una idealización y un encantamiento de la tecnología.



ATB

313.61

Poder y política en la Argentina

Tercera parte

44

137 ~~137~~

## Capítulo 7

### De la república de los notables a la república moderna

Dedicaremos este capítulo y los dos siguientes al análisis de algunos aspectos sociológicos de la política argentina. Como se sabe, resulta difícil, cuando no imposible, aislar lo sociológicamente relevante del complejísimo fenómeno político. En estos capítulos relevaremos algunas perspectivas sobre la historia política argentina que, a nuestro entender, implican sustantivos aportes a los estudios sociológicos.

Organizaremos nuestro trabajo en torno a una periodización histórica que comienza con una caracterización de los partidos políticos tradicionales. Veremos luego el impacto que los partidos modernos, y en especial el radicalismo, tuvieron sobre la política argentina. Las marchas y contramarchas de la historia argentina nos llevarán a analizar la reinstauración de una política conservadora con la proscripción del radicalismo y, más adelante, el surgimiento del otro gran sujeto político argentino: el peronismo.

Analizaremos luego los años de proscripción del peronismo, con su secuencia de golpes militares e intentos de salidas electorales. Más tarde, nos encontraremos con una escalada de violencia y continuidad de los militares en el poder, que recién terminará en la década de 1980, con un proceso de democratización que comprende a la mayoría de los países latinoamericanos.

#### 1. La formación del Estado argentino

De acuerdo con Weber, la política tiene un sujeto excluyente: el Estado, eje sobre el cual se articula la sociedad civil. En los últimos años, con la harto anunciada crisis de los Estados nacionales —producto a su vez de un cambio de las ideologías políticas que viabilizó procesos de integración regional por doquier—, los analistas políticos se han enfrentado a un verdadero dilema: ¿es posible estudiar el fenómeno político con el instrumental teórico y metodológico que tenemos si no contamos ya con el Estado como unidad básica de análisis? Parece evidente que la Ciencia Política no se reduce a una teoría del Estado, pero con una larga tradición de análisis

político que se ha basado en el Estado y con Estados que eran protagonistas excluyentes, se entenderá que el cambio impone una renovación importante en las ciencias sociales.

Partiremos en este trabajo de un período en el que el Estado nacional está en un momento de consolidación. Las generaciones del '37 y del '80 se dieron la tarea de crear el Estado argentino con base en la articulación de un núcleo, do en el que confluyeran los aparentemente inconciliables intereses de Buenos Aires y el interior del país. Esta delicada arquitectura tiene un modelo europeo, pero está claro que los procesos son bien diferentes. Así lo señala Oszlak: "la experiencia argentina —y en buena medida, la latinoamericana— no se caracteriza por la necesidad de una determinada unidad política de absorber otras unidades (por ejemplo, ciudades libres, principados, obispados) que ya ejercían significativos privilegios soberanos. Los constructores del estado argentino —fundamentalmente los sectores dominantes de Buenos Aires— no buscaron formar una unidad política mayor o más fuerte, sino evitar la disgregación de lo existente y producir una transición estable de un estado colonial a un estado nacional. Lejos de guiarse por propósitos de conquista, aspiraron a extender un movimiento revolucionario local a la totalidad de las provincias del ex virreinato y a heredar de la colonia el control territorial y político ejercido por España" (Oszlak, 1982: 533).

El Estado argentino debe mucho pues a sus ideólogos pero también a la tan denostada por éstos influencia española. El caudillismo, el centralismo, la exclusión política y otros fenómenos políticos que tuvieron continuidad a lo largo del siglo XIX, y llegaron en algunos casos a las prácticas políticas actuales, entroncan con el legado de la conquista española. Un legado que se niega en el acto revolucionario mismo y que recién se reconocerá más tarde, a la hora de elaborar una visión crítica a la matriz sobre la que se ideó y construyó el Estado argentino. Está claro que para los arquitectos del Estado nacional no pudo ser sencillo legitimar un sistema luego de una revolución, que dejó en la memoria una marca que dice que si ese cambio fue posible, otros muchos también lo serán. El Estado argentino se construye a partir de esa marca y pretendiendo fijar un quiebre con respecto al pasado; un pasado en el que sólo se ve sumisión a unos nefastos colonizadores, luchas intestinas inabarcables, caudillos omnipotentes y una pacificación lograda al más alto costo.

Ese Estado va a adquirir un neto corte centralizador a partir de la década de 1980, que dejará en una condición cada vez más vulnerable a las provincias. Intervenirá tímidamente primero y más decididamente después en materia económica, tomando partido por el sector social al que representa.

Iniciará luego un proceso de industrialización cuyo signo fue cambiando con el correr del tiempo. Tomará a su cargo la distribución de los beneficios y pérdidas que arroja la actividad económica sobre los distintos sectores sociales, con un activismo que en ciertos momentos lo acercará a la caracterización de un Estado benefactor. Y por fin, haciéndose eco de una crítica de antigua data sobre la burocratización y crecimiento desmedido de la actividad estatal, en los ochenta iniciará el camino del "ataque". Por todo este proceso histórico pasaremos en estos capítulos.

Teniendo como protagonista al Estado, tomaremos como base una teoría de las elites para analizar los distintos períodos. Serán los partidos políticos los que organizarán la vida política durante la primera etapa de la formación y consolidación del Estado argentino. Partidos que responden a los intereses del estrato social superior, conformando a su vez la dirigencia de tales partidos una elite con un alto grado de cohesión. Ya veremos que esta elite toma sus decisiones racionalmente y es capaz de hacer concesiones a nivel político para que no se modifique la estructura socioeconómica. Que las decisiones se adopten racionalmente no omite la existencia de errores de cálculo, pero hay que resaltar aquí que con una participación política muy limitada, y signada por el fraude y la violencia, esta elite logra el control de la política argentina por un período muy largo en el cual se van operando modificaciones sustanciales de la estructura social argentina.

Veremos que los partidos políticos modernos surgen y llegan al poder luego de un aciago derrotero. El radicalismo, expresión de una nueva forma de hacer política, incorpora a la vida pública de una forma no traumática a aquellos postergados sectores medios que habían sido convidados de piedra del régimen anterior. Sin un cambio profundo de la estructura socioeconómica, la vida política comenzará a cobrar nuevo impulso hasta que se vea quebrada por un actor que ingresa en la arena política y cuyo rol será central durante casi todo este siglo: los militares. A ellos se le sumarán, ganando y perdiendo importancia en distintos momentos, otros factores de poder tales como los sindicatos, la Iglesia católica, las asociaciones empresarias, etcétera.

La restauración conservadora amparada por el poder militar que tiene lugar en la década de 1930 será testigo de un nuevo cambio de la morfología social del país. Un recitado proceso de industrialización dará impulso al surgimiento de un sector obrero que ya no encontrará satisfacción en el movimiento obrero tradicional y se incorporará a la vida política a través del peronismo. El peronismo se organizará como un movimiento muy abarcativo dará una nueva configuración al Estado. Su final, como el del radicalismo, viene de la mano de un golpe de Estado. Nuevamente tendremos una suce-

sión de gobiernos militares y salidas electorales sin que se encuentre el rumbo para organizar un país con su principal fuerza política proscripta.

A la postre, con partidos políticos y factores de poder agotados por una lucha que no es clara por cuanto sólo de tanto en tanto se resuelve en una contienda electoral que finalmente no se reseta, se desencadena una situación de violencia inusitada que terminará recién en la década de 1980, con un retorno a la competencia electoral dentro de un juego político aceptado por todos. Sin proscripciones, fraude, violencia, ni exclusiones, el sistema político empezará a funcionar dentro de un marco competitivo leal que ya no deja lugar para las alternativas anti-sistema. Dentro de este marco, tomarán vigor las dos principales fuerzas políticas argentinas, que iniciarán un camino de achicamiento del Estado y una política económica que pretende reinsertar al país en la economía mundial.

Todo este largo itinerario histórico evidentemente no está exento de influencia externas. Aquí hemos privilegiado los factores internos por encima de los externos, porque entendemos que, en mayor o menor medida, los sujetos políticos tuvieron alternativas de decisión. Las influencias externas funcionan en este esquema como "filtros" que no llegan a determinar la acción política. Evidentemente, tanto la ubicación de la Argentina en el área de influencia europea primero y norteamericana después, como su inserción en el contexto latinoamericano, hacen que mucho de lo que aquí sucede pueda ser mejor explicado con una mirada que abarcará lo que estaba sucediendo simultáneamente en la región o en el mundo. Aquí sólo en algunas ocasiones lo haremos, no porque restemos importancia a la situación externa, sino porque pretendemos resaltar los medios, condiciones, fines y resultados internos de las decisiones políticas que las elites y los factores de poder toman en cada etapa.

Evidentemente, la síntesis que intentamos echará luz sobre ciertos aspectos de la realidad y dejará en las sombras al resto. Nos contentaremos con rescatar y reseñar algunos de los innumerables aportes que desde la Sociología se han hecho en vistas a la comprensión de la historia política argentina. Nos perderemos en sinuosos senderos más de una vez, pero el hilo de Ariadna será siempre la teoría sociológica política, que nos proporcionará alguna hermenéutica salida del intrincado laberinto.

Hemos dividido estos capítulos en los siguientes periodos históricos:

1. *La república de los notables*: hasta 1916.
2. *La república moderna*: 1916-1930.
3. *La república conservadora*: 1930-1943.

4. *La república de masas*: 1943-1955.
  5. *La república inestable*: 1955-1973.
  6. *La república violenta*: 1973-1983.
  7. *La república democrática*: desde 1983.
2. *La república de los notables*

Esta etapa comienza con la formación de los partidos políticos y tiene un largo y anunciado final que asoma en la década de 1890, con la aparición de nuevos sujetos políticos, y se concreta en 1916, con la llegada al poder del primer presidente radical. Para señalar el punto de partida de este periodo, tendríamos que remontarnos muy atrás en el tiempo; hemos decidido aquí sin embargo, tomar 1862 como el año que marca el final de un largo proceso de luchas y debates, para dar paso a las tres primeras presidencias nacionales estables: las de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Todos ellos, autores y gestores de un proyecto, pertenecen sin duda al agrupamiento de los "notables".

Estabilidad no quiere decir aquí que sus presidencias transcurran sin sobresaltos; ellos rompen alianzas allí donde las habían anudado, pactan nuevos acuerdos con antiguos adversarios, asumen la jefatura de las tropas aun cuando tal decisión significara trasladarse al campo de batalla, escriben irremediablemente sabiendo que están dejando material de trabajo a generaciones de historiadores. Y una vez alejados de un sillón presidencial al que sueñan retornar, seguirán siendo lo que son desde mucho antes: los "notables" que rigen la vida política del país asumiendo una supuesta representación de ciudadanos que no los eligen, pero no dudan que lo harían si sólo tuvieran la capacidad para discernir lo que les conviene.

Después de la presidencia de Avellaneda, llegará a la presidencia un nuevo notable, cuya influencia no hará sino aumentar en las próximas décadas. El joven Roca descansará en el sillón presidencial la fatiga que le produjo conquistar un tan habitado desierto. Su orden cimentador de progreso define quiénes tienen cabida en el proyecto de nueva sociedad y quiénes son un estorbo para tales ambiciones. Roca, de la mano de la Liga de Gobernadores y con la estructura partidaria del Partido Autonomista Nacional, desplaza al candidato de Buenos Aires es federalizada y —como diría Alberdi— la nación argentina se consolida con Buenos Aires como capital.

En la otra punta de este periodo, veremos que 1916 constituyó un auténtico partaguas de nuestra historia. Con la reforma de la ley electoral que

tuvo lugar durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, la república de los notables ve su hora final y se da principio a una nueva forma de hacer política. Forma que necesita como sujetos a aquellos partidos modernos que comenzaron a surgir hacia finales del siglo anterior. Superados el fraude, la violencia política y los gobiernos electores, adquirirían calidad de ciudadanos vastos sectores de la población que darán el triunfo al radicalismo. En el próximo período analizaremos ese momento y entroncáremos con este tiempo, en el que se sucederán, después de la primera presidencia de Roca, varias presidencias más de notables.

Durante todo este período de predominio de los notables, los partidos que llevan a sus candidatos al poder pueden ser llamados "tradicionales" o partidos "de notables". Son verdaderas maquinarias electorales que se ponen en funcionamiento para obtener la legitimación de un candidato que, en realidad, ya ha sido elegido desde la cúpula. Los gobiernos son los verdaderos electores, es decir que son los encargados de señalar al candidato que los sucederá en el ejercicio del poder. Quien ocupa el cargo de presidente tendrá una remarcada influencia en la elección, pero siempre deberá conseguir el apoyo de otros notables, cuyas fuerzas no se medirán en la competencia electoral sino que se determinarán con anterioridad a la contienda. Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Alsina, Bernardo de Irigoyen, los Sáenz Peña, Pellegrini son los nombres de algunos de los notables que protagonizan este período. Las alianzas y fragmentaciones que se produjeron en los Partidos Federal, Liberal, Nacionalista, Autonomista, responden siempre a negociaciones entre la élite notabiliar. Esta magra competencia se debilitará aún más con Roca, que impondrá un nuevo coto a la ya escasa y harto pausada competencia partidaria.

Los partidos de notables no son programáticos ni tienen una estructura burocrática independiente de su líder. Así los describe Chiaramonte: "Nucleados en torno a la figura de un caudillo, carecían de organización permanente y de continuidad en la acción; sus períodos de actividad eran los de preparación de las elecciones nacionales, provinciales o municipales. Durante los intervalos, su vida política quedaba limitada a los restringidos círculos de los caudillos y sus 'amigos políticos' —vida de tertulia amistosa, no de comité—, y a las expresiones de algunos órganos de prensa estrechamente ligados a aquellos dirigentes... Las decisiones nacían, se discutían y eran lanzadas a la vida pública desde el seno de esos pequeños círculos personales. La 'masa' partidaria, reducida a asamblea personal, era convocada al solo objeto de convalidar lo resuelto previamente por el grupo dirigente de cada facción..." (Chiaramonte, 1986: 149-150).

Al no ser estos partidos programáticos, sus partidarios carecerán de una base sobre la cual pudieran exigir coherencia o consecuencia con respecto a unos por cierto inexistentes postulados. Un buen ejemplo de inconsecuencia lo tenemos en las posiciones adoptadas en torno a la federalización de Buenos Aires por los nacionalistas y los autonomistas. En 1862 los nacionalistas —como su nombre lo indica— estaban a favor de la federalización y los autonomistas se oponían. En 1880, en cambio, serán los autonomistas quienes apoyarán la federalización y los nacionalistas quienes la combatirán. Los cambios de posición están directamente relacionados con actitudes tomadas por sus líderes, que le imprimen su sello al partido. Así, el carácter más conservador del nacionalismo está relacionado con la figura de Mitre, y el carácter más renovador del autonomismo con la figura de Alsina; quien más adelante con el Partido Republicano formará un agrupamiento que tiene la pretensión de ser un partido moderno; de sus filas saldrán muchas de las figuras que luego formarán los partidos modernos.

Los partidos de notables eran pues partidos inorgánicos en los que dominaba claramente un caudillo, que media sus fuerzas con sus "amigos políticos" a la hora de hacer acuerdos pre-electorales. Cada parroquia de la ciudad y la campaña toda estaban dominadas a través de redes clientelares que se movilizaban al tiempo de preparar las elecciones. Era entonces cuando el líder del partido portoneó teja sus alianzas con los caudillos del interior; un buen ejemplo de estas alianzas fue la constitución de la Liga de Gobernadores.

La estructura social de esta época tiene un claro signo aristocratizante, sobre el cual repercutirán poco a poco los efectos del intenso movimiento migratorio. Pero mientras los cambios sociales se hacían cada vez más sensibles, la vida política permanecía encerrada en las tertulias a las que accedían unos pocos. Así lo señala Lucio V. López: "En vida de mi tía, su casa era uno de los centros más concurridos por todas las grandes personalidades, y en ella se adoptaban las resoluciones trascendentales para que directores. Los grandes planes que debían imponerse al comité, para que éste los impulsase al público; salían de allí, y en su elaboración tomaban parte las cabezas supremas, que deliberaban como una especie de estado mayor, sin que los jefes subalternos tomaran parte en las discusiones. Lo más curioso era que aquella gran cofradía creía, o estaba empeñada en hacer creer, que era el partido quien concebía los profundos programas electorales, y la verdad era que el gran partido solía convertirse en un ser tan pasivo como los ídolos asirios..." (López, 1992: 21).

En estos partidos de notables, los considerados "mejores" se sentían no ya con el derecho sino hasta con el deber de mandar. Pero ese derecho

deber debía ser legitimado a través de un proceso electoral. En tal proceso tenían una destacada labor los partidos políticos. El partido se ponía en movimiento para preparar las elecciones; y aquí la palabra "preparar" implica que cada uno de los pasos del proceso estaba sujeto a una serie de manipulaciones. Desde la formación de las listas hasta la llegada de las cifras del escrutinio general al Parlamento, el fraude era ejercido en todo el proceso, que tenía sus puntos culminantes en la inscripción de los electores en el padrón y el acto comicial. Una vez inscriptos en el padrón, los partidos podían hacer predicciones sobre su éxito o su fracaso en las elecciones y con base en esos cálculos decidirse por dos vías: la participación o la abstención. Y era una regla informal del sistema que los que perdían o bien se abstendían—porque habían calculado que no ganarían—denunciaban el fraude. Pero esta claro que ningún actor estaba dispuesto a renunciar a él.

El fraude era entonces utilizado por todos los actores políticos, de manera tal que puede decirse que estaba incorporado al sistema político. La violencia también era cotidiana en el proceso eleccionario, y había adquirido un carácter ritual. Sabemos que las campañas políticas y las elecciones hasta hoy tienen ciertos ritos que todos los candidatos cumplen. En aquellos tiempos las campañas no existían pero sí se puede hablar de rituales, siendo tal vez el principal el ejercicio de una violencia que solía tener límites muy acotados. Así lo expresan Hilda Sabato y Elias Palit: (1990: 401) "... en la Argentina, el control de la maquinaria estatal daba los instrumentos para manipular las elecciones. El voto no era secreto ni obligatorio, lo que daba mayores posibilidades de control. Así, en todas las fases del proceso electoral, desde el empadronamiento hasta el escrutinio y el pronunciamiento definitivo sobre la validez del comicio, el aparato oficial tenía un peso decisivo. El fraude se cometía desde el Poder. La violencia era más efectiva cuando era oficial".

El gobierno invertía todos sus medios disponibles para preparar unas fraudulentas y violentas elecciones que proporcionarían a su candidato una legitimidad legal. La necesidad de esa legitimación legal alcanzada a través de un juego sucio puede justificarse, como tradicionalmente se ha hecho, en la presentación al mundo de la Argentina como un país acorde con los tiempos que se vivían, en el que los requisitos legales se satisfacían. Sin embargo, son muchos los datos aportados por los historiadores que nos llevan a sostener que esa base legal era requerida por motivos más profundos, que hacen a una creencia en la importancia de tal mecanismo de elección de los gobernantes. La legitimidad legal no es pues un mero simulacro sino una necesidad asentada sobre la profunda convicción de vivir en un orden cons-

titucional. De otra manera, resulta difícil explicar tanta energía desplegada para lograr la ansiada legitimidad legal.

Un tema que ha generado un largo debate en los últimos años es el grado de participación electoral que tenía este sistema político. Pese a no ser censitario el voto en la Argentina, se supone que la participación no solía superar el 10 % de los capacitados para votar, y sólo, excepcionalmente subía, pero nunca más allá del 20 %. Hay que decir que esta situación no era distintiva de la Argentina, ya que encontramos en esta época porcentajes similares de sufragantes en el resto de América e incluso en varios países europeos. Pero es menester aclarar aquí que la participación política tenía otras vías, en especial en las grandes ciudades. Los formalmente excluidos, entre los que se contaban básicamente las mujeres y los inmigrantes, tenían canales de participación a través de las manifestaciones populares, por ejemplo. Y muchas veces, como la ficticia tía de Lucio V. López, aun sin la posibilidad de elegir o ser elegidos, ocupaban importantes roles en diversos pasos del proceso electoral.

Los partidos representan al estrato dominante, que puede ser definido como una alta burguesía en pleno período de consolidación. Como alguna vez lo señalarán importantes teóricos de las elites, es posible que dicha burguesía tendiera a comportarse y a la postre convertirse en una oligarquía, adoptando aquellos prejuicios y privilegios que hacen al estrato dominante en un tipo de vida comunitario. Este estrato dominante está conformado básicamente por estancieros y grandes comerciantes, y presenta un alto grado de cohesión, que fue justamente lo que le permitió ejercer un dominio constante por varias décadas. No existía en ese momento otro estrato social con la cohesión ni la experiencia necesarios para disputarles el poder; un sistema de clases sociales tardaría en formarse en la Argentina. Ante una gran dispersión de la población y la falta de consolidación de un proceso de integración de los inmigrantes, el estrato dominante no tiene grandes problemas en manejar un Estado hecho a la medida de sus intereses. La única división que existe al interior de esta elite es la que se articula en torno a las rentas de las aduana porteña, que muestra la divergencia de intereses entre Buenos Aires y el interior del país.

La literatura ironía de Lucio V. López nos servirá para ver la extracción social de los integrantes de aquellos partidos: "En el partido de mi tía, es necesario decirlo para ser justo, y sobre todo para ser exacto, figuraba la mayor parte de la burguesía porteña, las familias decentes y pudientes; los apellidos tradicionales, esa especie de nobleza bonaeerense pasablemente boécica, sana, iletrada, muda, orgullosa, aburrída, localista, honorable, rica y gorda; ese par-

tido tenía una razón social y política de existencia, nacido a la vida al caer Rosas, dominado y sujeto a su solio durante veinte años había, sin quererlo, absorbido los vicios de la época, y con las grandes y entusiastas ideas de libertad, había roto las cadenas sin romper sus tradiciones hereditarias...” (López, 1992: 20-21).

Si bien estos partidos de notables representaban sus intereses, eso no significa que los más grandes terratenientes y comerciantes se ocuparan de la política en forma directa. No serán pocas las ocasiones en que ellos se aparten de tal tarea y la dejen en manos de jóvenes profesionales sin grandes recursos para los cuales una dieta parlamentaria y la cátedra universitaria son apetecibles medios de subsistencia. Muchos de estos jóvenes profesionales —en su mayoría abogados— tendrán un rol importante en la posterior formación de los partidos políticos modernos, a los cuales aportarán su experiencia en la política parlamentaria.

Poco antes de entrar en la década de 1880, ya corrían vientos de cambio. El sistema político se hallaba ante un sinnúmero de problemas que se mostraba incapaz de resolver: la crisis económica, la fijación de una sede para el gobierno nacional, la conquista de las tierras ocupadas por los indígenas, la recepción de un nuevo flujo migratorio, los conflictos con países limítrofes, etcétera. Esta situación podría haber dado lugar a una reforma del sistema político en clave moderna, es decir, a la legitimación de partidos políticos modernos que entablaran un juego electoral limpio. Pero no era ese un cambio que la elite estuviera dispuesta a propiciar todavía. En lugar de esa vía, la historia siguió un rumbo que la encaminó hacia el unicato roquista.

Roca, figura dominante en la escena nacional de las siguientes décadas, llega al poder a través del Partido Autonomista Nacional. El PAN es la resultante de una unión de las principales fuerzas políticas que —no exenta de escisiones— registró en calidad de electora durante los próximos años. Es un partido conservador, que sin embargo, élude siempre tal nombre. Y al hablar de escisiones, hay que mencionar aquí como la de mayor peso para la vida política posterior, a la que separó los caminos de Roca y Pellegrini recién despuntado el siglo; dos notables entablarán a partir de entonces una lucha que comprometerá el futuro de la elite.

Estando su base de apoyo en las provincias, Roca pone en marcha sin embargo una política centralizadora, tendiente a afianzar el dominio en los territorios que se consideraran propios, a la vez que a unificar al país bajo el liderazgo de la autoridades centrales. El Estado adquirió aquí un impulso centralizador que sobrevivirá mucho después de que la influencia de Roca

sobre la política argentina se hubo desvanecido. El sistema político daba señales de agotamiento, pero no entendía Roca que fuera tiempo aún de producir una reforma; habrá un intento, pero rápidamente abortado. Tendría que llegar al poder un grupo antirroquista para que la reforma fuera posible. Porque las prioridades de Roca eran otras; el orden y el progreso eran los objetivos fundamentales. Y la política un medio que se despreciaba a la vez que se ejercía bajo el disfraz de simple administración.

Durante la década de 1880 el PAN rigió la vida política nacional sin que su liderazgo fuera disputado por otra fuerza capaz de poner en discusión su primacía. La sucesión presidencial de Roca —en favor de Juárez Celman— fue decidida dentro del partido, que respondía a su liderazgo. La escasa competencia electoral se correspondía en apariencia con un desinterés de la sociedad por la política. El gobierno aparecía embarcado en un proyecto modernizador y progresista que requería buenos administradores y podía prescindir de una actividad política que, como ya dijimos, los notables practicaban pero denostaban discursivamente. Mientras que la actividad política propia era vista como una necesidad, la política mala, la perversa, la corrupta, era la que hacían los otros: esa oposición que ya se atisbaba y reclamaba no era la que incorporación al juego sino un cambio de las reglas de juego.

El gobierno ponía siempre el acento en la indiferencia de los ciudadanos, que era valorada positivamente por cuanto se interpretaba como un consentimiento tácito con la elite política. Así lo señalan Botana y Gallo: “para Roca el binomio ‘paz y administración’ descansaba en una concepción política que veía con desconfianza el activismo político. Juárez Celman fue mucho más explícito y enfático en la exposición de esta corriente de pensamiento. En Roca el entusiasmo por las reformas políticas era percibido como un factor capaz de dislocar un orden institucional que recién emergía de una cruenta guerra civil. En Juárez Celman se trataba de algo bastante más sustantivo. La política no sólo era potencialmente disruptiva; era fundamentalmente anacrónica, en un país que se lanzaba a la aventura del progreso. Administradores eficientes y no clientelas de comité era lo que requerían los nuevos tiempos. Así pudo sostener en el mensaje de 1888 que la prosperidad económica del momento quitaba “para el bien de la patria, materia prima a la actividad política”. Como no preveía ningún obstáculo en el camino, de esa prosperidad, Juárez Celman renunciaba que, en un futuro cercano, “habremos de prescindir de ella (la política) o trasladar su sentido a los hechos administrativos” (1997: 35-36).

Desde la perspectiva del gobierno, no había pues motivos para la disputa política en tiempos de bonanza económica. Pronto se tendría ocasión de ver

503,5

47

como la crisis económica logra sacar a la ciudadanía de su apatía y la arrastra a una acción política que obliga a Juárez Celman a renunciar, ocupando su cargo el vicepresidente, Carlos Pellegrini. Así como el gobierno valoraba positivamente la inactividad política que perciba y fomentaba en el pueblo, la oposición en ciernes consideraba que tal inactividad era la causa de todos los vicios que la república sufría. Se enfrentan aquí nuevamente dos concepciones sobre lo que la ciudadanía republicana implica. Para unos, era preciso contar con laboriosos individuos que dejarán la función pública al cuidado de los mejor preparados. Para otros, el mayor pecado cívico era justamente tal desocupada delegación.

La Unión Cívica, surgida del Mitin del Frontón en 1890, llamaba a la regeneración de la actividad política. Su discurso parecía orientado no tanto a dar un paso al futuro sino a recuperar las virtudes que se habían perdido durante la década de 1880. Y la ciudad de Buenos Aires tenía un papel central en esta tarea por cuanto aquellas viejas tradiciones perdidas en los prósperos 80 eran de cuño porteño. Detrás de estas críticas al roquismo no se percibía todavía el otorgamiento de un rol fundamental a los partidos políticos en la lucha por el poder. El discurso de los críticos revalorizaba la actividad política en un sentido lato, sin ocuparse de precisar cuáles serían los sujetos que tal actividad tendría. Esto en un tiempo en el que la competencia electoral ya no era posible dado que habían desaparecido los dos partidos tradicionales. En aquel mitin de 1890, el orador que concede mayor relevancia a los partidos políticos sería el gestor del partido que llegaría al poder una vez que los procedimientos electorales se purificaran: Leandro N. Alem.

Dentro del mitin ya podían observarse dos posiciones, que fundamentarían futuras estrategias políticas: la primera, representada por Mitre, llama al mantenimiento de los estrechos límites de legalidad del régimen, para producir las reformas sin minar dicha legitimidad. La segunda, rupturista, revolucionaria. Considerará al régimen gobernante fuera de la legalidad establecida por la Constitución, sin mostrarse dispuesta a pactar con él. En la Revolución del Parque de 1890 estas fuerzas hacen eclosión. La fuente de descontento es la crisis económica, pero los gestores del nuevo partido tratarán de dejar en claro que la solución, como el origen mismo, es política y no económica. Así los cantaría de plano Alem: "No hay ni puede haber buenas finanzas, donde no hay buena política".

La revolución fue batida militarmente, pero las ideas que allí se expresaron y las formaciones partidarias que se insinuaron se robustecerían en los próximos años. Distintos grupos forjarían estrategias de acción diversas.

Pero Roca todavía tenía mucho aire y lo demostró rápidamente al coartar la posibilidad de un Sáenz Peña con otro Sáenz Peña. Le faltaba aún un gobierno más al asunto notable y sería capaz todavía de imponer a su sucesor La "cuestión social", mientras tanto, no daba respiro. Las sucesivas huelgas y el activismo anarquista eran combatidos a través de la conocida "ley de residencia", que facultaba al Poder Ejecutivo a expulsar a los extranjeros que considerara peligrosos para la seguridad o el orden. Asimismo, en la segunda presidencia de Roca se declara el estado de sitio. La tensión entre el gobierno y los grupos que ejercen presión a través de la violencia crece. En el enrarecido clima del centenario, el pensamiento más conservador que revisa críticamente el proyecto poblacional puesto en marcha por los liberales del siglo anterior se expresa de esta manera: "Es prudente retocar los códigos y las leyes excelentes de inmigración, para conservar la limpieza de la población del país, combatiendo el error de los gobernantes empiricos y de los funcionarios sin criterio, que se vanaglorian al presentar estadísticas abultadas, olvidando que vale más en una República un inmigrante instruido y bueno, que diez inmigrantes analfabetos e inmorales".<sup>1</sup>

Como ya dijimos, al terminar su segundo periodo presidencial Roca impuso a su sucesor, Manuel Quintana. La vicepresidencia, en cambio, fue objeto de una negociación entre los notables de siempre, y recayó en un pellegrinista, Figueroa Alcorta. El año 1906 fue trágico para los notables, ya que mueren el presidente Quintana, Pellegrini y Mitre. A Figueroa Alcorta mucho le costará timonear el país con Pellegrini muerto y con Roca en la vereda opuesta. Sin embargo, logrará completar el periodo presidencial de Quintana y apoyará la candidatura de Roque Sáenz Peña, que protagonizará el último gobierno de los notables. En 1912, bajo su gobierno, se daría la reclamada reforma de la ley electoral; a ella nos dedicaremos a continuación.

### 3. La reforma electoral

Mientras la elite política permanecía cristalizada, la composición poblacional de la Argentina había cambiado. Y el impacto migratorio no tardaría en producir efectos sobre la vida política. Se puede ver la reforma electoral ampliatoria de la ciudadanía como un resultado de las demandas

1. Artículo de 1909 de Estanislao Zeballos, un conservador del ala más dura, escrito con ocasión del aniversario de Ramón L. Falcón, jefe de policía de Buenos Aires. Citado en la compilación de textos de Boriana, "Atalío y Gallo, Ezequiel" (1997: 524).



de participación de esos nuevos habitantes que clamaban por una constitución de ciudadanía plena. Sin poner en tela de juicio la corrección de tal percepción, nos ocuparemos aquí más específicamente de los movimientos de la élite dominante que hicieron posible esa ley. No despreciamos pues los factores netamente sociales, pero resaltaremos aquí la estrategia montada por la élite gobernante, tendiente a incorporar al sistema político a aquellos individuos que demandaban ciudadanía sin perder el dominio del aparato gubernamental. Como sabemos, tal estrategia fracasó, pero creemos que su autopsia nos da buenas pistas que —leídas desde una teoría de las élites— mucho nos dicen sobre el comportamiento de las élites gubernamentales.

El antecedente más importante que reconoce la llamada "Ley Sáenz Peña" es una ley sancionada en 1902, bajo la presidencia de Roca. Quien defendió esta ley, propuesta por el Ejecutivo, ante el Parlamento fue el entonces ministro Joaquín Y. González. En aquella ocasión dijo González: "Hemos llegado a convenirnos... de que existe una profunda anarquía, una profunda contradicción... entre la constitución social y la constitución política. Las fuerzas sociales que dan existencia real a nuestra cultura presente, no tienen una representación formal en la ley, en cuya virtud deba hacerse práctica, o deba traducirse en forma práctica por medio del mandato del legislador".<sup>1</sup>

Este proyecto roquista seguramente es tributario de un reformismo que se insinuaba ya a principios de siglo. Ese reformismo adquiriría distintos signos —liberal, católico, socialista— según el agrupamiento que lo sostuviese. Pero siempre compartía la creencia en la necesidad de adaptar la legislación a la nueva realidad del país. En la discusión política había surgido aquello que se dio en llamar "la cuestión social"; el proceso migratorio, la expansión económica, la educación pública sostenida, habían surtido sus efectos y llegaba la hora de hacer aquello que quienes organizaron el país entendieron que era una tarea futura. Y esa tarea comenzaba por la purificación del voto que, si bien nunca había sido calificado, tampoco era obligatorio o secreto, características fundamentales si se quería incorporar a la ciudadanía a aquellos que hasta entonces habían sido sólo habitantes.

El fraude, que ya en este siglo se expresaba básicamente a través de la compra de los votos, era el vicio que se debía expurgar del proceso electoral. La ley de Roca, que universalizaba el sufragio al menos para los hombres, sólo tuvo vigencia para la elección nacional de 1904, de la que

1. Transcrito en la compilación de textos de Bolana, Natalio y Gallo, *Eziquiel, De la República Posible a la República Verdadera* (1997: 651).

salio triunfante Quintana. Nada había cambiado, los conservadores no perdieron el poder, y lo más probable es que tampoco calcularan perderlo cuando se sanciona la ley de 1912. En esta ocasión, el presidente no tenía la fortaleza de Roca. La enfermedad física de Sáenz Peña se combinaba con su debilidad política. Su alejamiento de la Unión Nacional que lo había llevado a la presidencia y su distanciamiento con respecto a su antecesor, Figueroa Alcorta, lo habían dejado aislado. Reflejo de la necesidad de trazar alianzas es su tardío intento de acercarse al roquismo, símbolo inequívoco de debilidad para un, hasta entonces, consecuente antirroquista como Sáenz-Peña.

Con tanta oposición enfrente, Sáenz Peña sólo tenía a su favor un proyecto de reforma que, prometido antes de asumir la presidencia, contaba con un gran apoyo popular. La estrategia de ganarse el apoyo de la oposición para solucionar problemas internos en el bloque conservador era una práctica política de larga data. Lo novedoso, en todo caso, era el tipo de oposición con el que ahora Sáenz Peña intenta montar su estrategia. De su discurso se desprende una intención de mejorar la oferta electoral con partidos que presenten buenos candidatos y buenos programas; candidatos y programas que, en definitiva, logren atraer al electorado. Se puede interpretar esto en el sentido de montar un sistema no ya de partidos modernos, sino de facciones de la élite que compitan por el electorado. En cualquier caso, resulta evidentemente que a Sáenz Peña le interesaba ante todo mejorar la oferta electoral conservadora.

A quien le tocara defender la ley de reforma electoral ante el Parlamento será al ministro Indalecio Gómez, hombre proveniente del reformismo católico que —sobre todo por sus reformas en el campo laboral bajo la ómbra de su Ministerio— se convierte en un verdadero precursor en la mediación entre el Estado y las nuevas fuerzas emergentes. Mediación que luego tanto el yrigoyenismo como el peronismo perfeccionarían. Gómez alegará que el argumento que esgrime para marcar tal necesidad es el progreso económico y la labor que la educación pública ha llevado a cabo. Lo que resta es pues dejar que ese pueblo ahora próspero y educado elija a sus gobernantes.

Veamos el diagnóstico que hace Gómez: "¿Cuál es la situación de nuestra democracia? ¿Cuál es la condición de nuestra vida pública? El espíritu cívico está muerto; nuestra democracia es nula; el pueblo no vota. Hay poderes constituidos, sin embargo; hay gobiernos en las provincias y en la Nación; hay Congreso y legislaturas, compuestos todos de hombres distinguidísimos, y sin embargo, la democracia, el pueblo tiene cierta decepción y desabrimiento respecto de este Congreso, tan dignamente compues-

to. ¿Por qué? Porque no ha sido elegido en comicios sanos, sino por un sistema ya corrompido y desfigurado".<sup>1</sup>

La rescña que el mismo Gómez hará de los vicios que se debían extirpar es tan enfática cuanto lo exige el debate parlamentario: "Hay tres grandes males en el país desde el punto de vista electoral: la abstención de los ciudadanos, la manobra fraudulenta en el comicio, la venalidad que hace perder la conciencia de ciudadano al elector. Y una cuarta dolencia constitucional, que es fuente, origen de todas las otras: que el pueblo no elige; quien elige es ese estado de cosas, ese mecanicismo, esa máquina de que ya se ha hablado".<sup>2</sup>

Las propuestas para terminar con estos males están en la ley de reforma y en el cambio en las prácticas que ella ocasionaría. Para terminar con la abstención, el remedio es el voto obligatorio. Para acabar las maniobras fraudulentas y la venalidad, se debe implantar el voto secreto, que implica poner en manos del que se vende la facilidad de redimir su propia falta burlándose del comprador, dejando a éste en situación de no poder saber si el dinero que pagó por un voto, tuvo o no el efecto que se propuso.<sup>3</sup> Y para hacer que el pueblo comience a elegir por el mismo, se propone una solución ejemplificadora, dejando que ingresen a la Cámara representantes que no formen parte de la maquinaria oficial. La gimnasia del ejemplo instructor del pueblo no podía faltar en una notabiliar ley.

Todo este proyecto descansá, por supuesto, sobre la formación de partidos políticos modernos, y así lo expresa el ministro Gómez: "Creo que entre nosotros no se han formado partidos o los que se formaron fueron de vida precaria, porque no se puso la simiente en terreno fecundo. Sembraron la simiente del partido en las antesalas de los gobernantes, que son de estéril ladrillo; no la plantaron en el terreno del comicio, que es campo fecundo y lleno de vida.... Es en el comicio donde deben formarse los partidos; si no se han formado allí, es porque no ha habido libertad. Veremos si se forman o no. Yo digo que se formarán".<sup>4</sup>

Botana, a través del análisis de los debates parlamentarios en los que se discutió el proyecto de ley, concluye que la previsión más pesimista del oficialismo era que la oposición obtuviera en las elecciones de 1916 el tercio correspondiente a la minoría. De esta manera, la nueva ley permitiría cum-

plir con un objetivo fundamental: incorporar a la oposición al régimen político, relegitimando al mismo, siempre bajo el gobierno de los notables. Esa previsión daba por sentado que la oposición se fragmentaría, mientras que el oficialismo concurriría en bloque a las elecciones. Al radicalismo yrigoyenista le haría competencia por el voto opositor no sólo el socialismo, sino también la Liga del Sur. La circulación que se pretende insuflar a la elite es una táctica de anticipación que trata de dirigir desde arriba un cambio que se juzga indetenible, y así mantenerse en el poder.

La nueva ley impone el voto masculino universal, obligatorio y secreto. Se adopta el padrón militar como documento electoral, eliminando así el trámite de empadronamiento, que como ya vimos era uno de los momentos cumbres de ejercicio del fraude. En abril de 1912 la nueva ley se aplicará por primera vez para elecciones legislativas; allí ya se puede observar que el voto secreto rompe con la compra de votos. Mientras tanto, la imagen de quien era reconocido por Sáenz Peña como el interlocutor representativo de la oposición — Hipólito Yrigoyen — sigue sumando adhesiones, respaldado por un partido moderno. Este partido proponía una mediación entre el electorado y el Estado, se organizaba en torno a un líder fuerte y tenía una organización permanente que abarcaba todo el territorio nacional. Su carácter programático es discutible; ya veremos que su líder se negará a quedar atado a un programa electoral, sosteniendo que con el marco de la Constitución bastaba para presentarse a disputarle el poder a los notables.

Lo cierto es que el abstencionismo radical lastimaba cada vez más la legitimidad del régimen. Las percepciones sobre el yrigoyenismo varían sustancialmente en el bloque conservador. Los saenzpeñistas lo perciben como una fuerza enmarcada dentro de la tradición política nacional, cuya competencia permitiría modernizar la oferta electoral conservadora sin poner en peligro la estructura socio-económica del país. Los roquistas, en cambio, percibían al radicalismo como un peligro para la perduración del orden político y social por ellos defendidos. Si bien las percepciones eran distintas, hasta los más reacios a la reforma se cuidaban bien de manifestarlo públicamente, lo que parece demostrar la popularidad que tenía el proyecto de reforma. Aquí la diferencia entre discursos públicos y correspondencia privada marca claramente esta popularidad.

Existen dos interpretaciones historiográficas disidentes sobre el origen de la reforma electoral, así como sobre sus consecuencias. Así lo señala Devoto lo explícita del modo que sigue: "El razonamiento predominante parece haber sido el siguiente: si un grupo dirigente tomó una decisión tan drástica de modificación del sistema político, ello debió haber sido motivado o

1. Transcripción en la compilación de textos de Botana, Natalio y Gallo, Ezequiel. *De la República posible a la República Verdadera* (1997: 684).

2. *Ibidem* ant. p. 687.

3. *Ibidem* ant. p. 687.

4. *Ibidem* ant. p. 689.

por fuertes convicciones ideológicas reformistas o por la idea de que se debían conjurar peligrosas acechanzas que amenazaban no sólo al orden político, sino también al mismo orden social. Ese razonamiento acerca de las causas de la reforma se completa con otro acerca de las consecuencias. Dado que el principio de toda elite parece ser la conservación del poder, la realización de una reforma que trae como resultado un recambio de esa elite política sólo puede ser producto de un grave error de cálculo, resultado de un insano optimismo, o de una imperiosa necesidad de conjurar males mayores aún al precio de abandonar sus posiciones de poder político para conservar la preeminencia social y económica.<sup>1</sup>

Como casi siempre, el debate historiográfico versa sobre fuentes e interpretación. Con Botana vimos una interpretación de los motivos que la elite tuvo para producir la reforma; tal interpretación se nutría de los debates parlamentarios que tuvieron lugar cuando se discutió la reforma electoral. Devoto, en cambio, partirá del análisis de los discursos de Sáenz Peña, su correspondencia privada y la prensa porteña. En los discursos del presidente, Devoto no percibe a la reforma como la respuesta a una amenaza. Más bien parecería que Sáenz Peña entiende que la reforma es posible justamente porque tal amenaza no existe; la reforma permitirá desarmar ciertas alternativas revolucionarias que de hecho no ponen en cuestión al sistema político holísticamente considerado.

Esta reforma viene encuadrada dentro de un conjunto de reformas más amplio que comprende la "cuestión social" de la que ya hablamos y la "cuestión nacional". El voto obligatorio, la escolaridad primaria obligatoria y el servicio militar obligatorio eran vistos como los medios de socialización política de los ciudadanos. El país había cambiado su fisonomía desde 1880. La población se había triplicado como efecto de las inmigraciones: de los 5.573.100 inmigrantes que llegaron al país entre 1870 y 1914, descontando la tasa de retorno, veremos que se quedaron en el país un total de 2.852.400 personas. Si además tenemos en cuenta el crecimiento vegetativo, notaremos que la población argentina pasa de 1.819.000 habitantes en 1870 a 8.253.700 en 1915. De la población existente en el país en 1880, el 36 % vivía en las ciudades, mientras que en 1915, el 53 % de la población era urbana.<sup>2</sup>

1. Devoto, Fernando. "De nuevo el acontecimiento: Roque Sáenz Peña, la reforma electoral y el momento político de 1912". *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, Tercera Serie, N° 14, segundo semestre de 1996, p. 94/ 95.
2. Datos extraídos de Ernesto Maeder. "Población e Inmigración en la Argentina entre 1880 y 1910", en Ferrari, Gustavo y Gallo, Ezequiel. *La Argentina del Ochoenta al Centenario*. Sudamericana, Buenos Aires (1980: 556 y ss.).

La composición poblacional no cambia más que las variables económicas. La tasa promedio de crecimiento anual de exportaciones durante el período 1880-1914 nunca baja del 4 %, y llega al 6 % en la década de la década de 1890.<sup>1</sup> La campaña del desierto había logrado ampliar la extensión de las hectáreas de tierras explotadas, en la década del 80, según lo señala Cortés Conde, se agregaron 30 millones de hectáreas a la producción agrícola y ganadera. En los 90 se dará una fuerte expansión agrícola que producirá un notable aumento de la producción de cereales.<sup>2</sup> Las exportaciones totales pasan de 58.000.000 de pesos oro en 1880, a 582.000.000 de pesos oro en 1915. La extensión de las vías ferroviarias pasa de 2.400 km. en 1880 a 53.700 km. en 1915.<sup>3</sup>

Evidentemente, no se puede atribuir a Sáenz Peña la intención de promover el triunfo de la oposición. Sus objetivos, como dijimos, eran más acotados y suponían la conservación del poder, pero modernizando el sistema, sacándolo del consabido manejo clientelar que lo caracterizaba. Es interesante preguntarse si al momento de la reforma existía todavía la posibilidad de unir al bloque conservador, o si en cambio estaba definitivamente fragmentado. Sin duda, la muerte del gobernador de la provincia de Buenos Aires y su reemplazo por un viejo enemigo de Sáenz Peña, así como la posterior muerte de Sáenz Peña y su reemplazo por el vicepresidente, Victorino de la Plaza, fueron acontecimientos históricos nada desdeñables que podemos entender interfirieron con la estrategia originalmente montada por Sáenz Peña para que los conservadores mantuvieran el poder. Contrariamente a los optimistas planes de Sáenz Peña fue el bloque conservador el que no pudo llegar aliado al poder, mientras que parte de la oposición no radical terminó dándole su apoyo a Yrigoyen.

En todo este proceso de reforma es muy difícil evaluar cuál es la capacidad que cada uno de los sujetos políticos tenía, y aún más, llegar a saber la percepción que tenían de su capacidad. Como se sabe, los actores diseñan estrategias conforme a esa percepción, pero pueden cometer errores en tal operación o bien acontecimientos históricos diversos pueden producir cambios que varíen la capacidad de los actores. De todos modos, aquí presentamos a los actores como sujetos racionales que hacen tales operaciones con

1. Datos extraídos de Díaz Alejandro, Carlos. "La economía argentina durante el período 1880-1913", en Ferrari, Gustavo y Gallo, Ezequiel. *La Argentina del Ochoenta al Centenario* (1980: 369 y ss.).
2. Datos extraídos de Cortés Conde, Roberto. "Tierras, agricultura y ganadería", en Ferrari, Gustavo y Gallo, Ezequiel. *La Argentina del Ochoenta al Centenario* (1980: 337 y ss.).
3. Fuente: cuadro elaborado en base a numerosas fuentes por Ferrari, Gustavo y Gallo, Ezequiel. *La Argentina del Ochoenta al Centenario* (1980: 639).

la mayor rigurosidad posible. Preguntamos si los conservadores podrían haberse mantenido en el poder por algún tiempo más o si la reforma era imperiosa dado un cierto clima instalado en la opinión pública por los nuevos partidos, es un contrafáctico sobre el cual la historiografía no proporciona más que algunos indicios. Es cierto que la elite conservadora elige el camino de inclusión de la oposición cuando es probable que hubiera todavía el poder desnudo de legitimidad —es decir, la capacidad de coacción— necesario para seguir imponiéndose y excluyendo a la oposición. Sin embargo, hay que acotar que tal vez fueran acertados los pronósticos que no veían un desafío para el sistema social en la inclusión de la oposición promovida desde el saneamiento del sistema electoral y, en cambio, temían que estallara una revolución que comoviera no ya al sistema político sino al sistema social en su totalidad. Y, como ya veremos, ese sistema no sufrió un cambio profundo con el nuevo gobierno que llegó al poder en 1916.

#### 4. La república moderna

##### 4.1. *Los partidos modernos*

El fin de la década de 1880 y el principio de la década de 1890 fueron años plagados de conflictos. A la crisis económica se le sumaban las siempre difíciles negociaciones por la sucesión presidencial y un presidente que, como ya lo vimos, había elegido despreciar la política y tratar de legitimarse a través de sus obras. Industrias, colonias y ferrocarriles lo habían hecho olvidar a Juárez Celman de una política que demostraba en tanto la identificaba con oposición. Y la política reapareció bruscamente, en forma de milnes varios.

En el del Frontón, que tuvo lugar en 1890, hablaron Mitre, Barroetaveña, Alem, Del Valle, Estrada, Goyena, Lucio López y Mariano Varela. Un grupo bien heterogéneo que representaba a sectores muy dispares en demanda de un cambio de las reglas del juego político. Como se sabe, quedaron claras dos posiciones: la de Mitre, que proponía un cambio dentro del, por cierto, estrecho marco de la legitimidad del régimen, y la de prácticamente todo el resto, que sentía que era tiempo de objetivos más ambiciosos y de una verdadera refundación del sistema bajo un signo distinto. Los presentes escucharon discursos muy moralizadores que acordaban que una época terminaba y otra pujaba por comenzar. La mayoría de los esfuerzos se gastaba en criticar ese presente que casi juzgaban pasado, sin ocuparse demasiado por los programas que el futuro demandaría.

Las consecuencias de tan bienintencionadas coincidencias son bien conocidas. Juárez Celman renunció, a la vez que Roca, Pellegrini y Cárcano declinaron sus candidaturas para el próximo período presidencial. El horizonte se despejaba y le tocaba a Pellegrini timonear los ochocientos días que le quedaban al trunco mandato juarista. El presidente renunciante, que había sido nombrado alguna vez el Único en claro desafío al acaso único entre los únicos, su elector antecesor, debió renunciar y es posible que esta primera renuncia presidencial marque dos de los conflictos más profundos de estos tiempos: la despareja lucha entre el interior y Buenos Aires y los riesgos de un presidencialismo permisivo de todos los unicatos imaginables. Así lo señala Gustavo Ferrari (1997: 194): "Juárez cayó, desde luego, porque no era porteño sino cordobés; y porque amenazó a la Capital con inautogar el milenio de Córdoba, pero sobre todo porque, como todos los presidentes, cordobeses o no, que no terminaron su mandato, era incapaz de conducir el arduo Poder Ejecutivo Nacional Argentino, concebido por Alberdi más para cíclopes que para hombres" (1997: 194).

La Unión Cívica Radical nació de un intransigente principismo que se negó al acuerdo propiciado por Roca y Mitre en 1891. Surgió como un partido moderno, que rápidamente organizará su convención y su comité a nivel nacional. Leandro N. Alem fue su padre y presidente —funciones no muy diferenciables desde ese momento pese a la modernidad del partido— hasta 1896, año en que su suicidio dejará huérfano a los revolucionarios. Como se sabe, no duran mucho las orfandades cuando hay seguidores que liderar: en efecto, la vacante pronto sería ocupada —tras una corta lucha con otro Irigoyen— por Hipólito Yrigoyen, que aportará un estilo de liderazgo de gran influencia sobre la política posterior.

Pero el naciente radicalismo tendría que tener paciencia todavía. En los círculos oficiales se maneja la candidatura del muy moderno Roque Sáenz Peña para suceder a Pellegrini; sólo una hábil estrategia de Roca impedirá que tal intento se concrete. Si no podía hacerlo en el próximo turno, el todavía único no renunciaba a volver a la presidencia más adelante, y para eso tenía que evitar un presidente que le cerrara el camino. Por ello eligió a Luis Sáenz Peña, padre nada moderno. Como ya vimos, a la presidencia de este último, completada por su vicepresidente Urburu, le seguirá la segunda presidencia de Roca. Luego le seguirán dos períodos también completados por los vicepresidentes: el de Quintana-Figueroa Alcorra, y el de Sáenz Peña. De la Plaza. A ellos nos hemos referido al reseñar los antecedentes de la Ley Sáenz Peña.

Las otras fuerzas en pugna, hostiles al radicalismo en cuanto le disputaban el voto opositor, eran los socialistas y la Liga del Sur, antecesora de la democracia progresista. Los primeros tenían su base electoral principalmente en la ciudad de Buenos Aires, mientras que los segundos la tenían en Santa Fe. De la Liga del Sur ya hemos dicho que perdió su mejor oportunidad de desempeñar un papel fundamental en la política argentina al frustrarse la posibilidad de un acuerdo con los conservadores para enfrentar al radicalismo en 1916. Su líder, De la Torre, había renunciado al radicalismo en disidencia con la conducción de Yrigoyen.

El Partido Socialista fue fundado en 1896 por Juan B. Justo. La mayoría de sus miembros había participado de la Revolución del 90. Los socialistas registraron un crecimiento del caudal electoral hasta la década de 1920, cuando comenzaron a estancarse. Ganaron varias elecciones en distritos de la ciudad de Buenos Aires, donde no pocas veces los conservadores aportaron sus votos al socialismo, para irritar al común contendiente: el radicalismo. Los sindicatos de la época eran mayoritariamente anarquistas y, por ende, no entraban en la competencia política. Allí al socialismo le cuesta anclar y cuando lo hace, le resulta difícil llegar a las bases.

Su ideología está inspirada por su líder, Justo, un demócrata gradualista de muy buena formación académica, antihitlerista y anticlerical. Su gradualismo hace que lleve a su partido a una participación electoral activa y busque medios de socialización política de sus afiliados. Así, por ejemplo, las cooperativas fundadas a instancias del partido sirven para entrenamiento de la clase trabajadora en las funciones administrativas. Alfredo Palacios, un pintoresco personaje del partido, provocó varias escisiones en el mismo; en 1902, como el producto quizás más resonante de la implementación de la reforma electoral impulsada por Joaquín V. González, Palacios llega al Congreso. Un socialista en el Parlamento era, por supuesto, una situación inédita en el territorio americano.

Tanto los socialistas como la democracia progresista continuadora de la Liga del Sur le reprocharán al radicalismo la difusión en todo el país de las prácticas clientelares destinadas a tener un gran arraigo en nuestra política. Así lo señala José Luis Romero: (1996: 134) "Los caudillos radicales transfirieron a la nueva situación social el paternalismo de los estancieros en oposición a la política distante que la oligarquía había adoptado; pero obligaron a los conservadores a competir con ellos dentro de sus propias normas, y el caudillismo se generalizó. Sólo la democracia progresista de Santa Fe, inspirada por Lisandro de la Torre, y el socialismo se opusieron a estos métodos, que Juan B. Justo estigmatizó con el rótulo de 'política ciñolla'".

#### 4.2. *El liderazgo y la estrategia opositora del radicalismo*

Alem fue uno de los últimos federalistas ortodoxos, cuya expresión más clara y canto del cisne fue la oposición a la federalización de Buenos Aires. Su sobrino Yrigoyen, en cambio, pronto mostró tanto en la organización del partido, cuanto en la acción de gobierno, una posición centralista muy alejada del federalismo de Alem. Compartían la percepción de legitimidad del régimen y, tal como lo confirmó el frustrado levantamiento de 1905, existía continuidad entre tío y sobrino en cuanto a la alternativa de tomar el poder por las armas ante lo que consideraban una tiranía. Desde su perspectiva, los militares debían estar subordinados a los políticos, pero siempre y cuando estos últimos hubieran llegado al poder a través de un limpio proceso electoral.

Lisandro de la Torre se sumará en 1904 a los renunciantes al radicalismo; todos ellos se quejaban de la conducción personalista de Yrigoyen, que juzgaban inadecuada en el marco de un partido moderno. Entre las muchas imputaciones que hacía a su rival, De la Torre lo acusará de utilizar al partido para sus fines personales, de no discutir programas e ideas con sus correligionarios, de una marcada actitud centralista y de dar lugar a prácticas caudillistas.

Si el radicalismo fuera un partido moderno en todos sus aspectos, además de no ser personalista, debería ser programático, pero tampoco aquí el radicalismo responde al tipo ideal. La doctrina sobre la que se asienta sólo se insinúa sin llegar a manifestarse más que en el rotundo rechazo de las prácticas fraudulentas; Yrigoyen se erige en representante de "la causa", cuya misión es purificar la vida política y no discutir programas antes de llegar al poder. Hay una exaltación de la virtud junto con un discurso de inclusión de aquellos sectores a los que aún no se les había reconocido el ejercicio efectivo de la ciudadanía. Parte de ese principio intransigente fue el ejercicio de la abstención en el que mantuvo Yrigoyen al partido durante más de una década.

Veamos la justificación que de la abstención hizo el Comité Nacional Radical en 1904: "La Unión Cívica Radical es la única fuerza que mantiene consecuente con su primera actitud y conserva fidelidad a sus principios. En el impersonalismo de su programa no rebaja al nivel de un debate sobre personalismos que palpitan en el alma nacional. No discute nombres de candidatos sino situaciones, procedimientos, formas de acción gubernativa. Considera verdad inmovible que orden y probidad en las finanzas, patriotismo en la vida pública, justicia recta, educación bien inspirada y adecuada distribución

de las riquezas y progresos, harán que una nueva vida penetre en nuestras instituciones inertes para transformarlas en un organismo poderoso que levante nuestra Patria al lugar prominente que le corresponde en el mundo. Entiende que el voto no es una dádiva que debe aceptarse donde y cómo los gobiernos la condenan, sino un derecho, fundamento del régimen republicano representativo y colocado al amparo de las leyes. Piensa que de un triunfo aislado en la Ciudad de Buenos Aires, no derivarían ni el prestigio para su bandera, ni beneficio para la causa de las instituciones. Y finalmente, cree que defraudaría los anhelos de la reacción y mataría la última esperanza que el país tiene en el esfuerzo patriótico de sus ciudadanos, si se incorpora con sus fuerzas a la lucha electoral y fuera a legitimar con su concurrencia al atrio, el fruto del fraude y de la imposición.<sup>1</sup>

Esta actitud principista ha sido muchas veces tachada de competencia desleal, que crítica al sistema desde afuera, sin entrar en la siempre riesgosa competencia electoral. Ya hemos visto que esa estrategia resta legitimidad a la élite gobernante, y a la postre la llevará a sancionar una ley que incorpore al sistema a tan rebelde oposición. "Si bien era una práctica seguida por todos los partidos de oposición, el radicalismo hizo una escuela y una tradición del abstencionismo, eclipsando una época de activa participación electoral. Ahora bien, ¿cómo se puede definir la política de abstención de los radicales? Era, como no se cansaban de repetir sus principales dirigentes y seguidores, la respuesta al fraude del 'régimen falaz y descreído', o un juego con ventaja, donde la abstención les permitía organizarse sin arriesgar nada y al mismo tiempo obtener réditos de sus presiones (charlatanes a veces) al gobierno nacional y provincial. De esta forma, sus demandas eran constantes y la participación llegaría cuando estuvieran seguros de su triunfo. Por eso, una vez anunciada su participación tras aprobarse la reforma de Sáenz Peña, en más de una ocasión amenazaron con volver a la abstención o, más veladamente, de ejercer nuevamente la violencia" (Malamud, 1995: 21).

En el mismo sentido se expresa Marcela Ferrari, quien analiza la posición tomada por el radicalismo para la elección de gobernador de la provincia de Buenos Aires, el año siguiente a la promulgación de la ley Sáenz Peña. En esa ocasión el radicalismo se abstuvo con la excusa de que la ley provincial fijaba en 21 años la edad mínima de los sufragantes. En este caso, como dice la autora, "la política abstencionista del radicalismo guardaba relación no sólo con una postura legalista, sino además con la presunción de

1. Texto extraído de Clementi, Hebe. *El Radicalismo. Trayectoria Política*. Hyspanérica. Buenos Aires, 1986. (1ª ed. 1983) p. 103.

no lograr vencer a la 'máquina electoral' conservadora, aunque sus perspectivas de éxito futuras fueran significativas" (Ferrari, 1994: 138).

A pesar de sus divergencias con respecto al tipo ideal "partidos modernos", el radicalismo es evidentemente diferente a los partidos tradicionales no sólo por sus bases, sino también por su organización partidaria. El nuevo partido nacionaliza las campañas provinciales, integra a opositores al partido dominante, es un partido orgánico en el que rige la disciplina partidaria. La política se profesionaliza. Los notables asumen la política como un "deber" impuesto a los de su calidad, a partir del surgimiento de los partidos políticos, en cambio, la política se transformará en una "carrera". Los status que se ocupan en la función pública serán adquiridos a través de la militancia política y no vendrán adscriptos por la pertenencia a las "mejores familias". Esta metamorfosis se producirá con la llegada del radicalismo al poder, que generará un recambio de la extracción social de la élite gobernante.

La base doctrinaria del radicalismo se enclava en el krausismo, y donde se expresa con más fuerza esa influencia es en el ámbito pedagógico, de la va desde la creación de escuelas hasta la rápida captación del crédito de la Reforma Universitaria. Este movimiento reformista trata de dar a la Universidad una función social que trasciende la función académica. Asimismo, la burocracia estatal sufrirá una transformación que posibilitará la movilización social de no pocos individuos. Nos referiremos a continuación a los años del radicalismo en el gobierno.

#### 4.3. El radicalismo en el poder

##### 4.3.1. La primera presidencia de Yrigoyen

En 1916 Yrigoyen llegó al poder con el 45,58 % de los votos, seguido de cerca por los conservadores. Estos arribaron a los comicios fragmentados en dos bandos: tradicionalistas y modernistas. Lisandro de la Torre responsabilizará al presidente Victorino de la Plaza de esa situación, acusándolo de poner piedras a todo intento de presentar un bloque homogéneo que impidiera el triunfo de Yrigoyen. La división de las fuerzas conservadoras y el apoyo en el Colegio Electoral de los radicales disidentes santafesinos fue crucial para la llegada del principal partido de la oposición al gobierno.

Un presidente legalmente legitimado cediendo el poder a la oposición es, por cierto, una situación novedosa que recién volvería a darse en la otra punta del siglo en la Argentina. El radicalismo triunfó en 1916, pero su triunfo no le dio mayoría en el Parlamento. Ya en el gobierno, y a medida que las elecciones provinciales se van desarrollando, Yrigoyen comenzará un pro-

ceso de destrucción de la maquinaria electoral conservadora a través de las intervenciones federales. Dicha maquinaria dependía de los recursos que le proveía el gobierno y de redes clientelares que no lograrán recuperarse hasta la década de 1930. Las autonomías provinciales defendidas por los conservadores son denunciadas por Yrigoyen como un último resguardo de las fraudulentas prácticas políticas tradicionales. El método usado por el gobierno para purificar la política es ciertamente criticable; desde una perspectiva puede decirse que el remedio es peor que la enfermedad que se apresta a curar, pero desde otra puede entenderse como el único medio del que el Poder Ejecutivo disponía para terminar de minar a aquel régimen quebrado electoralmente en 1916.

La explicación tradicional del radicalismo nos dice que representa a las emergentes clases medias urbanas que demandan participación política, es decir, ser incluidas con carta activa de ciudadanía. Pero no es el radicalismo un partido homogéneo de clase media urbana. Su triunfo electoral sólo se explica si tenemos en cuenta que logró agrupar a distintos sectores que rechazaban el monopolio político de los notables. Empleados de comercio, administrativos, maestros, profesionales, universitarios, pequeños propietarios campesinos y sectores populares votaron por Yrigoyen en 1916. Muchos de ellos provenían de familias inmigrantes que habían educado a sus hijos y habían logrado un ascenso económico que no estaba todavía legitimado socialmente en forma plena y que no daba derecho a ocupar posiciones políticas.

La relación con los sectores más bajos es mucho más compleja. El radicalismo no varió la estructura económica del país montada y sostenida durante el largo orden anterior. Como dice Romero, "la estructura económica del país quedó incolmable, fundada en el latifundio y en el frigorífico, y el gobierno radical se abstuvo de modificar el régimen de la producción y la situación de las clases no poseedoras" (1996: 134). El primer período presidencial de Yrigoyen está marcado por un reformismo laboral progresista que de ningún modo suponía un riesgo para los intereses económicos de los grandes propietarios. Por otra parte, cinco de los ocho ministros del primer gabinete de Yrigoyen eran miembros de la Sociedad Rural, el mismo número que bajo el anterior período presidencial conservador. Digamos que el radicalismo compartía el diagnóstico de la situación argentina de los conservadores, en cuanto a que el modelo agroexportador tenía un horizonte promisorio por delante, y lo que había que hacer, por tanto, era dar una mejor distribución social de sus beneficios. No hay, por ende, un proyecto industrializador y ya veremos que el radicalismo no lo tendrá tampoco en las próximas décadas.

La finalización de la Primera Guerra Mundial produjo una crisis económica que alteró el clima social del país. El número de huelgas creció a medida que los salarios reales bajaban, los precios subían y el número de desempleados crecía. Sin tratarse de una situación insostenible, la elite desplazada del poder empujaba tales manifestaciones populares de descontento en los movimientos revolucionarios europeos. El gobierno reprimió con dureza algunas huelgas, pero trató en general de inaugurar un nuevo estilo de gobierno y un nuevo rol para el Estado. Un Estado que ya no se autopercibía como representante de la elite económica, sino como árbitro igualitarista de las distintas fuerzas en pugna. Yrigoyen actúa con un cierto paternalismo que procura dar solución a los conflictos que están detrás de las huelgas en lugar de tratar a los huelguistas como criminales y perseguirlos con la policía. Los sectores tradicionales sospecharían actitudes demagógicas en aquel gobierno cuya base popular los inquietaba, y comenzarían a ver ya desde temprano un germen "rojo" en cualquier concesión a los sectores más bajos, hacia los que sólo les parece adecuada una vigilancia policíaca.

Sin embargo, cuando la política conciliadora del presidente fracasaba, era el ejército el encargado de sofocar las huelgas. Un ejército que ya Yrigoyen había buscado como aliado en sus conspiraciones anteriores a 1916, que había sido utilizado en las intervenciones federales para desmontar la quinta partidaria oficialista, y a cuya autoridad se le había confiado la limpieza de los comicios. Era un ejército insospechado de conspirar contra autoridades legítimas; su participación en la sofocación de los movimientos obreros fue quizás el origen de los resentimientos del ejército con respecto al gobierno de Yrigoyen, de quien gran parte de su oficialidad era seguidora.

La "semana trágica" de 1919, que tuvo origen en el enfrentamiento de obreros metalúrgicos de Buenos Aires en huelga y la policía, es una fecha clave en lo que hace a la relación del gobierno con los sectores conservadores, el ejército y los sectores obreros. Los sectores tradicionales vivieron con pavor los acontecimientos de violencia callejera: encontraron allí la confirmación de sus peores fantasmas, juzgando que la violencia desatada no podría ser contenida por un gobierno indeciso que no estaba dispuesto a renunciar a prácticas demagógicas que le aseguraran la fidelidad de su electorado popular. Es probable que la actitud conciliadora del gobierno haya salvado al país de una crisis más profunda, pero quienes siempre habían visto con suspicacia la política oficial sólo veían excesiva condescendencia allí donde entendían que debía imponerse el ejercicio de una coacción que abortara toda agitación posterior. En el ejército tomó cuerpo una actitud reservada hacia un gobierno que los utilizaba para llevar a cabo labores poli-

ciacas haciéndolos cargar luego con el descrédito de tales acciones. Los sectores obreros veían con asombro la inusitada violencia invertida por un gobierno de corte popular para subordinar a los rebeldes. Los sucesos de la Patagonia no hicieron sino acentuar estas diferencias.

Dice Rouquié con respecto a la mala imagen que el radicalismo tenía desde antes de los recién mencionados conflictos a los ojos conservadores y la que comenzaba a tener a los ojos de los militares: "Prevalece la impresión de que Yrigoyen, utilizando a las tropas para tareas de mantenimiento del orden, hace quedar mal al ejército para preservar su propia popularidad. Hasta se lo acusa de avivar el fuego que deben apagar luego los militares. Por lo tanto, mucho más que los problemas de presupuesto o de salarios, a los que se dio a veces una importancia exagerada, es la política social del gobierno de Yrigoyen, con todas sus implicaciones políticas o corporativas, la que puso una valla, cada vez más alta, entre la mayoría de los oficiales y el gobierno de la 'reparación nacional'" (Rouquié, 1998, Tomo I: 150-151). Los militares tenían pues la impresión de no recibir el trato que se merecían de un partido que los guiso como aliados cuando todavía no era gobierno, y que les seguía pidiendo ahora colaboración para gran cantidad de empresas; intervenciones federales y control de huelgas fundamentalmente.

La crítica al estilo político impuesto por Yrigoyen hizo sentir su voz a través de una prensa que tenía fuertes lazos con la desplazada élite tradicional. En general, no se cuestionaban medidas políticas concretas, sino que todas ellas serían excusas que permitirán poner en entredicho la conveniencia de que gobierne un partido de base popular. Como ya dijimos, ese gobierno tenía en sus cuadros dirigentes a integrantes de la vieja élite, pero a su lado estaban los "nuevos", gente que adquiría posiciones a partir de su rol en la estructura partidaria; éstos eran calificados de advenedizos por aquellos para quienes únicamente la pertenencia al estrato más alto daba el derecho de ejercer el poder.

Con todo, el radicalismo mantenía su base electoral, e Yrigoyen no tuvo problemas para sugerir al partido el nombre de su sucesor. No se puede hablar aquí obviamente de un gobierno elector como lo habían sido sus predecesores, pero hay que tener en cuenta que el peso que tiene la figura del presidente y líder indiscutido del partido mayoritario es fundamental en nuestro sistema. La elección recayó en un candidato cuya personalidad parecía muy alejada de la de Yrigoyen, y cuyo estilo de gobierno era una incógnita.

#### 4.3.2. La presidencia de Alvear

Si la llegada a la presidencia de Yrigoyen estuvo precedida de una larga trayectoria como líder del partido, la de Marcelo T. de Alvear, en cambio, resultó una sorpresa para muchos. Es un candidato que se constituye como tal a partir de ser señalado por el viejo caudillo como el indicado para sucederlo. La sugerencia de Yrigoyen es prácticamente una orden en un partido verticalizado y centralista como el que él mismo gestó. La extracción social del segundo presidente radical tranquilizó a los sectores tradicionales: pertenecía sin dudas a una tradicional familia de notables. Si bien en el partido radical nunca habían faltado miembros de las "buenas familias", esta era una oportunidad inédita por cuanto quedaba en manos de uno de sus distinguidos integrantes nada menos que la dirección del Ejecutivo. Desde luego no estaba en los planes de Yrigoyen el retiro de la vida pública, y la elección de Alvear bien pudo haber obedecido a un preanunciado intento de regreso ulterior. Está claro que Yrigoyen "produjo" la presidencia de Alvear, que no era en absoluto un candidato previsible dentro de la estructura partidaria. Pese a los cambios operados, como ya dijimos, es evidente que la conjunción de liderazgo del Ejecutivo y del partido en el gobierno daba la capacidad para producir no ya gobernantes pero sí candidatos.

En este caso el candidato tenía todas las chances a su favor. Sin sacrificio más grande que el de abandonar París, Alvear se encontró ejerciendo la presidencia. El suyo fue un gobierno que tuvo que enfrentar una crisis económica, fruto de los años de posguerra. El precio de las exportaciones argentinas había caído y la demanda se había retraído. Pero merced a un ajuste presupuestario y a un desplazamiento parcial de la ganadería en beneficio de la agricultura, la crisis fue superándose y hacia el final del sexenio alvearista ya las condiciones internacionales habían mejorado y la balanza comercial tendía hacia el equilibrio. Dentro de las relaciones internacionales, se notaba ya el predominio de los capitales norteamericanos por sobre los ingleses.

Alvear, dada su pertenencia al ala conservadora del radicalismo, intervino un poco más que Yrigoyen en materia económica y se resistió a la intención del viejo caudillo de manejar la política desde el Comité Nacional Radical. Yrigoyen despreciaba el Parlamento y tenía una concepción centralista en la órbita roquista. Alvear, en cambio, no siguió la política intervencionista de Yrigoyen en las provincias —aunque hay que aclarar que la labor de



desarme de la maquinaria electoral conservadora ya estaba realizada, y delegó mucho poder en sus ministros, que eran frecuentemente interpellados en el Parlamento. Desde el punto de vista legal, la presidencia de Alvear es intachable. De todos modos, su figura nunca bordeó siquiera el nivel de atractivo popular que tuvo la de Yrigoyen.

El gobierno de Alvear logró distender —ya veremos que sólo momentáneamente— la tensa situación que se vivió entre el gobierno y los sectores tradicionales durante la presidencia de su mentor. Hemos visto varias ocasiones en las que la élite en el poder buscó apoyo en distintos sectores para ganar autonomía con respecto a otros sectores. La situación de Alvear será en extremo delicada por cuanto tiene un único y fortísimo apoyo. Pero como también tendremos oportunidad de ver repetidas veces, nuestro ciclo de sistema presidencialista da alas aún al más dependiente de los presidentes. Si bien detrás de Alvear siempre estará la sombra de su hacedor, él tratará de cimentar cierto grado de autonomía apoyándose en el sector al cual pertenece por adscripción y en otro actor destinado a tener un rol fundamental a partir de la siguiente década. Así lo señala Rouquié: (1998: 166) "Todo ocurre como si, para tener libertad de acción, Alvear deseara apoyarse en una fuerza social, independiente de Yrigoyen, o aun francamente hostil al anterior presidente. Para asentar su poder y resistir a las presiones de su gran elector, Alvear se acerca al ejército. Por primera vez en la historia argentina, el poder ejecutivo no se contenta con asegurarse la lealtad de esta rama del aparato estatal, sino que además entra en componendas con ella."

El juego iniciado por Alvear incluye pues a los militares; ya hemos visto que ellos siempre fueron un factor de poder a tener en cuenta dentro de la estructura estatal, pero a partir de ahora cobrarán mayor importancia. Se inaugura pues un juego peligroso que tenderá más adelante a complejizarse en tanto las fuerzas armadas ganarán cada vez mayor participación en los asuntos de Estado. Ya veremos operar a distintos presidentes constitucionales en busca del apoyo de facciones de las fuerzas armadas en contrapeso de otras facciones hostiles. En este proceso de autonomización del poder militar dentro del Estado, tendrá un rol preponderante el ministro de guerra de Alvear, Agustín P. Justo, quien de esta manera ingresa en la arena política.

El acercamiento a los militares se dio a partir de la satisfacción de sus demandas, lo que genera un marcado crecimiento del presupuesto militar. Gran parte de ese presupuesto se utilizó para la compra de armamento, cuyos proveedores —como era tradicional— eran extranjeros. Pero sabiendo de una primera confrontación mundial y con la casi certeza de estar en la antecámara de otra, se afirmaba entre los militares la creencia de que

había que empezar a producir esos armamentos para no depender de países que hoy son proveedores y mañana pueden ser el enemigo contra el que se lucha o el aliado que necesita para sí todos los armamentos que produce. El proyecto industrialista que desde entonces estará siempre presente en los medios militares entronca así con una concepción de la seguridad nacional. Alvear incentivará un germinal desarrollo de una industria que pretende equipar a las fuerzas armadas. Esta industria requiere, si de ganar autonomía para el país se trata, de minerales y petróleo propios. Veremos que especialmente el petróleo será considerado un punto neurálgico de la soberanía argentina frente a los intereses extranjeros.

Sería exagerado decir que Alvear depende del apoyo que le dan los militares, pero en cambio tal vez sea acertado decir que no los controla. El apoyo que ellos brindan a su gobierno está motivado básicamente por el rechazo a Yrigoyen, que ya hemos visto no tenía un proyecto específico para los militares o un proyecto industrialista que asegurara la tan preciada "seguridad nacional". Yrigoyen además les parecía un peligro por juzgar que encarnaba ciertos ocultos intereses socialistas y hasta comunistas. Mientras Alvear busca apoyo en estos sectores, sus partidarios emprenden una lucha en pos de la creación de una corriente interna del partido. En el Parlamento, los alvearistas se distinguen de los yrigoyenistas y muchas veces se confunden con los conservadores en contra de sus correligionarios personalistas. Alvear, en este momento y en ulteriores momentos aún más críticos, mantendrá cierta distancia con respecto a la lucha contra el viejo caudillo. En 1924 se produjo finalmente la escisión del "antipersonalismo" en el partido gobernante. Pero a la hora de hacer los cálculos prelectorales, está claro que Yrigoyen todavía tiene a su favor un electorado que le dará el triunfo en 1928.

Es entonces cuando la voz de Lugones se alza para juzgar que ha llegado la "hora de la espada". El yrigoyenismo es una fuerza imbatible electoralmente. Nuevas estrategias se diseñarán, pero no cuajarán en parte porque tendrían en contra no sólo a Yrigoyen y quienes lo respaldan, sino al mismo presidente, que se niega a romper con su elector. Está claro que los conservadores, el ejército y los alvearistas sin Alvear no tienen la fuerza suficiente como para impedir el retorno de Yrigoyen. Las espadas tendrían que esperar un poco para que la sentencia de Lugones se hiciera efectiva.

## 4.3.3. La segunda presidencia de Yrigoyen

El sector personalista propuso a Yrigoyen para un nuevo periodo presidencial. El líder llegó esta vez a la presidencia con el 57 % de los votos y con 76 años de edad. Su principal opositor fue la alianza entre conservadores y alvearistas; alianza que para los sectores populares representaba el peligro del regreso de la política anterior a 1916. Yrigoyen había llegado a su primera presidencia con un electorado muy heterogéneo y dentro de su entorno no faltaban las figuras provenientes del sector tradicional. La situación ahora es distinta por cuanto quienes podían representar a tal sector dentro del radicalismo se habían pasado a las filas del alvearismo. La extracción pues de la nueva dirigencia radical tiende a afirmar la profesionalización de la política desplazando el criterio adscriptivo que beneficiaba a la élite tradicional. Una vez más los conservadores no podrían formar un bloque que tuviera chances ciertas de aspirar a la presidencia; y en un país donde un rol presidencial fuerte hace que se juegue al todo o nada, pronto ensayarían alguna vieja estrategia que les permitiera acceder al poder.

Durante esta presidencia, Yrigoyen emprendió una política de reformas sociales que implicaba un aumento considerable del porcentaje del presupuesto destinado al bienestar social. En especial se puso desarrollo a la educación primaria, que por cierto no había recibido gran atención durante el gobierno alvearista. También se mandaron al Congreso proyectos de reforma laboral que beneficiaban a los trabajadores. Todo esto no hizo sino avivar la desconfianza de los sectores tradicionales, que veían con recelo un Estado que se hacía cada vez más fuerte y buscaba nuevas bases de sustentación contrarias a la protección de sus intereses. A Yrigoyen le tocó absorber la incorporación de amplios sectores al Estado, que creció considerablemente en este periodo. Es probable que los sectores tradicionales no sólo no hayan compartido el nuevo rol que el gobierno pretendía imprimirle al Estado, sino que simplemente no hayan llegado a comprenderlo.

La prensa que en gran parte respondía a esos sectores tradicionales hostiles al yrigoyenismo fastidió duramente al gobierno. Se acusaba a Yrigoyen de ineficacia y de fina corrupción que más tarde no podría ser probada. La élite tradicional todavía intentará un desplazamiento del yrigoyenismo por la vía legal; en 1927 se había escindido del socialismo su ala derecha para formar el Partido Socialista Independiente. Allí se concentraron muchos miembros de las familias tradicionales que procurarán, con el apoyo del voto socialista, vencer electoralmente al yrigoyenismo en las elecciones de 1930 para, eventualmente, forzar al caudillo a la renuncia. Pero sólo lograron una

victoria en Buenos Aires y un retroceso general del yrigoyenismo a nivel nacional que no lograba quitarle una mayoría ya a esta altura indiscutible.

Al haberse mostrado infructuosa la opción legalista para derrotar a Yrigoyen, comienza a asomar una nueva estrategia que tendrá en el ejército a su protagonista principal. Un sector nacionalista, liderado por el entonces inspector general del ejército general José F. Uriburu inició una conspiración. A los ojos de los nacionalistas, que no son mayoría en el ejército, la gestión de Yrigoyen es filomarxista; ellos juzgan que la única fuerza que no ha quedado contaminada por la viciosa vida política es el ejército. A éste le corresponderá pues reencartilar la vida del país en busca de las preciosas virtudes perdidas. Pero el yrigoyenismo se había mostrado refractario a todos los intentos de desplazarlo de la conducción del país; por eso, Uriburu y quienes lo rodeaban comenzaron a pensar que la única alternativa era liquidar el mecanismo que le había permitido el acceso al poder: la ley Sáenz Peña.

Ya hemos visto que la ampliación de la ciudadanía tuvo un fuerte apoyo en los sectores populares cuando la ley se debatió, y seguramente sería muy traumático ahora restringir aquella ciudadanía tan costosamente ampliada. Mientras la conspiración avanzaba, Yrigoyen trataba de disciplinar a las fuerzas armadas, de darles el papel que realmente les correspondía dentro de un régimen constitucional como el nuestro, y abandonaba el germinal proyecto industrialista de Alvear. Los bandos ya estaban divididos y sus diferencias no harán sino acentuarse a un ritmo cada vez más rápido.

Cuando el golpe ya era un hecho, todavía quedaba por discutir en el ejército qué matices tomaría. Aquí se enfrentaron dos posiciones: la de Uriburu y la de Justo; son líneas que se bifurcan y estarían destinadas a dividir a los militares por mucho tiempo. Justo se inclina por una solución que terminara con el yrigoyenismo pero practicando el menor impacto posible dentro de la estructura sociopolítica. Uriburu, en cambio, quería una reforma más profunda; en sus planes figuraba la instauración de un sistema corporativo que termine con la política de partidos tal cual se practicaba y, a la postre, con el modelo liberal mismo. Para producir los cambios que quiere Uriburu, haría falta un golpe estrictamente militar, en el que no participarían los partidos políticos despreciados por el general. Pero los contactos hechos dejan a las claras que no hay consenso dentro de las fuerzas armadas para derrocar al líder radical. La única manera será pues contar con el apoyo de aliados civiles, pero en ese caso las reformas no podrían ser tan profundas, por cuanto en las expectativas de los partidos opositores no cabía la modificación del régimen constitucional y la ley electoral, ya que visualizan el golpe como una transición que les permitiera a corto plazo reestablecer la contienda electoral.

La suerte estaba echada y sólo quedaba por decidir qué profundidad se le imprimiría al cambio. El gobierno de Yrigoyen se mostrará incapaz de tomar las medidas imprescindibles para abortar los manejos de sus desleales opositores. Los seguidores del viejo líder parecían más preocupados por disminuir una, a esta altura, poco probable sucesión presidencial, que por defender la permanencia de un sistema del que todos en realidad dependían. Al miedo de los sectores conservadores ante lo que entendían era el "peligro rojo" se le sumó el de sectores otrora liberales permeables a una propaganda que difundió un diagnóstico y pronóstico apocalíptico. Y como ya había ocurrido y seguiría ocurriendo más de una vez en el futuro, todos los males son achacados a la cíclopea tarea de conducción del poder ejecutivo.

Yrigoyen, cuyas falas se comprobaría más tarde que no fueron tan graves como las que le asignaba la feroz oposición a través de la prensa, era tal vez, como dice Romero, "un hombre cuya única culpa había sido llegar al poder cuando el país era ya incomprensible para él" (1996: 139). Nuestro presidencialismo, una vez más, parece dejar en quienes han ejercido el máximo cargo la ambición de volver allí. La lección de Yrigoyen no prendería en sus sucesores, que lo intentarían una y otra vez, en un país en el que cualquier función política es nimia si la comparamos con la presidencial.

## De la república conservadora a la república de masas

### Capítulo 8

Este capítulo está dedicado al análisis de la restauración conservadora iniciada con el golpe de Estado de 1930 y la posterior conformación del peronismo.

En primer lugar, estudiaremos la posición que asumen los principales actores políticos al despuntar la década de 1930.

Luego nos detendremos en los gobiernos de la concordancia y analizaremos, en especial, el proyecto de industrialización puesto en marcha en esta década.

También los años de la década de 1930 fueron testigos de los cambios sociales que posibilitarían, más tarde, el seguimiento del peronismo. Su génesis durante los gobiernos militares de la década de 1940, las características del liderazgo de Perón, la base social de sus votos y su relación con los sindicatos son los principales ejes temáticos alrededor de los cuales articularemos nuestro análisis de la república de masas.

#### 1. La república conservadora

##### 1.1. El golpe de 1930

La crisis económica, cuyos efectos comenzaron a sentirse en 1930, como todos los males del país, fue achacada a la mala gestión de Yrigoyen. Si bien la sequía había afectado la última cosecha y la caída de los precios mundiales había tenido una repercusión negativa sobre las exportaciones argentinas, no sería acertado atribuir el golpe de 1930 a la situación producida por la crisis económica. Momentos de crisis similares se habían vivido antes sin que afectaran la estructura institucional del país. Pero en 1930 lo que estaba en juego era la distribución de los costos del inminente ajuste, y es evidente que los sectores tradicionales no estaban dispuestos a cargar con esos costos. Por otra parte, en 1930 pareció quedar claro que el modelo agroexportador que habían compartido la élites conservada y radical —aunque discordando sobre

503, 51

la distribución de los beneficios de tal modelo—había llegado a su techo y se imponía, por ende, un cambio profundo de la estructura económica del país.

Como ya hemos visto, el radicalismo no tenía un proyecto industrializador. El impulso del sector secundario de la economía que en su momento ejerció Alvear estuvo básicamente originado por las presiones de los militares, que tenían objetivos muy específicos. Pero el agotamiento del modelo agroexportador en los 30 enfrentaba al país al desafío de iniciar un proceso de industrialización. Los sectores tradicionales tratarán de encazar y poner límites a ese proceso para que no afecte sus intereses, es decir, para cargar el costo sobre los hombros de otros sectores. La década de 1930 es particularmente interesante por cuanto en ella presenciaremos un viraje de la política económica, que a la postre sentará las bases para el surgimiento de una nueva fuerza política en la década próxima.

Los años de la década de 1930 pueden ser vistos, pues, como una articulación que separa a los dos gigantes de la política argentina de este siglo: el radicalismo y el peronismo. En las próximas décadas ambos se demostrarán imbatibles electoralmente en distintos momentos históricos, reconocerán liderazgos fuertes, serán proscritos, conspirarán con los militares, serán derrocados por ellos y fundarán verdaderas culturas políticas de las cuales somos tributarios. Su supervivencia hasta nuestros días es una buena muestra de la maleabilidad que han tenido y de cuán arduo resulta en el escenario político argentino la fundación de fuerzas políticas.

Como hemos apuntado, al principio de la década no parecía haber consenso entre los militares con respecto a la necesidad planteada por Uriburu de deponer a Yrigoyen. Cuando el general hizo el recuento de sus tropas, verificó que no eran suficientes. Decidió entonces recurrir al Colegio Militar, pero allí los oficiales de mayor graduación se negaron a secundarlo. Serán entonces los jóvenes oficiales y los cadetes quienes prestarán su entusiasmo a lo que entienden es una verdadera gesta revolucionaria. Esta división entre oficiales mayores que no quieren romper con las instituciones, y oficiales jóvenes que sí lo hacen con suma presteza marca un cambio generacional en la actitud de los militares ante la política. Porque muchos de estos jóvenes participarán en el futuro de un proceso de "militarización" de la política, que será filtrada por cuestiones que hasta ese momento eran internas al sector militar. Uno de los militares que hizo su debut en la arena política en el golpe de 1930 es Juan Domingo Perón.

La marcha hacia Buenos Aires la comparten militares y civiles armados. No se les opuso mucha resistencia; nunca se sabrá si las órdenes de resistir

hubieran sido acatadas por los militares leales al régimen constitucional, porque tales órdenes nunca fueron emitidas. Ya en el poder, Uriburu impondrá el estado de sitio, disolverá el Congreso y depondrá a los gobernadores radicales. Empezaba así el infructuoso proceso de "desradicalización" de la vida política.

Es extraño que los actores políticos de la época no hayan notado la ruptura que este golpe suponía con respecto a la institucionalización de la sucesión presidencial convalidada a través del voto que —aun en los tiempos en que ese voto fue fraudulento— sugería un respeto por las formas legales, y que más en un tiempo en que tales prácticas se habían saneado. Igual que le pasaría a otro de los grandes actores de la historia política de este siglo, el peronismo, un golpe de estado acabó a los pocos años con un presidente electo por segunda vez y con amplia mayoría. Tanto la segunda presidencia de Yrigoyen cuanto la de Perón fueron auténticos plebiscitos; nadie podía dudar de la intención de voto mayoritaria. Obviamente es sencillo desde el presente juzgar esta ruptura a la luz de la inestabilidad política que se suscitaba a continuación, pero se entiende que los actores no tenían tal perspectiva histórica y vieron el golpe como una breve transición después de la cual prontamente las instituciones retomaban su cauce normal. Sin embargo, hoy sabemos que los quiebres de las democracias dejan profundas marcas sobre las que no tardarán en ensayarse otros quiebres.

Justo no aceptará formar parte del gobierno de Uriburu; a la espera una mejor oportunidad, más acorde con sus ambiciones. La extracción social de los hombres que rodean al presidente provisional marca un cambio con respecto a la presidencia de Yrigoyen. Vuelven los representantes de la elite tradicional a ocupar los principales puestos de toma de decisión. No será la carrera política sino el status adscripto una vez más el que dará base a la posesión de los cargos.

Los pretensiosos revolucionarios convertidos golpistas pronto comprenderán que, en lugar de una profunda reforma del sistema político, se impone el regreso de los militares a los cuarteles. Es importante aclarar aquí, como lo hace Rouquié, que con excepción de los exaltados nacionalistas, el resto de las fuerzas armadas vivió con cierta vergüenza aquellos sucesos de septiembre que marcarían la primera ruptura con él, al menos aparente, "apolítico" militar. Los militares formaban todavía un cuerpo que se sentía profesional y, para por ende, con funciones específicas que no eran justamente las políticas. "Para la mayor parte de los militares, el cuartelazo de Uriburu" que adopta el más clásico esquema del siglo XIX, marca una regresión en el desarrollo del ejército profesional moderno... Pero el último pronunciamiento del siglo XIX ar-

gentino es también el primer golpe de Estado de la era militar" (Rouquié, 1998, Tomo I: 203).

Rápidamente el nuevo gobierno se propuso disciplinar a aquellos colectivos que juzgaba más peligrosos para el orden conservador restaurado. La represión tuvo dos blancos principales: los yrigoyenistas y los dirigentes sindicales. Dentro de estos últimos, serán especialmente los de extracción anarquista y comunista los encarcelados, o expulsados, en caso de ser extranjeros. Obviamente se produce un retroceso en materia laboral, especialmente en el terreno ganado durante el último gobierno de Yrigoyen.

Uriburu y su entorno nacionalista abogan en favor de un reemplazo de la política partidaria por un Estado de signo corporativo. Así lo expresa el presidente en un manifiesto: "Cuando los representantes del pueblo dejen de ser meramente representantes de comités políticos y ocupen las bancas del Congreso obreros, ganaderos, agricultores, profesionales, industriales, etcétera, la democracia habrá llegado a ser entre nosotros algo más que una bella palabra". La bella palabra quedará pues a disposición del Estado, un Estado que bien se podría ligar al exitoso, por entonces, ensayo fascista italiano. Sin embargo, hay que hacer notar que estos militares desconfiaban demasiado de las masas como para apoyarse en ellas; por ende, más que un Estado a la italiana, van a preferir un Estado corporativo militarista que oponga firme resistencia a toda manifestación política. Hay aquí una clara intención de monopolizar y estrangular el disenso, la negociación y, en definitiva, la esencia política misma.

El general Justo observaba a corta distancia, desde la comandancia del ejército, los planes de su rival. Esperará el desgaste de un gobierno que se sabía no sólo nominalmente provisional desde su origen. Los partidos políticos, y aun las fuerzas armadas, no estaban de acuerdo con el rumbo que Uriburu pretendía dar a un golpe que para ellos tenía como único objetivo derrocar a Yrigoyen y no cambiar la estructura institucional del país. Mientras Uriburu gestaba sus planes transformadores, los actores políticos se apresaban para una contienda electoral que juzgaban inminente.

A principios de 1931 se llevó a cabo el consabido ensayo de las elecciones provinciales. Una vez más se intentará vencer al radicalismo en las urnas. Y una vez más el radicalismo triunfará en la provincia de Buenos Aires, quitando de esa manera legitimidad al golpe del año anterior. Los conservadores y los militares nacionalistas vieron con asombro lo que consideraron una incomprensible terquedad del pueblo en elegir aquello que no le convenía. El problema para el gobierno era grave: fue deslegitimada su

revolución en las urnas, se reclamaban elecciones para ese mismo año a nivel nacional, y las proyecciones indicaban que los resultados favorecerían al radicalismo. Uriburu y su proyecto tenían las horas contadas.

Alvear —que siempre parecía estar volviendo de París para ocasiones como ésta— se encontró entre dos fuegos. Por un lado, Yrigoyen lo llamó a reunificar el partido, y por el otro, su antiguo Ministro de Guerra, Justo, le pidió su apoyo para enfrentar al yrigoyenismo. El legalista que había en Alvear no podía aceptar una alianza que significaría participar de un gobierno de corte militarista. Optará pues por el intento de reunificar las fuerzas radicales. Pero estaba claro que los protagonistas del golpe de septiembre, como los sectores sociales representados por ellos, no estaban dispuestos a aceptar el riesgo del regreso del radicalismo. No era pues meramente Yrigoyen el problema sino el radicalismo en su totalidad. La proscripción primero y un ingenioso argumento legalista irripidieron a Alvear presentarse como candidato a presidente; los golpistas adujeron que no se cumplió con el turno de espera correspondiente antes de que Alvear pudiese ser nuevamente electo presidente. Demás está decir que ellos mismos eran los responsables de tal situación. La Unión Cívica Radical, recordando un pasado que parecía repetirse, llamó a sus volantes a la abstención. Se formó una alianza entre socialistas y democratas progresistas; pero al ser ambos viejos enemigos de los yrigoyenistas no tenían grandes chances de obtener el voto radical. Aun así, el gobierno desconfiaba. Y decidió resguardarse en el fraude por si acaso. Con la práctica de un fraude al que ahora se llamará "partidito", se imponen los candidatos de la Concordancia: Agustín P. Justo y Julio A. Roca. La fachada se mantiene, y esa fachada es expresión de la necesidad de una legitimación legal.

A partir de ese momento el radicalismo, principal partido de la oposición, sería juzgado desde el poder y por sus propios integrantes como una fuerza electoralmente imbatible. Bajo la presidencia de Alvear, el partido elaboró distintas estrategias de conquista del poder, pero siempre se autoperchó como ganador en el terreno electoral. En esos años de proscripción se fundó el "mito radical". Así lo señala Félix Lunar: "La Unión Cívica Radical, principal damnificada del fraude, mantenía sobre cada derrota electoral la leyenda de su condición mayoritaria, que a su juicio sólo podía falsearse mediante recursos violentos o tramosos. Esta certeza afirmaba en el oficialismo la necesidad de cerrarle el paso del poder y en el radicalismo la desesperación por conquistarlo a través de cualquier recurso. Así, el viejo partido de Yrigoyen —qué condujo Alvear en la década de 1930— se fue complicando cada vez más con el *establishment*, renunció a denunciar un

régimen que había llevado al país a un estado de dependencia colonial, abandonó gradualmente sus posiciones populares y emancipadoras, pactó con otras fuerzas y buscó apoyos militares. Cualquier recurso parecía lícito para llegar al gobierno, puesto que el radicalismo era, de todos modos, la mayoría inquestionable...." (Luna, 1984: 23).

### *1.2. Ascenso y caída de la Concordancia*

En 1932 comenzó a gobernar Justo, ganándole de ese modo la partida a Urburu. Hábilmente, el nuevo presidente pretendió distanciarse de su antecesor y comenzó la ingente tarea de legitimarse a través del ejército. Y lo haría tratando de capear la crisis con la que se enfrentaba. Podríamos decir, como ya lo hemos sugerido, que en el terreno económico la fuente de conflicto principal giraba en torno de la decisión sobre qué sectores soportarían los costos de la crisis y la transformación económica que había que llevar a cabo. El proceso de industrialización juzgado necesario en el contexto del nuevo orden mundial tenía sus costos, y alguien tendría que pagarlos. Con la nueva conducción, estaba claro que no sería el estrato más alto quien lo haría y que, además, se elegiría una estrategia industrializadora que no afectara sus intereses. Más adelante nos adentraremos en este punto.

Justo intentó reunificar un ejército que había quedado conmovido por los sucesos de septiembre. Para ello, procurará satisfacer las demandas profesionales de los militares; el presupuesto destinado a cubrirías aumentará notablemente. Sin embargo, las pretensiones de los militares ya no estarán referidas a cuestiones meramente profesionales. Así lo señala Rouquié: "La política ha penetrado realmente en el ejército. Los oficiales con mando debieron definirse dos veces respecto de un problema nacional y extraprofesional: primero, acerca del derrocamiento de Yrigoyen y la obediencia debida al gobierno revolucionario, y luego, referente a la actitud a adoptar ante los proyectos del general Urburu... En la mayoría de estos hombres a quienes su formación profesional volvía indiferentes y hasta hostiles al universo de la política, se han cristalizado actitudes negativas. Han surgido líderes..." (1998, Tomo I: 263). En este escenario, existían básicamente tres líneas: la partidaria de Justo, la de Urburu y la yrigoyenista. Si Justo pretendía liberarse de los radicales, debía que apoyarse en el sector nacionalista corporativista que se alineó detrás de Urburu. Ese es el precio que habrá de pagar para sostenerse en el poder, y el precio incluye un alto grado de autonomía para el ejército.

Para sucederlo, Justo eligió a un civil que fue también ministro de Alvear: Roberto M. Ortiz. El candidato a la vicepresidencia era Ramón Castillo. La UCR, ya sin Yrigoyen, había levantado la abstención unos años antes, y presentaba como candidato a Alvear. Después de unas fraudulentas elecciones, triunfó la fórmula de la Concordancia con el apoyo de los antirygoyenistas más resistentes.

Como ya a esta altura era previsible, un presidente sin base política — que debía su posición a su antecesor — trataría de legitimarse ganándose el favor de algún otro sector. Ortiz no contaba ni con el partido ni con el ejército, ambos manejados por Justo. Tratará pues de acercarse al Partido Radical que era, en definitiva, su agrupamiento de origen. Y la única manera de hacerlo era prometiendo una salida electoral limpia. Comenzó por intervenir en elecciones provinciales impidiendo que la maquinaria electoral controlada por la Concordancia impulsara a sus candidatos. En ellas quedará claro nuevamente que el radicalismo goza de buena salud electoral.

La Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial se vivían en la Argentina como acontecimientos nacionales. Esta situación, seguramente estaba motivada por el reciente proceso de inmigración y por la fuerte dependencia de la economía argentina con respecto a la europea. Durante la Segunda Guerra, el gobierno asumió su ya tradicional posición neutral, pero los sectores que apoyaban a ambos bandos en disputa harán sentir sus presiones. La salud del presidente no hace sino deteriorarse, y finalmente lo obligará a delegar sus funciones en el vicepresidente.

Castillo dio un giro con respecto a la política seguida por Ortiz; a diferencia de su antecesor, él no estaba dispuesto a permitir el regreso de los radicales al poder. La receta que aplicó Castillo no era ni pretendía ser original; el fraude se reinstituyó con nuevos bríos.

Con respecto a la posición tomada ante el conflicto bélico mundial, los partidos políticos y la prensa eran mayoritariamente favorables a los Aliados. Generalmente se ha interpretado que el factor fundamental que impidió que se declarara la guerra al Eje fue la germanofilia del presidente. Según Rouquié, en cambio, la neutralidad argentina tuvo un sello más probritánico que proalemán. No se tomaba parte en el conflicto armado contra los Aliados, y ello implicaba tomar posición a favor de Gran Bretaña y en contra de los Estados Unidos en una pulsada comercial de más largo aliento. "La neutralidad corresponde a los intereses de Gran Bretaña, de los estancieros y de los exportadores argentinos. En efecto, el mantenimiento de las relaciones diplomáticas con Alemania es imprescindible para salvaguardar el

intercambio económico con el Reino Unido; cualquier medida hostil hacia los países del Eje desencadenaría severas represalias contra el comercio argentino... Y es también cierto que la vehemencia de las críticas norteamericanas contra la actitud antidemocrática del gobierno argentino, que en los hechos favorece al Reino Unido reforzando los vínculos económicos entre los dos países, traduce igualmente la intención de los economistas norteamericanos que aprovechan la guerra para tratar de suplantarse a la antigua metrópoli y hacer de la Argentina un país dependiente de los Estados Unidos" (1998, Tomo I: 319).

La pasión en el seguimiento de la guerra se combina con la preocupación por lo que sucederá una vez finalizado el conflicto. Los sectores tradicionales y el ejército temen una repetición de la situación vivida al finalizar la Primera Guerra Mundial que, como vimos, desembocó en un tiempo plagado de crisis y explosiones sociales. Con un proceso de industrialización limitado como el que veremos más tarde que se había emprendido en estos años, el número de obreros creció y, por ende, la crisis de posguerra amenazaba acarrear un grado de violencia mayor. Los sectores tradicionales temían la afectación de sus intereses económicos y los militares recordaban su ingrata participación en las huelgas durante el gobierno radical. En esta situación se llega al golpe de 1943, cuyos motivos y desarrollo veremos en breve.

Analizando la elite gobernante en el periodo 1936-1943, José Luis de Imaz encuentra "un grupo restringido, en el que el origen, las relaciones de tipo personal, la situación de familia y los clubes de pertenencia operaban como criterios selectivos. Porque en principio para arribar al más alto nivel —excepto entre los ministerios militares— imperaban criterios de adscripción" (1964: 11). En los casos en que no se contaba con un miembro del más alto estrato para ocupar una función, se utilizaban criterios de selección supletorios. Al lado de los miembros del estrato más alto se ubicaron así algunos individuos —siempre minoritarios— a los que se reconocía habilidad en los negocios o bien capacidad de atraer votos. En ambos casos, y como es lógico por tratarse de capacidades, la pérdida de la misma implica la pérdida del reconocimiento que había otorgado la elite sobre base de un status adquirido.

Dice Imaz con respecto a esta elite algo que sin duda podríamos aplicar también a la elite conservadora que dominó hasta 1916: "Se trataba en realidad de toda una clase dirigente. Una de las pocas bien cohesionadas que ha tenido el país, funcional, en la cúspide operaba el grupo social cohesivo; para las actividades específicas estaban encargados los 'reconocidos' por su capacidad; en los niveles medios tenían carta blanca los 'reconocidos' por sus éxitos electorales; y toda la maquinaria estaba montada sobre dos

pilares: el fraude electoral y el apoliticismo de las Fuerzas Armadas" (De Imaz, 1964: 12). Más allá de la pertenencia al mismo estrato social, la mayoría de ellos ha pasado por las aulas de alguna de las casas de estudios de Derecho más importantes del país. Imaz contabiliza un 69 % de abogados en la elite que estaba en el poder en 1936, y un 92 % en la que dirigía el país en 1941.

### 1.3. El proyecto industrializador de los conservadores

En esta década se puso en marcha desde el Estado un proceso de industrialización por sustitución de importaciones; es decir, una "industrialización sin revolución industrial". La interpretación tradicional sostiene que cuando se pretende industrializar un país que, hasta ese momento, había tenido una economía de base agraria, se entabla un conflicto de intereses entre dos sectores: el de los propietarios agropecuarios (la "oligarquía") y el de los propietarios industriales. Los ganaderos librecambistas que obtienen sus ganancias de la exportación de carne se opondrían a las medidas proteccionistas que convienen a los industriales. Dos estructuras de poder, con sus correspondientes ideologías y sistemas de estratificación social comienzan su lucha.

Según lo establecen Murnis y Portantiero en un ya clásico trabajo sobre los orígenes del peronismo —que claramente se remontan a esta década— más que una lucha entre dos estratos altos de diferentes sistemas de estratificación, se entabló una alianza entre fracciones de cada uno de esos estratos. Así, no encontraremos a los terratenientes rechazando el modelo de industrialización controlada, sino apoyándolo. Evidentemente, "...el apoyo a la industria no puede identificarse ingenuamente con la adopción simultánea de orientaciones sociales y políticas también 'progresistas', negadoras de privilegios tradicionales, y partidarias, por lo tanto, de un mayor igualitarismo y una extensión de la participación política. O sea que, en los procesos de crecimiento tardío, el corte en cuanto a apoyo o rechazo a la industria no coincide necesariamente con el corte entre fuerzas representativas de un orden nuevo, global, 'progresista' y un viejo orden global retardatario, sino que dentro de los partidarios de la industrialización y dentro de los sectores favorecidos por ella se darán cortes fundamentales en cuanto a orientaciones sociopolíticas, cortes que obligan a complicar el modelo simple de enfrentamiento social mediante la introducción del concepto de alianza de fuerzas, como condición para hacer posible el estudio de las relaciones de fuerza en la sociedad y de la hegemonía del Estado" (Murnis y Portantiero, 1987: 8).

503.5

55

Se dio entonces entre grandes propietarios rurales e industriales una "alianza de clases", como la llaman los autores, utilizando un concepto de amplia tradición en los análisis políticos; nosotros preferiríamos aquí hablar de alianza de estratos por cuanto sus integrantes pertenecen a distintos sistemas de estratificación. Esa alianza se realiza bajo la condición de que la industrialización se limite a la sustitución de importaciones. Posteriormente, con el peronismo, se incorporará a esta alianza un sector de las clases dominadas.

Desde 1933 la economía argentina empieza a crecer a grandes pasos; el sector industrial comienza a liderar la economía. Esto difícilmente hubiera sido posible si los sectores tradicionales, con un poder político que era receptivo a sus intereses, se hubieran opuesto. Es pues el gobierno de signo conservador el impulsor del proceso de industrialización, y no puede atribuirse tal impulso a las demandas de los sectores medios o bajos, por cuanto en esta década y hasta 1943 Murnis y Portantiero no encuentran que ningún grupo social o político poderoso haya esgrimido un programa de crecimiento industrial más radical que el de la élite oficialista. El proceso de industrialización fue querido y auspiciado por el Estado, y no estaba en contradicción con los intereses de los más poderosos terratenientes, aunque sí afectó a propietarios rurales más pequeños.

Como ya hemos visto, el afán industrializador del ejército tenía un signo distinto, más específico, relacionado con la producción de armamentos que pusiera a resguardo a la nación ante un eventual ataque extranjero. En este período se creó la Dirección General de Fabricaciones Militares que coordinaría la producción de las industrias militares ya existentes y daría base a una implementación de la industria pesada —fundamentalmente en las ramas siderúrgica y petroquímica—, industria que sólo a los militares parecía interesar en ese momento. Si bien ellos no estaban directamente comprometidos con la industrialización liviana que se emprendió en este mismo período, tendrían, no obstante, que el autoabastecimiento de bienes de consumo es tan necesario como el de armamento en caso de conflicto bélico.

Para el estrato superior, el proceso de industrialización por sustitución de importaciones tenía la ventaja de su limitación a la industria liviana, productora de bienes de consumo no durables. El objetivo era reemplazar los bienes de consumo importados, sin que para ello se requirieran grandes inversiones o la modificación de la estructura agraria. Hasta 1929, la Argentina había juzgado limitado su proyecto agroexportador, con su consiguiente crecimiento hacia afuera. Con la adopción de medidas proteccionistas por parte de los países centrales, 1929 marcó el fin de ese proyecto. Ante esta modificación del escenario internacional, la estrategia de la élite tradicional fue cambiar algo para

que la estructura socioeconómica de base pudiera mantenerse. Si se exportaba menos, se debería importar menos para de esa manera equilibrar la balanza: a la etapa de limitado crecimiento hacia afuera la debía suceder una etapa de limitado crecimiento hacia adentro. Esa era la principal razón por la cual se encarró un proceso de industrialización limitado, que protegía el desarrollo industrial a la vez que lo encerraba en un coto.

La oposición terratenientes contra industriales que se dio antes de 1929 y que se vivió en los países de industrialización temprana, se cerró en la década de 1930 en la Argentina con una alianza entre estos sectores. La élite puso en marcha el proceso de industrialización por sustitución de importaciones porque advirtió que un cierto nivel de industrialización mejoraba la actividad económica, sin que por ello se perdiera su hegemonía. También hay que acotar que esa misma élite ganadera comenzó a ingerir en las industrias o estaba vinculada a esas industrias a través de grupos financieros. Esta estrategia llevada a cabo por la élite dominante quedó claramente expuesta en las palabras de Federico Pinedo en 1940: "La vida económica del país gira alrededor de una gran rueda maestra que es el comercio exportador. Nosotros no estamos en condiciones de reemplazar esa rueda maestra, pero estamos en condiciones de crear, al lado de ese mecanismo, algunas ruedas menores que permitan cierta circulación de la riqueza, cierta actividad económica, la suma de la cual mantenga el nivel de vida del pueblo a cierta altura" (citado por Murnis y Portantiero, 1987: 25).

En 1932 Gran Bretaña acordó con sus dominios un régimen preferencial de compras que ponía límites a la compra de carne a la Argentina. Si al descenso de los precios y a la caída de las exportaciones como consecuencia de la crisis mundial le sumamos la posibilidad de achicamiento del mercado británico para la carne argentina, entenderemos el pánico de los exportadores argentinos. La crisis suele ser fuente de alternativas. Era probablemente el momento de dirigir la vista hacia otros horizontes: y dejar de depender de un solo país. El camino escogido, en cambio, supuso la reafirmación de esa dependencia comercial en peores términos. En 1933 se firmó el Tratado Roca-Runciman, que a cambio de muy poco —no reducir la cuota de importación de carne argentina que el Reino Unido mismo había fijado— dejó a la Argentina atada a comprar productos británicos, otorgándole una serie de beneficios a los productos que de allí provinieran y a los capitales ingleses. La Argentina tomó así partido en la disputa entre Inglaterra y los Estados Unidos por ganar mercados. Hay que recordar aquí que en 1927, aduciendo problemas sanitarios, Estados Unidos había cerrado sus puertas a la carne argentina. Pero más allá de la toma de posición hacia el



exterior, la política seguida por el gobierno de Justo marcaba a las claras cuáles eran los intereses dominantes: los del sector ganadero exportador.

El radicalismo criticó repetidamente los "excesos" del proyecto de industrialización oficialista, pero sin ofrecer un proyecto de industrialización alternativo. En cuanto al sector industrial, Murrin y Portantiero señalan que hasta la Segunda Guerra Mundial no había fragmentaciones dentro del mismo. Los sectores pequeño y mediano no tenían fuerza y quedaron bajo la hegemonía de los industriales más grandes y tradicionales, vinculados con el capital financiero nacional y extranjero. La representación de este sector era ejercida por la Unión Industrial Argentina. Es posible que esta unificación del sector industrial termine en la década de 1940; entonces se daría un reagrupamiento de fuerzas (con el sector industrial ya dividido) que será muy importante para el surgimiento del peronismo. En la década de 1930, el sector agrario, a diferencia del industrial, estaba fragmentado. Esa fragmentación venía desde la década anterior, cuando los criadores de ganado apoyaron al yrigoyenismo y los inversionistas al antiperonismo alvearista. Los inversionistas eran quienes estaban cerca de Buenos Aires, y los que entregaban ganado regularmente a los frigoríficos, por lo cual estaban en una situación de privilegio. Ese privilegio se consolidó a partir de 1927, cuando lograron el control de la Sociedad Rural Argentina.

Los inversionistas se aseguraron una participación privilegiada en las cuotas restringidas del Pacto Roca-Runciman. Lisandro de la Torre se convirtió en vocero del desplazado grupo de los criadores, que expresaban su rechazo al proyecto de industrialización del gobierno y abogaban por mantener un proyecto librecambista de "crecimiento hacia afuera". Los criadores trataban además de cambiar el eje de las relaciones de comercio, desplazándolo desde Gran Bretaña hacia Estados Unidos, país que va ganando espacio a pasos agigantados en el comercio mundial. La consigna era vender a los Estados Unidos carne e importar manufacturas desde allí. Este sector de criadores veía a la industria como su principal enemigo. Esto dio lugar a una paradoja: mientras el grupo más conservador apoyaba la orientación "modernizante", el sector desplazado encontrará apoyo en los sectores más "progresistas" del Parlamento, orientándose hacia una posición fuertemente opositora con respecto a los cambios "progresistas" que se operaban en la estructura económica.

El inicio de la Segunda Guerra ocasionó una nueva crisis, por el cierre de los mercados europeos a las exportaciones argentinas. En 1940 Pinedo volvió al Ministerio de Hacienda —ya había ocupado esa cartera durante el gobierno de Justo— y redactó el plan económico que lleva su nombre. A

través de él, el Estado se hacía cargo de la compra de los excedentes agrícolas, y se estimulaba la industria. De nuevo se trataba de un proceso de industrialización controlado por la hegemonía en el poder. Lo curioso es que tanto los industriales cuanto el radicalismo proponían en ese momento soluciones más "tradicionales" a la crisis que las implementadas por el conservadurismo en el poder. El Plan Pinedo se aprobó en el Senado —que tenía mayoría oficialista— pero fue rechazado en Diputados —donde el oficialismo era minoría—. Es destacable el pobre papel que cumplieron los industriales en defensa del Plan Pinedo, tal actitud demostraba su falta de vocación hegemónica. Su representante, la Unión Industrial Argentina, parecía siempre conformarse con salvar la industria tal cual estaba, jugando una estrategia a la mínima, de supervivencia. Por supuesto, los sectores rurales subordinados se oponían al Plan, como a cualquier apoyo a la industria.

El radicalismo se oponía también al Plan Pinedo. Sólo estaban de acuerdo con la compra por el Estado de los excedentes agrícolas. Así se expresó el Comité Nacional de la Unión Cívica Industrial: "Sin hacer análisis se puede afirmar que al país le cuesta mucho dinero el lujo vanidoso de muchos artículos llamados de la industria nacional que siempre tienen la consabida defensa de los brazos que se emplean.... Podrán caerse todas las chimeneas, pero mientras el campo produzca y exporte, el país seguirá comprando lo que necesita, seguramente a precio inferior que el determinado por la Aduana para favorecer intereses creados" (Murrin y Portantiero, 1987: 40).

De este modo, el radicalismo se transformó en vocero de los grupos rurales que no encontraban eco a sus demandas por parte del gobierno. No representaba, en cambio, a los sectores medios urbanos ligados a la industria. Los radicales criticarán el estatismo de la élite en el poder, sosteniendo que el proteccionismo beneficiaba a unos pocos industriales en perjuicio de muchos consumidores. Para paliar la crisis, el radicalismo proponía comprar los excedentes y un plan de obras públicas. "Frente a la tibia alianza entre los ganaderos privilegiados y los industriales, cuyos intereses el Estado intenta armonizar, la alternativa que parece promover la UCR es la de una alianza en la que participan los grupos agrarios subordinados y las capas medias urbanas no ligadas a la industria; sectores éstos 'consumidores' más que 'productores', cuyos ingresos no dependen de la industria, sino de los servicios, y a quienes la industrialización les encarecería las mercancías que demandan" (Murrin y Portantiero, 1987: 41).

Mientras el sector hegemónico en el poder quería producir cambios que le permitieran seguir controlando el proceso económico, y el radicalismo rechazaba toda política de desarrollo industrial, no hubo una alternativa que

propusiera un desarrollo industrial impulsado por los sectores medios de origen industrial. Al respecto dicen Murnis y Portantiero: "Es esta falencia, según nuestra hipótesis, una de las causas que determinará que los cambios hegemónicos en la estructura de poder en la Argentina asuman, pocos años después, formas en las que desempeñarán un rol privilegiado la burocracia estatal y el Ejército, dentro de un proceso al que se incorporarán las clases no propietarias" (1987: 42).

El Estado de la década de 1940 asumió un papel mucho más activo. Ya no será el representante de un homogéneo bloque de terratenientes como lo habíamos antes de 1916 e inmediatamente después de 1930, y probablemente solo hasta 1933. El Estado comenzará a reflejar intereses mucho más complejos, lo cual hace que adquiera un perfil de mayor autonomía. Su función no será, a partir de este momento, traducir en políticas públicas los intereses de un sector de la clase dominante —el sector inversionador—, sino articular esos intereses con los de élites provenientes de otros sectores propietarios, inmersos todos ellos en un proceso de acumulación de capital. "El Estado se realiza así como equilibrador dentro de un bloque de poder más complejo, como moderador de una alianza objetivamente estructurada alrededor de los intereses comunes de distintas clases" (1987: 43).

Este nuevo Estado se tornó mucho más intervencionista de lo que había sido en el pasado. De hecho, parecía estar representando a los sectores dominantes mejor de lo que ellos lo podrían hacer conscientemente, muchas veces esos sectores no entendían esta función y, de hecho, se oponían a ese Estado que los protegía mejor que ellos mismos. Durante la década de 1930, la "oligarquía" en el poder dejó de representar a un bloque homogéneo para pasar a representar una alianza de clases, una "homogénea determinación agraria" ir pasando a una combinación agro-industrial en la que operara como factor aglutinante el capital financiero, nacional y extranjero" (Murnis y Portantiero, 1987: 44). Si bien esta alianza comenzó en la década de 1930, hasta mediados de la década de 1940 fueron los hacendados quienes llevaron la voz cantante al interior de la misma; ello fue así debido a que la estructura económica en gran parte dependía de ellos, es decir de las rentas del comercio exterior. Al promediar la década de 1940, la alianza agro-industrial se alterará "por la diferenciación que comenzará a operarse dentro de los propietarios industriales, por la movilización de las clases populares y por el fortalecimiento adquirido por el Estado, a través especialmente, de su área más proclive a cierta automatización: el ejército" (Murnis y Portantiero, 1987: 45). Los hacendados más poderosos tenían su representación en los conservadores; los subordinados en la Unión Cívica Radical.

El bloque industrial, en cambio, parece no tener intenciones de crear una fuerza política representativa de sus intereses, sino que se conformaba con intentar influir en la élite a partir de determinadas personas, en especial los militares. Estos, como ya hemos visto, eran los más dispuestos a apoyar la industria dentro de la élite dominante. La burocracia industrial, igual que la clase obrera después, no lograrían traducir al sistema político sus intereses de clase, y eso indudablemente redundó en una estructura política que se alejaba del modelo típico de los países tempranamente industrializados.

## 2. La república de masas

### 2.1. La revolución del 1943

Entre 1942 y el inicio de 1943 mueren Alvear, Ortiz y Justo. Como había ocurrido en 1906, una serie de muertes cambia el escenario político. Ortiz fue reemplazado por Ramón Castillo, quien en 1944 resultó destituido por un golpe de Estado cuyas motivaciones no son fáciles de establecer. El desencadenante parece haber sido la decisión del presidente de avalar, con la maquinaria electoral de la que disponía, la candidatura de Patrón Costa para el próximo período electoral. Sin embargo, las causas profundas parecen entrar en las inquietudes que existían en distintos sectores sobre la crisis que sobrevendría una vez acabada la guerra.

En el ejército, los nacionalistas habían ganado terreno, pero no puede decirse, sin embargo, que el ejército estuviera mayoritariamente comprometido con tal ideología. Hay que aclarar además que no estaba nada claro que implicaba ser "nacionalista", este calificativo muchas veces engloba a gente con muy diversas posiciones. Lo cierto es que el único y, en cierto modo, momentáneo consenso que encontramos en el ejército es el que se establece a la hora de dar el golpe. Una vez cumplido este objetivo se verá que los clivajes son múltiples. Como había ocurrido en 1930, parece haber imperado la idea de que una situación tan difícil como la que se daría en la posguerra requeriría un liderazgo firme y eficiente, una unidad de mando que sólo las fuerzas armadas podían garantizar. Esa unidad que pronto se revelará ilusoria.

El golpe del 1943, en el que mucha importancia tuvo el Grupo de Oficiales Unidos (GOU) constituido poco antes, ubicó en el ejercicio del poder ejecutivo a Rawson por apenas dos días, más tarde a Ramírez y, por último, a su vicepresidente Farrell. Pero si vemos ese período con perspectiva histórica, no son éstos los nombres que importaban, sino el de Juan Domingo Perón.

Perón se desempeñó como secretario del Ministerio de Guerra durante el gobierno de Ramírez; luego, ya con Farrell en la presidencia, fue designado al frente del Departamento Nacional del Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente. Eran posiciones inmejorables para entablar relaciones con dos factores claves, sobre los cuales va a sentar las bases de su proyecto político: los militares y los sindicatos. Desde el Ministerio de Guerra hizo distintas concepciones a las fuerzas armadas, pero la labor más importante de cara a su futuro liderazgo la cumplió desde la Secretaría de Trabajo. Medidas sociales largamente esperadas y reclamadas le dieron gran popularidad y se comenzó a gestar la imagen de Perón como un representante de los trabajadores que, desde la estructura estatal, concedía aquello que la lucha sindical no había sido capaz de lograr.

Desde esta plataforma va a elaborar Perón su proyecto político. Hay que decir que el peronismo ha sido objeto de múltiples análisis; probablemente ningún otro fenómeno de nuestra historia política haya recibido tanta atención por parte de historiadores, sociólogos, políticos, economistas, etcétera. Para mostrarlo, bastaría ver el número de tesis doctorales que se han escrito sobre el tema, tanto en la Argentina cuanto en el extranjero. Tan alta atención se debe seguramente a una percepción de originalidad del fenómeno social. Aquí partimos de la interpretación clásica que la teoría sociológica nos ha brindado con respecto al peronismo, para practicar luego algunas objeciones a tal interpretación, provenientes de estudios posteriores.

Como vimos, la guerra se vivía en la Argentina, y en especial en las grandes ciudades, como un problema interno. La neutralidad argentina era mal vista por los Estados Unidos, que claramente estaban interesados en la caída del gobierno militar y su remplazo por un gobierno que tomara una postura pro-Alliados. Fue por entonces cuando llegó al país Braden en calidad de embajador norteamericano, y comenzó una gestión que se caracterizará por una temeridad y una torpeza difícilmente equiparables en el ámbito diplomático. Braden se convertirá merced a ella en el adversario que Perón construirá como contrapunto de su propio personaje.

Los militares, cuyas divisiones internas se hacían sentir, veían con recelo el creciente poder de Perón. La gente en la calle exigiendo el retiro del régimen y la creciente popularidad de la figura de Perón eran más de lo que el minado gobierno de facto podía soportar. Terminaron pidiendo la renuncia a Perón, pero permitiendo que su discurso de despedida fuera transmitido por la radio. El romance entre Perón y las masas que "interpretaban" sus deseos ya estaba en marcha. Perón fue detenido y enviado a Martín García.

El 17 de octubre de 1945 ha quedado en el imaginario social como un verdadero partaguan. Mucho se ha discutido sobre el número, la composición y la organización de quienes llegaron a la plaza exigiendo el regreso de Perón. Pero lo cierto es que la jornada del 17 de octubre abre una nueva posibilidad para el gobierno. La resistencia civil encabezada por los partidos políticos reclamaba la delegación del poder en la Corte Suprema de Justicia, lo cual implicaba una salida deshonrosa para el gobierno surgido en 1943. El 17 de octubre ofreció al gobierno la posibilidad de ceder electoralmente —a través de elecciones limpias— el poder a un personaje construido por el propio régimen.

Perón llegó al poder en 1946 como candidato del Partido Laborista. La coalición opositora al Partido Laborista —que toma el nombre de Unión Democrática— estaba formada por el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista. Liderada por el radicalismo, no podía aceptar el ingreso de los conservadores; la década de 1930 había dejado un mal recuerdo de tal alianza. Pero poco puede hacer ese inusual agrupamiento contra el avance del peronismo, que se transformará en la década de 1940 en una fuerza electoralmente imbatible, tal cual lo fue el radicalismo décadas atrás.

El peronismo que gobernó desde 1946 hasta 1955 admite ser dividido en dos grandes etapas, que tienen su línea divisoria alrededor del año 1950. El Estado peronista se constituyó en un mediador entre los distintos sectores sociales, que se vuelve cada vez más autoritario a medida que obliga a esos sectores a tomar partido por él. Los obreros fueron el apoyo más importante de Perón, pero también contribuyeron a su sustentó sectores de la clase media involucrados en el desarrollo de una industria nacional, y algunos grupos pertenecientes a la burocracia estatal, al clero y a las fuerzas armadas. El peronismo se organizará como movimiento y no como partido, y ya desde el 17 de octubre utilizó la movilización de las masas como una táctica permanente de plebiscitarse en el marco de un simulacro de participación.

El ascenso del peronismo encontró al país en una situación favorable, ya que una vez terminada la Segunda Guerra la Argentina se quedó con un saldo comercial favorable. Con esos fondos se solventó en gran parte el fomento industrial y las mejoras dadas a los sectores populares. Alrededor de 1950 empezó una declinación de esa situación, y el distribucionismo de Perón se hizo cada vez más selectivo, exigiendo la fidelidad al régimen como contrapartida de cualquier beneficio. Digamos que hasta 1950 la creciente opresión que ejerce el Estado se ve correspondida por beneficios sociales. A partir de entonces, la opresión aumenta y los beneficios disminuyen.

503.5

57

Mientras que antes de la década de 1950 las protestas y huelgas eran apoyadas por el gobierno peronista, a partir de que la crisis de ese año, son en general declaradas ilegales y severamente reprimidas. Este giro de la actitud de Perón hacia los trabajadores fue particularmente perceptible hasta 1952, momento en que comenzó la recuperación económica. Los últimos años de Perón en el poder pasaron casi sin huelgas, sin duda producto de la represión que habían sufrido los huelguistas en los años inmediatos anteriores. El movimiento obrero, ya sin sus elementos más combativos — que habían sido domesticados o expurgados — no prestará tampoco resistencia a quienes luego desalojarán a Perón del poder.

El cambio que se operó a partir de 1950 tuvo varias razones. En primer lugar, las reservas acumuladas durante la guerra se habían agotado y los precios de los productos agrícolas y ganaderos habían sufrido mermas a nivel internacional, a la vez que la producción no había sido buena debido a importantes sequías. La industria que se había fomentado era dependiente de empujes extranjeros que le proveían insumos. La demanda había crecido y la producción no podía satisfacerla, con lo que se generó un proceso inflacionario. Los sueldos se habían visto pues desfavorecidos. Esta crisis continuó hasta 1952, año en el, como dijimos, que la situación comenzó a mejorar.

El desarrollo industrial era promovido desde el Estado; para estimular la producción, había que ampliar la demanda interna, y eso se logró merced al aumento de la capacidad adquisitiva de los sectores más bajos. Las medidas de protección industrial beneficiaron sobre todo a los pequeños y medianos industriales de las provincias, que abastecían de bienes de primera necesidad al mercado interno.

La Unión Industrial Argentina presentó un inicial rechazo a Perón, actitud que se revierte cuando se comprende que las medidas sociales en beneficio de los obreros no pueden evitarse, y que la posición de los industriales será favorecida por la promoción industrial. La Sociedad Rural, en cambio, prestó una resistencia más prolongada por cuanto las mejoras sociales para los peones rurales modificaron una estructura social tradicional, que también se vio commovida por el éxodo de mano de obra hacia las urbes. Hacia 1949 Perón modificó su posición ante el agro y esto hizo que la Sociedad Rural también cambiara su actitud hacia su régimen.

Vemos aquí que tanto las asociaciones empresarias como el movimiento sindical actuaron con una gran racionalidad. Trataban de imponer sus demandas pero cuando preveían que nada lograrían o el cálculo costo/beneficios arrojaba pérdidas para sus intereses, procuraban salir lo menos perjudi-

cados posibles. Esa racionalidad también se ve confirmada cuando más tarde restaron apoyo o directamente lo retiraron a un gobierno que mostraba síntomas inequívocos de debilitamiento.

En materia económica, la Segunda Guerra significó para la Argentina otra oportunidad desperdiciada de adquirir un mayor grado de independencia con respecto a los países desarrollados. El país estaba en una situación muy buena desde el punto de vista económico y el mundo desarrollado en crisis, pero no se aprovechó esa coyuntura. Nuevamente se ve aquí la preponderancia de lo político sobre lo económico. Ante una situación económica que planteaba alternativas políticas, no se da una respuesta política adecuada.

Perón canceló toda la deuda externa, estatizó el Banco Central, creó el IAPI (para controlar la exportación de cereales), nacionalizó empresas de servicios públicos (como teléfonos y ferrocarriles), fomentó el desarrollo de la industria y convirtió por momentos al Estado, en empresario. Empezó un proceso de desarrollo de la industria pesada a través de inversiones del Estado, pero pronto abandonó esa línea al comenzar su segundo gobierno. Habiendo sido el Estado el impulsor del desarrollo industrial, a partir de 1952 Perón dio un giro, sosteniendo que el Estado no tenía que competir con los empresarios privados; la posición del gobierno evolucionó hacia una estrategia más liberal en materia económica, tornándose también más favorable hacia los Estados Unidos.

La Segunda Guerra había permitido un desarrollo industrial que dio lugar a la formación de un sector de pequeños y medianos empresarios, estos se sentían amenazados por la posibilidad de que una vez finalizada la guerra se volviera a una política económica tradicional, que favoreciera exclusivamente a los intereses agropecuarios exportadores. Estos sectores coincidían con los militares en el reclamo de políticas proteccionistas para la industria nacional. Ellos necesitaban de la política proteccionista, y el peronismo parecía ser la única garantía a dicha política. Esta coincidencia de intereses, como lo señala Di Tella, es clave para el surgimiento del peronismo: "En esto coincidían, además, los intereses industriales con los grupos 'nacionalistas' expansionistas y de sectores militares de igual convicción. En poco tiempo, el viejo grupo dirigente industrial —posiblemente ligado al sector más antiguo y monopolístico de la industria, el que ya estaba arraigado en el país antes de la guerra— se ve reemplazado por otro nuevo, que se estructura en la Confederación General de la Industria y luego en la CGE. Evidentemente hubo algo de imposición en esto, pero la resistencia de otros sectores económicos, como la Sociedad Rural, que realmente se veían más perjudicados por la política oficial, fue mucho mayor" (1974: 105-106). Según

Di Tella el nuevo estrato industrial en conformación no tenía madurez y eso puede haber ocasionado que un grupo pequeño se constituyera en su intérprete, un intérprete que tampoco tiene necesidad de expresar en forma clara esos intereses cuya representación se arriesga.

Los fondos destinados a promover las industrias muchas veces no eran utilizados para ese fin, sino para paliar el déficit de las empresas del Estado. A su vez, se otorgaba protección a muchas industrias que pertenecían a las ramas menos dinámicas de la producción. Es achacable al gobierno de Perón el aumento desmedido de los gastos del Estado y el aumento del nivel de demanda de bienes sin un aumento paralelo de la producción. Se puso el acento en la distribución y no en el crecimiento económico.

Prebisch, en su famoso Informe elaborado después de la caída del gobierno de Perón para las Naciones Unidas, le critica el fomento de la industria liviana sin prestar atención a la segunda fase de la industrialización — crucial para la independencia económica —: el fomento de una industria pesada. Recién hacia 1950 Perón pareció decidido a terminar la primera fase del proceso de sustitución de importaciones para pasar al desarrollo de una industria pesada y la provisión de energía. En su segundo Plan Quinquenal aparecía claramente la intención de Perón de desarrollar una industria pesada y fuentes de energía propias durante su segundo período presidencial. Y fue nuevamente el Estado el que tuvo que hacerse cargo de esta tarea par cuanto los sectores empresariales no estaban en condiciones de hacerlo. La crisis que se desató en esos años fue parte de ese proceso consistente en pasar de una fase a la otra. Paso tardío por cuanto se dio en un momento en el que ya la época de bonanza económica había llegado a su fin.

## 2.2. El liderazgo de Perón

Peter Waldmann distingue tres estrategias aplicadas por el peronismo para imponer su dominación sobre la sociedad: "En lo referente a la estructura de control aplicada por el régimen... podemos distinguir tres estrategias principales, que aquí denominaremos: *subordinación, depuración y ajuste*. Por subordinación entendemos el proceso de reducción e integración que tuvo lugar entre 1944 y 1949, y en cuyo transcurso se redujo la compleja multiplicidad de agrupaciones e instituciones del país al esquema básico de organización política ya esbozada en la ideología peronista: la relación entre el gobierno y los restantes factores de poder. Luego de la ampliación del poder estatal durante la fase de subordinación, las medidas de depuración política adoptadas por Perón tendieron a asegurarle un ilimitado control po-

lítico personal de toda la maquinaria burocrática. Por ajuste se entienden, finalmente, los esfuerzos hechos por Perón a través de todos sus años de gobierno, por jerarquizar y centralizar el Ejecutivo" (1981: 61-62).

La operación de *subordinación* forma parte de un proceso que podemos encontrar muy enraizado en la historia argentina de este siglo. Paulatinamente, los distintos colectivos o agrupamientos sociales y políticos pierden autonomía para quedar dentro de la órbita de influencia del Estado. Así el Congreso, el Poder Judicial, los gobiernos provinciales, los partidos políticos, los medios de comunicación, los grupos económicos, etcétera, son subordinados al Estado, contribuyendo a esta concentración las epíforas *factuladas* que nuestro sistema otorga al presidente.

A partir de 1950, todas aquellas fuerzas sociales y políticas que se habían desviado de la representación de intereses para quedar subordinadas al Estado, empezaron a ser usadas para mantener a Perón en el poder. Por *depuración* se entiende la exigencia de fidelidad absoluta a la persona de Perón — y quizás habría que agregar aquí a su esposa —. El Estado se reemplazó por el partido, cuya cabeza indiscutible era Perón. Se montó un proceso de "peronización" de todo al país, y eran tidados de enemigos todos los que no se prestaban a mostrar fidelidad a Perón. El peronismo de esta última etapa jugaba con las schmittianas categorías de "amigo" y "enemigo". A estos últimos ningún papel les cabía en la arena política.

El *ajuste* implica la creciente jerarquización y centralización de la organización estatal. La cabeza de toda la estructura estatal era Perón y ya no quedaban partes autónomas dentro del Estado o de la sociedad. En su largo período en el poder, Perón va elaborando bases de legitimación que remplazarán a las que pretenden cierta autonomía. Desde su primer intento de acercamiento al radicalismo, no quedará sector al que el pragmatismo de Perón no se dirija en búsqueda de una mejor base para su dominación.

Es mucha la literatura existente sobre el liderazgo de Perón y su esposa. Ambos establecieron un contacto directo con las masas a través de multitudinarias manifestaciones en las cuales la masa se suponía que interactuaba con sus conductores, que no hacían sino "interpretarlas". Eva Perón tuvo una importancia decisiva en la tarea de subordinación de los sindicatos y en el manejo de las relaciones del régimen con la Iglesia. Y su mayor resistencia la encontró en el sector militar y en los círculos más conservadores, que le objetaban un pasado y un estilo que no se acomodaban a sus expectativas.

Durante la primera presidencia de Perón se dictó la ley que permitió a las mujeres votar y ser votadas. Como se sabe, el voto femenino ha sido resistido en muchos países por los sectores liberales, que lo consideran fuertemente influido por estructuras tradicionales, especialmente por la Iglesia y los líderes carismáticos. El partido peronista organizó su rama femenina conducida por la esposa del presidente. Desde allí y desde su propia Fundación, Eva Perón montó una red asistencialista que reforzaba la relación directa entre ella y sus seguidores, capaz de sortear las cada vez más férreas redes burocráticas montadas por un Estado en pleno proceso de expansión.

En cuanto a la composición de la élite política durante el gobierno peronista, Imaz nos mostrará que se produce un cambio profundo con respecto a la clase dirigente que había dominado antes de 1943. Los status adscriptos como canal de acceso al poder dejan lugar a los status adquiridos; el éxito personal se convierte en el medio privilegiado para acceder a un lugar en la estructura de poder. Pero el éxito personal debe haberse producido en alguno de los siguientes cuatro ámbitos: la plutocracia, la actividad gremial o política social, el comité o las fuerzas armadas. Como bien lo remarca Imaz, la plutocracia no es un canal de acceso original, pero lo que sí es novedoso es que el grupo plutocrata que llega al poder con el peronismo era industrial y no exportador o importador. Se trataba de personas que habían tenido participación en las asociaciones empresarias y, en general, hijos de inmigrantes.

Con respecto a la actividad gremial como fuente de reclutamiento de la élite, este sí es un rasgo original del peronismo. Nunca antes había habido gremialistas que ocuparan funciones políticas; en estos años, en cambio, varios sindicalistas asumieron los rangos de ministros y gobernadores. En cuanto a los hombres provenientes de la política partidaria, ya hemos visto que durante el gobierno de Yrigoyen habían llegado a ejercer la mayoría de los puestos de poder. El peronismo incorporó a varios políticos profesionales provenientes básicamente de las filas del radicalismo; se trataba en general de políticos de segunda línea que aportan su experiencia en el manejo de prácticas clientelares.

Por último, es obvio que la pertenencia a las fuerzas armadas como canal de reclutamiento de la élite política no es nueva. Sin embargo, en el gobierno peronista se da un aumento del número de militares en puestos de poder con respecto a anteriores gobiernos constitucionales. Imaz también destaca que por primera vez acceden a dos de los más altos cargos — presidente de la Nación y gobernador de la Provincia de Buenos Aires — oficiales que no habían llegado profesionalmente a la cumbre de su carrera militar.

Esta cuádruple base de reclutamiento de la élite daba al gobierno peronista un carácter sumamente heterogéneo. La heterogeneidad se fue esfumando a medida que se burocratizaba la estructura de poder, haciéndola depender totalmente de un Estado y un partido verticalizados. La lealtad al "conductor" reemplazaba cualquier otra fuente de reclutamiento y decidía la pertenencia o la exclusión. "Las cuatro vías de reclutamiento terminan por desaparecer y se funden en una sola. Hacia 1950, y alrededor de 1951, el grupo gobernante está delimitado y distingue claramente el "nosotros" de los otros". Ha elaborado sus propias pautas, normas y valores de grupo. Los antiguos méritos personales han cedido paso a las carreras burocráticas. La impersonalidad rige por doquier y resulta un "valor" a ser tenido en cuenta para una promoción favorable" (Imaz, 1964: 14).

### 2.3. *La polémica sobre el voto peronista*

De acuerdo con Gemmani, en la conformación del peronismo tuvieron importancia decisiva los migrantes internos recién llegados a la metrópoli, que traían consigo todo su bagaje de tradicionalismo. El desplazamiento de la clase obrera nativa y urbana por los recién llegados del interior del país produjo un cambio cultural de dilatados alcances, por cuanto los primeros eran los descendientes de los inmigrantes ultramarinos aportadores de trones modernos, mientras que los segundos representaban estructuras tradicionales. En 1946, el apoyo de estos nuevos obreros industriales al peronismo era irracional por cuanto pertenecían a estructuras tradicionales y su traslado a la ciudad los colocaba en una situación de anomia, que a la postre los hacía pasibles de ser capturados por un liderazgo populista. La concepción del peronismo como populismo se apoya sobre la base de la existencia de masas provenientes de lugares sin desarrollo industrial (o con desarrollo industrial disparado y tardío) que no pueden organizarse en partidos clasistas y terminan siendo lideradas por alguien que no proviene de ese sector ni los representa. Las respuestas a esta harto estereotipada concepción nos llevan a destacar la presencia tanto de obreros viejos cuanto nuevos en la base del peronismo, y la racionalidad del apoyo que prestan al nuevo movimiento.

A partir de un análisis ecológico de los votos peronistas de 1946, Peter Smith va a discutir la supuesta homogeneidad del voto obrero: "En las Grandes Ciudades, Perón obtuvo mayor apoyo en las grandes zonas migratorias económicamente que contenían tanto obreros industriales como migrantes internos. Hasta aquí coincidimos con la literatura corriente acerca del tema. Pero las estadísticas electorales proporcionan dos refinamientos adicionales

les: Perón tuvo éxito en distritos específicamente *industriales*, no en todos los barrios de clase trabajadora; y los 'antiguos' grupos obreros tuvieron un papel político más decisivo que los migrantes internos... En los Pueblos, Perón atrajo votos de los grupos de clase baja tanto urbanos como rurales" (1980: 74). El peronismo tiene, desde esta óptica, una base social que podríamos denominar *transestratificacional*.

Halperin Donghi, a su turno, discutirá la distinción presupuesta por Germani entre obreros viejos y nuevos, deudora de la distinción entre inmigrantes externos que son vehículo de modernización y nativos resistentes a tal proceso. Este autor criticará el esquematismo de los presupuestos de Germani, que lo llevan a suponer que la inmigración ultramarina fue el elemento civilizador por excelencia en la Argentina, mientras que el proceso de migración interna trajo a las ciudades a individuos que se rigen por pautas tradicionales. Se preguntará Halperin: "...son los inmigrantes un agente modernizador o más bien un grupo modernizado a través de su experiencia rioplatense? De la europea muchos de ellos no traen ni aun el manejo de la lengua nacional, que en su comarca de origen ni conocieron ni necesitaron aprender..." (1980: 228-229). Analizando el supuesto aporte modernizador de la inmigración italiana en particular, Halperin destaca irónicamente que las estatuas de Garibaldi y Mazzini no reciben hoy multitudes en procesión, mientras que sí siguen recibiendo a las Virgenes de Pompeya y Santa Lucía.

Ignacio Llorente mostrará que en las zonas menos desarrolladas del país el peronismo tenía alrededor de 1954 una base policlasista, mientras que en las provincias más desarrolladas es un partido obrero, clasista. Después de 1946 sectores populares no obreros se incorporan al peronismo, y lo hicieron básicamente a partir de la acción de caudillos locales provenientes de la estructura de los partidos tradicionales. Estos caudillos obviamente tenían mucho más peso en las zonas rurales, por cuanto en las zonas de mayor urbanización el movimiento obrero organizado ponía trabas a la influencia de tales personajes. Según Mora y Araujo y Llorente, "cuanto más urbanas, y modernas en sus pautas de vida, menos permeables eran a la acción de las estructuras caudillistas. Así, los empleados sindicalizados probablemente respondan menos por lealtad al caudillo local que los empleados públicos de una ciudad de provincia; los profesionales, menos que los empleados de barrio, etcétera" (1980: 48). Los caudillos políticos rehicieron su importancia en la manipulación de sectores no organizados y no obreros, que eran mayores cuanto menos desarrolladas eran las regiones (es decir, cuanto menores fueran los obreros industriales). En esas zonas no desarrolladas, el peronismo se valió de los aparatos políticos del conservadurismo.

Desde 1946 hasta 1973, el voto peronista mantuvo una pauta: "...el peronismo obtiene votos masivos en las áreas menos desarrolladas, en las zonas rurales más pobres y en las ciudades con una estructura ocupacional más tradicional; y obtiene casi invariablemente el voto de los obreros industriales, que es cuantitativamente más importante en las provincias más desarrolladas, especialmente en las áreas urbanas industriales, y en las ciudades grandes de las provincias menos desarrolladas" (Mora, Araujo y Llorente, 1980: 50).

Como se ve, a partir de los mismos datos que analizó Germani se puede responder a su tesis sobre la configuración del peronismo. Con todo, hay que decir que tanto afán de respuesta marca la importancia que ha tenido la imagen que nos transmitió Germani, que consideraba al peronismo como una forma de totalitarismo que sólo se diferencia de los europeos por la base social que lo sustenta. Una sociedad de masas que llega tardamente a la industrialización reconoce una clara división: sectores populares (obreros industriales básicamente) y sectores de clase media (empleados, pequeños comerciantes, pequeños industriales, etcétera). Cada clase define su pertenencia política sobre la base de ese clivaje: "Las populares constituyeron la base humana del totalitarismo, mientras que las de clase media (acaso con ciertas excepciones en los niveles inferiores, una fracción de los empleados y dependientes de comercio especialmente), se colocaron en la oposición o fueron neutralizadas" (Germani, 1965: 241).

Deudoras de esta interpretación germaniana son posiciones como la de Lipset, quien considera que la política laboral peronista "se combinaba con un nacionalismo extremo, un fuerte énfasis en el papel dominante del 'líder', una ideología corporativista, una demagogia populista, y una falta de respeto por el constitucionalismo y la tradición. No sorprende que Perón ganara el apoyo entusiasta de los estratos inferiores, tanto rurales como urbanos, y una fuerte oposición de la clase media, las grandes empresas y los terratenientes. En gran medida, fue apoyado en la dominación que ejercía por las fuerzas armadas, de cuyo cuerpo de oficiales provenía. En cierta medida, su régimen consistía en una coalición entre los oficiales nacionalistas de un país subdesarrollado y sus clases bajas, orientada contra los imperialistas extranjeros y los 'renegados' burgueses locales" (1977: 154). El peronismo es caracterizado por Lipset como un "fascismo de izquierda", un "nacionalismo populista anticapitalista que se dirige a los estratos bajos a la par que al ejército".

Evidentemente, a Germani le parece trágica esta incorporación de los obreros a la vida política a través de un movimiento totalitario: "La tragedia política argentina residió en el hecho de que la integración política de las

masas populares se inició bajo el signo del totalitarismo, que logró proporcionar, a su manera, cierta experiencia de participación política y social en los aspectos inmediatos y personales de la vida del trabajador, anulando al mismo tiempo la organización política y los derechos básicos que constituyen los pilares insustituibles de toda democracia genuina" (1965: 252).

Desde una posición diferente, Sebrelli juzgará también que la incorporación de las masas obreras a la acción política a través del peronismo fue una oportunidad perdida: "Partiendo de la historia del movimiento obrero anterior a 1945 es presumible que de no haber existido el peronismo, y librado a sus propias fuerzas, hubiera evolucionado hacia una forma de tradeunionismo, o socialdemocracia a la manera europea, tendencia ya visible en los años 30, con la influencia del Partido Socialista en los sindicatos y luego con la breve y abortada experiencia del Partido Laborista. El peronismo destruyó el gremialismo proletario libre en el que coincidían, a pesar de las diferencias doctrinarias, socialistas, anarquistas, sindicalistas y aun laboristas" (1992: 145). El peronismo se ve pues como una interferencia en el desarrollo de ese movimiento obrero autónomo con respecto al Estado. Contra esta posición que deprecia el papel desempeñado por los viejos obreros sindicalizados en el origen del peronismo, veremos a continuación que en la visión de Murnis y Portantiero ellos desempeñaron un rol central en ese proceso.

#### 2.4. El sindicalismo en los orígenes del peronismo

Ya hemos visto que, en la visión clásica de Germani, la industrialización tardía que se produce en el país está muy ligada al surgimiento del peronismo. En los países de industrialización temprana, los obreros tendían a identificarse con partidos de izquierda, la tardía industrialización, con su consecuente proceso de urbanización, hace que los obreros que llegaran más tarde a las ciudades no se incorporen a la vida política a través de un partido clasista típico, sino que constituyan una masa desorganizada disponible para una ideología de tipo totalitaria como la peronista. Las organizaciones obreras tradicionales, ya sean de signo anarquista, socialista o comunista, no logran asimilar a estos nuevos obreros, que establecieron una relación directa e irracional con un líder populista que no provenía de sus filas.

Según este esquema interpretativo, los obreros viejos podían definir sus intereses específicos y buscar una representación adecuada a esos intereses. Los nuevos, en cambio, no podían dar organización coherente a sus demandas, a la vez que no reclamaban autonomía. Están en una cierta situación de anomia, entre el mundo tradicional del que vienen y el moderno al

que se incorporan, provienen del campo y no tienen especialización o calificación. Mientras que los viejos obreros vinculaban sus posibilidades de ascenso a la pertenencia a organizaciones de clase (partidos y sindicatos), los nuevos perciben que su posibilidad de ascenso viene dada a través de medidas del Estado. Se identifican así con una estructura que no los representa.

Sobre las críticas de las que es pasible la distinción entre obreros "viejos" y "nuevos" ya hemos hablado aquí. Según Murnis y Portantiero, no existe gran diferencia en la posición que unos y otros tomarán de cara al peronismo, por cuanto a todos los une la pertenencia a un sector explotado a lo largo del prolongado proceso de acumulación sin distribución que tuvo lugar a partir de la década de 1930. Estos autores sostendrán que los obreros viejos nucleados en las asociaciones sindicales tradicionales tuvieron un papel destacado en la génesis del peronismo. El movimiento obrero que apoya al peronismo no puede decirse que actúe de forma irracional y pasiva sino que se integra al proyecto peronista, que puede verse como una alianza policlasista que incorpora los reclamos del movimiento obrero tradicional.

A contrapelo de la depreciación del papel que los viejos sindicatos tuvieron en el origen del peronismo, Murnis y Portantiero destacan su sustancial participación en el origen del movimiento: "Nuestra conclusión es que en el proceso de génesis del peronismo tuvieron una intensa participación dirigentes y organizaciones gremiales viejas, participación que llegó a ser fundamental a nivel de los sindicatos y de la Confederación General del Trabajo y muy importante en el Partido Laborista" (1987: 76). Esto no significa que se quite importancia a los nuevos obreros, sino que se enfatiza que no existe un corte tan profundo como el que la literatura tradicional subraya entre nuevos y viejos obreros. Murnis y Portantiero hacen notar la unidad de la clase obrera "como sector social sometido a un proceso de acumulación capitalista sin distribución del ingreso, durante el proceso de industrialización bajo control conservador que tiene lugar durante la década del 30" (1987: 76).

Desde la década de 1930 comenzó en la Argentina un crecimiento capitalista sin mejoras sociales; las demandas obreras fueron creciendo y el sindicalismo trató de darles cauce pero sin éxito. Entre 1944 y 1946 esas demandas comenzaron a tener satisfacción, pero no como respuesta al activismo sindical, sino a través de una acción directa del Estado, que comenzó a aplicar una serie de políticas redistributivas del ingreso. "Sobre esta base, la mayoría de los sindicatos —viejos y nuevos— articulan una política de alianzas con un sector del aparato del Estado, sin abdicar, durante ese proceso y por el contrario reforzando —tal como lo indica la creación del Partido Laborista— sus pretensiones tradicionales de autonomía e inde-



pendencia frente a otros sectores sociales" (Murmis y Portantiero, 1987: 76-77). Murmis y Portantiero critican a los analistas porque minimizan el papel de los sindicatos antes del peronismo y ven crecer súbitamente esa importancia a la par del surgimiento del peronismo. Ellos, en cambio, sostienen con buenos datos que la actividad sindical florecía entre 1940 y 1946. Las últimas cifras previas al surgimiento del peronismo son de 1941, e indican que en ese año operaban 356 sindicatos, con un total de 441.412. Los autores calculan que entre un 20 y un 30 % de los obreros industriales estaban sindicalizados. Este número es alto si tenemos en cuenta los obstáculos y costos que la afiliación tenía y los pocos "incentivos selectivos" que en cambio parecía ofrecer.

El apoyo sindical al peronismo tuvo pues como plataforma la estructura sindical preexistente. Recién en 1947 se dará un incremento importante de la actividad sindical. Con el peronismo en el poder, evidentemente existían ya "incentivos selectivos" para la acción sindical, a la vez que los costos habían bajado notablemente. Contrariamente a la tesis tradicional según la cual el sindicalismo tradicional, izquierdista, autónomo, terminó en 1945, con el movimiento obrero encolumado tras la figura de Perón, Murmis y Portantiero situarán recién en 1947 un quiebre al que tampoco otorgan una entidad tan fuerte: "... esa discontinuidad recién tomará forma (y sin los drásticos rasgos que se le atribuyen) hacia finales de 1947. La diferencia de cuatro años que establecemos con la fecha habitual no es secundaria sino significativa a los efectos de evaluar el peso que el sindicalismo tradicional adquirió en los orígenes del peronismo y aun el impacto que esa influencia inicial tuvo sobre todo el proceso de participación obrera en el nacionalismo popular, durante el paso de éste por el gobierno y después de su derrocamiento" (1987: 83).

Entre 1930 y 1935 el gobierno usaba las dos políticas clásicas para disciplinar la clase obrera: alta tasa de desocupación —que mantiene el "ejercicio de mano de obra desocupada" que presiona sobre los ocupados— y represión. A partir de 1935 la tasa de desocupación baja, dando mayor capacidad de negociación a los sindicatos, pero los salarios reales se estancan y hasta bajan, tornando cada vez peores las condiciones de vida de los obreros. Durante el gobierno de la Concordancia, las huelgas se suceden —sobre todo en reclamo de mejoras salariales— pero los resultados que se obtienen son muy magros si los comparamos con los costos que tienen para sus participantes.

Con Perón como Director del Departamento Nacional del Trabajo, el nuevo gobierno militar comenzó el copamiento de la estructura sindical. La vieja elite sindical traza entonces una estrategia de alianza con un grupo gubernamental, siempre resguardando su autonomía. Reclamarán partici-

pación obrera en las decisiones políticas, y tal reclamo se condensará después de los sucesos de octubre de 1945 en la fundación del Partido Laborista, partido autónomo que es expresión de la tradición reformista del viejo sindicalismo. Después de fracasar el primer intento de Perón de acercamiento al radicalismo, buscará en el movimiento sindical el apoyo que necesita para llegar al poder. El partido laborista era "... el producto de un pacto entre viejos y nuevos dirigentes, entre organizaciones tradicionales y nuevas, aunque con predominio de los primeros, determinado por el mero hecho... del mantenimiento de la influencia decisiva de las estructuras sindicales anteriores a 1945" (Murmis y Portantiero, 1987: 97).

El sindicalismo se vuelca en forma mayoritaria hacia el peronismo porque ve peligrar las reivindicaciones logradas durante la gestión de Perón en el área laboral del gobierno. Y no olvidemos que en el período 1943-1945 había subido no sólo la tasa de empleo, sino también habían mejorado los salarios reales y las condiciones sociales de los obreros. Y entre los salarios, los que más habían crecido eran los de los obreros menos calificados.

Evidentemente, luego de tantos años de distribución inequitativa del ingreso, estas nuevas políticas atraían un gran apoyo en los sectores obreros, y son atribuidas a la gestión de Perón. El peronismo no es un caso que admita ser englobado dentro del esquema clásico de populismo surgido como consecuencia de una tardía industrialización en un país periférico. El control que los sectores agrarios tuvieron sobre el desarrollo industrial desde la década de 1930 hace que los sectores dominados se sientan desplazados y se apresten a hacer alianzas. Así, sectores no obreros y obreros no conforman el clivaje de la sociedad argentina. En lugar de un enfrentamiento entre trabajadores y propietarios de los medios de producción se da "un realineamiento de fuerzas que cortó verticalmente a la sociedad y que cristalizó en nuevas formas de alianza de clases, elaboradas a partir de la coincidencia en un proyecto más amplio de política nacional, proyecto que supondría un cambio en el sistema" (Murmis y Portantiero, 1987: 109).

El peronismo implica una alianza entre un sector de las clases propietarias —principalmente industriales menos poderosas— y de la burocracia militar y política que tendía a representarlos, con clases populares, a las que les ofreció canales de participación. Esta alianza tuvo la función, por un lado, de ampliar el mercado interno de consumo —satisfaciendo así una necesidad de los industriales— y, por otro lado, legitimó la dominación que surge del golpe de 1943 que, ante el rechazo del radicalismo, encontró en la movilización popular un punto de legitimación.

Las reivindicaciones obreras acumuladas durante el proceso de industrialización por sustitución de importaciones son congruentes con el proyecto económico de un sector de industriales no poderosos. Se produjo una alianza interclasista o hasta transestratificacional que permitió al movimiento sindical mantener su autonomía durante los orígenes del peronismo. La integración del movimiento sindical al peronismo es entonces una estrategia racional de los sindicalistas, a los que se les ofrecía por esa vía la única alternativa de participación en el poder político.

Si esta autonomía se disolvió, ello ocurrió recién más tarde, con el peronismo ya consolidado en el poder. A través del otorgamiento de autonomía tarifaria al sindicato más importante de cada rama de la economía se inició un proceso de monopolio que culminaría con la subordinación del poder sindical al Estado. Perón, controlando plenamente el aparato del Estado, disolvió el Partido Laborista y tendió a liquidar la autonomía del movimiento sindical, integrando los sindicatos al Estado. El líder no toleró los intentos de conservar la autonomía de los viejos sindicatos. Hizo uso de la fuerza coercitiva del Estado para someterlos, probablemente porque sabía que la situación de guerra le daba recursos que, a través de una política redistributiva, le permitía ganar el apoyo de los sindicatos. Pero avizoraba que una vez superado ese estadio los sindicatos que lo apoyaban se le volverían en contra. Por eso aprovechó la época de bonanza económica para someter a los sindicatos y eliminar los elementos que podían reclamar autonomía. Perón sometió al movimiento obrero y a su vez estableció una relación directa líder-masa que pasaba por encima de los líderes sindicales. Lo logró solo en parte por cuanto una vez que el peronismo perdió la presidencia, el sindicalismo sin embargo lo sobrevivió como su columna vertebral.

## Capítulo 9

### De la república inestable a la república democrática

Nos ocuparemos en este capítulo del complejo y disímil periodo histórico que va desde la caída de Perón hasta la actualidad.

Luego de una variada guerra de golpes militares y ensayos electorales, llegaremos hasta la restauración democrática en la década de 1980, con la primera alternancia entre los principales partidos del sistema político argentino.

#### 1. La república inestable

##### 1.1. La caída del peronismo y el proceso de "desperonización"

La caída de Perón no será la primera ni la última que se producirá poco tiempo después de una elección ganada con holgura. Como dijimos, alrededor de 1950 el rumbo de la política económica del peronismo sufrió un tal vez anunciado, pero no por ello menos brusco, viraje. El golpe de timón terminó la relación que Perón había establecido con sus principales fuentes de apoyo: los sindicatos y los militares. Pero también en sus últimos años en el gobierno, Perón sumó un nuevo de frente de conflicto, acaso con el único factor de poder que reservaba cierta cuota de autonomía: la Iglesia.

Con respecto a los militares, ya hemos visto la importancia que tuvieron en el ascenso de Perón. Una vez en el poder, satisfizo muchas demandas de las fuerzas armadas: mejoró los sueldos, aumentó el presupuesto para la compra de armamento, incrementó los cuadros y apoyó la producción nacional de armamento. Además, Perón mostró gran habilidad en el aprovechamiento y capitalización de las disputas internas de cada arma y las rivalidades existentes entre las distintas fuerzas. Buena prueba de ello fue el apoyo de Perón al ejército en su ya por entonces tradicional rivalidad con la marina, avivada durante el gobierno peronista; Perón se inclinó abiertamente por el ejército, ya que la marina desde un principio le había negado su apoyo. A su vez, al interior del ejército, favoreció a la infantería, que era su agrupamiento de procedencia. Se apoyó en los suboficiales dándole mayor influencia en la esfera militar, y ganándose así su simpatía. Durante la pri-

503

mera etapa de su largo gobierno, Perón supo mantener a los militares fuera de la actividad política, pero a partir de 1950 comenzaron a reclamar mayor participación en las decisiones, mientras que el presidente no sólo no les daría lo que piden, sino que además les exigirá cada vez más fidelidad. A medida que la crisis se agrava, el presupuesto militar irá disminuyendo y los militares perderán cada vez más autonomía económica y política.

El ejército empieza a conspirar, junto con los partidos políticos que ven al peronismo como una ilegítima dictadura a la que no deben obediencia alguna. La alternativa para resistir a unas fuerzas armadas movilizadas podían ser las milicias obreras, pero tal posibilidad es desestimada por Perón que, tal vez por su condición militar, no veía con buenos ojos la formación de milicias civiles para combatir a las fuerzas armadas. Por otra parte, la guerra civil que podía desatarse, con el clima de odio gestado durante largos años, hacía imprevisibles las consecuencias. Perón apelaría a la estrategia del "renunciamento", ampliamente explotada por el régimen que había montado, revisando su decisión cuando el "pueblo" lo pedía. Pero los sindicatos, decepcionados por la política de los últimos años, ya no se mostrarían dispuestos al sacrificio por un régimen que les pedía mucho y les daba poco a cambio.

Además de los problemas con los militares y el movimiento obrero organizado, ya dijimos que Perón emprendió una batalla contra la Iglesia que a la postre logrará unificar a sus adversarios. Presumiblemente, Perón tenía la formación de un partido democrata cristiano al amparo de la Iglesia, considerando una traición a su persona ese eventual intento. También se conjuraba contra el gobierno, la Iglesia y los sindicatos. Lo cierto es que el empuje de Perón contra la autonomía de los factores de poder que en otro momento le habían sido tan fáciles de copar, ahora se le tomaba una misión imposible. Pasado el primer impulso de avasallamiento, pretendió volver atrás, pero ya era demasiado tarde. Las órdenes que no se cumplen minan la autoridad del régimen. La falta de visibilidad con respecto a su capacidad de imponer su voluntad no hizo sino dar la señal que sus adversarios impacientemente estaban esperando; el régimen fue definitivamente tildado de autoritario, y sólo restaba acabar con él.

En septiembre de 1955 la llamada "revolución libertadora" se arrogó la misión de "liberar" al país de un gobierno tiránico. El régimen parecía agotado; sus bases de sustentación habían sido minadas, y ello quedó corroborado por la actitud que los distintos actores tomaron ante los sucesos de 1955. Así lo señala Rouquié: "La facilidad de la victoria y la debilidad de un régimen que se derrumbó casi sin combatir, después de un arduo y fríasorío,

confunden y asombran. Quedándonos en el plano estrictamente militar... podemos señalar sin embargo que aparte de la marina el levantamiento estaba atomizado y tenía alcances limitados. No afectó a la Capital Federal y sus alrededores, es decir a los centros neurálgicos del país. Esta sublevación, constituida por una serie de pronunciamientos de oficiales superiores no siempre en actividad, no tiene nada que ver con un golpe de estado institucional en que el aparato militar asume el poder desde el interior bajo la conducción de los comandantes en jefe. Los suboficiales del ejército eran peronistas en su inmensa mayoría y la infantería era de una lealtad casi sin fallas, pero muchos cuadros estaban a la espera de los acontecimientos, indecisos. Esto nos da la clave del problema. Pocas unidades se rebelaron, el número de generales facciosos era ínfimo, sin embargo, los "legalistas" no querían aplastar a los rebeldes, no los aprobaban, pero los comprendían. La represión, por lo tanto, se hizo sin convicción" (1998, Tomo II, 121).

La época que sigue a la caída de Perón es particularmente compleja por cuanto se pone en marcha lo que con gran tino se ha llamado "el juego imposible". Esta vez le toca al peronismo el papel de gran proscrito. La diferencia radica aquí en que este movimiento, que también se ve mitificado de alguna manera como lo fue el radicalismo en la década de 1930, tenía un líder que lo unificaba. Más tarde, y ya con la posibilidad cierta de retorno al poder, ese liderazgo va a ser severamente cuestionado, pero en principio hay una figura que da homogeneidad —homogeneidad que no existe en el plano ideológico— a ese conjunto de personas que se identifican como peronistas. A diferencia del peronismo, el resto de los sujetos políticos va a presentar graves fragmentaciones. El radicalismo presentaba quietes y los militares tenían también conflictos internos difíciles de resolver. Muchas de esas ghetos se iban abriendo por la actitud que los actores adoptaban ante el peronismo. El peronismo, y más aún Perón como personaje, es el gran ausente cuya sombra acosa en cada rincón a quienes empeñosamente pretenden jugar un juego imposible.

Los actores civiles y militares no reconocían una división clara en sus posturas ideológicas. El peronismo y el anti-peronismo operaban como el gran divisor de la política argentina de este tiempo. Y si bien hay estrategias montadas por uno y otro bando en conjunto, muchas veces los sectores que los conforman se agrupan en inverosímiles alianzas. Toda la actividad política y la trama de la sociedad en sí se enmarcan en un contexto que se empeña en demostrar una vez más que no hay posibilidades de fundar una legitimación sobre la fuerza o sobre la exclusión. Durante todo este periodo no tienen éxito los sucesivos intentos de dar legitimación a los regímenes

503, B

61

que se suceden. La política y la sociedad parecen distantes, a pesar de estar en contacto permanente. La legitimidad no llega y los actores políticos se impacientan, y suman errores tras errores. La política es el campo de una lucha ideológica donde los discursos se someten a disímiles hermenéuticas, y la "otredad" se cataloga en clave de amigo/enemigo.

El largo período que va desde 1955 hasta 1973 tiene muchas presencias y una sola ausencia. El peronismo fluctuará entre el anhelo de su conductor exiliado y los más variados intentos de organizar un "peronismo sin Perón", siempre bloqueados por el más presente de los líderes ausentes. La sociedad sufre un lento proceso de bipolarización con el peronismo en el poder, su proscripción, en lugar de atenuar la férrea separación de bandos, parece acentuarla. Los bandos pueden cambiar su conformación, mutar sus ideologías, tratar de seducir a sus hasta ayer enemigos, pero lo que nunca parece cesar es la existencia misma de los bandos en pugna. Los actores políticos no se percibirán ya como contendientes que aceptan ciertas reglas de juego, sino como enemigos cuya existencia depende de la desaparición del contrario. La democracia no es el único juego posible, sino apenas uno más que se jugará de tanto en tanto, por períodos limitados y con implacables vigilantes dispuestos a terminar el juego apenas juzguen que se desvía de sus invariablemente desacertados pronósticos.

La política definida como un virtual campo de batalla atrajo hacia sí los problemas sectoriales de cada uno de los factores de poder. Los conflictos internos de los sindicatos, las fuerzas armadas, las asociaciones empresariales, no se resolvían en el marco del sector al que correspondían, sino que se traían a la arena política y se planteaban en términos de contradicciones siempre insolubles con el resto de los actores, también fragmentados y sumidos en mil problemas internos. Quienes habían estado prestos a ver crisis terminales en todos lados ahora tenían buenos motivos para su inveterado pesimismo. Aquí terminaremos este período en 1973, pero en realidad a partir de ese año se abrirá un cauce que radicalizará las fuerzas en juego y las llevará a una lucha abierta que solo podría terminar la democratización y pacificación que abarcará en la década de 1980 a casi toda la América latina.

En la república inestable hubo mil intentos de conciliación, pero ni los que se postulaban como conciliadores parecían creer en los beneficios que tal conciliación podía traerles. El primer presidente surgido de la Revolución Libertadora, Eduardo Lonardi, intentó la primera de esas conciliaciones: lo hizo tratando de aunar fuerzas que se demostraron incapaces de convivir. Según su diagnóstico, los males legados por el peronismo eran la inflación, la burocratización y la corrupción; y los remedios eran morales. La campaña

moralizadora de Lonardi incluía una desperonización de los sindicatos, cuyo apoyo pretendía hacer suyo. Con el ya gastado lema "ni vencedores ni vencidos", Lonardi intenta una imposible conciliación y ocupar un lugar que evidentemente no estaba hecho a su medida.

Entre muchos otros, los militares que se habían sentido perjudicados por el peronismo, si se consideraban vencedores; y lógicamente vieron con malos ojos el intento conciliador de Lonardi. Especialmente los marinos estaban deseosos de una verdadera "restauración liberal" que desperonizará al país desde sus raíces. Esa percepción era compartida por muchos de los dirigentes de los partidos políticos opositores al peronismo, que pretendían el desmantelamiento del aparato estatal que había servido al depuesto líder. Contra esta tendencia chocaban los intentos de Lonardi de fundar o refundar un Estado corporativo.

La experiencia de Lonardi en el gobierno pronto llegará a su fin. Lo reemplazó Pedro Aramburu, que se mostró decidido a combatir al peronismo sobreviviente, a "desperonizar" el país, a borrar todos los restos de aquella cultura política engendrada durante los años peronistas. El partido, los sindicatos, la CGT, la CGE y los medios de comunicación ligados al peronismo fueron virtualmente desmantelados. Muchos de sus dirigentes fueron encarcelados; Perón era para estos nuevos "liberales" equiparable a lo que Rosas había sido para los liberales del siglo anterior. Era ésta una restauración vestida de liberalismo. Mientras prometía la democratización en cuanto las condiciones fueran propicias, el nuevo gobierno emprendía una política económica claramente favorable a los postergados intereses del agro y daba marcha atrás en las ya débiles actitudes industrializadoras peronistas.

Pero la resistencia no tardó en hacerse sentir. Las huelgas, las movilizaciones, las conspiraciones, los sabotajes, aunque severamente reprimidos, dejaron a la vista de todos a un movimiento obrero que tenía en su memoria la huella de haber logrado imponer sus reivindicaciones. El gobierno, siempre esgrimiendo la legitimidad de una lucha contra los restos de una dictadura que había quedado enquistada en la cultura política del país, reacciona con una violencia que rompe con las pocas reglas del juego sobrevivientes. Los fusilamientos de 38 civiles y militares luego del intento de golpe de junio de 1956 marcó un quiebre; militares y sindicalistas habían conspirado contra el gobierno, pero lo más molesto para los militares en el poder era que en la rebelión se levantan los suboficiales contra los oficiales. Esta subversión de los mandos muestra una inestabilidad que hace crecer la espiral de violencia, y llevará a los militares a aplastar todo intento de insubordinación.

La llamada "operación masacre" radicalizó la bipolaridad de la vida argentina. Los ejecutados harían imposible la reconciliación de los sectores peronistas con los antiperonistas. Entre los primeros se va consolidando el mito del líder ausente y eran los militares en ese entonces los enemigos que impedían tal retorno. Las fuerzas armadas no salieron intactas de este proceso, en el cual las diferencias se agudizaron y se cristalizaron los bandos. Los cuadros militares estaban definitivamente politizados y muchos eran los militares que ahora compartían su tarea profesional con la de negocios a la que los había llevado la misión de investigación y expropiación de bienes emprendida por la Revolución Libertadora.

Con respecto a la composición de la élite gobernante de la Revolución Libertadora, hubo un cambio importante con respecto al período peronista. Así lo establece Imaz: "La nueva clase política se perfila a partir de 1956. Ese año, el 42 por ciento de las más altas posiciones institucionalizadas estaba cubierto por militares, y el 24 por ciento, por empresarios. Esta combinación de militares y empresarios dura todo el período revolucionario, hasta que Frondizi asume el poder" (1964: 16). Hasta 1958 los canales de ascenso de la nueva élite eran dos: las fuerzas armadas y los grupos dirigentes de empresas. Si bien ya había empresarios en las anteriores élites, los que ocupan puestos de poder en este período tienen otro signo: "...los líderes políticos anteriores a 1943 eran asesores letrados de empresas extranjeras; los industriales peronistas del 46 más que verdaderos empresarios — en la forma contemporánea — eran 'patrones' a la antigua o 'capitanes de industria', en cambio, los líderes del 56 actuaban simultáneamente en los directorios de varias grandes sociedades anónimas... Por primera vez entonces aparecían empresarios corporativos en los elencos dirigentes de la política, a tono con los cambios estructurales, y los que se venían produciendo en la composición del empresariado" (Imaz, 1964: 16).

Un porcentaje tan alto de militares en posiciones de poder parecería en principio proporcionar homogeneidad a la élite gobernante, pero como bien lo apunta Imaz, esto no era así por cuanto las fuerzas armadas habían sufrido un proceso de desinstitutionalización que les había restado cohesión. Únicamente se cohesionaban ante lo que percibían como agresión externa, es sabido que a mayor grado de agresión externa le corresponde un mayor grado de cohesión interna. Y las fuerzas armadas percibían como enemigo externo al peronismo; por eso lograban sus pocos momentos de armonía cuando el peronismo daba señales de vida.

En cuanto a la extracción social de la élite, Imaz señala que la mayoría de los puestos de poder está ocupado por argentinos de segunda genera-

ción. El porcentaje de miembros de las familias tradicionales no difiere del existente en el período peronista, tanto con el peronismo cuanto con la Revolución Libertadora en el poder ese porcentaje se mantiene entre el 10 y el 15 por ciento.

### *1.2. Ensayos electorales y golpes militares*

Después de un tiempo de conflictos internos y externos, de sufrir la acción de un Estado que ejercía cada vez más poder con menos autoridad y de una reestructuración económica cuyos beneficios brillaban por su ausencia, la salida electoral aparecía como la única posible, pero quedaba una incógnita: cuál sería el destino de aquel amplio electorado que había dado el triunfo a Perón pocos años atrás. El incierto comportamiento del electorado peronista no solo causaba inquietud en el gobierno, sino que conmovía a los partidos políticos, que fluctuaban entre dos opciones: legitimar su lucha contra el peronismo y unificarse en un frente antiperonista, o competir en la tarea de seducir al huérfano electorado peronista.

Evidentemente, con el peronismo proscripto, el único partido que podía hacerse con el triunfo era el radical. Pero la posición ante el peronismo causaría una fractura en el radicalismo. La UCR del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, presentaba una oposición decidida al peronismo, y se mostraba predispuesta a una alianza con todos los sectores antiperonistas, incluyendo al gobierno. La UCR Intransigente, bajo la conducción de Arturo Frondizi, intentaría, en cambio, seducir al electorado peronista; esta actitud rompería la posibilidad de armar un frente antiperonista homogéneo. Está visto que en la historia política argentina, los nombres rara vez coinciden con los significados. Mientras tanto, Perón seguía operando a la distancia, el mito peronista estaba en marcha y seguía su curso.

En las primeras elecciones, que tuvieron lugar en 1957 para reformar la Constitución, Perón ordenó a su electorado votar en blanco. Y el voto en blanco fue masivo: hubo un 24,3 % de votos en blanco, un 24,7 % por ciento de votos para la UCRP y un 21,7 % para la UCR. Se asegura así la vuelta a la Constitución de 1853, pero quedaba claro que para los no peronistas había dos estrategias por seguir: unirse o captar el voto de los peronistas. Ambas opciones presentaban escenarios difíciles. Frondizi optó, como ya dijimos, por el intento de captar el voto peronista, entendiendo quizás que sin el peronismo no se podía gobernar sino desde la fuerza. Perón esta vez ordenó a sus partidarios votar por Frondizi, a cambio de la promesa de levantar la veda electoral al peronismo. Y así la fórmula Intransigente obtuvo

el 44 % de los votos, seguida por la UCRP con el 28 %. Además del voto peronista, el nuevo presidente había logrado integrar a su proyecto a sectores hasta ese momento alejados del peronismo, como algunos militantes de izquierda y jóvenes de las clases medias.

Si nos guiamos por los números, veremos que Frondizi llegó al poder con un porcentaje de votos que parece no dejar dudas con respecto a su legitimidad. Sin embargo, sabemos que la composición de su electorado es tan compleja cuanto volátil. Frondizi intentará, como algunos regimenes militares posteriores lo harían, una legitimación por el ejercicio a través de un proyecto "modernizador". Este proyecto tenía su base económica en el desarrollismo, que aconsejaba una vez más emprender un proceso de industrialización por sustitución de importaciones en una secuencia temporal que había que respetar. Pero por más que las condiciones económicas mejoraran, los conflictos sociales no dejaban respiro al gobierno. Perón y los militares eran factores de presión incontrolables. El gobierno nadaba entre tribunes y pronto pagaría el precio de tan audaz aventura.

Como recién decíamos, Frondizi emprende una campaña industrializadora. Según su diagnóstico, la única manera de romper la dependencia económica del país era desarrollar una industria nacional que produjera aquellos bienes que hasta ese momento se importaban. Para ello era necesaria una alianza entre los obreros y los industriales, alianza que estaba lejos de ser factible. Cada medida que se tomaba lograba el apoyo de un sector, pero, a cambio, enfurecía al otro sector en pugna. Así ocurrió con dos de las políticas que más atención concitan: las concesiones petroleras y la ley sobre enseñanza libre. Ambas ganan pronto adeptos y detractores.

Con quienes estuvieran dispuestos a prestarle apoyo, y en contra de quienes no lo hicieran, Frondizi operaba febrilmente en el estrecho espacio de acción que le había sido concedido. Trataba de ganarse el apoyo de los sindicatos, los obreros y la Iglesia; estaba claro que la política argentina no pasaba por los partidos políticos. Esto es lógico con el principal partido en la sombra, y con un presidente llegado al poder a través de una serie de acuerdos apresurados. En realidad, hacia tiempo que los partidos políticos no producían candidatos, sino que eran los líderes los que producían partidos políticos.

Con respecto a la composición de la élite gobernante que llega al poder con Frondizi, los militares obviamente desaparecen del elenco gobernante, aunque mantienen posiciones en calidad de "líderes informales". Vuelven los políticos profesionales; la carrera en el partido queda legitimada nuevamente como canal de ascenso. "Los políticos de partido", que representa-

ban el 23 por ciento de los más altos cargos en 1936, que eran el 38 por ciento en el elenco de 1941, desaparecidos prácticamente durante el peronismo, alcanzan de nuevo el 36 por ciento en 1961" (Imaz, 1964: 17). De todos modos, la élite que gobierna con Frondizi no presenta un alto grado de cohesión. Políticos profesionales, empresarios y militares responden cada uno a facciones dentro de sus sectores y muchas veces están en discordia con sus pares en la élite.

Perón rompe públicamente un pacto que en secreto había anudado con Frondizi, dejándolo solo con su suerte, rodeado de militares que llevaban a la escena política sus intereses corporativos a través de los ya cotidianos "planteos". La revolución cubana en el contexto internacional de una guerra fría fue un nuevo ingrediente que reflató el fantasma del "peligro rojo" entre los militares. Frondizi no sería el primero ni el último acusado de co-munista por la derecha y de imperialista por la izquierda. Además, las luchas en el interior de las fuerzas armadas por participación en el presupuesto y asignación de misiones militares fueron una constante desde 1955, y esas luchas eran trasladadas inmediatamente al ámbito político.

La caída de Frondizi, sin que llegara a cumplir cuatro años en el poder, obedeció a motivos diversos, pero sin duda el detonante fue la permisividad dada en 1962 al peronismo para que presentara candidatos por primera vez desde 1955 a elecciones legislativas y de gobernadores. Un peronismo en el cual los ecos de disputas internas ya se hacían sentir triunfó en varios distritos, entre ellos el más importante: la provincia de Buenos Aires. Si bien Frondizi intentó rápidamente revertir la crisis surgida por presiones de los sectores militares más antiperonistas, aplicando el conocido remedio de la intervención federal, ya era demasiado tarde. Su caída era inminente.

Fue entonces cuando Frondizi y otros políticos montaron una estrategia contra reloj tendiente a evitar que el poder cayera en manos militares. Vienen con la suerte estaba echada, se puso en marcha la ley de acefalía para que el mando recayera en el presidente del Senado, José María Guido. El operador que hizo posible esta salida fue el Ministro de Defensa, Rodolfo Martínez, y en la operación de salvataje de un resto de legalidad colabóran los tres poderes constitucionales. Los detalles de tal operativo dejan en claro cuán pequeño era el margen de maniobras con el que los civiles contaban en aquel confuso escenario político.

En el ejército operaban dos grupos: azules y colorados, los últimos con una posición dura con respecto al peronismo. Después de un primer momento en el que los colorados parecían haber impuesto su posición dura que aseguraba

la continuidad de la exclusión del peronismo, el conflicto estalló y los azules demostraron su mayor capacidad, bajo el liderazgo de Juan Carlos Onganía. Los azules insistirían con la incorporación del neoperonismo, aquel sector que propugnaba un peronismo sin Perón, y el liderazgo de Onganía garantizaba la no intervención directa de los militares en la política. Mientras tanto, Guido no parecía más que un espectador de este enrarecido clima.

Se llamó a elecciones en las que el peronismo votó en blanco después del fracaso del intento de reflojamiento de un frente con la UCR1. En 1963 causó sorpresa el triunfo del candidato de la UCRP, Arturo Illia, con poco más del 20 % de los votos. Illia era un político "afable y conciliador, de honradez intachable, y con una concepción muy personal del 'tiempo político'; el punto débil de su gobierno consistió en quedar encerrado en las estructuras partidarias, gobernar sólo con el partido, estar demasiado pendiente de sus problemas internos y, como consecuencia de todo esto, no lograr líneas eficaces de comunicación con el resto de la sociedad" (Floria y García Belsunce, 1992: 919). El nuevo presidente tenía dos frentes opositores: el peronismo y los militares.

El peronismo se debatía en su lucha interna, que tenía su más patente expresión en el sindicalismo. El sector neoperonista conducido por Augusto Vandor luchaba con el peronismo ortodoxo y cada bando endurecía su posición ante un gobierno expectante. Vandor, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, representaba un nuevo tipo de sindicalismo, más presto a negociar con los empresarios que a emprender costosas reivindicaciones salariales. Sus alianzas se hacían dentro del marco de una estrategia secesionista con respecto al líder ausente y gran proscripto. Perón y Vandor midieron sus fuerzas en el intento de regreso de Perón y en el posterior envío de su esposa para apoyar a su candidato en las elecciones provinciales de Mendoza. El resultado de esas elecciones dejó ganancioso a Perón y mostró que el poder de Vandor en el interior del sindicalismo no se traducía en votos.

El sector azul del ejército, mientras tanto, veía con ojos cada vez más críticos al gobierno; la actitud democrática y conciliadora bien encarnada por Illia era desafiada en clave de pasividad e inoperancia. Los sectores neoperonistas comprendían luego de la derrota en Mendoza que el peronismo sin Perón ya no sería posible. Los militares y los sindicatos, por razones distintas, presionaron sobre el gobierno, y esa presión desencadenó un golpe militar en 1966.

El gobierno radical no había generado cambios sustanciales, más allá de saldar su deuda con los Intransigentes anulando las concesiones petroleras. Dedicado a la administración correcta y a devolver el poder a la política

partidaria, el gobierno de Illia se diferencia de sus antecesores por una pasividad que más que defecto pudo ser un respiro en tan agitado proceso. Pero en la vertiginosa década de 1960, la estrategia de la pasividad era fácilmente confundible con pecaminosa inmovilidad.

En 1963, y mientras dura el gobierno de Illia, el canal de reclutamiento fundamental de la élite gobernante era el partido. "Aquí ya no queda duda: el canal de reclutamiento ha sido el partido. El partido ganancioso en las elecciones. Y todo los componentes del equipo gobernante —con la lógica salvedad de los secretarios militares— sor-hombres de partido... El 'partido', pues, reaparecía como el gran instrumento de selección, y con una importancia y magnitud como en ningún otro de los períodos analizados. Y las carreras previas que exhibían los hombres de gobierno —excepción hecha de los ya citadas secretarios económicos— eran carreras políticas" (Imaz, 1964: 18-19). Hay que aclarar que los mencionados secretarios económicos si bien eran hombres del partido, no eran políticos profesionales.

En torno a la figura del general Onganía, cuyo retiro de la comandancia del Ejército durante la presidencia de Illia puede ser visto como la señal de agonía del gobierno democrático, comenzó a articularse un movimiento de apoyo que atrajo a gente proveniente de sectores muy diversos. Un líder proveniente del ejército con amplio apoyo popular había sido una receta exitosa en la historia argentina. Si los intentos de organizar un peronismo sin Perón desde el gobierno habían fracasado, quizás era hora de buscar un nuevo líder que lo reemplazara. Los medios de comunicación habían sido hasta ese momento agentes importantes utilizados eficazmente ya desde el oficialismo, ya desde la oposición. Pero hay que remarcar que quizás nunca antes como durante el gobierno de Illia, los medios se manifestaron tan abiertamente en contra de un gobierno legalmente constituido, preparando un clima favorable para un golpe de Estado.

Así nos lo dice Potash: "Los ocho meses transcurridos entre el retiro del general Onganía en noviembre de 1965 y el golpe militar que tuvo lugar el siguiente mes de junio constituyeron un período inusual en la historia argentina. Esta era la quinta vez desde 1930 que las Fuerzas Armadas derrocaron a un Presidente electo, pero mientras los golpes anteriores se habían caracterizado por un alto grado de improvisación o en algunos casos de confusión a último momento en cuanto a quien asumiría el control, el derrocamiento de 1966 del Presidente Illia fue la culminación de un prolongado período de discusión y planificación. Pocos argentinos pudieron haber sido tomados por sorpresa ya fuera por la acción de las Fuerzas Armadas o por la instalación del general (R) Juan Carlos Onganía para encabezar el go-

bierno suecés. En realidad, desde mediados de 1965 ciertos periódicos se habían comprometido en una campaña deliberada para desacreditar a la administración del Partido Radical y alentar a los militares a que la eliminaran. En un artículo tras otro, el popular semanario *Confirmado*, recién fundado, trataba de convencer a sus lectores de que un golpe era inevitable y de que la única pregunta auténtica era cuándo se llevaría a cabo. Otro semanario, *Primera Plana*, llegó al extremo de realizar una encuesta de opinión sobre hasta dónde era deseable un golpe, publicando los resultados el mismo día de la toma del poder militar" (1994: 228).

Como prueba de estas afirmaciones, transcribimos a continuación un editorial de *Confirmado*, publicado poco después del golpe de 1966: "La Argentina trivial apenas sintió el golpe que separó un miembro sobreviviente del cuerpo nacional. Koestler escribió alguna vez la historia de un verdugo que cortaba cabezas con tal perfección, que quedaban en su lugar, y a primera vista parecía que seguían viviendo. Cierta vez, el golpe fue tan seco, justo y aséptico, que la cabeza preguntó si realmente estaba cortada. El verdugo dijo algo como 'Inclínese, por favor', y la cabeza cayó... El gobierno radical fue, por decirlo así, 'invitado' a inclinarse, y comprobó que nada lo unía ya al cuerpo social, como no fuera un 'mandamiento formal que carecía desde hacía mucho tiempo del soporte indispensable que se llama *legitimidad*'. Esta legitimidad no implica una valoración moral del sistema preexistente, sino la comprobación de un estado sociológico y político que, en una cierta medida, se impone a las voluntades humanas: En el orden moral, las justificaciones de situaciones como éstas se deben pedir a otros principios, sin descuidar, sin embargo, la referencia constante e intrínseca a la realidad sociológica y política... El 28 de junio prodigioso, pues, una revolución aseptica, fría, racional, alternativa que los análisis políticos previos contaban como posible. Una revolución diferente de otras acontecidas en la que las Fuerzas Armadas tomaron el poder como una suerte de objetivo militar".

El golpe era pues juzgado inevitable por los propios medios de comunicación que contribuyeron a formar un estereotipo del gobierno legalmente legitimado. Está claro que el golpe de 1966 no viene a demostrar la existencia de un vacío de poder, como se vociferaba desde la oposición, sino un vacío de institucionalidad y la falta de respeto de los sectores más diversos al juego democrático. Ante la falta de legitimidad de origen que evidentemente tenía el gobierno proveniente del golpe, su titular, Onganía, intentará una ya gastada estrategia de legitimación por el ejercicio a través de una propuesta "modernizadora". Otra vez se juzgará que la solución a los males políticos de la Argentina pasa por cambios económicos.

El golpe, pretensiosamente llamado "revolución", tuvo la bendición de amplios sectores de la población. Onganía era un hombre de un gran prestigio tanto dentro de las fuerzas armadas cuanto dentro de otros sectores ansiosos de un régimen autoritario burocrático que prometiera una economía liberal y un proyecto industrializador. El liberalismo económico y el antiliberalismo político se ven complementados con una marcada influencia de sectores nacionalistas católicos. Y todo ello enmarcado en un régimen corporativo en el cual las demandas de políticas públicas son generadas desde el Estado. Pero la estructura social que asumió sin problemas el régimen autoritario burocrático no pareció tan bien dispuesta con respecto al intento de corporativizar la actividad política. Después de todo, subsistía una cultura política en la cual los partidos políticos habían sido los sujetos políticos legitimados; dicha cultura se negaba ahora a ser borrada de un plumazo.

El proyecto de industrialización fue muy costoso para los asalariados — fustigados por el intento de bajar los costos de producción —, el sector agrícola y las pequeñas y medianas empresas — que se vieron afectadas por la apertura de la economía —. Con tan altos costos y sectores tan vastos perjudicados, el autoritarismo del gobierno debió incrementarse para sofocar las protestas. Así y todo, la violencia continuaba su escalada, fomentada por un gobierno que no hacía sino profundizar las divergencias. La "noche de los bastones largos", el "cordobazo", el asesinato de Yandor, el secuestro y asesinato de Aramburu, no fueron sino las expresiones más notables de esa escalada de violencia que a esta altura parecía ser una estrategia de la que no se privaba ninguno de los actores involucrados en un juego político ya despojado de reglas que prestaran un mínimo de legitimidad.

Las fuerzas armadas, molestas por ocupar el rol policíaco de represión exigido por un gobierno que no las consultaba y ganaba cada vez más enemigos, destituyeron a Onganía en junio de 1970. En su reemplazo fue designado Roberto Levingston, pero reservándose esta vez la Junta de Comandantes el derecho de ser consultada antes de tomar decisiones políticas importantes. Se quería evitar así una nueva conducción con delirios autónomos como la de Onganía. Era un gobierno militar; los militares entendieron que si les cabía la responsabilidad por sus frutos, también tenían el derecho de participar en la toma de decisiones.

Levingston ocupó la dirección del Poder Ejecutivo por nueve meses. Si Onganía había soñado con una larga presidencia, tal expectativa ya no le cabe

1. Editorial de la Revista *Criterio* del 14 de julio de 1966. Botana, Natalio, Braun, Rafael y Floria, *Cuadros. El Régimen Militar. 1966-1973*. Editores La Bastilla, Buenos Aires, 1973: 14-15.

003.5



a su sucesor. Preocupado por restablecer la imagen de los militares ante la sociedad civil de cara a una salida electoral que ya se juzga necesaria, se abocará ante todo a cambiar el rumbo económico para así atemperar los candentes ánimos. La línea económica establecida por Adalbert Krieger Vasena durante la presidencia de Onganía sufrió un cambio de rumbo de la mano del nuevo ministro de economía, Aldo Ferrer. Se comenzó a insinuar una política de fomento a la industria nacional, tentativa de la apertura hacia el exterior que había caracterizado a la política de Onganía. Mientras tanto, la vida partidaria parecía cobrar nuevos bríos cuando más se intentaba sofocarla.

La corta experiencia presidencial de Levingston pronto dio paso a la de Alejandro Lanusse, con la que no existía ya dudas sobre la necesidad de transitar nuevamente el camino electoral. Con la colaboración del dirigente radical Arturo Mor Roig se revivió la estructura partidaria, con la esperanza de que la polarización y la violencia tendrían fin si se permitía la expresión libre de la población a través de las urnas. Con una línea económica liberal, al gobierno de Lanusse le tocó capear las crisis política y económica que le habían legado sus antecesores. No era tiempo de grandes proyectos para ganar una esquivada legitimidad, sino de regular el traspaso del poder a través del llamado Gran Acuerdo Nacional.

Mientras tanto, la crisis dentro del peronismo no hacía sino agravarse y Perón alentaba a los distintos sectores con un discurso que tenía tantas interpretaciones cuanto intérpretes había disponibles dentro de sus seguidores. La distancia lo ayudaba a beneficiarse con los fracasos de sus opositores, delegando la responsabilidad de los fracasos del bando propio en sus personeros. El paso de los años había mutado la base electoral del peronismo. Sectores antes muy distantes como la izquierda o los estudiantes, ahora veían en él la única salida a todos los males del país. Hay que acotar aquí que en lugar de presentarse como una alternativa pacificadora, Perón no dejó de alentar la violencia cuando creía que podía resultar favorable a su proyecto político. Una violencia que, a su turno, se volvería contra él.

En las elecciones de 1973 triunfó un frente constituido por peronistas, desarrollistas y conservadores populares, el Frente Justicialista de Liberación, con el 49,56 % de los votos. La fórmula presidencial estaba encabezada por Héctor Cámpora, bajo el lema "Campora al gobierno. Perón al poder". Gobierno y poder estaban separados y fragmentados internamente desde hacía ya mucho tiempo y esas grietas tardarían tiempo en soldarse. Sobre el traspaso del poder de los militares al gobierno civil en 1973 dice Félix Luna: "Era la derrota de la Revolución Argentina, más que la del general Lanusse: la culminación de los desaciertos iniciados con la gestión de

Onganía, llena de mesianismo, autoritarismo y elitismo, que dilapidó en tres años su consenso inicial. Era también la derrota de Levingston, errático e incoherente durante su breve paso por el poder. Pero fundamentalmente, la jornada del 25 de mayo de 1973 significaba un triunfo: el de Perón, cuyas tácticas imprevisibles habían terminado por enredar toda posibilidad de una salida decorosa al régimen que iniciara su vigencia en 1966 con el derrocamiento de Illia. Una vez más —pero ahora de manera tensa y dramática— quedaba evidenciada la debilidad que aqueja a los gobiernos *de facto* cuando llega el momento de elaborar su continuidad electoral" (1995: 137-138).

## 2. La república violenta

### 2.1. El regreso del peronismo

Ya hemos visto que el peronismo que llegó al poder en 1946 era un movimiento con un alto grado de heterogeneidad, tanto en su base cuanto en su dirigencia. Su papel protagonista en la vida política argentina en las décadas posteriores dejó una huella de división y hasta polarización que se infiltró al interior del movimiento mismo. Así, veremos que el peronismo que gana las elecciones en 1973 era no sólo heterogéneo, sino que reconocía profundas divisiones internas. El sector sindicalista, acostumbrado al uso de la violencia para defender sus posiciones, estaba liderado por auténticos caudillos que manejaban con gran soltura y muchas veces en beneficio propio la burocratizada estructura sindical. La Juventud Peronista, por su lado, reunía a gente proveniente de muy diversos ámbitos; muchos de sus no tan jóvenes integrantes venían de la izquierda otrora antiperonista, y se sumaban al peronismo en busca del ansiado acercamiento a esas masas que siempre le resultaron tan esquivas a la izquierda argentina. Dentro de esta Juventud Peronista se iban perfilando los grupos que luego Perón se encargará de expurgar del movimiento, y desde la clandestinidad emprenderán una lucha contra el régimen peronista en demanda de una reforma radical del sistema político.

Después de los años sin Perón en los que los problemas que se pretendían solucionar con su proscripción habían recrudecido, el regreso del líder ausente es visto por muchos como la única esperanza posible. El peronismo sin Perón pero con la promesa de su regreso inmediato gana las elecciones. Cámpora asume en mayo de 1973 y Perón regresa al país el mes siguiente; su frustrado recibimiento en Ezeiza terminó en abierto combate entre sectores de izquierda y de derecha peronistas que se mostraban desde el inicio incapaces de convivir pacíficamente. Estaba claro que Perón tendría que

decidirse por uno u otro bando, y que los excluidos pasarían a considerarse y ser tratados como enemigos.

El peronismo en el poder haría que todos aquellos grupos cuyas demandas no habían sido escuchadas durante la etapa de proscripción se sintieran con derecho a imponerlas. Y la fuerza fue muchas veces el medio elegido para llevar a cabo tal imposición. El camporismo era expresión del peronismo de ultraderecha y poco tenía que ver con el peronismo histórico, más allá de la libre interpretación del por cierto polisémico discurso de Perón. A Campora no le queda sino hacerse a un lado ante la presencia de Perón. Campora tratara de reconstruir antiguas bases a su inminente gobierno. Se acercará a los militares, a los sindicatos y hasta a los partidos de la oposición. Una vieja estrategia que no tendrá éxito en un escenario muy diferente a aquel en el que con tanta soltura había sabido moverse Perón.

Si analizamos las elecciones que dieron el triunfo a Campora, veremos que si bien Campora representa a la izquierda, no parece haber habido un corrimiento hacia la izquierda en el electorado peronista. O, mejor dicho, Campora gana por haber sido el elegido de Perón, pero no porque represente una tendencia hacia la izquierda en el electorado peronista. Así lo sostienen Peter Smith y Manuel Mora y Araujo: "No hay ninguna indicación concluyente de que la izquierda programática haya desempeñado un papel significativo en el triunfo electoral del 11 de marzo, excepto en algunos circuitos intelectuales y universitarios que carecen de relevancia estadística. De hecho, la plataforma electoral de Campora-Solano Lima no difiere mayormente de las plataformas peronistas del pasado, de modo que el contenido ideológico del movimiento pareciera constante y consistente con sus propias tradiciones." (Mora y Araujo y Llorentz, 1980: 453).

Después de la renuncia de Campora asumió provisionalmente la presidencia Raúl Lastiri, quien rápidamente llamará a elecciones. Esta vez Perón no tendría problemas en imponer a su esposa como candidata a la vicepresidencia. La fórmula Perón-Perón obtuvo el 61,85 % de los votos; seguida por la fórmula radical, que alcanzó el 24,42 %. Teniendo en cuenta la avanzada edad de Perón, la elección del vicepresidente era de suma importancia. Pero al elegir a su esposa como compañera de fórmula, Perón no tomó partido por las facciones en lucha dentro de su tan heterogéneo movimiento. El futuro iba a cobrarse muy cara la indecisión de Perón, y la lucha entre las facciones tendría lugar cuando ya Perón no estaba para constituirse en árbitro de la contienda.

Desde el principio, pero cada vez más a medida que la salud del presidente se deterioraba, la influencia de José López Rega, representante de la ultraderecha, se haría sentir en las decisiones de Perón. Ultraderecha lópezreguista y ultraderecha guerrillera o terrorista eran los dos protagonistas de una lucha sin cuartel por la herencia peronista. Y el discurso de Perón se interpretaba libremente con gran facilidad, en la medida en que su mismo emisor así lo propugnaba. Hacia la izquierda, Perón dirigía un discurso que prometía un poco claro "socialismo nacional". Sin embargo, en su entorno primaba el lópezreguismo, es decir, la derecha. Poco antes de su muerte, Perón rompió abiertamente con los sectores de izquierda que tan útiles habían sido para su retorno. En la manifestación del 1° de Mayo de 1974 Perón expulsó de la Plaza de Mayo a los Montoneros, con lo que se produjo una ruptura que agravará aún más una escalada de violencia ya incontrolable.

El 1 de julio de 1974 murió Perón. La presidencia fue ocupada por su esposa, María Estela Martínez. La muerte de Perón ocurrió en medio de una situación de violencia generalizada en la cual se había tomado cotidiano, ver morir a personas provenientes de sectores muy diversos. La izquierda, mezcla extraña de trotskismo, maoísmo, nacionalismo y catolicismo operaba fundamentalmente a través de los Montoneros y el ERP. Se registraba una combinación de terrorismo urbano y guerrilla rural y operaciones en conjunto, dentro de una primera estrategia de objetivos focalizados que luego derivaría en atentados dirigidos a un público indeterminado. La ultraderecha operaba a través de la Triple A, que bajo la dirección de López Rega provocó el exilio y la muerte de muchas personas. El peronismo en el poder decretará estérilmente la lucha contra estos grupos armados.

No es fácil determinar cuáles eran los planes de los contendientes. Ambos tenían que verse las con la más tradicional base del peronismo: el sindicalismo. Es probable que los grupos que se ubicaban más a la izquierda del peronismo, donde los jóvenes eran mayoría, pensarán que no sería difícil liberar a las masas de las férreas garras de la estructura burocrática sindical para que así aflorara todo su potencial revolucionario. Pero, como ya sabemos, esas estructuras eran mucho más resistentes de lo que podía sospecharse, y ante el asesinato de un líder sindical pronto tomaba la posta otro sin que la estructura se conmoviera. La ultraderecha lópezreguista, por su lado, logró un primer acercamiento al sindicalismo que sufrirá una ruptura irreversible cuando los representantes sindicales no pudieron imponer sus demandas.

En este clima de violencia, ningún desarrollo económico y social era posible. Poco podía hacerse ante inversores que preferían retirar sus capitales de la Argentina para colocarlos en algún lugar más estable. Los es-

fuerzas de la oposición, en especial del radicalismo conducido por Balbin, por poner un poco de racionalidad en todo este proceso fueron infructuosos. La presidenta se alejaba cada vez más de aquellas bases que había tratado de reconstruir Perón, quedando cercada por López Rega, su secretario privado. Este ubicó en el Ministerio de Economía a Celestino Rodrigo, quien intentó una política agresiva de limitación de los salarios obtenidos por convenios colectivos, suba brusca del dólar, liberación de precios y aumento de tarifas. El sindicalismo acusó el golpe; la CGT convocó a una manifestación y decretó la huelga general. Estaba rota la alianza entre el lópezreguismo y el sindicalismo y esto debilitaba al gobierno ante el doble frente que se le presentaba: la violencia terrorista y la amenaza de un golpe militar con la excusa de sofocar esa violencia.

Rodrigo tuvo que ceder ante las presiones sindicales, y eso generó un proceso inflacionario que ha quedado en la memoria como el "rodrigazo", su más doloroso efecto fue la pulverización de los ahorros de mucha gente. A la renuncia de Rodrigo le siguió la de López Rega, quien además abandonó el país. Los gabinetes se sucedieron y la crisis económica no hizo sino agravarse en un clima de tensión política que no dejaba margen de operación a los agentes económicos. Los sindicatos, cuyos reclamos no eran oídos, planteaban una oposición decidida al nuevo gobierno.

Desalojado López Rega de su situación de poder, los militares comenzaron a ganar influencia sobre la presidencia. La presidenta delegó su función en el presidente del Senado, Italo Luder, por un breve período, pero pronto retornó su mandato. En este lapso, era evidente ya que los militares se habían autonomizado por completo. La única salida legal parecía el juicio político a la presidenta impulsado por la oposición, pero era una salida demasiado racional para ese escenario tan confuso y quizás por eso mismo no prosperó.

## 2.2. El Proceso militar

En marzo de 1976 estalló el golpe militar y se hizo cargo del gobierno una Junta Militar compuesta por los comandantes de las tres armas. Más que una acción coordinada entre las fuerzas, lo que se dio en realidad fue la reserva de una parte del poder por cada arma. Se inició pues el último gobierno militar que hemos vivido, llamado Proceso de Reorganización Nacional, y conocido popularmente como "el Proceso".

Los males que venía dispuesto a curar el "Proceso" no parecían admitir discusión por parte de la ciudadanía. Los remedios aplicados, en cambio, pondrían en marcha un nivel de represión a la que los anteriores gobiernos

militares no se habían asomado siquiera. "Los argumentos del golpe eran, básicamente, el vacío de poder, las contradicciones del gobierno, la falta de una estrategia global contra la subversión, el incremento de todos los extremismos, la corrupción, la irresponsabilidad en el manejo de la economía, la especulación y los vicios que afectaban al país y que las fuerzas armadas erradicarían mediante el ejercicio severo de la autoridad. Todo lo primero era cierto pero el remedio final se revelaría erróneo" (Floria y García Belsunce, 1997: 952).

El régimen militar presentaba, desde la perspectiva de Rouquié, dos rasgos distintivos con respecto al militarismo tradicional: "Por un lado, instaura el terror descentralizado como sistema de gobierno o, al menos, instaura una represión política sin precedente por su amplitud y sus técnicas. Por otra parte, por primera vez, sin revolución de palacio, organiza institucionalmente la sucesión presidencial: el poder no vuelve a los civiles y no se recurre más a procedimientos electorales" (1938: 72).

El gobierno militar de 1976 se inscribió en la ola militarista que azotó a gran parte de la América Latina. En el cono sur, los gobiernos militares de Chile, el Uruguay y la Argentina ejercieron un nivel de violencia inédito en la región. Un fenómeno tan extendido no puede obviamente sino conectarse con variables que afectan a la región y que luego la afectarán también en la década de 1980, cuando se comienza una transición a la democracia que alcanzará prácticamente a todo el continente.

El Proceso se articuló discursivamente en torno a un mensaje que exaltaba las virtudes cristianas, la tradición y la nacionalidad, y una defensa de la seguridad nacional que requería la eliminación del "enemigo interno" y la lucha contra cualquier país que pudiera ser visto como "enemigo externo". El Proceso terminó con la política parlamentaria, descabezó el Poder Judicial, destituyó a los gobernantes elegidos a través del voto, suspendió la actividad sindical y partidaria, limitó severamente la libertad de prensa e inició un proceso de "desmovilización" de la sociedad bajo un signo autoritario nunca antes experimentado en el país.

Cuando los militares tomaron el poder, los grupos armados que operaban desde hacía tiempo estaban en baja. Así lo señala Rouquié: "... cuando las Fuerzas Armadas toman el poder, la guerrilla, desde el punto de vista militar, ha dejado de progresar. La implantación del ERP en la zona de Tucumán marca el paso. El ataque a la guarnición de Monte Chingolo, en la provincia de Buenos Aires, que termina en un sangriento revés; constituye, a fines de 1975, la última de las operaciones de envergadura contra los objetivos militares. En

503.5

65

adelante, tanto el ERP como los Montoneros, se limitan a atentados aislados contra instalaciones de las fuerzas del orden o contra los oficiales" (1983: 73).

Hubo cuatro presidentes durante el Proceso: Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone. El Estatuto de Reorganización Nacional, que antecedió y en esa medida contradecía la normativa constitucional, fijaba términos para las presidencias. El primero en ocupar el Poder Ejecutivo, Jorge Videla, fue presidente durante cuatro años, y su retiro de la carrera militar se produjo en el ejercicio de la presidencia. El retiro significaba el alejamiento de la Junta. El resto no llegaría a cumplir los plazos que la Junta les había asignado. La principal alianza de los militares se había tejido con los empresarios, y fue debilitándose a medida que pasaba el tiempo. También tuvieron el apoyo del sector sindical.

Para combatir el terrorismo, se montó un operativo terrorista desde el Estado. Bajo el pretexto de una guerra antiterrorista se puso en marcha una guerra sucia que dejaba hondas secuelas en la memoria colectiva argentina. Una combinación de asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones y amenazas, llevadas a cabo por servicios secretos, paramilitares y parapolitales, fue gestada desde el Estado. En la tarea de combatir el terrorismo, al Proceso contaba con la adhesión de gran parte de la población. Salvo algunos grupos que siguieron operando en la defensa de derechos humanos avasallados por el régimen, la mayoría de la sociedad se mantuvo inmovilizada, en un estado de estupor o de fingida ignorancia con respecto a lo que ocurría.

Sobre la desmovilización y el estrangulamiento de la participación política que tuvo lugar durante el Proceso dice Luis Alberto Romero: "El propósito declarado del régimen militar instaurado en 1976—acabar con la subversión— implicaba de un modo casi explícito liquidar la ola de movilización popular y aun eliminar cualquier actividad contestataria o meramente disconformista. Más aún, debía desaparecer el Estado providente y, con él, la idea misma de justicia social. A la sociedad se le planteó la necesidad de restablecer la autoridad, eligiendo entre el orden o el caos. Luego de la extenuante experiencia de los años anteriores, encontró un amplio consenso, y buena parte de esa sociedad cerró los ojos ante los métodos empleados. El restablecimiento del orden iba mucho más allá de lo político: la fábrica, la escuela, las oficinas públicas, la calle, la familia, todos eran ámbitos donde el principio de autoridad debía ser restituido y en esa tarea el gobierno encontró apoyo en amplios sectores que asumieron como propia la tarea de reprimir y ordenar. Aunque esta acción no se limitó a ellos, los sectores populares fueron duramente golpeados. Los cuadros de activistas gremiales

o barriales fueron diezmados; las propias posibilidades de trabajo se redujeron con la profunda crisis de la industria, que implicó el retorno de muchos de los últimos migrantes y una modificación profunda de la estructura ocupacional; los sindicatos fueron intervenidos y en general los trabajadores debieron vivir en un contexto fuertemente represivo, en el que cualquiera de los canales tradicionales de expresión aparecía cerrado" (1995: 144-145).

Las organizaciones de derechos humanos tuvieron una intensa actividad en los intersticios que permitía la feroz represión. En particular las Madres de Plaza de Mayo, reclamando por sus hijos desaparecidos, hacían semanalmente sus marchas en la Plaza de Mayo, que tenían una gran repercusión en el exterior del país y marcaban que algún gemita de reacción se estaba gestando al interior del país. El miedo sembrado por los frecuentes atentados se sumaba, para todos aquellos que tenían algo que perder, a la amenaza de una revolución que dejara en el poder a un grupo que estaba dispuesto a tomar medidas radicales contra los propietarios. Tal revolución no se da y se pregunta Torcuato Di Tella si podría haberse dado, como sucedió en otros casos como Cuba o Nicaragua. Y una de las razones por las que entiende que no fue posible es por la fuerza de los sindicatos y la cultura política partidaria: "... una de las diferencias entre la Argentina y los países como Cuba o Nicaragua (o Rusia y China antes), es que en éstos el movimiento sindical era menos fuerte—por comparación al conjunto de la población— que en nuestro país, y el sistema de partidos políticos mucho más fluctuante... En ese sentido, uno de los factores que más impidieron en la Argentina la repetición de una experiencia subversiva fue la consolidación de un sistema democrático con partidos estables y organizaciones sindicales respetadas..." (1998: 342).

Los líderes de los grupos terroristas subestimaron la fuerza de la cultura política argentina, y su ruptura con Perón los aisló del movimiento que les daba inserción social. Aquí podemos tal vez elaborar una conclusión que vale para todo este recorrido histórico que hemos hecho: aun con rupturas frecuentes al régimen constitucional desde 1930 y con falta de respeto hacia ese marco desde bastante antes, existieron siempre depósitos de legitimidad legal que estaban grabados a fuego en la conciencia colectiva. Tales depósitos señalan que más tarde o más temprano se volvería a decidir la representación política a través del voto popular exento de fraude y violencia.

El Proceso ubicó, como el anterior gobierno militar iniciado en 1966, a militares en la mayoría de los puestos de poder. Una excepción importante fue el Ministerio de Economía, donde se nombró a José Martínez de Hoz, quien imprimió a la política económica un sesgo neoliberal. Esta política

logró controlar inicialmente la inflación, pero finalmente los precios se dispararon, y la situación económica global no hizo sino deteriorarse dentro de una combinación de recesión e inflación. La apertura a las importaciones minó los restos de industrias que habían sobrevivido. La apertura hacia el exterior tenía el objetivo manifiesto de hacer más competitiva la industria local, pero estaba claro que generaría desocupación y esta era una manera de debilitar las fuerzas obreras, que no sólo estaban desorganizadas, sino que tenían como freno el famoso ejército de mano de obra desocupada que tornaba difícil imponer sus demandas. El aumento de rentabilidad buscado por las medidas económicas implementadas se daría básicamente a partir de una reducción de los costos laborales, produciéndose un deterioro notable del ingreso de los sectores obreros. La deuda externa, mientras tanto, se acumulaba dejando a la Argentina en una situación muy difícil de cara a la década de 1980, en la que se desataría una grave crisis para los países deudores.

La deuda externa aumentaba por varias razones. Una de ellas es la compra de armas que se justificaba por la lucha interna emprendida contra el terrorismo y cualquier oposición al gobierno, y con las hipótesis de conflictos internacionales. El primer conflicto internacional se dio con Chile por el canal de Beagle. En 1978 se estuvo al borde de la guerra, porque el gobierno argentino —que necesitaba dar una imagen de celoso custodio de los intereses nacionales— se negó a aceptar el resultado de un arbitraje de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Finalmente, la intervención directa del Papa abortó una guerra que ya parecía inminente, con dos gobiernos militares no dispuestos a ceder posiciones. El segundo conflicto fue la guerra de Malvinas, que en 1982 significó el preludio de la caída del régimen militar.

Mientras tanto, la inflación no cesaba. Si bien en 1976 se había logrado un control transitorio de la inflación legada por el gobierno peronista, en 1977 superó el 150%. En 1976 la inflación había sido del 444% anual, y en 1977 fue de 176% anual. Dice Di Tella al respecto: "Uno de los mecanismos que alimenta la inflación es la lucha por rebajadas del ingreso nacional, entre sectores fuertemente organizados, en condiciones en que el gobierno tiene poco poder para imponerse. Aunque parezca extraño, un régimen puede ser dictatorial, incluso terrorista, y sin embargo no tener suficiente autoridad como para imponer sus decisiones al conjunto de la sociedad. Esta debilidad está asociada a las agudas divisiones internas en su propio seno, que hacen que cualquier decisión inmediatamente sea impugnada por algún sector interno con suficiente fuerza obstructionista. Luego, los opositores externos al régimen se alían a ese opositor interno y arman un conjunto que es capaz

de paralizar al gobierno. Esas alianzas son a su vez fluctuantes, lo que genera una sensación de ir a la deriva" (1998, 343-344).

Para tratar de combatir una inflación generada por el mismo, el gobierno mantuvo una tasa alta de interés y el precio del dólar bajo y predecible a partir de la aplicación de lo que se conoció como "la tablita". La tablita le anticipaba a los inversores a qué precio vendería el Estado dólares en el futuro próximo. De esta manera, aquellos podrían convertir sus dólares en pesos, invertirlos y sacar ganancias, sabiendo cuantos dólares tendrían cuando decidieran volver a convertir sus pesos en dólares, cosa difícil de otro modo en medio de un proceso inflacionario. Con este sistema mucha gente hizo gran cantidad de dinero porque colocaba su dinero a altas tasas de interés en pesos —superiores a la inflación pronosticada por la tablita— y luego compraba más dólares de los que tenía al principio. Esto funcionó mientras el gobierno cumplió con la tablita.

Está claro que a nadie le interesaba ni convenía invertir en actividades productivas. La especulación financiera atraía todos los capitales disponibles y, por otra parte, con la liberalización de las tasas, muchos intereses de fueron a la quiebra a la hora de tener que pagar los altísimos intereses de sus créditos. La excepción la constituyeron quienes obtenían créditos de promoción, los cuales muchas veces se usaban para intervenir en la especulación financiera. Las empresas estaban acostumbradas a una cultura inflacionaria que las llevaba a endeudarse, siendo luego su deuda líquida por la inflación. Pero ahora, con la liberación de las tasas de interés, eso no sucedió sino que se acumuló una deuda enorme. A su vez, los bancos y entidades financieras que no recuperaban el dinero de los créditos prestados, subían la tasa de interés aún más para captar más dinero y cumplir con sus compromisos, y así la espiral inflacionaria seguía creciendo.

El dólar estaba barato y el peso caro, por cuanto el precio del dólar estaba paulado, y la inflación siempre lo sobrepasaba. Así la Argentina llegó a tener un altísimo costo de vida en términos internacionales, lo que desde luego la transformó en muy poco competitiva. Nuevamente se exportaban sólo carne y cereales y las industrias no podían ubicar sus productos ni dentro del país ni afuera, ya que los productos importados eran siempre mucho más baratos.

Esta situación se mantuvo mientras el Estado tuvo reservas de dólares para venderlos a un precio más bajo del real, es decir, al precio que marcaba la tablita y no el mercado. Esas reservas provenían de las exportaciones rurales y de los dólares convertidos en pesos para ser depositados a las

altísimas tasas que los bancos y las entidades financieras daban en ese momento. La inflación fue de 105 % en 1981, 168 % en 1982 y 344 % en 1983, con caídas del PBI del 6 % en 1981 y 1982, para recuperar el 3 % en 1983 y así quedar con un PBI menor que el de 1974. La inflación es en gran medida efecto de la incapacidad del gobierno para imponerse como árbitro entre sectores a los que no domina. Tiene que ceder entonces ante distintos grupos, y cada una de esas concesiones implica un aumento de precios (Ya sea de salarios, de productos, de tarifas o del valor del dólar), y así se va alimentando la espiral inflacionaria, con la que todos los precios suben para equilibrarse con aquel que subió merced a la concesión que hizo el gobierno.

El gasto público no bajó sino que se incrementó. Si durante el último gobierno peronista había llegado al 40 % del PBI, en 1981 había alcanzado el 53 %. El déficit se solventó con endeudamiento. La deuda externa era de trece mil millones en 1978 y pasó a treinta mil millones en 1981. El gobierno confiaba en que se encontraba en una situación transitoria, pasada la cual se recuperaría la inversión productiva y se generaría un proceso industrial que reubicaría a la Argentina en el mundo. Es difícil encontrar las bases factuales de tanto optimismo.

La política económica de Martínez de Hoz tenía defensores y críticos dentro de las fuerzas armadas. Algunos sectores hubieran preferido dar protección a la industria nacional, sobre la base del ya tradicional afán industrialista militar, ligado a un criterio de seguridad. El intento privatizador de los servicios públicos chocó con la oposición de parte de las fuerzas armadas, y también de la acallada sociedad civil, sobre todo del peronismo y sus sectores más nacionalistas. Era cada vez más difícil para el régimen militar sostener una posición nacionalista en el ámbito político negándola en el económico.

Pero la política económica fracasó y podríamos decir que fue engullida por la misma perversa especulación financiera que había desencadenado. Dice Cortés Conde: "En gran parte, el fracaso del programa se produjo por el modo en que el gobierno financió el déficit. Se emitió deuda local a tasas que debieron ser competitivas en un mercado donde los intereses se habían liberado. Los particulares se endeudaban en el exterior y con esos fondos compraban bonos del gobierno. Si la tasa de interés local, menos la tasa de devaluación patada, era mayor que el interés que se pagaba por obtener préstamos en el exterior, la operación daba ganancias. Siempre exista el riesgo de la devaluación, aunque este era muy improbable al comienzo si bien se hacía cada vez mayor (lo que se reflejaba en las crecientes tasas) a medida que se acercaba el período final de la pauta de devaluación creciente llamada la tablita. Mientras que en un principio esto contribuyó a un aumento de las reservas, por otro

lado se produjo un aumento considerable de la deuda externa, lo que hizo poco creíble el mantenimiento de la pauta cambiaria" (1998: 93).

La tablita ya no podía mantenerse, y de pronto el dólar subió con respecto al peso. La caída de Martínez de Hoz no trajo alivio a esta situación. Aumentaban por tanto la deuda pública cuanto la privada. Esta última había sido generada por fugas de capitales; esa deuda privada finalmente fue asumida en gran parte por el Estado que, de esta manera, subsidió a quienes habían contribuido a la salida de capitales del país. El gobierno se hizo cargo así de la deuda externa de muchos empresarios que de otra manera hubiesen quebrado. Estos le pasaban a deber al Estado, pero en pesos indexados, lo que siempre era mucho menos que los dólares que debían a los bancos. De esta manera la deuda privada se socializaba quedando sobre las espaldas de toda la población.

Llegado el momento de la sucesión de Videla quedaron al desnudo conflictos internos de magnitud en las fuerzas armadas. Después de muchas especulaciones, finalmente la Junta designó a Roberto Viola, de quien dice Di Tella: "Viola, que asumió en marzo de 1981, inició una apertura, distribuyendo los principales ministerios entre personalidades civiles ligadas a grupos económicos. También nombró embajadores tomados de los partidos o sectores políticos que mantenían una actitud de expectativa ante las promesas del gobierno de una eventual liberalización y progresiva democratización. Como interventores de gran número de municipalidades fueron designados políticos con prestigio local, algunos de tipo vecinal, o sea apartidario, pero bastantes otros del sector dialógico de la UCR y algunos del peronismo. Respecto de los sindicatos se intensificó la política de entendimiento con las dirigencias tradicionales, que volvieron a ocupar sus antiguos puestos de mando".

Los sindicatos, ante la política aperturista de Viola, comenzaron a reorganizarse. En la etapa anterior había habido algunas huelgas parciales severamente reprimidas. Pero, recién en 1980 la CGT se reorganizó informalmente bajo la conducción del dirigente cervetero Saúl Ubaldini. En 1981 se convocó a una huelga general y a partir de allí el sindicalismo, profundamente herido por cierto, empezará a hacerse sentir. Hacia 1982 el Proceso daba signos claros de agotamiento. A la crítica de las organizaciones de derechos humanos se sumaban ahora los sindicatos y vastos sectores de la población —desde obreros hasta empresarios— que se habían visto afectados por la política económica del gobierno. La continuidad del Proceso a través de la organización de una fuerza política propia o la alianza con una de las ya existentes no parecía posible.

En esa coyuntura, se produjo un virtual golpe dentro del golpe, que despojó del Ejecutivo a Viola, para reemplazarlo por Leopoldo Fortunato Galtieri, quien trataría de dar cohesión al país y presentar un liderazgo fuerte con las más extrema de las medidas posibles: una guerra. La guerra de Malvinas, con la que el gobierno jugó su última carta, significó un viraje en la estrategia del régimen, hasta ese momento claramente desmovilizador de aquella masas identificadas con el peronismo al que quería combatir. Los grupos económicos, que habían sido un apoyo importante del gobierno, vieron peligrar sus intereses con la aventura bélica, mientras que sectores de la población críticos del gobierno militar subitamente se volcaron en su apoyo en un verdadero brote de nacionalismo transnochado. La Plaza de Mayo, tradicional escenario peronista, se llenó con manifestantes provenientes de sectores con expectativas por cierto muy diversas. Por primera vez, y con la sola excepción anterior del Mundial de Fútbol de 1978, se alentaba la manifestación masiva. Los sectores ligados al mundo de los negocios, que habían sido los principales apoyos del gobierno militar, vieron con preocupación este giro del gobierno, con un tono antiimperialista que rompía con los países capitalistas más fuertes, y se "peronizaba" en un postero intento de alianza con las masas.

La derrota sufrida en la guerra dejó sin sus viejas bases de apoyo a los militares y desengañó a los nuevos apoyos que había generado la aventura bélica. El Proceso se desplomó; evidentemente, sus bases estaban minadas, y la derrota no fue sino un soplo sobre una estructura que ya carecía de cimientos. Luego de la rendición militar en Malvinas, Galtieri fue reemplazado por Reynaldo Bignone, a quien sólo le cabía organizar un apurado retiro. El año siguiente se celebrarían las elecciones, luego de una reorganización de los partidos, un proceso de afiliaciones y de elecciones internas.

### 3. La república democrática

#### 3.1. *El triunfo radical*

El régimen militar se vio obligado a dejar el poder en las peores condiciones políticas y económicas. La derrota militar después de un breve lapso de fervor nacionalista y de movilización hizo que el régimen terminara en una fuga precipitada sin la oportunidad de articular una transición negociada, posibilidad que sí tuvieron, en cambio, otras dictaduras latinoamericanas. El desmoronamiento de las fuerzas armadas fue total, y no hizo sino aumentar a medida que la población iba tomando conciencia cabal de los crímenes cometidos durante los primeros años del régimen. Con la apertura de la vida política se da una revitalización de los partidos políticos, que recibieron un gran

número de afiliaciones. Los sindicatos no tuvieron en esta etapa de transición democrática el auge que tenía la participación en los partidos políticos, lo cual marca una diferencia notable con la Argentina anterior.

De cara a las elecciones presidenciales, el radicalismo sufrió una renovación de sus cuadros dirigentes, mientras que el peronismo mantuvo sus viejos cuadros. El radicalismo renovado presentó una alternativa que, además de sus bases tradicionales, atraería el apoyo de sectores de derecha e izquierda moderados y hasta peronistas que, aun respetando la imagen del candidato de su partido —Italo Luder— veía con recelo a ciertas figuras que lo rodeaban y que se acercan a la caricatura más feroz creada por el anti-peronismo con respecto al peronismo.

El liderazgo de Raúl Ricardo Alfonsín atrajo pues a un electorado heterogéneo que demandaba un corte con el pasado: "Alfonsín se había convertido en titular de la UCR y candidato partidario a la presidencia tras derrotar a la vieja cúpula balbínista del radicalismo. Su ascenso fue el resultado inmediato del fracaso de Malvinas y estuvo signado por la estrategia de establecer una frontera entre los efectos desastrosos del autoritarismo (un pasado que se hundía en el tiempo pero cuya actualización era el gobierno militar) y una venturosa democracia. En un único proceso de escisión respecto de ese pasado, de revisión de las propias actitudes partidarias —especial referidas a temas cruciales como las violaciones a los derechos humanos y las actitudes frente al episodio Malvinas— Alfonsín encará la interna partidaria y la campaña presidencial. Se produce así un desplazamiento en la articulación vertebradora de la identidad radical que contraponía la democracia al autoritarismo, la paz a la guerra, la oposición a la complacencia, el progreso a la decadencia y la vida a la muerte. La emergencia de un imaginario democrático radical en el vetusto partido constituyó un acto de identificación que subvirtió la identidad partidaria a través de un uso selectivo de la tradición radical y de una convocatoria que excedía los límites del propio partido" (Aboy Carles, 1996: 18).

Plantearlo como oponente al régimen militar, y proponiendo un corte profundo con respecto al pasado, Alfonsín montó su campaña electoral sobre la denuncia de un pacto militar-sindical. Pacto que aseguraba a los militares que, en caso de triunfar el justicialismo, no se investigarían los actos del régimen militar, a la vez que se intervendría en la reorganización de las fuerzas armadas. La caída del gobierno de Illia y la violencia sin control de la década de 1970 eran atribuidas a esa alianza secreta que habían anudado sindicalistas, líderes peronistas y militares. Pero, si de hacer historia se trata, tampoco

6039

67

se puede negar que los golpes militares desde 1955 en adelante tuvieron como objetivo privilegiado impedir la continuidad o la llegada del peronismo al poder.

Alfonsin llegó al poder con tan redundante cuanto efectiva promesa de legitimidad legal, de imperio de la ley. El recitado del Preámbulo de la Constitución Nacional era agua fresca en el caldeado escenario político de aquella época, y recordaba la primera etapa del radicalismo yrigoyenista, que tomaba como único compromiso y desafío el cumplimiento de la vapidada normativa constitucional. De cara al electorado de centro, Alfonsín prometía una moderación que el peronismo no podía garantizar. Todos estos factores permitieron al radicalismo vencer por primera vez al, hasta entonces, electoralmente imbatible peronismo.

Las elecciones de 1983 se caracterizaron por un bipartidismo y una polarización notables. Ante un panorama en el que las dos principales agrupaciones partidarias tenían posibilidades de ganar, pocos se resistieron a que su voto contara en tal disputa. La Unión Cívica Radical ganó con el 51, 74 % de los votos, seguida por el Partido Justicialista, que alcanzó el 40, 15 %. Ya en el poder, los principales problemas que tuvo que afrontar el gobierno radical fueron la cuestión militar, la cuestión sindical y la cuestión económica. La cuestión sindical presentaba un frente muy complejo por cuanto la denuncia del pacto militar-sindical había ocasionado un malestar que sensibilizaría a los sindicalistas con respecto a cualquier medida del gobierno radical. Y reestructurar un sindicalismo adecuado a un sistema como el que se pretendía inaugurar suponía desartar el corporativismo que anidaba en él. Como en todas las luchas que emprendió contra las corporaciones, el radicalismo salió dañado. El sindicalismo se defendió apelando a la huelga general en forma abusiva. El radicalismo se propuso desmontar la burocracia sindical a través de una nueva ley sindical que descentralizara el manejo de los fondos y diera un papel importante a las minorías. El proyecto de ley no fue aprobado en el Senado, donde el radicalismo no tenía mayoría. La burocracia sindical no hizo esperar su respuesta, a través de una gimnasia continua de paros generales contra el gobierno.

La cuestión militar dio no pocos dolores de cabeza al gobierno de Alfonsín. Habiendo impulsado el enjuiciamiento las tres primeras Juntas Militares que gobernaron el país desde 1976, por la responsabilidad que les cabía en los impresionantes actos criminales cometidos con la excusa de la lucha antisubversiva, el gobierno emprendió una tarea inédita ya no en el país sino internacionalmente. Esto generó un clima muy tenso con los militares, que solamente lograrán mitigar las leyes de obediencia debida y punto final, ambas

diciadas con el intento de fijar límites a los juicios cortando la cadena de responsabilidad en los altos mandos.

El gobierno hubo de enfrentar desde 1987 los alzamientos militares de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli. En todas estas ocasiones quedó claro que las fuerzas armadas ya habían perdido el apoyo con el que en anteriores ocasiones habían contado dentro de la sociedad civil. Tanto la clase política cuanto la sociedad civil, con diversos grados de participación en la actividad partidaria, se movilizaron en apoyo del sistema democrático apenas se percibió un peligro de quiebre. Pero, de todas maneras, las crisis militares obligaron a Alfonsín a negociar, y pronto a la ley de punto final se le sumó la de obediencia debida, lo cual le valió críticas de sectores de izquierda y de organizaciones de derechos humanos, que veían frustrada su expectativa de castigo a los responsables de los delitos cometidos durante la guerra sucia.

La sociedad civil había experimentado un proceso de concientización en lo que respecta a la violencia ejercida desde el Estado durante el Proceso. Los juicios a los militares y el *Informe Nunca Más*, encomendado por el gobierno a la CONADEP —Comisión de notables presidida por el escritor Ernesto Sábato para investigar los hechos de represión—, relevó una cantidad enorme de violaciones de derechos básicos que quedó impresa a fuego en el imaginario argentino. Pero, a pesar de este cambio en la opinión pública, la reestructuración de las fuerzas armadas fue un reto para el gobierno. “El presidente Alfonsín conoció lo que significaba una fuerza politizada —en este caso armada— ‘semiteal’, en el sentido de que las facciones que producían la crisis se reclamaban no golpistas, pero pretendían el dominio total de las fuerzas armadas contra la decisión del gobierno constitucionalista. Un golpismo de facto aparecía encubierto por una retórica constitucionalista mezclada con el reclamo por la recuperación de la ‘dignidad’ militar” (Floria y García Belsunce, 1992: 976). La política militar también debilitó al gobierno de Alfonsín, en la medida en que se percibía que a un rugido de león inicial le sucedían medidas que procuraban atemperar los ánimos y calmar a los militares.

En el plano internacional, Alfonsín comenzó su gobierno con un acercamiento al Movimiento de No Alineados, tratando de fijar cierta distancia con respecto a los Estados Unidos y acercándose a los países europeos, y las especial a los que estaban haciendo su transición a la democracia y las sociodemocracias. A partir de 1985, Alfonsín trató de disminuir la distancia que había fijado con respecto a los Estados Unidos, y dio comienzo a una



decidida política de solución pacífica de los diferendos limítrofes pendientes con Chile, política que fue continuada durante toda esta etapa.

Al gobierno le tocó además afrontar la llamada "crisis de la deuda", que afectó a los países deudores durante la década de 1980. Una deuda acumulada durante muchos años, y considerablemente incrementada durante el gobierno militar, hizo que en materia económica el gobierno de Alfonsín tuviera graves inconvenientes. Después de una primera etapa errática en la que los depósitos de legitimidad política soportaron una situación económica nada fácil, el gobierno implementó el Plan Austral a mediados de 1985. Se sustituyó el peso por el austral pretendiendo dejar atrás un largo periodo inflacionario. Respalddado por una cuota de confianza muy grande de parte de la población, el plan tuvo un éxito inicial nada despreciable que le permitió al radicalismo obtener buenos resultados electorales ese mismo año.

Pero la oposición del sindicalismo y los grupos empresarios a una política tendida de errática pronto dejaría sin sustento al Plan Austral. El gobierno intentó abrir la economía, emprendiendo un plan de privatizaciones y de reforma del Estado en la órbita de una política neoliberal, pero ya era demasiado tarde. La oposición del peronismo y de otros factores de poder con los que sistemáticamente el gobierno había roto lanzas se hizo sentir y las medidas no lograron impedir la caída del Plan Austral. En las elecciones de 1987 se notó la pérdida de confianza y se desató más tarde un proceso hiperinflacionario que marcó un final anticipado para el gobierno radical.

Según Cortés Conde, el gobierno de Alfonsín se encontró con graves problemas que atender en el plano económico, y no aprovechó el primer periodo de apoyo pleno para realizar transformaciones profundas. Pero también es cierto que cuando intentó hacerlo —aunque se puedan discutir los tiempos, siempre sustanciales en materia política—, chocó con la oposición firme no sólo del peronismo sino también de las grandes corporaciones económicas que se habían gestado, o bien se habían afianzado durante el último gobierno militar. Dice Cortés Conde: "Entre una cantidad no poco considerable de problemas, el gobierno debía afrontar pagos enormes por una deuda externa en parte propia y en otra asumida al sustituir a los deudores privados. Ello requería no sólo contar con saldos comerciales favorables (ya que se necesitaban divisas y se había cortado el acceso al crédito externo) sino también con superávit fiscal para comprar a los exportadores sus créditos en el exterior. Mientras que las fuertes devaluaciones produjeron la caída de las importaciones, lo que dejó saldos comerciales elevados, no pasó lo mismo con los recursos fiscales, no sólo porque una parte muy considerable del ahorro se mantuvo en el exterior sino porque dentro del país se

generalizaba la evasión, ampliándose el número de quienes entraban en la economía informal" (1998: 99). La inflación había dolarizado la economía; el dólar ya no era sólo la moneda en la que se ahorrraba, sino que se utilizaba cada vez más en las transacciones comerciales.

El primer semestre de 1989 fue un lapso crítico desde el punto de vista económico para el gobierno de Alfonsín. El dólar tuvo un aumento acumulado mayor al 3.600 %. El Banco Central vio disminuir sus reservas en forma drástica, mientras que el poder adquisitivo de los salarios también bajaba a pasos agigantados. La desocupación y la subocupación aumentaron. El consumo interno cayó como consecuencia de todo esto. El primer proceso hiperinflacionario de la Argentina golpeaba duramente al frágil intento de transición a la democracia. La marginalidad social aumentaba y su manifestación más visible fueron los saqueos a supermercados y las ollas populares instaladas en los barrios más pobres. El Estado reaccionó decretando la presión de los grupos económicos que provocaban una situación insostenible que a la postre posibilitaría una severa política de ajuste llevada a cabo por el peronismo. El mercado se transformó en un lugar en el cual se dirimió la lucha entre sectores muy diversos: grupos económicos, sindicatos, productores rurales, banca acreedora. Los grandes grupos económicos fueron los únicos beneficiados con este proceso de hiperinflación, ya que ellos podían manejar el mercado de divisas y fijar los precios internos. Estos grupos económicos ocuparán el Ministerio de Economía durante el primer tramo del gobierno peronista.

El gobierno radical tuvo a su cargo acaso la más dura de las etapas que hacen a la transición a la democracia. Permitió una revitalización de la sociedad civil que se percibió en todos los ámbitos. Las movilizaciones callejeras renacieron, pero ahora ya no sólo fueron de signo peronista, sino que también el radicalismo logró convocar a gran cantidad de gente en manifestaciones. Las manifestaciones se desplazaron desde la Plaza de Mayo hacia el Congreso, el Obelisco, el Palacio de Tribunales. Con respecto a este último se puede ver que, como sucedió en otras partes del mundo, hubo al menos un germinal intento de "judicialización" de la política, en el momento en que se desplazaron las manifestaciones hacia el Palacio de Tribunales. Un sistema político que no puede absorber las demandas, las deriva hacia el Poder Judicial, donde los jueces intentan ejercer una suerte de representación. Este intento no prosperó, pero puso a los jueces en un rol distinto del que tradicionalmente habían desempeñado.

### 3.2. Los diez años de Menem

Dentro del peronismo, se había producido una oleada de reformas después de la derrota electoral de 1983. La corriente interna denominada Renovación logró reubicar al peronismo, dándole un perfil de partido político moderno sin renunciar a algunos caracteres que hacían a su tradicional movimiento. Carlos Saúl Menem, líder indiscutido del peronismo rojano, formó parte de la Renovación, pero pronto tomaría otro camino que le permitiera tejer las redes de su proyecto nacional. Su base estuvo constituida por aquellos sectores que habían sido desplazados por la Renovación peronista. El electorado que le permitió primero ganar la elección interna y después llegar a la presidencia era, por cierto, muy heterogéneo. Contra la homogeneidad que suponía la Renovación, Menem presentó un proyecto que encajaba mejor con la heterogénea tradición peronista. Y ganó las elecciones con cerca del 50 % de los votos, mientras que el radicalismo no alcanzó el 40 %.

La hiperinflación vivida durante el último tramo del gobierno de Alfonsín le permitió a Menem un triunfo holgado y, además, responsabilizar de todo lo sucedido por mucho tiempo a ese proceso de hiperinflación que dejó hondas huellas en la conciencia colectiva. La transmisión del mando en favor del nuevo presidente electo fue adelantada en medio de una situación económica muy complicada. La inflación había trepado al 200 % en el mes de junio previo a la sucesión; el mes de diciembre fijado para la transmisión del mando parecía realmente muy lejano con un horizonte económicamente incierto.

En los sectores de derecha y en el mundo de los negocios no se podía sino ver con aprensión una situación que en algo se asimilaba a la de 1973, con un peronismo triunfante que había agitado en su campaña electoral promesas poco claras de "revolución productiva" y "salario", y un candidato que pedía confianza a través de un imperativo "Siganme, que no los voy a defraudar". Ante esta perspectiva, Menem eligió una vía de acercamiento directo a sus más temerosos adversarios, los grandes empresarios, aquellos mismos que habían hecho tan difícil el último tramo del gobierno de Alfonsín y que, sin duda, tenían la capacidad de hacer lo mismo con el suyo. Menem ubicó al frente del Ministerio de Economía a un hombre de Bunge y Born —un poderoso grupo empresario— quien a su muerte, ocurrida poco tiempo después, fue reemplazado por otro hombre del mismo origen. Bunge y Born, una empresa exportadora de granos que se había extendido a una multiplicidad de actividades, era el símbolo de todo aquello que el peronismo tradicional quería combatir. El gesto de Menem era en este contexto una

señal clara de reconciliación y cambio —por lo menos a nivel simbólico— con respecto a lo que los sectores de izquierda, los obreros y los sindicalistas podían esperar de su candidato. La CGT se dividió y su sector rebelde fue encabezado por Saúl Ubaldini, quien a su turno demostró no tener capacidad de atracción de votos fuera del partido. Los sectores que mayor resistencia generaron a la política del gobierno fueron los trabajadores de la CETERA, que agrupa a los docentes, y de ATE, que agrupa a los trabajadores del Estado. Dos sectores muy afectados por el achicamiento del Estado llevado a cabo por la política económica menemista.

En definitiva, con el Ministerio de Economía en manos del gran empresario se logró tranquilizar al sector. Y si bien ya hemos dicho que parte del sindicalismo reaccionó negativamente, el proceso hiperinflacionario había hecho que la prioridad de la mayoría de la población fuera salir de él a cualquier costo. Y responsabilizado el radicalismo de tal proceso, no había alternativa posible que no fuera el peronismo. Los militares, por vez primera en muchas décadas, no eran vistos como gobierno posible; el radicalismo estaba agotado luego de la salida anticipada del gobierno de Alfonsín; la izquierda no tenía un proyecto con anclaje en la población, que todavía legalizaba la izquierda con violencia subversiva. Así y todo, la legitimidad legal estaba en pleno periodo de consolidación después de un primer tramo de transición muy azaroso. Como sucedió en otros países, el gobierno de Menem se encontraba en las mejores condiciones para emprender una política de reestructuración del Estado y del sistema económico en general. Un gobierno con fuerte inserción en los sectores obreros siempre tendrá una oposición menor que la que tendría en caso de estar ese mismo sector en la oposición. A Menem no le resultó difícil emprender un proceso de reforma del Estado y liberalización económica. Como otras experiencias también lo demuestran, los partidos o movimientos con base popular son los que con mayor éxito han logrado implementar políticas neoliberales; por cuanto no tienen una oposición fuerte que las discuta.

La reforma del Estado se llevó a cabo en medio de una opinión pública que en general veía en el Estado burocratizado, altamente deficiente, el origen de todos los males. Su achicamiento fue bien recibido. Las privatizaciones, como parte importante y acaso más discutida de este proyecto, eran aceptadas en tanto la gestión pública de las empresas se entendía que había sido desastrosa. Dicha gestión había permitido, por otra parte, la implementación de políticas clientelares en el otorgamiento de empleos públicos. Las empresas que se hicieron cargo de los servicios públicos tuvieron grandes ganancias debido a que había una gran demanda de servi-

cios, postergada durante años, que estaba dispuesta a pagar altos precios. El Estado permitió tarifas más altas a cambio de obtener un mejor precio por las empresas. Lo más criticado de estas privatizaciones es el proceso poco claro a través del cual se instrumentaron, que originó muchas denuncias de corrupción, y también la falta de control del Estado con respecto a las empresas privatizadas. Muchas de esas privatizaciones toman una forma monopólica u oligopólica, hecho que también da lugar a gran cantidad de críticas.

El criterio "eficientista", que suponía que la administración privada y el libre juego del mercado permitían generar niveles de eficiencia mucho mayores que los que había demostrado el Estado en su excesiva injerencia en la actividad privada, fue el justificante discursivo de toda esta ola de privatizaciones. Lo mismo ocurrió con el abandono de toda política de promoción industrial, que se entendía solo beneficiaba a unos pocos privilegiados, reduciendo en una pérdida general para la economía de la población. Esto, sumado a una tecnificación general de las empresas privatizadas, generó cada vez más desempleo.

El menemismo desarma la polaridad que el peronismo había originado en la política argentina: "Al romper con la política de reforma social e igualdad que era uno de los componentes del peronismo, el menemismo acaba con el principio de unidad que había amalgamado a los sectores populares en solidaridades colectivas a través de un sistema de alteridades: el enfrentamiento peronismo-antiperonismo. El menemismo desmontó esa antinomia, estableció una frontera respecto del pasado y estructuró una nueva alteridad respecto de quienes aparecen como cuestionadores de su política: el sindicalismo no afín, los adversarios del modelo económico, 'la socialdemocracia', los organismos de derecho humanos y las agrupaciones de izquierda serán identificados con el viejo Estado populista y considerados una amenaza para la estabilidad política y económica alcanzada tras los días de la inseguridad en los que los argentinos 'peleaban por un pedazo de pan'" (Aboy Carles, 1996: 30-31).

A poco de llegar al poder, Menem otorgó un indulto a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, lo cual le valió numerosas críticas de parte de las organizaciones de derechos humanos, mientras que otros sectores entendieron que el indulto era la única alternativa política posible que permitiría una reconciliación nacional. Evidentemente esta política tuvo sus efectos, por cuanto el planteo militar que se produjo en 1990 recibió una respuesta decidida. A fin de ese año se incluyó en el indulto a los comandantes que habían sido juzgados y condenados durante el gobierno de Alfonsín.

El Plan BB puesto en marcha por los hombres de Bunge y Born pronto demostró su agotamiento. En marzo de 1991 se haría cargo del Ministerio de Economía un hombre clave del gobierno menemista: Domingo Cavallo. Fue él quien puso en marcha el Plan de Convertibilidad, que fija por ley la paridad entre el dólar y la moneda local. Esta ley ata la moneda local al dólar estadounidense, quedando la inflación controlada. Una medida tan insolita de autocontrol logró una baja de la inflación. El voluntario cercenamiento de la capacidad de manobra económica del gobierno fue bien recibida por una opinión pública desconfiada. Con esta política, el Estado quedó sin el margen de operaciones que le daba el manejo de su propia moneda, pero por otro lado ya no estaba tentado a financiar su déficit con emisión de moneda. Por su parte, los particulares podían cambiar sus pesos por dólares sabiendo que un dólar vale un peso. El país pudo mantener esa paridad debido a que el aumento de las exportaciones generó divisas suficientes como para vender dólares en momentos en que las crisis económicas hicieron temer una devaluación del peso a los ciudadanos, que sobre la base de sus malas experiencias se apresuraban a convertir sus pesos en dólares. En la última etapa de su gobierno, y a consecuencia de la crisis económica brasileña que nuevamente despertó los fantasmas de devaluación, Menem propuso cambiar la moneda local por el dólar, lo cual despertó fuertes críticas en algunos sectores.

Con un gobierno que no parecía haber sufrido un gran desgaste en el poder, y con una oposición que no lograba reponerse del temprano abandono del poder en 1989, el presidente Menem y su entorno comenzaron a gestar planes de reelección, que estaban vedados por la Constitución Nacional. La alternativa de reformar la Constitución para permitir un nuevo mandato a Menem no parecía posible, por cuanto el oficialismo no contaba con los escanos suficientes en el Congreso para hacerlo. Se difundieron rumores de "autogolpe", es decir, disolución del Congreso ejecutada por el Poder Ejecutivo. Pero nada de eso sucedió. Alfonsín hizo los acuerdos necesarios dentro de su partido para permitir que el radicalismo apoyara el llamado a una Convención Constituyente para sancionar una nueva Constitución. El Pacto de Oligos, firmado por Menem y Alfonsín, abrió la puerta de la segunda presidencia de Menem. A cambio, el oficialismo se comprometió a apoyar la creación de un ministro coordinador —puente entre el Poder Ejecutivo y Legislativo—, un híbrido que pretendía paralizar el fuerte presidencialismo argentino y que no ha tenido los resultados esperados. Además, se eliminarían los colegios electorales para la elección del presidente, que sería elegido directamente, con la posibilidad de ir a un *ballottage* o segunda vuelta si no se

69

503, 5

alcanzaba cierto porcentaje de votos. Se crearía además el Consejo de la Magistratura, que estaría a cargo del nombramiento de los jueces. Este Consejo se puso en marcha con mucha demora.

El radicalismo pagó un alto precio por este Pacto. Tanto en las elecciones para nombrar constituyentes como en las presidenciales que le siguieron, pasó a ocupar el lugar de tercera fuerza. En las elecciones presidenciales, Menem logró más del 50 % de los votos, el Frepaso —sucesor del Frente Grande formado originalmente por disidentes peronistas— obtuvo cerca del 30 % de los votos y el radicalismo quedó a tercer lugar. Evidentemente, la nueva estabilidad económica conseguida a través de la política económica conducida por Cavallo era un bien muy preciado por los argentinos que venían de un proceso hiperinflacionario, y veían con temor la posibilidad de volver a vivir una situación parecida a la de 1989. El "efecto tequila", producido por una crisis en México que afectó a toda la región en 1995, comenzó a marcar algunos problemas de la economía argentina, al tiempo que las cifras del desempleo trepaban hasta índices cercanos al 20 %. El desempleo y el temor al desempleo pasaban a convertirse en una cuestión prioritaria. Para reducir la tasa de desempleo se implementó una "flexibilización" laboral, tendiente a aumentar la contratación de personal y disminuir las cifras del empleo "en negro". Esta política de reducción de las cargas sociales y disminución de las indemnizaciones por despido generó grandes críticas, sobre todo debido a que las cifras del desempleo no cayeron. La presión sindical también se ha dejado sentir, sobre todo después del embate del gobierno, al tratar de quitarle a los sindicatos el manejo del dinero de las obras sociales.

El reemplazo de Cavallo por Roque Fernández no supuso grandes cambios en materia económica; pero fue significativo el paso a la oposición de Cavallo, hombre fuerte del régimen menemista y pieza central en la reelección de Menem. Los intentos re-reeleccionistas de Menem no prosperaron por no contar con el apoyo de gente del propio partido gobernante con aspiraciones presidenciales, y con una oposición revitalizada que es crítica hacia un intento percibido como una clara subversión del orden republicano.

En 1997, las dos principales fuerzas de la oposición, el radicalismo y el Frepaso, constituyeron una Alianza —con ese nombre se la conoce— para presentar candidatos a las elecciones legislativas. La buena performance lograda por esta coalición de fuerzas políticas hizo posible que la Alianza se mantuviera; que después de algunas elecciones internas y otros reparos de espacios, presentó listas unificadas en casi todos los distritos para las elecciones nacionales que se celebraron en 1999. El radicalismo aportó su estructura

partidaria nacional, mientras que el Frepaso tiene una buena inserción en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y buena llegada a los sectores de izquierda y peronistas disconformes con el gobierno de Menem.

Haciendo un balance de la gestión presidencial de Menem, se puede observar que una de las medidas más controvertidas de su gobierno ha sido el fortalecimiento del Poder Ejecutivo en detrimento de los demás poderes, en especial avasallando la autonomía del Poder Judicial, esto incluyó la ampliación del número de Ministros de la Corte Suprema de Justicia, con vistas a tener pleno control de la misma. Las denuncias de corrupción se generalizan, alimentadas por procesos privatizadores pocos claros y operadores económicos que salieron a la luz en los años del Proceso. El desempleo creciente se asumió como un costo de las políticas de estabilidad implementadas; a la vez que el panorama internacional tuvo un significativo cambio de rumbo con la adhesión incondicional de Menem a los Estados Unidos, y el desarrollo de mejores relaciones con los países vecinos, en parte debidas al avance del Mercosur y a la clausura de un largo proceso de enfrentamientos causado por diferendos limítrofes con Chile.

El Mercosur, sin la estructura institucional de la actual Unión Europea, propone un modelo de integración económica que ha dado buenos resultados, más allá de que se critique muchas veces que no aumenta el comercio exterior sino que lo desvía. En estos años se han debido superar varias crisis, sobre todo entre la Argentina y el Brasil por conflictos con respecto a rebajas aduaneras. Los momentos de crisis plantean para ambos países demandas de protección del mercado interno, pero esas crisis han sido superadas exitosamente hasta hoy. El Mercosur ha permitido además dirigir la mirada a los países limítrofes en busca de una integración más profunda, sin duda factible a tenor de los lazos culturales existentes. Pero también el pacto de las crisis brasileñas sobre nuestro país ha dejado al desnudo la dependencia de la Argentina de la economía brasileña en este nuevo contexto. Al interior del bloque mercosureño hay evidentemente diferencias sustanciales entre los países que lo componen; la potencia del Brasil se ha hecho sentir y muchas veces el Mercosur es visto como una integración específicamente con el Brasil. Queda por ver si la integración económica será la base que permita una integración más profunda, como así también el Mercosur pasará a una etapa de instauración de autoridades supranacionales o quedará como lo que es. Hay defensores y detractores de ambos modelos de integración.

Entre los logros que el gobierno de Menem se adjudica se encuentran la estabilidad económica, una finalización exitosa del proceso de transición a la

democracia, una libertad de opinión poco frecuente en la vida argentina, y una modernización de la estructura obsoleta del país en comunicaciones, permitida por un proceso de privatizaciones, que como hemos visto, no fue lo suficientemente controlado.

Educación y seguridad, dos funciones básicas del Estado, se vieron gravemente afectadas durante este proceso de achicamiento del Estado. En particular se critica el descuido que ha sufrido la educación pública en todos sus niveles, y la ausencia de un plan de reestructuración de la Policía, cuerpo dañado y filtrado por el largo Proceso militar en el que cumplió las más diversas y marginales funciones. La falta de confianza de la población en la Policía, su corrupción generalizada, el malestar por los bajos sueldos y bajísimo prestigio, reclaman políticas públicas urgentes.

Sobre la coherencia que el menemismo tiene con respecto a la tradición peronista, dice Atilio Borón: "el menemismo está muy lejos de ser una traición al 'verdadero peronismo': constituye la culminación involuntaria de una alianza policlasista en la que jamás se puso en cuestión la hegemonía burguesa. El peronismo fue proteccionista y estatista en los años cuarenta, y por eso en su fase de ascenso pudo apoyarse en el arrollador impulso transformador de las clases populares que buscaban su integración al sistema. Ahora se vuelve liberal y privatista — porque es lo que necesitan las clases y grupos sociales que invariablemente han dirigido esta alianza —, mientras que su base social es desorganizada y desmovilizada 'desde arriba', reducida a inerte masa de manobra electoral para un 'estilo de hacer política' en donde ésta se convierte en mero espectáculo televisivo. Por lo tanto, no hay oposición sino continuidad entre peronismo y menemismo: éste no es sino la forma — la única forma posible — bajo la cual aquél prolonga su existencia en el capitalismo contemporáneo" (1991: 50-51).

En las elecciones nacionales celebradas en octubre de 1999 el triunfo del candidato de la Alianza, Fernando de la Rúa, supone un nuevo ejercicio de la alternancia en el país, a la vez que deja un mapa electoral muy complejo en el que se avizora la necesidad de colaboración de las dos principales fuerzas políticas. Con una transición a la democracia completada, el Justicialismo gobierna la mayoría de las provincias argentinas y la Alianza tiene el manejo del Poder Ejecutivo, mientras que ambas fuerzas se necesitan en distintos niveles para legislar.

Si dirigimos la mirada hacia todo este largo proceso político que apenas hemos esbozado en este libro, podemos concluir con las palabras de Di Tella al enjuiciar la historia política argentina contemporánea: "El caso argentino

es relativamente fácil y trágico... básicamente, hubo mal manejo y despilfarro, una interferencia masiva con las fuerzas del mercado y un sistema gubernamental ineficiente y corrupto. Es posible que esto tenga algo que ver con el peculiar equilibrio de fuerzas, parjas pero no legitimizadas, entre sectores empresariales industriales y rurales, y entre ellos y los populares, o todos y el gobierno. Esto es lo que varios observadores han llamado un 'empate social', no porque el poder haya sido realmente equivalente entre todos los participantes, sino porque hubo más equilibrio de las fuerzas opuestas que en otras sociedades del área, lo que nos acerca a los países más desarrollados. Pero ha habido mucha menos legitimación de los conflictos que en ellos, y de ahí la violencia y la inestabilidad política y económica que no han permitido un crecimiento eficaz". En una situación más empapada que nunca, es de esperar que el empate se resolviera en una canalización adecuada de los conflictos sociales.

## Bibliografía

- Aboy Carlés, Gerardo. "De Malvinas al menemismo, renovación y contrarrenovación en el peronismo". *Sociedad*, Nº 10. Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, noviembre de 1996.
- Agulla, Juan C.; Miller, J. y Chamorro Greca, E. *De la industria al poder*. Libera. Buenos Aires, 1966.
- Agulla, Juan Carlos. *Dependencia y conciencia desgraciada*. Belgrano. Buenos Aires, 1984 (a).
- Agulla, Juan Carlos. *Estudios sobre la sociedad argentina*. Belgrano. Buenos Aires, 1984 (b).
- Agulla, Juan Carlos. *El Hombre y su Sociedad*. Docencia. Buenos Aires, 1991.
- Agulla, Juan Carlos. "Sobre la estructura de clases sociales". En *Ideología Política y ciencias sociales*. Instituto de Derecho Público, Ciencia Política y Sociología. Buenos Aires, 1996.
- Alberdi, Juan Bautista. "Asuntos del Plata: En qué consiste la cuestión argentina". *El Mercurio de Valparaíso*, 15 de agosto de 1851. Carolina Barros (comp.) *Alberdi Periodista en Chile*. Colofón. Buenos Aires, 1997.
- Alberdi, Juan Bautista. *Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina*. Plus Ultra. Buenos Aires, 1981 (1ª ed. 1852).
- Alberdi, Juan Bautista. *El Crimen de la Guerra*. Orientación Cultural Editores. Buenos Aires, 1961 (1ª ed. 1870).
- Alberdi, Juan Bautista. En Terán, Oscar. "Estudios Económicos". Nota de 1870. *Alberdi posumo*. Puntosur, Buenos Aires, 1988 (Escritos en 1871).
- Alberdi, Juan Bautista. *Peregrinación de Luz del Día*. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, 1983 (1ª ed. 1871).

- Alberdi, Juan Bautista. *Recuerdos de viajes y otras páginas*. (Relato de la entrevista mantenida con Rosas en Londres, en octubre de 1857). Eudeba. Buenos Aires, 1962.
- Bellotti, Magui y Marta Fontenla (1995) "Política feminista, antiviolenencia y estrategias legales". *Travesías*. Número 3. CECyM, Buenos Aires, 1995.
- Bergoglio, María Inés y Carballo, Julio Rafael. "La homogeneidad en la cultura jurídica". *Revista de Sociología del Derecho*, N° 8, abril de 1993. La Plata, Argentina.
- Biagini, Hugo E. *Cómo fue la generación del 80*. Plus Ultra, Buenos Aires, 1980.
- Bialakowsky, Alberto. *La imagen social de la teología en la pobreza o la pobreza que implica la privación tecnológica*. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, *Doxa*, Año VI, n° 13/14, primavera de 1995, Buenos Aires.
- Bialet Masse, Juan. *Informe sobre el estado de la clase obrera*. Hispamerica. Buenos Aires, 1986.
- Borón, Atilio. "Los 'axiomas de Anillaco'. La visión de la política en el pensamiento y en la acción de Carlos Saúl Menem". En Borón, Atilio; Feletti, Roberto y otros. *El Menemismo*. Ediciones Letra Buena, Buenos Aires, 1991.
- Borón, Atilio. "Entrevista a Noam Chomsky". Revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. *Doxa*. Número 16, Buenos Aires, 1996/7.
- Borón, Atilio. "Estamos mal pero vamos bien. Pobreza y ajuste neoliberal en la Argentina". Revista de la Facultad de Ciencias Sociales. *Doxa*, año VI, n° 13/14, Primavera. Buenos Aires, 1995.
- Botana, Natalio. *El orden conservador*. Hispamérica. Buenos Aires, 1985.
- Botana, Natalio; Braun, Rafael y Floria, Carlos. *El Régimen Militar. 1966-1973*. Ediciones La Bastilla. Buenos Aires, 1973.
- Botana, Natalio. *El orden conservador*. Hispamérica. Buenos Aires, 1986 (1ª ed. 1977).
- Botana, Natalio. *La tradición republicana*. Sudamérica. Buenos Aires, 1997 (1ª ed. 1984).
- Bunge, Alejandro. *Una nueva Argentina*. Hispamérica. Madrid, 1984 (1ª ed. 1940).

- Burnham, Peter. "Estado y mercado en la economía política internacional: una crítica marxista". Revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. *Doxa*. Número 16. Buenos Aires, 1996/7.
- Cantón, Darío y Jorrit, Jorge R. *La investigación hoy*. Oficina de Publicaciones del CBC. UBA. Buenos Aires, 1996.
- Cardoso, Fernando Henrique y Faletto, Enzo. "Desarrollo y dependencia: perspectivas teóricas en el análisis sociológico". Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales. Unesco. *Sociología del Desarrollo*. Solar/Hachette. Buenos Aires, 1970.
- Carles, Gerardo. "De Malvinas al menemismo, renovación y contrarrevolución en el peronismo". *Sociedad*. N° 10. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 1996.
- Chamorro Greca de Prado, Hilda Eva. "Desorganización familiar". *Revista de la Facultad*, N° 1 Vol. 1, Córdoba, Argentina, 1993.
- Chamorro Greca de Prado, Eva. *Dos épocas en la vida de la familia de la ciudad de Córdoba. Un estudio sociológico diacrónico*. Ediciones Argentina. Córdoba, 1997.
- Chejter, Silvia. "Intención estatal y movimiento antiviolenencia." *Travesías*. N° 3. Buenos Aires, 1995.
- Charamonte, José Carlos. *Nacionalismo y Liberalismo Económicos en Argentina*. Hispamérica. Buenos Aires, 1986 (1ª ed. 1971).
- Cieza, Daniel y Beyreuther, Verónica. *De la cultura del trabajo al estado de malestar. La hiper-desocupación, precarización y daño en el Conurbano Bonaerense*. Instituto Bonaerense de Análisis y Proyectos. Cuaderno N° 9. S/D.
- Cieza, Daniel. *La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser*. Editorial Tierra del Fuego y Fundación CELSO, Argentina, 1997.
- Clementi, Hebe. *El Radicalismo. Trayectoria Política*. Hispamérica. Buenos Aires, 1986 (1ª ed. 1983).
- Cornblit, O.; Gallo E. y Connell, A. (1965) "La generación del 80 y su proyecto: antecedentes y consecuencias." En AA. VV. *Argentina sociedad de masas*. Eudeba. Buenos Aires, 1965.
- Cortés Conde, Roberto. "Problemas de crecimiento industrial". AA. VV. *Argentina Sociedad de masas*. Eudeba. Buenos Aires, 1965.

